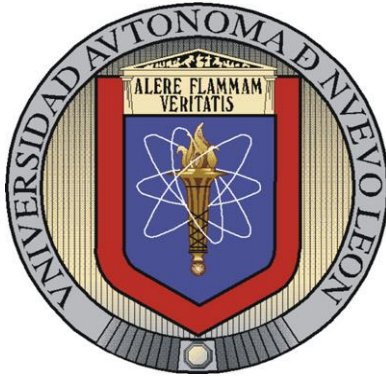


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA

SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO



DOCTORADO EN MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

PROYECTO DE TESIS

“Los elementos de la justicia restaurativa en la resiliencia familiar de las PPL en los centros penitenciarios de Topo Chico (México) y de Santiago de Veraguas (Panamá)”

NOMBRE: RAFAEL CANTIZANI MAÍLLO

DIRECTOR DE TESIS: DR. JESÚS ESPAÑA LOZANO

Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 22 de octubre de 2019

Declaración de autenticidad

Declaro solemnemente que el documento que en seguida presento es fruto de mi propio trabajo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra persona, excepto aquellos materiales o ideas que por ser de otras personas les he dado el debido reconocimiento y los he citado debidamente en la bibliografía o referencias.

Declaro además que tampoco contiene material que haya sido aceptado para el otorgamiento de cualquier otro grado o diploma de alguna universidad o institución.

Nombre: Rafael Cantizani Maíllo

Firma: _____

Fecha: _____

Agradecimientos

Esta tesis doctoral no habría sido posible sin la colaboración de diferentes personas y personal institucional, las cuales son mencionadas a continuación.

A todas las PPL que participaron en esta investigación. Gracias por contar sus historias personales, por mostrar sus sentimientos en las conversaciones mantenidas. Pero, sobre todo, gracias por enseñarme que los centros penitenciarios están, al fin y al cabo, llenos de seres humanos.

A Cristina Ulloa, por su afecto y por estar siempre a mi lado, apoyándome, aconsejándome y dándome ánimos. Sin ti esta investigación no habría llegado a buen puerto.

A mis padres, Rafa y Pilar, por inculcarme sus valores y por su esfuerzo y determinación a la hora de garantizar mi formación académica y mi desarrollo como persona.

A mi hermana Pilar y a mi compadre Gabriel Valoyes, por sus visitas transatlánticas y por ser una fuente constante de apoyo, cariño y afecto.

A la familia Ulloa-Espinosa, mi familia mexicana, por tratarme como un miembro más.

A la familia Gomila-Bayo-Mera de Panamá por ofrecerme su hospitalidad y su cariño, a los que espero poder corresponder algún día. Especial agradecimiento a Carlitos y a Jaime por regalarme su amistad.

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y al Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales (CALAS) por financiar esta investigación.

A mis amigos y compañeros de clase Borja, Carlos, César, Karen, Edgar, Fede, Hilda, Javi, Iván, Jorge, Mati y Rosaura, por todos los momentos y sabiduría intercambiados, y a mis amigas Emi y Fran por formar parte de esta aventura.

A D. Newton Quiñones por su importantísima ayuda a la hora de realizar el estudio cuantitativo de esta investigación.

A los amigos que hice durante mis estudios, por enseñarme la realidad y la hospitalidad en aquellos sitios que visité durante mi trabajo de investigación.

A los amigos que dejé en mi tierra, gracias por hacer la distancia una insignificante característica de nuestra amistad.

A todo el equipo técnico del CEPRERESO Topo Chico, en especial al psicólogo del centro, el Lic. Héctor Pérez, por su acompañamiento y amistad, y a la Lic. Alma Joyce, por su inestimable ayuda a la hora de acceder al centro penitenciario.

Al Dr. Ricaurte Soler Mendizábal, por ser un excelente profesional, un gran mentor y un mejor anfitrión durante mi estancia en el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá.

A la Mtra. Mónica Velásquez por su gran trabajo e impagable ayuda a la hora de acompañarme durante la obtención de los permisos por parte de la Dirección General del Sistema Penitenciario de Panamá.

Al Lic. Armando Medina, Director General del sistema penitenciario panameño para 2018, por su apoyo al abrirme las puertas de los centros penitenciarios de Panamá y a su ayudante, el Lic. Víctor Pinzón, por coordinar todas las entrevistas necesarias.

Al Lic. Antoine González, Director del Centro Penitenciario de Santiago de Veraguas por proporcionarme la ayuda necesaria para entrar a dicho centro penitenciario.

A todo el equipo técnico y administrativo del Centro Penitenciario de Santiago por su apoyo, en especial al Lic. Pedro Hernández, psicólogo del centro, por acompañarme durante la aplicación del instrumento cuantitativo en dicho centro.

Dedicatoria

A José Cantizani Oliva

A Paula Valoyes Cantizani

Lista de abreviaturas

Art.: Artículo

CCF: Código Civil Federal

L2CCR: Ley 2 Por la cual se aprueba el Código Civil de la República

CEFEREPSI: Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial

CEFERESO: Centro Federal de Readaptación Social

CEPRERESO: Centros de Prevención y Readaptación Social

CERESO: Centro de Readaptación Social

CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos

CNPP: Código Nacional de Procedimientos Penales

CODE: Centro de Orientación y Denuncia del estado de Nuevo León

CPENL: Constitución Política del Estado de Nuevo León

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CPF: Código Penal Federal

CPPCH: Código de Procedimientos Penales de Chihuahua

CPPNL: Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León

CPRP: Constitución Política de la República de Panamá

DE393SP: Decreto Ejecutivo 393 del 2005 que reglamenta el Sistema Penitenciario

DGSP: Dirección General del Sistema Penitenciario de Panamá

DPP: Defensoría del Pueblo de Panamá

E#: Entrevistado nº

INEA: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo (Panamá)

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

L31PVD: Ley 31 de la Protección a las Víctimas del Delito

L40RERPA: Ley 40 sobre el Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia

L55SP: Ley 55 que organiza el Sistema Penitenciario (Panamá)

L63CPP: Ley 63 que adopta el Código Procesal Penal (Panamá)

L14CPRP: Que adopta el Código Penal de la República de Panamá

LENMRSS: Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados

LESPNL: Ley que regula la Ejecución de las Sanciones Penales del Estado de Nuevo León

LGV: Ley General de Víctimas

LMASCNL: Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias para el Estado de Nuevo León

LNEP: Ley Nacional de Ejecución Penal

LNMA SCMP: Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal

LNSI JPA: Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

LPPGT: Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato

LSEJANL: Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes del Estado de Nuevo León

MARC: Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos

MASC: Métodos Alternos de Solución de Conflictos

OADPRS: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Social y Readaptación Social

ONU: Organización de las Naciones Unidas

PPL: Persona/s Privada/s de Libertad

SIP: Sistema de Información Penitenciaria (Panamá)

Índice	
Declaración de autenticidad	2
Agradecimientos.....	3
Dedicatoria	5
Lista de abreviaturas	6
Índice	9
Índice de tablas.....	15
Índice de figuras	18
Capítulo 1.- Diseño de la investigación.	20
1.1 Descripción de la problemática de estudio.	20
1.2 Antecedentes.....	21
1.3 Justificación.	22
1.4 Pregunta de Investigación.	23
1.5 Hipótesis	24
1.6 Objetivo general de la investigación	24
1.7 Objetos específicos.....	24
1.8 Teorías primarias y secundarias que sustentan el estudio	24
1.8.1. Teoría de la justicia restaurativa.	24
1.8.2 Teoría del apoyo social	25
1.8.3 Teoría del control social o de los vínculos sociales.	25
1.8.4 Teoría de la resiliencia.	25
1.9 Limitaciones.....	26
1.10 Metodología	26

1.10.1 Técnicas de recolección de datos	27
1.10.2 Población y muestra	27
1.11 Matriz de congruencia	29
Capítulo 2.- Los sistemas penitenciarios	30
2.1 Introducción.....	30
2.2 Cárcel y prisión. El origen de los sistemas penitenciarios	30
2.2.1 Edad Antigua.....	31
2.2.2 Edad Media	33
2.2.3 Mundo prehispánico	35
2.2.4 Edad Moderna	36
2.3 El nacimiento de los sistemas y centros penitenciarios actuales.....	37
2.3.1 Siglos XVII y XVIII.....	37
2.3.2 Siglos XIX y XX	38
2.4 Los sistemas penitenciarios objeto de estudio	40
2.4.1 El sistema penitenciario mexicano	40
2.4.2 El sistema penitenciario panameño	45
2.5 La violencia en los sistemas penitenciarios	48
2.5.1 Problemas crónicos de los sistemas penitenciarios objeto de estudio	50
Capítulo 3.- La justicia restaurativa	57
3.1. Introducción.....	57
3.2. Contexto general de la justicia restaurativa.....	58
3.2.1. Orígenes de la justicia restaurativa	58
3.2.2. Definición del concepto.....	62

3.2.3 Actores de la justicia restaurativa	65
3.2.4 Elementos de la justicia restaurativa	67
3.2.5 Modelos de justicia restaurativa	68
3.4 Soporte jurídico de los procesos restaurativos en México y Panamá.....	72
3.4.1 México	73
3.4.2 Panamá	77
Capítulo 4.- La reparación del daño	80
4.1 Introducción.....	80
4.2 Antecedentes históricos de la reparación del daño	81
4.2.1 Antigüedad	81
4.2.2 Edad Media	82
4.2.3 La reparación del daño en las culturas precolombinas.....	84
4.3. La reparación del daño en la cultura judicial actual de Occidente. El caso de México y Panamá	86
4.3.1 La reparación del daño en la legislación federal mexicana.....	87
4.3.2 La reparación del daño en la legislación panameña	90
4.4 La reparación del daño en la justicia restaurativa.....	91
Capítulo 5.- El apoyo familiar	96
5.1. Introducción.....	96
5.2 El apoyo social	97
5.2.1 Comunidad	99
5.2.2 Red social	100
5.2.3 El apoyo social de las PPL	102

5.3 El apoyo familiar en las PPL	104
5.4 El rol de la familia en los procesos penitenciarios	107
Capítulo 6.- El perdón	111
6.1 Introducción.....	111
6.2 El perdón espiritual y moral	111
6.2.1 Periferia de Occidente	111
6.2.2 En la cultura occidental	113
6.3 El perdón como figura jurídica occidental.....	115
6.3.1 De Roma a la creación del Estado Moderno	115
6.3.2 El perdón en la legislación actual. El caso de México y Panamá.....	116
6.4 El perdón como campo de estudio científico	118
6.4.1 Desarrollo científico-conceptual	118
6.4.2 Tipos de perdón	120
6.4.3 El proceso del perdón interpersonal	122
6.5 El perdón en la justicia restaurativa	123
Capítulo 7.- La resiliencia familiar	126
7.1 Introducción.....	126
7.2 Origen del concepto	126
7.3 Definición.....	127
7.4 Factores del proceso de resiliencia y resultados del proceso	129
7.4.1 Factores de riesgo o vulnerabilidad	129
7.4.2 Factores de protección o psicosociales	129
7.4.3 Cambios tras un proceso resiliente	130

7.5 La familia como grupo resiliente	130
7.5.1 Origen del concepto	131
7.5.2 El concepto de familia en la actualidad.....	133
7.5.3 Tipos de familia.....	134
7.6 El impacto de la pena privativa de libertad en el conjunto familiar	136
7.6.1 La familia de las PPL en los procesos de reinserción social.....	138
7.7 La resiliencia familiar de las PPL	140
Capítulo 8.- Estudio cualitativo.....	142
8.1 Introducción.....	142
8.2 Creación y pilotaje del instrumento cualitativo	142
8.2.2 Población y muestra	143
8.2.3 Estudio Piloto.....	144
8.3 Discusión de resultados cualitativos	149
8.3.1 Procedimiento de las entrevistas	149
8.3.2 Análisis de resultados	150
Capítulo 9.- Estudio cuantitativo	174
9.1 Introducción.....	174
9.2 Creación y pilotaje del instrumento cuantitativo.....	174
9.2.1 Instrumento	174
9.2.2 Población y muestra	176
9.2.3 Confiabilidad de la muestra.....	177
9.2.4 Estudio Piloto.....	178
9.2.5 Proceso de redacción de ítems.....	179

9.2.6 Resultados del pilotaje cuantitativo	181
9.3 Discusión de resultados cuantitativos	181
9.3.1 Proceso de aplicación y sistematización del instrumento	181
9.3.2 Método de análisis de datos	182
9.3.3 Análisis de resultados	183
9.4 Discusión de resultados	202
9.4.1 Impacto de las variables de la justicia restaurativa en la resiliencia familiar de las PPL en el CEPRERESO Topo Chico y en el centro penitenciario de Santiago de Veraguas	203
9.4.2 Impacto de los ítems del instrumento en la resiliencia familiar de las PPL en el CEPRERESO Topo Chico y en el centro penitenciario de Santiago de Veraguas	204
Capítulo 10.- Triangulación de datos, conclusiones y propuestas	206
10.1 Triangulación de datos	207
10.1.1 Identificar los elementos y actores de la justicia restaurativa que favorezcan al proceso de resiliencia familiar de las PPL	207
10.1.2 Analizar los elementos de la justicia restaurativa que faciliten la resiliencia familiar de las PPL	209
10.1.3 Jerarquizar los elementos de la justicia restaurativa que, según su importancia e impacto, ayuden a la resiliencia familiar de las PPL	213
10.2 Conclusiones	214
10.3 Recomendaciones	216
Capítulo 11.- Bibliografía	219
Capítulo 12.- Anexos	239
12.1. Instrumento cualitativo a PPL	239
12.2. Instrumento cuantitativo a PPL	241

Índice de tablas

Tabla 1: Matriz de Congruencia.....	29
Tabla 2: Delitos Pertenecientes al Fuero Común y al Fuero Federal	42
Tabla 3: Legislación referente al reconocimiento y uso de los métodos y las vías alternas de hacer justicia.....	72
Tabla 4: Legislación referente a la función de la familia en los procesos de reinserción social	107
Tabla 5: Tipos de familia según integrantes y características	135
Tabla 6: Categorización de la reparación del daño	145
Tabla 7: Categorización del apoyo familiar	146
Tabla 8: Categorización del perdón intrapersonal	147
Tabla 9: Categorización de la variable resiliencia familiar	148
Tabla 10: Duración de las entrevistas semi-estructuradas	149
Tabla 11: Referencias de las categorías de la variable reparación del daño	151
Tabla 12: Referencias de las categorías de la variable apoyo familiar.....	155
Tabla 13: Referencias de las categorías de la variable del perdón	158
Tabla 14: Referencias de las categorías de la variable resiliencia familiar	160
Tabla 15: Número de nodos identificados por variable	165
Tabla 16: Estadísticas de confiabilidad de la muestra.....	178
Tabla 17: Fiabilidad del instrumento en el pilotaje	178
Tabla 18: Ítems del instrumento cuantitativo ordenados por variable de análisis.....	179
Tabla 19: Escalas utilizadas en el instrumento cuantitativo	181
Tabla 20: Reactivos negativos con valores invertidos	182
Tabla 21: Métodos de análisis de datos	182

Tabla 22: Estadísticas de fiabilidad: resultados del Alfa de Cronbach	184
Tabla 23: Estadísticas de independencia: resultados del ANOVA.....	185
Tabla 24: Estadísticas descriptivas de las variables independientes	185
Tabla 25: Composición de los grupos de acuerdo con la variable de Resiliencia Familiar en el CEPRERESO Topo Chico y en el Centro Penitenciario de Santiago de Veraguas.....	190
Tabla 26: Modelos alternativos de regresión logística binaria	190
Tabla 27 Clasificación del modelo alternativo 1.....	193
Tabla 28: Variables de la ecuación del modelo alternativo 1	193
Tabla 29: Probabilidad de impacto de las variables independientes sobre la resiliencia familiar del modelo alternativo 2	194
Tabla 30: Clasificación del modelo alternativo 2.....	195
Tabla 31: Variables de la ecuación del modelo alternativo 2	195
Tabla 32: Probabilidad de impacto de las variables independientes sobre la Resiliencia Familiar del modelo alternativo 2	196
Tabla 33: Clasificación del modelo alternativo 3.....	196
Tabla 34 Ítems más significativos del modelo alternativo 3	197
Tabla 35: Variables de la ecuación del modelo alternativo 3	197
Tabla 36: Clasificación del modelo alternativo 4.....	200
Tabla 37: Ítems más significativos del modelo alternativo 4	200
Tabla 38: Variables de la ecuación del modelo alternativo 4	200
Tabla 39: Comparativa de clasificación entre los modelos alternativos 1 y 2	203
Tabla 40: Comparativa de las variables de la Justicia restaurativa en la ecuación	204
Tabla 41: Comparativa de la probabilidad de impacto de las variables de la Justicia restaurativa en la Resiliencia Familiar	204

Tabla 42: Comparativa de clasificación entre los modelos alternativos 3 y 4	205
Tabla 43: Comparativa de los Ítems más significativos en la Resiliencia Familiar en los modelos alternativos 3 y 4	206

Índice de figuras

Figura 1. Estructura administrativa de los centros penitenciarios del estado de Nuevo León	43
Figura 2. Estructura administrativa de los centros penitenciarios del estado de Nuevo León	44
Figura 3. Estructura administrativa de los centros penitenciarios de la República de Panamá	47
Figura 4. Principales problemas de los sistemas penitenciarios mexicano y panameño	50
Figura 5. Clasificación del apoyo social según Nan Lin	98
Figura 6. Porcentajes de composición de la variable independiente reparación del daño	152
Figura 7. Porcentajes de composición de la variable independiente apoyo familiar	155
Figura 8. Porcentajes de composición de la variable independiente apoyo familiar	159
Figura 9. Porcentajes de composición de la variable independiente apoyo familiar	161
Figura 10. Coocurrencias de las variables independientes con la variable dependiente ..	166
Figura 11. Nube de palabras de la variable independiente reparación del daño	170
Figura 12. Nube de palabras de la variable independiente apoyo familiar	171
Figura 13. Nube de palabras de la variable independiente perdón	171
Figura 14. Nube de palabras de la variable dependiente resiliencia familiar	172
Figura 15. Variables del estudio cuantitativo	175
Figura 16. Estado Civil de la muestra del CEREPRESO Topo Chico, Monterrey	187
Figura 17. Estado Civil de la muestra del Centro Penitenciario de Santiago de Veraguas	187
Figura 18. Nivel Educativo de la muestra del CEREPRESO Topo Chico, Monterrey	188
Figura 19. Nivel Educativo de la muestra del Centro Penitenciario de Santiago de Veraguas	188

Figura 20. Años Interno de la muestra del CEREPRESO Topo Chico, Monterrey	188
Figura 21. Años Interno de la muestra del Centro Penitenciario de Santiago de Veraguas	188
Figura 22. Coocurrencias de las variables independientes con la variable dependiente ..	213

Capítulo 1.- Diseño de la investigación.

1.1 Descripción de la problemática de estudio.

Ante las complejas situaciones de violencia que se experimentan en la región latinoamericana, se considera importante profundizar en el análisis de la impartición de justicia penal y su rol en la construcción de paz y/o de mantener estructuras de violencia social. Se entiende que el estudio de la justicia y sus instituciones, específicamente los centros penitenciarios y las oportunidades de reinserción social, permitiría generar propuestas alternativas a las actuales para que los centros penitenciarios aumenten su capacidad de efectivamente cumplir con su función: la reinserción de las personas privadas de libertad—en adelante PPL—en la sociedad.

El problema de investigación parte de la afirmación de que los sistemas penitenciarios mexicano y panameño no cumplen satisfactoriamente con el objetivo primordial para el que fueron diseñados. De acuerdo con el Índice de Paz México publicado en 2019, en el año 2017 entre el 20 y el 25% de las PPL habían sido sentenciadas por un delito previamente, mientras que en Panamá en el año 2014 el 45% de todas las PPL habían cumplido una condena en un centro penitenciario anteriormente (Ministerio de Gobierno, 2015)

Entre las causas de estos fracasos en la consecución de la reinserción social se podrían citar el poco apoyo gubernamental a los centros penitenciarios, el estigma social a todo lo que rodea al mundo penitenciario o la falta crónica de recursos económicos y humanos de este. Pero la causa que nos interesa para este problema de investigación queda reflejada en las legislaciones penitenciarias mexicana y panameña en lo referente a la reinserción social de las PPL.

En la Ley Nacional de Ejecución Penal de 2016 de México—en adelante LNEP—y la Ley 55 que organiza el Sistema Penitenciario de 2003 de Panamá—en adelante L55SP—, se establecen que los procesos de reinserción social deben centrarse en la PPL de manera individual a través de capacitaciones laborales y educacionales. Dichos procesos no tienen en cuenta las redes de apoyo social primarias de las PPL hasta los estadios finales del

cumplimiento de la condena, aunque en la mayoría de los casos suponen el respaldo de los mismos a la hora de abandonar el centro penitenciario.

Contrarios a este procedimiento, existen estudios documentales que destacan el papel de las familias de las PPL como el pilar principal de estas redes de apoyo social primarias, evidenciando que una relación resiliente de la PPL con su familia es uno de los factores que posibilitan un proceso de reinserción social (Cerda Pérez, 2015). La experiencia de otros países que cuyas normas penitenciarias identifican a las familias de las PPL como víctimas secundarias de los actos de estos, y que facilitan los procesos restaurativos entre el grupo familiar que favorecen la resiliencia del mismo, han experimentado impactos positivos en los procesos de reinserción social (Zehr, 2007).

En el caso específico de las legislaciones penitenciarias de México y Panamá, este papel de los familiares de las PPL queda limitado al acceso al centro penitenciario en calidad de visita o bien como contactos de emergencia a los que notificar la enfermedad o el fallecimiento de la PPL. Es decir, no se reconoce a los procesos restaurativos entre las PPL y sus familiares ni a la resiliencia conjunta del grupo como factores que impactan en los procesos de reinserción social. Por tanto, se identifica como problemática de investigación el desconocimiento del potencial restaurativo existente en la resiliencia familiar de las PPL en México y Panamá durante los procesos de reinserción social.

1.2 Antecedentes.

Existen estudios que comprueban que la relación con la familia es uno de los factores que benefician a que un PPL realice satisfactoriamente un proceso de reinserción social. En el panorama internacional autores como Rosemary Woodward (2003), en su obra *Families of prisoners: Literature review on issues and difficulties*, comentan que la relación familiar debería estar contemplada dentro de los programas de reinserción social, debido al impacto positivo que dicha relación genera en la PPL. También se puede citar el trabajo de Alice Mills y Helen Codd (2008), *Prisoner's families and offender management: Mobilizing social capital*, en el que se identifica a la familia de la PPL como víctima indirecta de la comisión del delito y el posterior ingreso en prisión del familiar. Ambas autoras muestran

cómo la asignación de un rol dentro de la familia a la PPL, mientras cumple condena, favorece a que este pueda obtener mejores resultados en su proceso de reinserción social.

Howard Zehr (2007), en su obra *El pequeño libro de la Justicia restaurativa*, también hace hincapié en que la familia de los victimarios también ha de identificarse como víctima indirecta, quedando sujeta a la realización de un posible encuentro restaurativo, y como el apoyo social primario de los victimarios a la hora de establecer dicho proceso con la víctima directa del daño provocado. Centrando la atención en México, se puede citar el trabajo de Janette V. Cámara y Elizabeth P. Cruz (2014), *La participación familiar en el proceso de readaptación social del interno sentenciado en el CERESO de Acayucan, Veracruz*, donde se muestra la relación que existe entre la participación familiar y el éxito de la reinserción social de las PPL en el centro penitenciario de Acayucan. Cabe destacar a Patricia Liliana Cerda Pérez (2015), en su obra *Prisión y familia: Retos para la cohesión social y el desarrollo del siglo XXI*, registra los beneficios y el deseo de las familias de participar activamente en los procesos de reinserción social de los familiares internados en los centros penitenciarios de Monterrey.

1.3 Justificación.

En primer lugar, esta investigación se justifica en la urgente necesidad de explorar las estrategias alternativas para mejorar los resultados de reinserción social del sistema penitenciario mexicano. Viendo que los métodos tradicionales de hacer justicia no logran cumplir los objetivos de manera satisfactoria, se pretende dar un nuevo enfoque desde las vías alternas de hacer justicia para mejorar estos resultados y así poder disminuir paulatinamente los niveles de reincidencia delictiva de aquellas personas que han cumplido una condena en un centro penitenciario.

En segundo lugar, para empoderar a la población civil en el campo penitenciario, que generalmente queda fuera del marco de acción de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos—en adelante MASC—. Para ello, dicha investigación se aferra a la reforma judicial y penal de 2008 en la que México y Panamá pasaron de un sistema penal

inquisitivo a un sistema penal acusatorio, en el cual las víctimas de la comisión de un delito tienen un papel más relevante. Es por ello se identifica como necesario el estudio de los procesos de resiliencia de las PPL conjuntamente a sus familias, que conforman el primer grado de la comunidad y que quedan identificados como víctimas indirectas de la comisión de un delito y el posterior ingreso en prisión de un miembro de la familia.

En tercer lugar, para poder mejorar el respeto de los derechos de las PPL dentro de los centros penitenciarios, alcanzando los objetivos marcados en los Congresos de la Organización de las Naciones Unidas—en adelante ONU—sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. El hecho de poder establecer un proceso restaurativo con su familia, de asegurar la reconstrucción de nueva vida fuera de los centros penitenciarios, podría decantar la balanza entre que el preso decida volver a cumplir el rol de ciudadano antes que volver a reincidir en los procesos delictivos. Así la PPL podría encontrar la pena impuesta no como un castigo, sino como una nueva oportunidad de reparar el daño que cometió y de poder volver a ser una parte activa en su comunidad.

Finalmente, este estudio está dirigido tanto a la comunidad académica, con una nueva aportación al campo de la justicia restaurativa, a las autoridades penales y penitenciarias y a la sociedad en su totalidad. Destacar los elementos de la justicia restaurativa que pueden ayudar al desarrollo efectivo de la resiliencia familiar de las PPL podría ayudar a que los programas de reinserción social fuesen más efectivos, por lo que gradualmente podría desencadenar que la propia sociedad analizase desde otra perspectiva los procesos penitenciarios productos de la justicia retributiva y despertase un interés por las vías alternas de solución de conflictos en las sociedades contemporáneas.

1.4 Pregunta de Investigación.

¿Qué elementos de la justicia restaurativa tienen presencia en la resiliencia familiar de las PPL en los centros penitenciarios de Topo Chico (México) y Santiago de Veraguas (Panamá)?

1.5 Hipótesis

H₁: Los elementos de la justicia restaurativa que existen a la resiliencia familiar de las PPL son: la reparación del daño producido a la familia, el apoyo familiar la PPL y el perdón por parte de la familia de la PPL.

1.6 Objetivo general de la investigación

Probar que los elementos de la justicia restaurativa son inherentes a la resiliencia familiar de las PPL, con la finalidad de impactar en las tasas de reincidencia y de reinserción social de las mismas.

1.7 Objetos específicos.

1. Identificar los elementos y actores de la justicia restaurativa que favorezcan al proceso de resiliencia familiar de las PPL.
2. Analizar los elementos de la justicia restaurativa que faciliten la resiliencia familiar de las PPL.
3. Jerarquizar los elementos de la justicia restaurativa que, según su importancia e impacto, ayuden a la resiliencia familiar de las PPL.

1.8 Teorías primarias y secundarias que sustentan el estudio

1.8.1. Teoría de la justicia restaurativa.

La teoría de la justicia restaurativa es una teoría reciente en el marco de la impartición de justicia, puesto que nace en la última década del siglo XX. Encontrando sus orígenes en diferentes pueblos indígenas de los Estados Unidos y Canadá, así como en la comunidad maorí de Nueva Zelanda, siendo impulsada por autores como Howard Zehr, Kay Pranis, Barry Stuart o Susan Sharpe (Zehr, 2007). La teoría de la justicia restaurativa se centra en la persona que ha sido víctima de un delito, identificando sus necesidades y enfocando su acción en la reparación del daño cometido. Esta teoría se presenta como una alternativa a la actual justicia retributiva, aquella justicia que contempla un castigo privativo, económico o de libertad, para aquella persona que cometió el delito, por lo que

raramente se logra la reparación del daño cometido y quedando la víctima como un actor terciario del proceso (Hernández Pliego, 2014).

1.8.2 Teoría del apoyo social

Aunque existen diferentes teorías que definen el apoyo social, la elegida para esta investigación fue la realizada por Nan Lin en su obra *Conceptualizing social support* de 1986. Esta teoría refleja el hecho de que los seres humanos necesitan de las relaciones sociales para poder desarrollarse como individuos y desenvolverse en una sociedad, gracias a las provisiones expresivas o instrumentales compartidas por elementos externos. Estos elementos externos pueden clasificarse en tres grupos, dependiendo de la influencia que tengan en el individuo al que brindan el apoyo social, identificando a la comunidad, a las redes sociales y a las personas de confianza (Aranda & Pando, 2013).

1.8.3 Teoría del control social o de los vínculos sociales.

La teoría del control social o de los vínculos sociales fue elaborada en 1969 por Travis Hirschi (2001), en su obra *Causes of Delinquency*, en la que se dispone que la existencia de vínculos afectivos con individuos socialmente integrados conforman el elemento principal que retiene a las personas de implicarse en actividades ilícitas. En dicha teoría los actos de delincuencia no son el resultado de ciertas creencias o valores que incitan a trasgredir las normas establecidas, sino que es el resultado de la ausencia de valores, normas y vínculos sociales que vetan delinquir. Así pues, el origen de la conducta del delincuente no está en la adquisición de creencias y valores delictivos, sino que se halla en la inexistencia o en la ruptura de los vínculos sociales que están en contra de la delincuencia. Entonces, según Hirschi, las acciones delictivas se originan cuando el vínculo de los individuos de una comunidad o sociedad es débil o está quebrantado.

1.8.4 Teoría de la resiliencia.

La teoría de la resiliencia sería aquella que nos habla de la capacidad de las personas de aprender y reforzarse mentalmente tras el padecimiento de un gran sufrimiento, fruto de experimentar una situación adversa en la vida, independientemente de su intensidad. El término, que en ingeniería hace referencia a la capacidad de los materiales de acumular

energía elástica antes de volverse fluidos (López Sánchez & Ubals Álvarez, 2012), fue apropiado para las ciencias sociales con autores como Borys Cyrulnik, Norman Garmezy o Viktor Frankl (Becoña, 2006), y ha sido abordado desde entonces por la psicología como un factor más a estudiar dentro de la salud mental de las personas. En el caso de nuestra investigación, se referencia que la resiliencia es proceso que no solo se pueda llevar a cabo exclusivamente a nivel personal, sino que también puede aplicarse de manera colectiva, como por ejemplo en los procesos de reforzamiento provocados por el enfrentamiento a las situaciones adversas vividas por una familia, un grupo o una comunidad (Gómez & Kotliarenko, 2010).

1.9 Limitaciones

Una de las limitaciones de esta tesis doctoral es que al tratarse de una investigación de carácter empírico que implica el trabajo de campo en espacios de alto riesgo como lo son los centros penitenciarios mexicanos y panameños, que la población para los estudios cualitativo y cuantitativo se verá determinada por elementos de accesibilidad y de seguridad establecidos por los centros penitenciarios objeto de estudio.

Otra limitación es que debido a que las mujeres conforman un porcentaje mínimo del total de las PPL en ambos lugares de estudio, esta parte de la población fue descartada de la investigación, por lo que los resultados de los estudios cualitativo y cuantitativo representan exclusivamente a la población masculina de las PPL.

Aunque las víctimas son las figuras centrales de los procesos de justicia restaurativa, esta investigación se centró en la perspectiva de los victimarios con el objetivo de conocer su punto de vista en posibles procesos restaurativos y de resiliencia familiar durante su reinserción social.

1.10 Metodología

Para la realización de esta tesis doctoral se utilizará una metodología mixta, empleándose un estudio fenomenológico cuantitativo y un estudio exploratorio cualitativo, con cuyos instrumentos permiten darle una base empírica a esta investigación. La justificación del uso de ambos se basa en que con ellos se puede hacer una observación más completa del

objeto de estudio, puesto que la aproximación cualitativa se basa en el estudio inductivo de la naturaleza del objeto, mientras que el modo cuantitativo se centrará en conocer la dimensión del objeto mediante un estudio deductivo (Sáenz López, Gorjón Gómez, & Gonzalo Quiroga, 2013). Por otro lado, el estudio cuantitativo tiene carácter comparativo, ya que se cuenta con datos de PPL del Centro de Prevención y Reinserción Social—en adelante CEPRESO—Topo Chico de la ciudad de Monterrey y del centro penitenciario Santiago de Veraguas de Panamá.

1.10.1 Técnicas de recolección de datos

En lo que respecta a la parte cualitativa de la investigación se utilizó la entrevista semi-estructurada, o sea, la recolección de información a través del discurso subjetivo de una serie de individuos que conforman un colectivo. Lo que se pretende de esta técnica es la de recopilar información sobre un determinado tema a través de las percepciones individuales, con la finalidad de poder recabar opiniones o ideas personales del problema en cuestión sin el inconveniente que podrían suponer la presión social y psicológicas del resto del grupo, para poder analizar dicho problema.

Una vez recogida la información individual, todos los discursos fueron analizados conjuntamente en una segunda fase para poder abordar la problemática de una manera más consensuada (Campoy Aranda & Gomes Araújo, 2015). Para el estudio cuantitativo, se vio necesario utilizar la encuesta tipo escala de Likert, instrumento psicométrico donde la persona encuestada indica si está de acuerdo o en desacuerdo con una afirmación, reactivo o ítem. Dicha indicación se realiza a través de una escala ordenada, siendo cada afirmación acompañada de una escala de valoración ordinal, generalmente entre los números 1 y 5 (Matas, 2018).

1.10.2 Población y muestra

La población de esta investigación queda conformada por las PPL varones—sin discriminación por factores como el tipo de delito o la edad—del CEPRESO Topo Chico de la ciudad de Monterrey, en el Estado de Nuevo León de los Estados Unidos Mexicanos y

del Centro Penitenciario de la ciudad de Santiago, en la provincia de Veraguas de la
República de Panamá.

1.11 Matriz de congruencia

Tabla 1:

Matriz de Congruencia

Problema de investigación	Pregunta de investigación	Objetivo General	Objetivos específicos	Marco Teórico	Hipótesis	Variables	Método	Instrumento de medición
El desconocimiento del potencial restaurativo existente en la resiliencia familiar de las PPL en México y Panamá durante los procesos de reinserción social.	¿Qué elementos de la justicia restaurativa tienen presencia en la resiliencia familiar de las PPL en los centros penitenciarios de Topo Chico (México) y Santiago de Veraguas (Panamá)?	Probar que los elementos de la justicia restaurativa son inherentes a la resiliencia familiar de las PPL, con la finalidad de impactar en las tasas de reincidencia y de reinserción social de las mismas.	<p>1. Identificar los elementos y actores de la justicia restaurativa que favorezcan al proceso de resiliencia familiar.</p> <p>2. Analizar los elementos de la justicia restaurativa que faciliten la resiliencia familiar de las PPL.</p> <p>3. Jerarquizar los elementos de la justicia restaurativa que, según su importancia e impacto, ayuden a la resiliencia familiar de las PPL.</p>	<p>1. Teoría de la justicia restaurativa</p> <p>Howard Zehr, Kay Pranis, Barry Stuart</p> <p>Susan Sharpe</p> <p>2. Teoría del apoyo social</p> <p>Nan Lin</p> <p>3. Teoría del control social o de los vínculos sociales</p> <p>Travis Hirschi</p> <p>4. Teoría de la resiliencia</p> <p>Borys Cyrulnik, Norman Garmezy</p> <p>Viktor Frankl</p>	<p>Los elementos de la justicia restaurativa que existen a la resiliencia familiar de las PPL son: la reparación del daño producido a la familia, el apoyo familiar la PPL y el perdón por parte de la familia de la PPL.</p>	<p>1.Reparación del daño</p> <p>2. Apoyo familiar</p> <p>3. Perdón</p> <p>4.Resiliencia familiar</p>	<p>Método mixto:</p> <p>Metodología cualitativa y cuantitativa</p>	<p>Método cuantitativo:</p> <p>-Encuesta tipo Likert</p> <p>-Estadísticas</p> <p>Método cualitativo:</p> <p>-Entrevista semi-estructurada</p>

Fuente: elaboración propia

Capítulo 2.- Los sistemas penitenciarios

2.1 Introducción

Si bien la problemática de estudio de esta investigación gira en torno a la resiliencia familiar de las PPL y la influencia que tienen los elementos de la justicia restaurativa en este proceso, primero es necesario introducir al lector en el campo que se va a abordar; los sistemas penitenciarios, entendiéndolos como mecanismos de perpetuación de la violencia estructural. Para ello se hará un recorrido histórico en el que se describirán los orígenes del mismo y de los centros penitenciarios, abordando con especial interés el caso de los sistemas penitenciarios de México y Panamá. Seguidamente se hará un análisis de los problemas que hacen que estos sistemas penitenciarios presenten fallas, rompiendo con el objetivo primordial para que dichos sistemas fueron diseñados: la reinserción social de aquellas PPL tras la comisión de un delito. Ambos análisis se realizan a la luz del concepto de violencia estructural con la finalidad de evidenciar las dinámicas y consecuencias de la violencia en los centros penitenciarios.

Se entiende por violencia estructural a todas aquellas situaciones que limitan el desarrollo del potencial humano, es decir que limitan la satisfacción de las necesidades de supervivencia, bienestar, identidad o libertad a través de las estructuras sociales, políticas y económicas (Galtung, 1990). La costumbre nos ha hecho ver con normalidad que aquellos individuos de una sociedad que trasgreden las normas establecidas sean castigados con una pena privativa de libertad, lo que se traduce a una estancia dentro de un centro penitenciario donde, en teoría, el individuo deberá llevar a cabo un proceso conocido como reinserción social. Durante el tiempo que dure la condena, la PPL deberá reflexionar sobre los actos ilícitos realizados y el daño cometido contra la víctima y la sociedad en general, a lo que se suman una serie de capacitaciones laborales y educativas por parte del personal penitenciario que buscarán como resultado la no reincidencia delictiva del individuo una vez haya finalizado su condena.

2.2 Cárcel y prisión. El origen de los sistemas penitenciarios

El ser humano ha realizado un largo recorrido a través de la historia, desde que la especie humana saliera de África para habitar el resto del mundo hasta nuestros días.

En dicho recorrido, la cultura humana ha experimentado una innumerable serie de cambios, adaptando la cosmovisión de las singulares culturas y civilizaciones que han existido, dependiendo de diferentes factores como el clima, el terreno, los acontecimientos naturales o los diferentes cambios en el modelo político-demográfico.

Por supuesto el mundo penitenciario también ha vivido estos cambios desde la antigüedad más remota hasta la actualidad, cambiando constantemente la forma y la función de aquellos lugares destinados a retener a aquellos individuos que desobedecían las normas impuestas por la autoridad gobernante. Así, es necesario que se haga un breve recorrido histórico para poder entender cómo las culturas anteriores a nosotros entendían la privación de la libertad de sus integrantes.

2.2.1 Edad Antigua

La historia nos demuestra que ya desde la Edad Antigua existían determinados lugares donde se custodiaban a aquellos que quebrantaban las leyes impuestas por la autoridad. Varios de los libros de la Biblia nos relatan cómo desde la Antigüedad existían espacios destinados a custodiar a los que habían cometido alguna infracción para con las leyes establecidas. En el antiguo Egipto los faraones tenían cárceles— término anteriormente usado para lo que hoy se entiende como centro penitenciario—para recluir a aquellos que atentaban contra las leyes del reino. Se podría citar el versículo 20 del capítulo 39 del Génesis en el que se nos relata cómo José, hijo de Jacob quedó encarcelado en uno de estos recintos por designio del faraón (Reina & Valera, 2016).

Para la zona del Levante Mediterráneo, el Libro de los Jueces, en su capítulo 16 versículo 21, relata cómo Sansón fue encarcelado por los filisteos para posteriormente ser sacrificado al dios Dagón como ofrenda (Reina & Valera, 2016). Gómez Aranda también comenta la existencia de cárceles durante la época de los Reyes de Israel— siglos XI-VIII a.C—donde la autoridad estatal ordenaba la construcción de pozos rodeados de muros en la casa de un súbdito seleccionado, que a su vez cumplía las funciones de custodio. Si bien estos reyes no utilizaban privación de libertad como una pena, sí que usaban dichos pozos como una medida preventiva para retener al prisionero hasta su juicio. Un buen ejemplo de ello se puede encontrar en el capítulo

22 del primer libro de los Reyes, donde el profeta Miqueas es arrojado a la cárcel por orden del rey israelita Ajab (Gómez Aranda, 2003).

En el capítulo 7 del libro de Esdras se localiza una de las primeras referencias en las que la privación de la libertad se contempla como un castigo propiamente dicho. El rey persa Artajerjes ordena al sacerdote israelita Esdras guiar a su pueblo de vuelta a Jerusalén desde Babilonia tras 50 años de cautiverio, encomendándole que “todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, ya sea a muerte, a destierro, a confiscación de bienes o a prisión” (Reina & Valera, 2016, pág. 784).

En la antigua Atenas del siglo IV a.C—siendo esta polis la referencia de la cultura helénica en la Antigüedad—la pena privativa de libertad podía ser impuesta tras la realización de un juicio popular. A diferencia de las culturas antes mentadas, las sentencias en Atenas no emanaban de la autoridad de un único gobernante, sino que provenían de la decisión conjunta de un jurado popular. Desde el octavo al duodécimo libro de la obra “Diálogos” de Platón se nos da constancia de las diferentes penas que podían imponérseles a las distintas partes del litigio, existiendo “la pena de muerte, la cárcel, los golpes, las humillaciones haciéndolos estar sentados o de pie, las exposiciones en templos en los confines de la región, o castigos en dinero” (Platón, 1999, pág. 130).

Los antiguos helenos podían interpretar la pena privativa de libertad de dos formas: la primera de ellas era la utilización de la privación de la libertad como castigo, en el que el condenado era recluso en pozos o grutas naturales durante un tiempo determinado por la sentencia. La otra interpretación era la cárcel como medida coercitiva, estando el condenado recluso en estos lugares hasta que aceptase pagar una multa impuesta por el tribunal popular. Aun así, los derechos del ciudadano condenado eran respetados, puesto que la estancia en la cárcel no significaba el maltrato físico de los mismos, reservándose la tortura a los extranjeros y los esclavos (Riaño Rufilancha, 2003).

En el mundo romano, con un sistema penal de tipo inquisitivo, la cárcel se interpretaba como un tipo de tortura cuando se pretendía obtener información de los encarcelados. La cárcel romana no era un lugar donde se esperaba que los presos tuvieran una

redención de la pena, puesto que las condiciones de dicho lugar suponían en innumerables ocasiones la muerte de la PPL (Arce Martínez, 2003). Además, se deben diferenciar las cárceles del período republicano, durante el que existía una cárcel dentro del recinto del foro, y del período imperial, durante el cual aumentó el número de cárceles dentro del recinto de la Urbe. En las provincias, las cárceles quedaban bajo la administración de las autoridades municipales que retenían a los acusados antes de enviarlos a los gobernadores de la provincia correspondiente (Pavón Torrejón, 2003).

En definitiva, el mundo romano no contemplaba la pena privativa de libertad como un castigo en sí, sino que destinaba ciertos lugares a mantener custodiados a los prisioneros hasta que se decidiera el destino de los mismos o, simplemente, muriesen esperando la sentencia (Sánchez Aliseda, 2018).

2.2.2 Edad Media

Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 d.C., el Imperio Romano de Oriente mantuvo las costumbres legales romanas en lo referente a las cárceles. Los emperadores bizantinos y sus gobernadores provinciales siguieron considerando a la cárcel como un tormento, donde los acusados eran arrojados bien a la espera de una decisión, bien como medida coercitiva para la entrega de sus bienes materiales o el pago de una multa. Por tanto, un prisionero podía quedar confinado en la cárcel durante largos períodos de tiempo hasta que se le administrase justicia. En la capital, Constantinopla, existían una cantidad indeterminada de cárceles situadas en diferentes torres y fortalezas de la urbe denominadas *praetoria*. El carácter de estas cárceles era público, confinándose en ellas desde ladrones y asaltantes hasta los aristócratas acusados de traición.

Durante esta época aparecen las primeras cárceles de carácter religioso, administradas por la Iglesia ortodoxa. Tal y como comenta Faustino Gudín Rodríguez-Magariños (2008) “el derecho de la Iglesia ya organizó la prisión como pena sometiendo a los encarcelados bajo un régimen de penitencia, los castigos no cruentos, y la finalidad de la enmienda a través del arrepentimiento y la oración” (pág. 3). Estas cárceles eran de carácter privado, destinadas a albergar a miembros díscolos de la familia imperial y a los clérigos que habían roto los preceptos de la Iglesia de Oriente (Pérez Martín, 2003).

En Europa Occidental, el derecho romano predominante hasta comienzos de la Edad Media se vio influenciado por el derecho consuetudinario que traían consigo los distintos pueblos germánicos que se asentaron en los antiguos territorios del Imperio Romano Occidental. Es en esta época cuando aparecen las cárceles como lugar de confinamiento de los que recibían una pena privativa de libertad. Luitprando—rey del pueblo lombardo asentado en el norte de la península Itálica para el siglo VIII d.C—ordenó que todos los jueces de sus dominios tuvieran “una cárcel para encerrar a los ladrones uno o dos años” (Alvarado Sánchez, 2012, pág. 31), mientras que Carlomagno—rey y, posteriormente, emperador de los francos—decretó que los “que hubiesen delinquido fueran ingresadas en prisión hasta que se corrigieran” (López Melero, 2012, pág. 403).

En la Inglaterra del siglo XII se destaca la primera cárcel estatal en Clarendon de Enrique II, administrada por siervos de la Corte y cuya finalidad era privar de la libertad a los que desafiaban el poder de la Corona, contemplando dicha privación como una pena. Sin embargo, en este período en el que el poder estaba atomizado, el carácter de las cárceles solía ser privado, contando cada gobernante con un lugar de reclusión en sus asentamientos—lo que coloquialmente se conoce como mazmorra—donde la privación de la libertad “podía conmutarse por prestaciones en metálico o en especie, quedando como residuo cuando el crimen no tenía suficiente gravedad” (Gudín Rodríguez-Magariños, 2008, pág. 3).

En la península Ibérica del siglo XIII se identifica el caso del rey castellano Alfonso X que mandó redactar el Código de las Siete partidas en el que compilaba las leyes y reglamentos del reino. La cárcel queda referida en la ley 4 del título 31 de este documento, diciendo que su función “*no es dada para escarmentar los yerros, mas para guardar los presos tan solamente en ella hasta que sean juzgados*” (Pensamiento penal, 2008, pág. 158). No se debe interpretar este mandato como una disposición, puesto que las condiciones de estos lugares de reclusión eran insalubres y nocivas. De hecho, la acción de “*escarmentar*” significaba el sometimiento de los encarcelados a penas rutilantes como “la rueda, el aceite hirviendo, maceramiento, desmembramiento por rueda o con caballos, el ahogamiento, la galera, la muerte por saetas o por el fuego” (Gudín Rodríguez-Magariños, 2008, pág. 4). La autoridad

castellana no pretendía prohibir estas penas, sino que las mismas no se aplicaran durante el período de encarcelamiento.

2.2.3 Mundo prehispánico

Ya que el marco geográfico de esta investigación abarca dos países de América Latina, es necesario establecer una pequeña introducción de cómo las civilizaciones prehispánicas entendían la pena privativa de libertad. En lo referente a la cultura maya, la pena privativa de libertad no estaba contemplada dentro de sus leyes y, tal y como apunta Robleto García (2008), “no se consideraba un castigo, su propósito era detener al delincuente para aplicarle la pena impuesta” (pág. 243), ni existía el concepto de cárcel como un lugar o edificio destinado a albergar personas, puesto que a los que se apresaba “eran llevados a unas jaulas de madera, que servían de cárcel, y en ellas eran puestos los condenados a muerte, los esclavos fugitivos y los presos en la guerra” (Salcedo Flores, 2009, pág. 157).

En el Valle de México, los aztecas sí que se contemplaban la privación de libertad como una pena. Como apunta Jacobo Marín, se “dejaba a criterio del juzgador la sanción aplicable según el caso en cuestión, entre ellas encontramos la prisión en una cárcel o en el propio domicilio” (Jacobo-Marín, 2010, pág. 62). Dichas cárceles no eran más que jaulas de madera, a la que se le colocaban piedras encima, y que podían cumplir la doble función de evitar que los individuos escaparan hasta la celebración del juicio y la del cumplimiento propiamente dicho de una pena de privación de libertad. Existía la posibilidad de que la privación de libertad se realizara en el propio domicilio del acusado o en uno ajeno, como era el caso de los guerreros capturados durante las guerras floridas. En el caso de que este confinamiento temporal representase la misma pena, esta “llevaba aparejada la indemnización de daños y perjuicios; era por eso frecuente reducir al autor a la esclavitud en beneficio del lesionado, una vez cumplida la pena de prisión” (Trimborn, 2012, pág. 762)

En el Imperio Inca se observa cómo la cárcel podía tener también una doble interpretación dependiendo de la función que estas cumplían, pudiendo ser cárceles de custodia o cárceles de castigo. Las cárceles de custodia se usaban “cuando no se determinaba la culpabilidad del acusado, lo que se hacía era encerrarlo en otro tipo de cárceles mientras se hicieran las investigaciones pertinentes” (Sánchez Zorrilla &

Zavaleta Chimbor, 2015, pág. 30). Posteriormente el acusado podía ser liberado o bien, si era encontrado culpable “era ahorcado o estrangulado en la cárcel” (Trimborn, 2012, pág. 774). El otro tipo de cárcel, genuino de los incas, era denominada *Cangaguase* y constituía un castigo en sí mismo, puesto que era “un lugar destinado para el encierro en condiciones espeluznantes, pues era una prisión llena de animales salvajes” (Sánchez Zorrilla & Zavaleta Chimbor, 2015, pág. 27). Si el individuo sobrevivía en este lugar tres días completos, se le perdonaba la vida, no sin antes confiscar todos sus bienes materiales.

En el mundo de la cultura muisca o chibcha—en la región geográfica comprendida entre el istmo de Panamá y el centro de lo que hoy es Colombia—la cárcel solo estaba contemplada para el adulterio y destinada exclusivamente para las élites sociales que “podían cancelar la pena de muerte común por una prestación patrimonial que consistía en una indemnización al marido ofendido y en el pago de una multa penitenciaria al rey” (Trimborn, 2012, págs. 768-769).

2.2.4 Edad Moderna

De nuevo en Europa, una de las características comunes de las cárceles seculares en la Edad Moderna—que comprende el período entre los siglos XVI y XVIII—era la de responder a la falta de mano de obra surgida en el continente a raíz de los movimientos migratorios del campo a las ciudades y hacia el Nuevo Mundo y las constantes guerras de religión que asolaron el continente y a su población.

Se observa pues como para mediados del siglo XVI surgen en las actuales Inglaterra, Holanda y Alemania las denominadas leyes de pobres y las consecuentes casas de asilo, respuesta a la desaparición del feudalismo y “la subsiguiente desorganización social que inundaron la Europa de los siglos XIV y XV de hordas de mendigos, indigentes y prostitutas que vagaban por ciudades y campos entregándose con frecuencia al robo, al saqueo e incluso al asesinato” (Gudín Rodríguez-Magariños, 2008, pág. 5)”. Estas leyes dan a entender que en la Europa moderna se empiezan a interpretar las penas como una oportunidad de los nacientes Estados de encontrar mano de obra barata puesto que resultaba “productivo reclutarlos, recluirlos, adiestrarlos en el trabajo rendidor, imponerles una disciplina de fábrica y explotarles así su mano de obra.” (Gómez Grillo, 2005, pág. 137) .

Un tipo especial de cárcel itinerante quedaba constituida por los navíos llamados galeras, con el que se pretendía disponer de tripulaciones para el mantenimiento del poder naval de los Estados. Por tanto, se imponía la pena de galeras para poder usar “a los delincuentes y esclavizar a los prisioneros de guerra. Con el inicio de las grandes empresas marítimas de los siglos XVI y XVII aparecieron, fundamentalmente en el Reino de España, las penas de galeras” (López Melero, 2012, pág. 411).

Por su parte las cárceles eclesiásticas se habían extendido por todo el territorio de la Cristiandad. En esta época de constantes revoluciones religiosas—como los protestantes de Martín Lutero en Alemania o los calvinistas de Juan Calvino en Francia—que se extendían por Europa y América, las cárceles religiosas ya no solo estaban destinadas a miembros religiosos rebeldes sino que “se extendió a los seglares condenados por herejía” (Gudín Rodríguez-Magariños, 2008, pág. 3). Como ejemplo se puede señalar los diferentes palacios que la institución de la Inquisición española mantenía en los diferentes territorios de la Monarquía Hispánica—como la actual sede de la facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México—donde se retenía y torturaba a los acusados de herejía como parte de los denominados autos de fe (García-Molina Riquelme, 1994).

2.3 El nacimiento de los sistemas y centros penitenciarios actuales

2.3.1 Siglos XVII y XVIII

A mediados del siglo XVII y principios del siglo XVIII se asiste a un replanteamiento filosófico de la función punitiva de las cárceles en el que se abogaba por que estos lugares empezaran a ser destinados como centros de reinserción social para los encarcelados. Dentro de este replanteamiento se encuentra la experiencia vivida en Filadelfia y Nueva York en la época de las Trece Colonias inglesas de Norteamérica de la mano del jurista William Penn, el cual “estableció correccionales, fijó penas pecuniarias para los diversos delitos y se planificó un proceso de reeducación para los reclusos” (Gudín Rodríguez-Magariños, 2008, pág. 8).

La Iglesia católica—bajo el papado de Clemente XI a principio del siglo XVIII—también estableció una serie de hospicios que servían como lugar de reclusión de delincuentes menores a los que se les “proporcionaba instrucción elemental y religiosa y el

propósito era lo que penitenciarmente se ha denominado finalidad correccionalista moralizadora” (Gómez Grillo, 2005, pág. 138). No será hasta el siglo XVIII—en el período conocido como Ilustración—cuando este replanteamiento filosófico de la cárcel adquiriera un carácter humanista en el que se interpretara que la pena privativa de libertad debía ser “más humanitaria que simplemente arrojar a alguien en la cárcel hasta su sentencia, entendiéndose la capacidad rehabilitadora de la cárcel” (Gudín Rodríguez-Magariños, 2008, pág. 10). Este movimiento filosófico fue abanderado por autores ilustrados como Voltaire, Beccaría, Howard o Bentham que “hicieron una crítica exhaustiva del Derecho Penal y procesal” (López Melero, 2012, pág. 414).

El siglo XVIII marcó el nacimiento y de los sistemas penitenciarios tal y como se entienden en la actualidad, así como las diferentes legislaciones que los regulan. A finales de siglo se localiza el origen de dichos sistemas penitenciarios en la obra del británico John Howard “El estado de las prisiones de Inglaterra y Gales” de 1777, en la que se establecen una serie de pretextos que han de cumplir las cárceles—entre las que se encuentran el mejorar el estado higiénico-sanitario, la incentivación del trabajo, la separación de los encarcelados según sus delitos y la adopción del sistema celular donde cada individuo tiene su espacio de hábitat propio—para poder alcanzar el ideal humanitario de la cárcel establecido por los pensadores ilustrados (Gudín Rodríguez-Magariños, 2008)”. La manera de abordar a los encarcelados experimentó una serie de cambios, muchos de ellos productos de la experiencia del día a día que se vivía en los primeros centros penitenciarios. El primer modelo de sistema penitenciario fue el ya citado modelo filadélfico de Willian Penn de principios del siglo XVIII, consistente en el aislamiento de los encarcelados en celdas individuales con el objetivo de evitar cualquier tipo de tentación o influencia exterior para que así realizaran un proceso de reflexión.

2.3.2 Siglos XIX y XX

Este modelo de Penn acabó fracasando, por lo que las autoridades de los ya Estados Unidos idealizaron el modelo auburniano—llamado así por copiar el tratamiento dado en la cárcel de Auburn, Nueva York—para principios del siglo XIX. Este nuevo modelo combinaba el aislamiento del modelo filadélfico, dándole un carácter nocturno, e incluía un período laboral diurno de socialización con los demás PPL, aunque bajo un

régimen de absoluto silencio. Este modelo fue exportado y utilizado por los gobiernos europeos hasta mediados del siglo XIX cuando surge en Inglaterra el modelo progresivo, consistente en el ideal de restablecer a las PPL a través de una serie de etapas. Este modelo fue imitado en otros territorios europeos —siendo un ejemplo el sistema penitenciario español ideado por Manuel Montesinos en la ciudad de Valencia o la experiencia alemana de George von Obermayer en Múnich—y a otros territorios del Imperio Británico—destacando la experiencia australiana de Alexander Maconochie en Norfolk o en los centros penitenciarios irlandeses de la mano de Walter Crofton— (Gudín Rodríguez-Magariños, 2008).

En contraposición a los ideales humanistas de la Ilustración se hallan obras, como *l'uomo delinquente* de Cesare Lombroso, que declinaba la idea de que las PPL pudieran experimentar una mejora con respecto a sus actividades delictivas, atribuyendo estas actividades a factores antropológicos y fisiológicos. Estas corrientes de pensamiento conllevaron a que los tratos vejatorios fueran la norma común en los centros penitenciarios de Occidente, como indica la obra de Piotr Kropotkin (1887) “Las prisiones” en la que relata la situación de los presos en Francia, Austria y Alemania y de las que apunta que “no mejora a los presos; en cambio, según hemos visto, no impide que, los denominados crímenes, se cometan; testigos, los reincidentes. No responde, pues, a ninguno de los fines que se propone” (pág. 17). El propio autor británico Oscar Wilde estuvo en prisión, donde escribió su pequeña obra “Balada de la cárcel de Reading” en la que apunta que “la maldad, como mala hierba, crece en la tierra carcelaria; y lo que hay de bueno en el hombre allí se marchita, se acaba; la angustia vigila las puertas, y es guardián la desesperanza” (Wilde, 1898, pág. 9).

Siguiendo las ideas del italiano Lombroso surge la llamada escuela de Kiel de la mano de Dahm y Schasfheim, que no dudan al afirmar que las penas deben significar el sufrimiento de las PPL al negar la posibilidad de una reinserción, ya que los comportamientos delictivos están sujetos a la genética de las personas. Dentro de este modelo de pensamiento se encuentra el sistema penitenciario de Estados Unidos para principios del siglo XX, donde se creó el modelo eugenésico. Este consistía en la esterilización de las PPL para que no pudieran engendrar y así transmitir su predisposición genética a las actividades delictivas, sistema que sería adoptado y

modificado por la Alemania Nazi en la que predominarían las lobotomías y la búsqueda incansable de la pureza de la raza aria (Gudín Rodríguez-Magariños, 2008).

Los fracasos de estos los sistemas surgidos a partir del pensamiento de la escuela de Kiel conllevó a un replanteamiento filosófico de la esencia humana y de la posibilidad de que esta se modificase a través del régimen adecuado. Así, ya en la segunda mitad del siglo XX aparece el término de tratamiento, entendido como el objetivo de “mejorar en todo lo posible la aptitud y el deseo del recluso de seguir una vida conforme a la ley, una vez en libertad” (Coca Muñoz, 2007, pág. 170). Esta definición también puede ser interpretada como una descripción primigenia del término actual de reinserción social, para cuya consecución la gran mayoría de Estados actuales se decantaron por el rescate e implantación de los sistemas progresivos de mediados del siglo XIX.

2.4 Los sistemas penitenciarios objeto de estudio

Puesto que las poblaciones elegidas para esta investigación se localizan geográficamente en las ciudades de Monterrey—Estado de Nuevo León, México—y en Santiago—provincia de Veraguas, Panamá—se hará una introducción al lector en los modelos penitenciarios existentes en dichos lugares. Se abordará la situación de ambos sistemas penitenciarios tomando como base en su configuración, la población penitenciaria de cada país, además de los recursos que disponen y los niveles de reinserción social que en ellos se consiguen.

2.4.1 El sistema penitenciario mexicano

2.4.1.2 Estructura

Los pilares del sistema penitenciario mexicano se asientan en el párrafo II del art. 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos—en adelante CPEUM— en el cual se dice que este sistema se organizará “sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir” (CPEUM, 2018)

Como se indica, el objetivo primordial de este sistema penitenciario queda identificado como la reinserción social del individuo PPL, entendiendo dicho proceso como el

desistimiento de las actividades delictivas anteriormente realizadas y la readaptación de la PPL al entorno social. Para alcanzar este objetivo se han realizado grandes cambios en la metodología del funcionamiento de los centros penitenciarios y los elementos fundamentales establecidos para la consecución de la reinserción social son: “el tratamiento individualizado del preso, la existencia de instalaciones carcelarias adecuadas y el respaldo del cuerpo técnico especializado (pedagogos, criminólogos, psicólogos, trabajadores sociales y otros)” (Coca Muñoz, 2007, págs. 170-171).

El sistema penitenciario mexicano vigente sigue el modelo progresivo individualizado—importado a México por el jurista Miguel S. Macedo e implantado por José Almaraz para la primera década del siglo XX—, consistente en alcanzar la reinserción social de las PPL a través de una serie de etapas continuas. Este sistema quedó fijado en un primer momento por el art. 7 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados—en adelante LENMRSS, abrogada en 2016—, constando de cuatro etapas para la correcta reinserción social de la PPL;

Una primera fase de estudio y diagnóstico, donde se realiza un examen de los aspectos psiquiátricos, económicos y sociales del individuo, y una segunda etapa de tratamiento. Esta etapa se dividía a su vez en la clasificación en la cual se destinaba a la PPL a la institución penitenciaria, especializada para su condición y el tipo de delito cometido, donde el individuo quedaba recluido en el centro penitenciario designado, donde llevaría a cabo las capacitaciones y el proceso de reinserción social y la etapa de preliberación, donde se preparaba a la PPL para su inminente puesta en libertad, lo que conllevaba que la misma debiera adaptarse a la sociedad de nuevo, por lo que se presuponían ciertas ventajas graduales como permisos de salida, reclusión nocturna y orientación especial a la familia del mismo (LENMRSS, 2009). Con la realización de la reforma judicial y la promulgación de la LNEP en 2016, los artículos dedicados a los procesos de reinserción social se amplían los servicios, reconociendo otros métodos como la aplicación de programas de justicia alternativa para la reinserción social.

Ya en la LENMRSS se observaba cómo en la etapa de clasificación se mencionaba la existencia de diferentes centros penitenciarios que eran asignados respondiendo a ciertas características de las PPL, entre los que se encontraban “establecimientos de seguridad máxima, media y mínima, colonias y campamentos penales, hospitales

psiquiátricos y para infecciosos e instituciones abiertas” (LENMRSS, 2009). Entre las premisas de clasificación identificadas en el art. 6 de la LENMRSS se encontraban el estado de enfermedad física o psíquica de la PPL, su sexo o su edad, siendo la premisa más importante el carácter del fuero del delito cometido por el mismo.

Tabla 2:

Delitos Pertenecientes al Fuero Común y al Fuero Federal

Delitos fuero federal más frecuentes:	Delitos fuero común más frecuentes:
Portación de arma de fuego sin licencia.	Robo a transeúntes.
Ataques a las vías de comunicación.	Robo de vehículo.
Narcotráfico y otros delitos contra la salud.	Robo a casa habitación.
Daños o robo al patrimonio arqueológico, artístico e histórico.	Robo a camión repartidor.
Delitos electorales y en materia de registro nacional de ciudadanos.	Robo a negocio.
Delitos ambientales	Lesiones.
Contrabando.	Daño en propiedad ajena
Defraudación fiscal.	Cohecho.
Reproducción ilegal de audio, videocasetes y programas de cómputo	Fraude.
Robo a bienes de la nación	Delitos sexuales.
Delitos en materia de derechos de autor	Homicidio
	Corrupción de menores.
	Lenocinio.
	Abuso de autoridad
	Allanamiento de morada.
	Falsificación de documentos.
	Ataques a la paz pública
	Ultrajes a la moral pública.
	Robo de ganado

Fuente: Elaboración propia basado en Pérez Moreno, S. (2001). Valores para la democracia. Delitos e infracciones administrativas. México D.F: INEA.

Para los delitos del fuero federal—acciones que perjudican los intereses o la seguridad de la Federación como son el fraude fiscal, el narcotráfico o los daños al patrimonio arqueológico—la PPL es sancionada por las autoridades federales, independientemente de la entidad federativa donde se cometió el delito. Cada uno de los centros penitenciarios de carácter federal recibe el nombre de Centro Federal de Readaptación Social—en adelante CEFERESO—organizados y administrados por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Social y Readaptación Social—en

adelante OADPRS—, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación. Dentro de la administración federal cabe destacar el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial—en adelante CEFEREPSI—de Ciudad Ayala, en el estado de Morelos, cuya finalidad es la “atención, tratamiento y rehabilitación biopsicosocial de los internos-pacientes” (OADPRS, 2012, pág. 63). Estos CEFERESO se localizan en los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco y parte de sus instalaciones están destinadas a albergar a PPL del fuero común.

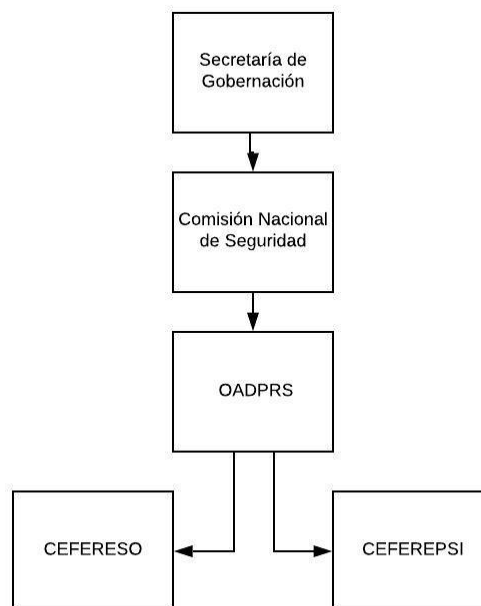


Figura 1. Estructura administrativa de los centros penitenciarios del estado de Nuevo León. Fuente: Elaboración propia

Con respecto a los delitos del fuero común—aquellos en los que otra persona fue afectada por el delito cometido como pueden ser homicidio, amenazas o robo en cualquier modalidad—la PPL quedará bajo la tutela del Estado donde se cometió y juzgó el acto delictivo. Dentro de este contexto existen los Centros de Readaptación Social—en adelante CERESO—y los Centros de Prevención y Readaptación Social—en adelante CEPRESO—siendo la diferencia entre estos tipos que los CEPRESO cumplen la función doble de centro penitenciario y de prisión preventiva para aquellos individuos que aún no han recibido una sentencia. Cada entidad federativa es responsable de designar las distintas autoridades penitenciarias que administran y

organizan dichos centros. En el caso del estado de Nuevo León la institución competente es la Dirección de Reinserción Social, dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Mención especial merecen otros tres tipos de instituciones penitenciarias de la República mexicana; por un lado se identifican los centros civiles denominados Centros de Reinserción Social Distritales y los Centros de Retención Municipales en los estados de Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Puebla, Chiapas y Quintana Roo cuyo objetivo es disminuir las tasas de sobrepoblación y hacinamiento de los CERESO y CEPRERESO existentes y que quedan bajo la administración de las autoridades municipales. Para los militares que cumplen una pena privativa de libertad existen las Prisiones Militares repartidas entre los estados de Sonora, Jalisco y la Ciudad de México.

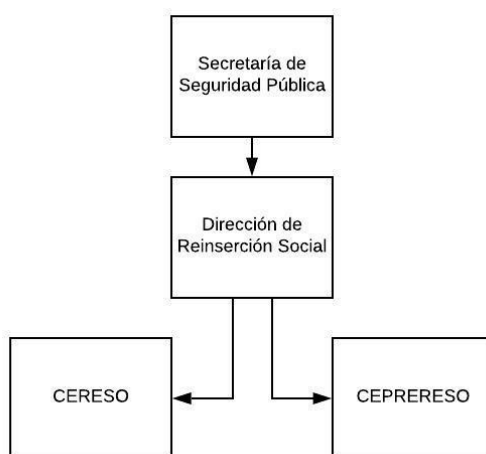


Figura 2. Estructura administrativa de los centros penitenciarios del estado de Nuevo León. Fuente: Elaboración propia.

Para enero de 2017, el número total de centros penitenciarios en el país era de 378. De estos, 20 centros pertenecían a la administración federal, 274 a las administraciones estatales, 84 a las autoridades municipales—diferenciándose 67 centros penitenciarios municipales y 17 distritales—y 3 militares (CNDH, 2017).

2.4.1.2 Población penitenciaria mexicana

Para enero de 2017 había un total de 188.262 PPL en los centros penitenciarios estatales, de los cuales el 95% eran varones—la mayoría tenían edades comprendidas entre los 18 y los 29 años con una educación media de secundaria—, estando La

Ciudad de México a la cabeza con 30.979 PPL, mientras que Tlaxcala mantenía 701 (INEGI, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2017).

Del total de PPL por delitos del fuero común, 104.363 fueron ingresados a lo largo del año 2016, de las cuales 92.999 ingresaron en centros federales. En estos centros también ingresaron 9.732 PPL por delitos del fuero federal, mientras que 632 fueron condenadas por delitos de ambos fueros (INEGI, En números. Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatalen México, 2017). Por otro lado, 130.483 personas egresaron de los centros penitenciarios mexicanos (INEGI, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2017). Para completar estos datos, la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad—en adelante ENPOL— de 2017 nos indica que a nivel nacional había una tasa de 173 PPL por cada 100.000 habitantes en el país, en comparación con la tasa de 693 PPL para Estados Unidos y 114 para Canadá (ENPOL, 2017). En el caso específico de Nuevo León, para enero de 2017 había 6974 PPL en los centros penitenciarios estatales, lo que significaría una tasa de 136 personas por cada 100.000 habitantes (CNDH, 2017).

Entre los delitos del fuero común más frecuentes se citan el robo en cualquiera de sus modalidades, el narcomenudeo, lesiones, daños a la propiedad y violencia familiar, mientras que para el fuero federal los más frecuentes fueron la posesión ilícita de armas de fuego, delitos contra la salud pública y delitos contra el libre desarrollo de la personalidad (INEGI, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2017).

2.4.2 El sistema penitenciario panameño

2.4.2.1 Estructura

El sistema penitenciario panameño tiene como base el art. 28 de la Constitución Política de la República de Panamá—en adelante CPRP—en el que se aclara que dicho sistema se articula en torno a los principios de seguridad, rehabilitación, capacitación laboral y educacional y defensa social de las PPL. Dicho artículo también “prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los

detenidos” (CPRP, 2004) por lo que se presupone que dicho sistema tiene como objetivo específico el garantizar los derechos humanos, aunque no se hace mención explícita de los mismos.

Si bien el objetivo principal del sistema penitenciario panameño es el de lograr la rehabilitación y resocialización de las PPL, también dispone de ciertos objetivos específicos, supervisados por la Defensoría del Pueblo de Panamá—en adelante DPP—entre los que se encuentra el mantener recluidas y brindar ayuda a las personas sobre las que pesa una sanción administrativa de naturaleza penal, servir de custodia y garantizar la seguridad de las personas recluidas de manera preventiva y asistir a las PPL y a los egresados con el fin de garantizar su correcta reinserción social (DPP, 2011).

Para llevar a cabo estos objetivos el sistema penitenciario sigue el modelo progresivo-técnico de carácter individual, tal y como se dice en el art. 8 de la L55SP, que consta de diferentes etapas. Este modelo guarda diferencias con el sistema mexicano, puesto que en sus etapas aparece “el periodo de observación o diagnóstico de tratamiento, el probatorio, de prelibertad y el de libertad vigilada y condicional” (L55SP, 2003), describiéndose cada una de las etapas en el capítulo II del Primer Título de la misma L55SP.

La primera etapa corresponde a la fase de estudio y diagnóstico realizado en el caso mexicano, donde se clasifica a la PPL en base a un análisis psicológico, socio-económico y los antecedentes penales del mismo, identificando el tratamiento más adecuado para su caso. El probatorio sería el cumplimiento de la pena en sí misma que daría paso a la etapa de prelibertad, donde se prepara a la PPL para su vuelta a la sociedad. La gran diferencia con el caso mexicano es que la legislación penitenciaria panameña no solo tiene en cuenta el periodo de prelibertad de las PPL, sino que también realiza un seguimiento de la resocialización de los egresados de los centros penitenciarios (DPP, 2011).

También en la primera etapa de estudio y diagnóstico se designará el centro penitenciario en el que el individuo cumplirá la pena privativa de libertad dependiendo de si este requiere instalaciones de máxima, media o mínima seguridad. Dependiendo de las condiciones específicas de cada individuo, este podrá ser destinado a Centros de Detención Preventiva, a Centros de Cumplimientos de Pena—también llamados

centros penitenciarios—, a Centros de Prisión Abierta donde no existen medios para evitar la evasión de las PPL o a Centros de Reinserción Social cuyas instalaciones están “destinadas al seguimiento y asistencia a las PPL beneficiadas con permisos de salida especiales” (DPP, 2011, págs. 36-37). Cada uno de estos centros queda al cargo de una Junta Técnica, organismo compuesto por el director y subdirector del centro, además de un equipo compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, custodios, etc. (DPP, 2011).

Al ser Panamá un estado centralizado—a diferencia del federalismo existente en México—todos los centros penitenciarios quedan bajo la autoridad de la Dirección General del Sistema Penitenciario—en adelante DGSP—, dependiente del Ministerio de Gobierno de la República de Panamá. Dicha Dirección General cuenta con el Director General—cargo que en el momento de esta investigación ostentaba el Lic. Armando Medina—, un Subdirector, una Secretaría General y una administración propia compuesta por diferentes departamentos (L55SP, 2003). No obstante, sí que se reconoce cierta autoridad regional en el art. 32 de la Ley 63 del 2008 que adopta el Código Procesal Penal —en adelante L63CPP—al otorgar la potestad de emitir la pena al “Tribunal de Juicio o el Juez de Garantías de la circunscripción territorial donde se haya cometido el hecho por el cual se procede” (L63CPP, 2008).

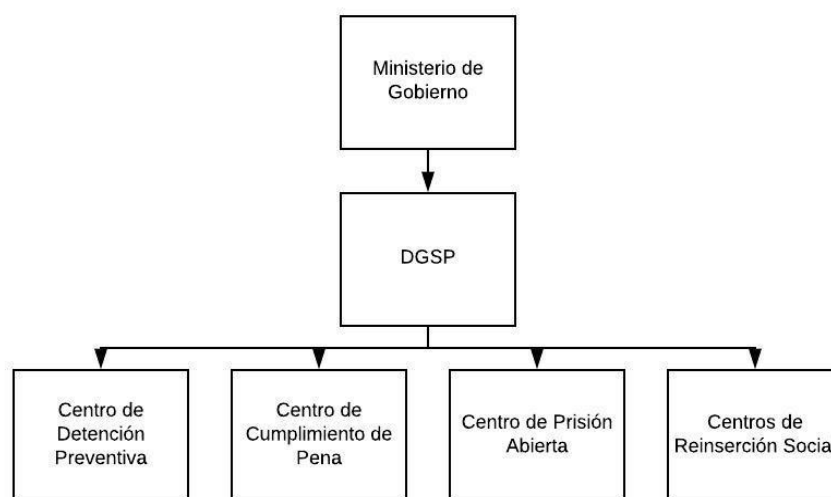


Figura 3. Estructura administrativa de los centros penitenciarios de la República de Panamá. Fuente: Elaboración propia.

Para octubre de 2018 Panamá contaba con un total de 18 centros penitenciarios, 12 de ellos repartidos en las provincias del interior del país y los 6 restantes en la capital, Ciudad de Panamá. Cabe destacar que la Provincia de Darién no cuenta con centros penitenciarios propios, así como tampoco las comarcas indígenas de Ngäbe-Buglé, Madugandi, Guna Yala y Emberá Wounaan (DGSP, 2018).

2.4.2.2 Población penitenciaria panameña

Para octubre de 2018, la población total de PPL en centros penitenciarios de Panamá era de 16.325 personas, siendo el 94% de ellas varones adultos—de los cuales la mayoría tenían edades comprendidas entre los 18 y los 25 años—, quedando la Ciudad de Panamá a la cabeza nacional con una población penitenciaria de 10.948 personas, mientras que la provincia de Los Santos tenía una población penitenciaria de 224 personas (DGSP, 2018). Estos datos reflejan una tasa nacional de 393 PPL por cada 100.000 habitantes, mientras que para el caso específico de la provincia de Veraguas la tasa era de 209 PPL por cada 100.000 habitantes (INEC, 2018).

Conforme al tipo de delitos más comunes para 2018, la única información obtenida fue proporcionada por el Departamento del Sistema de Información Penitenciaria de la Cárcel Pública de Santiago de Veraguas, entre los que se pueden enumerar los delitos relacionados con drogas, robo, contra la libertad e integridad sexual, homicidio y hurto (SIP, 2018). En el panorama nacional, los delitos más frecuentes—siendo los últimos datos publicados los del informe de gestión del período comprendido entre 2010 y 2014—se pueden encontrar el delito contra patrimonio, contra la salud pública, contra la vida y la integridad personal, contra la seguridad colectiva y delitos contra el pudor y la libertad sexual (DGSP, 2015).

2.5 La violencia en los sistemas penitenciarios

Los sistemas penitenciarios han sido visualizados por la cultura occidental como una herramienta de impartición de justicia que facilita la consecución de la paz social, a través de la reinserción social de las PPL. Pero nada más lejos de la realidad, se presenta un panorama en el que estos centros son más reproductores de violencia que reductores de la misma. Si se realiza un ligero escrutinio se puede observar que los centros penitenciarios—al menos los que son objeto de estudio de esta

investigación—son exponentes de los diferentes tipos de violencia que se presentan en los estudios irenológicos.

Según el autor Johan Galtung, existen tres tipos diferentes de violencia que deben ser identificados con el objetivo de poder comprenderlos y así poder estudiar alternativas que mitiguen los índices de violencia. En primer lugar, se halla a la violencia directa, aquella que resulta más familiar y fácil de identificar, puesto que coincide con cualquier agresión física, psíquica o verbal. Seguidamente, se encuentra a la violencia estructural existente de forma intrínseca en los sistemas sociales, políticos y económicos, cuyo objetivo es mantener un orden social y legitimar a aquellos que se encuentran en el poder (Calderón Concha, 2009). Este tipo de violencia está normalizada gracias a la propia existencia del último tipo de violencia, la violencia cultural, que se aprovecha de aspectos de la cultura que pueden utilizarse para legitimar la aplicación del resto de violencias. Este tipo de violencia no se alimenta de toda la cultura, sino que se encuentra en aspectos específicos y aprovecha la simbología de estos, siendo ejemplo de ello las estrellas, las cruces, las banderas, los himnos, los desfiles militares o el retrato omnipresente del líder (Galtung, 1990).

Se pueden encontrar ejemplos de cada tipo de violencia en los dos sistemas penitenciarios estudiados, si bien cabe destacar que existen datos más amplios y precisos por parte de la autoridad mexicana. En primer lugar, se deben destacar los actos asociados a la violencia directa, pudiendo destacar el caso de México con 108 homicidios de internos, los 37 suicidios y 1043 riñas para 2016 (CNDH, 2017). Seguidamente, las evidencias de la violencia cultural son más apreciables para las PPL y la sociedad en general una vez que estas cumplen la condena que se les impuso. Como ejemplos se pueden destacar los problemas surgidos a la hora de encontrar un empleo teniendo antecedentes penales o el riesgo de exclusión social, tanto del recién liberado como de su familia, a raíz de la estancia en prisión (García Bores, 2003). Sin embargo, merece la pena prestar especial atención a los actos de violencia estructural, aquellos permitidos por la autoridad o por la falta de la misma, y que, en el caso especial de los sistemas penitenciarios, generan una serie de problemas cuya solución requiere una reforma estructural de los sistemas penitenciarios.

2.5.1 Problemas crónicos de los sistemas penitenciarios objeto de estudio

La violencia estructural existente en México y Panamá permite que ambos sistemas penitenciarios cuenten con los mismos problemas que apremian a casi la totalidad de sistemas penitenciarios de Latinoamérica. Entre las principales causas de estos problemas se pueden citar a la falta de interés y de recursos económicos y humanos destinados por los gobiernos al ámbito penitenciario, así como la impunidad y la falta de medidas disciplinarias a toda la población penitenciaria, incluyendo al personal técnico y de seguridad. Estas causas crean las condiciones necesarias para que se presenten los problemas más acuciantes de los sistemas penitenciarios mexicano y panameño—lo que conlleva a que no se cumpla el objetivo de la total reinserción social—que se ve a continuación.

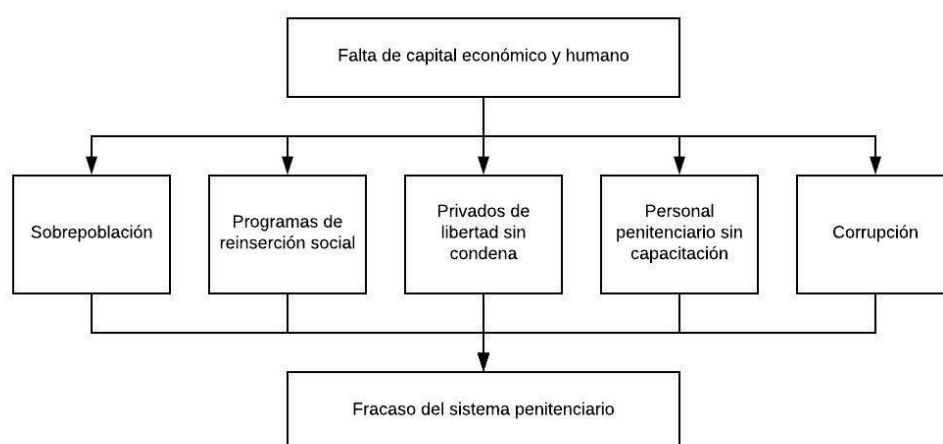


Figura 4. Principales problemas de los sistemas penitenciarios mexicano y panameño. Fuente: Elaboración propia.

2.5.1.1 Sobrepoblación

Se entiende a la sobrepoblación penitenciaria como la “tasa que se obtiene de relacionar el número total de personas reclusas en relación con el número de celdas disponibles que tenga ya el sistema penitenciario, ya un centro penitenciario determinado” (Rodríguez Yagüe, 2018, pág. 4). En otras palabras, la existencia de más PPL de las que las instalaciones y personal del sistema penitenciario pueden llegar a albergar y tratar.

Para principios de 2017 los centros penitenciarios mexicanos contaban con capacidad de albergar a 170772 personas, lo que supondría un 10% de sobrepoblación con respecto a las 188262 del total de la población penitenciaria del país (INEGI, En números. Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatalen México, 2017). En el caso específico de esta investigación, para marzo de 2018 el CEPRERESO Topo Chico contaba con 3608 PPL cuando la capacidad del centro era de 3273 (CNDH, 2017), lo que se traduce en una sobrepoblación del 10.2%.

Panamá contaba para octubre de 2018 con 16325 personas reclusas en sus centros penitenciarios, los cuales fueron contruidos para albergar a la cantidad de 14842 personas, lo que supone un porcentaje de sobrepoblación del 9.9%. Sin embargo, este dato no es representativo para todos los centros penitenciarios panameños, destacando el caso específico del centro penitenciario de Santiago de Veraguas donde para octubre de 2018 estaban reclusas 473 personas, mientras que la capacidad total para la que fue contruido era de 200, lo que se traduce en un porcentaje de sobrepoblación del 136% (DGSP, 2018).

Se identifica pues a la sobrepoblación como uno de los problemas cuya solución urge a las administraciones penitenciarias de ambos países—y administraciones locales en el caso que corresponda—, puesto que un número mayor de internos significa un desbordamiento y el consecuente descenso en la calidad y efectividad de los programas de reinserción social ofrecidos por el personal penitenciario.

2.5.1.2 Los programas de reinserción social

Se pueden definir a los programas de reinserción social como aquellas metodologías diseñadas para la efectiva reinserción social y la consecución del desistimiento delictivo por parte de las PPL. Dichas metodologías varían dependiendo de las diferentes legislaciones de las localizaciones donde se realizan los estudios pertinentes.

En México, estos programas de reinserción social quedan reflejados en la CPEUM y en la LNEP, basándose los mismos en el “trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir” (CPEUM, 2018; LNEP,

2016). Al cierre del año 2016, de un total de 188262 PPL el 38% se encontraban estudiando y/o recibiendo capacitación, sin embargo el mayor problema que dificulta la reinserción social en México es la “carencia de infraestructura de los centros penitenciarios estatales para impartir actividades ocupacionales útiles” (INEGI, En números. Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatalen México, 2017, pág. 62).

No obstante, se puede atestiguar que estos programas de reinserción social no tienen el impacto deseado puesto que la tasa de reincidencia delictiva para enero de 2017 era de un 15.2% de un total de 104363 personas que ingresaron ese año a un centro penitenciario, lo que significa que 15863 personas volvieron a cometer delitos una vez salieron de los centros penitenciarios (INEGI, Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2017). A esto ha de sumarse que los resultados arrojados por la ENPOL comentan que un 24% del total de la población había estado internada en un centro penitenciario con anterioridad. De los reincidentes, los delitos más frecuentes por los cuales estas personas ingresaron en los centros penitenciarios fueron el robo 60%, posesión ilegal de drogas 12.9%, portación ilegal de armas 9.7%, lesiones 8.8% y homicidio 5.4% (ENPOL, 2017).

En Panamá los programas de reinserción social quedan recogidos tanto en la CPRP, donde el art. 28 dice que “se establecerá la capacitación de los detenidos en oficios que les permitan reincorporarse útilmente a la sociedad” (CPRP, 2004), como en el párrafo I del art. 6 de la L55SP donde se dice que los programas de reinserción social se basan en “la base de un adecuado tratamiento penitenciario, el trabajo, la capacitación, la educación y la práctica de valores morales” (L55SP, 2003). Estas actividades realizadas en los centros penitenciarios que van desde las ya mentadas capacitaciones educacionales, que incluyen musicales y titulaciones de educación secundaria y universitarias, y laborales como el reciclaje, elaboración de sillas para los centros escolares del país, la grabación de audiolibros para sordos o las plantaciones y viveros establecidos en las cercanías de algunos de los centros penitenciarios (Medina, 2018).

Si bien no se cuentan con datos para 2018 en el momento de esta investigación, para finales de 2014 el 36% de la población penitenciaria de Panamá se encontraba estudiando y/o recibiendo capacitación laboral (DGSP, 2015), mientras que el 45% del

total de PPL ya habían cumplido condena en un centro penitenciario con anterioridad (Ministerio de Gobierno, 2015).

Las cifras de reincidencia delictiva de ambos países nos muestran que las capacitaciones laborales y educacionales no son suficientes para garantizar una reinserción social efectiva de los egresados de los centros penitenciarios. A ello se suman las deficiencias antes vistas de los sistemas penitenciarios, que no hacen más que empeorar estos porcentajes de reincidencia. Por último, a estas causas internas se deben sumar las causas externas que se resumen en el rechazo que la sociedad y las instituciones de gobierno tienen para con las personas con antecedentes penitenciarios, sobre todo a la hora de estas pretenden insertarse en el mercado laboral.

2.5.1.3 PPL sin condena

Otro de los problemas estructurales de los sistemas penitenciarios es el de internar a personas cuyo estatus jurídico no está definido. Esto significa que en los centros penitenciarios se internan a personas que aún no han sido halladas culpables de los delitos que se les atribuyen y no han recibido una condena, bien por falta de pruebas que lo demuestren, bien por la lentitud de los procesos penales de los sistemas de justicia retributiva tradicionales.

En el caso de México, la prisión preventiva consiste en una “medida cautelar. Es decir, privar de la libertad a las personas que aún no tienen una sentencia pero que podrían fugarse u obstaculizar la justicia mediante la manipulación u ocultamiento de pruebas” (INEGI, En números. Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatalen México, 2017, pág. 6). Por su parte, la LNEP establece en su art. 2 la prisión preventiva para aquellos que aún están siendo procesados, pero sin establecer un límite, lo que se traduce en penas privativas de libertad *de facto*, aunque *de iure* no se haya demostrado la culpabilidad del acusado. Coca Muñoz nos relata que esta costumbre está arraigada en el sistema penal mexicano donde “prevalece la perversa tradición de castigar antes de comprobar la responsabilidad penal del inculcado. Esto es, primero se encarcela al individuo remitiéndolo a un reclusorio, en donde deberá demostrar su inocencia al juzgador, y sólo después logrará obtener su libertad” (Coca Muñoz, 2007, pág. 185).

En relación a esta afirmación, los datos nos muestran que, para principios de 2017, de un total de 188.262 PPL, el 35% de la población penitenciaria no tenía sentencia, lo que significa que un total de 65.892 personas estaban internadas en centros penitenciarios sin haber recibido una condena (INEGI, En números. Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México, 2017).

En el caso de Panamá, el art. 7 de la L55SP es más laxo que su homónimo mexicano puesto que, aunque se reconoce la figura de la prisión preventiva, esta “tiene por objeto mantenerlos a disposición de la autoridad competente, sólo por el tiempo que sea estrictamente necesario, según lo determine la ley” (L55SP, 2003). Sin embargo, este tiempo no representa una realidad, puesto que para octubre de 2018 el 48% de la población penitenciaria del país, lo que supone que un total de 7.836 personas continuaba esperando la resolución de juicio (DGSP, 2018).

2.5.1.4 Personal penitenciario sin preparación

Las diferentes actividades contempladas dentro de los procesos de reinserción social deben ser llevadas por equipos técnicos que se encarguen del diagnóstico de cada individuo, así como de un tratamiento adecuado para cada caso. Este equipo técnico debe estar compuesto por sociólogos, criminólogos, pedagogos, médicos, así como criminólogos, es decir, un personal con una preparación mínima de licenciatura. Por otro lado, el personal destinado a cumplir las funciones de seguridad y de garante del respeto de los derechos de las PPL—los denominados custodios—deben estar “altamente calificados, que hayan recibido una preparación cultural y espiritual propia al fin encargado o encomendado” (Coca Muñoz, 2007, pág. 174).

Sin embargo, la realidad de México se aleja de este ideal ya que tanto el personal penitenciario dedicado a garantizar la seguridad en los centros penitenciarios presenta deficiencias con respecto a la formación académica de sus integrantes, así como el personal técnico tiene una falta de recursos humanos y económicos acuciante que le impiden “garantizar el derecho a la salud, el trabajo y capacitación para los internos” puesto que “el personal capacitado para suministrar estos servicios es aún más reducido” (INEGI, En números. Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México, 2017, pág. 41).

En Panamá, tras la reforma del sistema penal y penitenciario, se han realizado avances en la capacitación del personal penitenciario a partir de agosto de 2015 con el proyecto PANZ58—dirigido por la DGSP y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito—, sobre todo en lo referente a los custodios, para lo que se abrió una Academia de Formación Penitenciaria y se realizaron capacitaciones por parte de expertos de Chile. El objetivo de dicha academia es educar al personal de los centros penitenciarios del país para poder garantizar los Derechos Humanos de las PPL y de sus familias (Medina, 2018).

Teniendo en cuenta la importancia y complejidad que representan los procesos de reinserción social, las autoridades gubernamentales deberían destinar sumas mayores al capital invertido para aumentar el número de trabajadores en el campo técnico y el de custodia, así como para su capacitación, garantizando así el correcto funcionamiento de los centros penitenciarios y la consecución de sus objetivos. Para lograrlo este personal debe estar en contacto continuado con las PPL, puesto que así podrán “tener la facilidad y posibilidad de instaurar con ellos una verdadera y sincera relación humana, la cual será útil como consecuencia para la administración penitenciaria” (Coca Muñoz, 2007, pág. 174).

2.5.1.5 Corrupción

La corrupción se ha convertido en un problema endémico en las administraciones y los servicios públicos de cualquier país del panorama político actual y el mundo penitenciario no supone una excepción. Villoria define a la corrupción como “el abuso de un trabajo oficial por el que un funcionario se beneficia directa o indirectamente privilegiando intereses privados sobre los comunes y violando reglas y principios públicos” (Córdoba Guzmán & Ponce, 2017, pág. 233).

A principios de 2017, el sistema penitenciario mexicano registraba que 73987 PPL habían sido víctimas de corrupción dentro de los propios centros penitenciarios, lo que supone una cifra del 39.3% del total de la población penitenciaria del país. Entre los Estados con menos víctimas de la corrupción penitenciaria se identifican a Campeche y Sinaloa con un 18.9% y 19% respectivamente. Por el contrario, Oaxaca y Tabasco fueron los Estados que registraba más población penitenciaria víctima de corrupción, con un 42.6% y 44.5% cada uno. En el caso de Nuevo León, el porcentaje de población

penitenciaria víctima de corrupción era de un 26.2%. Entre los servicios de corrupción se reconocen el exentar el pase de lista, tener aparatos electrónicos, tener agua potable o acceso a un teléfono. La mayoría de estos pagos, un 87.4 % se realizaron a custodios, mientras que el 36.1% se pagaron a otros PPL. Además, solo el 5.8% de las víctimas de corrupción denunciaron los actos, el resto no lo hizo por temor a represalias, por entender la corrupción como práctica común o por identificar la denuncia con inutilidad (ENPOL, 2017).

Si bien no se encontraron datos fidedignos de corrupción para Panamá en el momento de la investigación, para principios de 2015 el Informe de Gestión de la DGSP daba cuenta de que la corrupción también es un problema a abordar en el sistema penitenciario del país, puesto que para el período comprendido entre 2010 y 2014 habían sido “destituidos más de 50 Custodios Penitenciarios, así como dos administrativas por introducir sustancias ilícitas a los penales” (DGSP, 2015, pág. 14). Entre las causas que generan esta corrupción se puede citar la falta de control tanto para el personal penitenciario como para la población penitenciaria, el abuso de poder por parte de los funcionarios penitenciarios, los bajos sueldos del personal penitenciario, el considerar la corrupción como algo normal.

Capítulo 3.- La justicia restaurativa

3.1. Introducción

La última reforma constitucional de México en materia judicial de 2008 dio paso a que los procesos alternos de solución de conflictos, entre los que se contemplan los procesos restaurativos, comenzaran a dar sus primeros pasos en México. Fue el art. 17 de la CPEUM el que permitió realizar toda una revolución en el ámbito penal del país, el cual nos dice que “las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial”.

Este artículo no solo sentaba las bases para el inicio del despliegue de los MASC de manera institucional, sino que también dio pie a que comenzasen a realizarse procesos de justicia alternativa México, entre los que se incluye a la justicia restaurativa. Además, esta reforma constitucional permitió que se modificaran y crearan diferentes leyes y códigos relacionados con los sistemas penal y penitenciario mexicanos, donde se hace referencia a este tipo de justicia alternativa. El primer texto que se puede citar es la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal—en adelante LNMASCMP—, del 29 de diciembre de 2014.

El objetivo de este texto jurídico es fijar los principios, requisitos y condiciones de los MASC en materia penal a nivel nacional. Si bien en esta ley no se hace mención explícita de la justicia restaurativa, sí que se hace referencia en su art. 27 del mecanismo alterno de la junta restaurativa. Otro texto jurídico sería la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes—en adelante LNSIIPA— del 14 de junio de 2016. Aunque la población a la que va dirigida dicha ley no es objeto principal de estudio de esta investigación, sí que cabe destacar que es una de las leyes que mejor recoge y despliega técnicas de justicia restaurativa. A diferencia de las leyes estatales en este campo, esta ley recoge un concepto más amplio y definido de lo que se entiende por justicia restaurativa, como puede observarse en sus art. 21 y art. 195.

Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales—en adelante CNPP—no hace mención alguna de la justicia restaurativa, ya que cede la competencia de aplicar programas de justicia restaurativa para adultos en otros documentos legislativos

estatales. El Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua—en adelante CPPCH—o la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato de 3 de septiembre de 2010—en adelante LPPGT —sí que recogen en sus artículos la posibilidad de que las PPL lleven a cabo procesos de justicia restaurativa. Por último, la LNEP establece las normas que deben observarse durante la estancia de las personas en los centros penitenciarios. Esta ley sí que hace mención de a los procesos de justicia restaurativa, dedicándole un capítulo completo que abarca desde los art. 200 al art. 204

Todos estos textos muestran que la justicia restaurativa sí que está contemplada, al menos en lo teórico, dentro de las leyes y códigos referentes al mundo penal mexicano y panameño. Sin embargo, el abordaje documental de la justicia restaurativa en estos textos es escueto, al punto de que el lector necesita tener un conocimiento previo de qué es la justicia restaurativa para entender la potencialidad y el posible alcance de este sistema alternativo de justicia dentro del mundo judicial. Es por ello que llegados a este punto se presenta la necesidad de realizar un análisis documental del término justicia restaurativa, a fin de que el lector pueda comprender de una manera más clara todo lo relacionado a los procesos de justicia restaurativa.

3.2. Contexto general de la justicia restaurativa

3.2.1. Orígenes de la justicia restaurativa

La justicia restaurativa es un concepto relativamente joven para los sistemas judiciales occidentales actuales, encontrando las primeras referencias en el ámbito del derecho para las décadas de los setenta del siglo XX, momento en que aconteció una crisis del sistema de justicia penal en los países anglosajones que llevó a que estos buscaron nuevas alternativas a los modelos entonces vigentes (Flores Prada, 2015). Esta crisis quedaba protagonizada por el desconocimiento por parte de la ciudadanía de los sistemas de justicia de sus propios países, lo cual despertaba un sentimiento de rechazo y no pertenencia, a lo que se sumaba el fracaso de dichos sistemas a la hora de garantizar la accesibilidad de la justicia al total de la población, así como la satisfacción de sus demandas (Gorjón Gómez, 2015).

Una de las salidas para solucionar esta crisis surgió de la idea de centrar la atención en las formas de hacer justicia en la llamada periferia de Occidente, es decir, en aquellas

culturas que permanecieron ajenas, o bien no se vieron influidas en su totalidad, a la cultura occidental actual, salvaguardando gran parte de su propia idiosincrasia. Una búsqueda de una vía alterna de hacer justicia basada en las formas tradicionales y autóctonas de lugares específicos, que considerasen al delito como un daño cometido contra ciertas personas a nivel individual y, en general, contra la comunidad, no solo contra el Estado. Una concepción diferente donde la justicia es garante de la restitución de la armonía social, gracias a la ayuda brindada a las víctimas, a los victimarios y al total de la comunidad para poder así cicatrizar las heridas surgidas tras la comisión de un delito o acción dañina (Domingo de la Fuente, 2008).

Si bien se apuntó que el concepto de justicia restaurativa es relativamente nuevo en los sistemas judiciales occidentales, sus orígenes no pueden definirse claramente en un marco geográfico temporal, puesto que este nuevo enfoque se centró en diferentes culturas que no necesariamente eran coetáneas, no coexistían en un espacio geográfico concreto, ni tampoco compartían una única cosmovisión. De hecho, de entre los pocos rasgos comunes que se pueden identificar en estas culturas son su pertenencia a la periferia de Occidente y la existencia de un sistema de justicia alternativo al que en Occidente se conoce como justicia tradicional o retributiva. Aun así, se pueden agrupar a estos pueblos en dos grandes bloques culturales;

El primero de estos grupos queda conformado por las minorías religiosas europeas que llegaron al continente americano a principios de la edad moderna, huyendo de los diferentes conflictos de religión que se produjeron en el viejo continente entre los siglos XVI y XVIII, como la Guerra de los Treinta Años o la Guerra Civil Inglesa. Estas minorías, poniendo como ejemplo principal a las comunidades menonitas o amish, tienen una serie de preceptos religiosos muy estrictos que marcan el comportamiento de sus individuos, destacando en especial el de ceñirse a las Escrituras en toda doctrina y conducta cristianas, incluso a la hora de reclamar y hacer justicia. Es en la Biblia donde aparece el término de *Shalom*, o justicia bíblica, que hace referencia al restablecimiento de los lazos rotos entre aquellos que cometieron un delito, las víctimas directas, la comunidad y Dios (Gorjón Gómez & Rodríguez Rodríguez, 2016). Por tanto se observa que estas comunidades religiosas comparten una característica con las sociedades indígenas y aborígenes que también sirven de ejemplo para la

implementación de los procesos restaurativos: en estas comunidades religiosas los vínculos comunitarios son extremadamente fuertes, quedando casi todos los asuntos de índole pública en manos de juicios y decisiones comunitarias que restituyan la armonía social (Aguayo Sarco & Cedeño Astudillo, 2018).

El segundo grupo, la otra fuente de inspiración para la acuñación del concepto de justicia restaurativa actual, quedaría conformado por algunos pueblos que, hasta la época de las grandes exploraciones europeas dadas entre los siglos XV y XVI, no habían establecido contacto con el mundo occidental, y que por tanto guardaban una marcada diferencia cultural con Occidente en lo tocante a justicia, donde predominaban los sistemas retributivos. Estos eran los pueblos indígenas y aborígenes de países como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda o Australia donde se practicaban sistemas restaurativos de justicia que se fueron adaptando según las coyunturas temporales (Domingo de la Fuente, 2008).

Una de las características de los procesos de justicia de estas sociedades queda encarnada en la participación de toda la comunidad en la toma de decisiones para con aquél que ha incumplido una de las normas o leyes, a fin de que la pena quede respaldada por los integrantes en conjunto, sin necesidad de delegar el proceso judicial a las autoridades competentes de manera exclusiva (Zehr, 2007), lo que viene marcando un empoderamiento de la sociedad civil en asuntos que la cultura occidental reserva exclusivamente para las autoridades.

Estas sociedades ya visualizaron esta manera de alcanzar unos procesos judiciales más justos a través de elementos como el diálogo, la exposición de sentimientos, la aceptación de la responsabilidad y la reparación del daño cometido a aquellos que se vieron perjudicadas por las acciones ilícitas de uno o más individuos de una comunidad, con el objetivo final de aprovechar el conflicto como una oportunidad de regenerar los tejidos sociales (Britto Ruíz, 2010). Esta concepción de resolución de los conflictos de los pueblos de la periferia de Occidente a través de los elementos antes citados, relacionan a la justicia restaurativa directamente con los estudios realizados desde el punto de vista de la irenología, lo que da pie a que este tipo de justicia alternativa pueda ser interpretada como una herramienta más en el establecimiento

de una cultura de paz, puesto que cumple con las características necesarias para tal fin (Hernández Arteaga, Luna Hernández, & Cadena Chala, 2017).

No es de extrañar entonces que los países pioneros en materia de justicia restaurativa sean aquellos que se corresponden a lugares donde todavía habitan los pueblos indígenas y aborígenes, puesto que es donde se registran los primeros ejemplos de la irrupción de la justicia restaurativa en los sistemas de justicia occidentales. Concretamente es en Canadá donde se realizó la primera sentencia de justicia restaurativa a dos jóvenes por la comisión de actos vandálicos en contra de la comunidad de Kitchener—en la provincia de Ontario, Canadá—para 1974. Esta experiencia se repitió también en Elkhart—en el estado de Indiana, Estados Unidos—tres años después (Domingo de la Fuente, 2008).

Desde ese comienzo, la justicia restaurativa ha ido ganando de manera paulatina un protagonismo en los sistemas judiciales de una parte de los países de Occidente, puesto que ya países como Nueva Zelanda, una de las pioneras en el uso de este tipo de justicia enfocada en menores desde el año 1989 (Zehr, 2007, pág. 59), España (Domingo de la Fuente, 2012, pág. 73), Reino Unido (Gavrielides, 2007, pág. 25), o Brasil (Naciones Unidas, 2006, pág. 26) combinan los procesos de justicia retributiva con el nuevo enfoque judicial que trae la justicia restaurativa.

Estos logros en el cambio de visión en los sistemas judiciales no habrían sido posible sin el trabajo de investigación y divulgación llevado a cabo por la comunidad científica que dedica su trabajo a la difusión de las prácticas restaurativas. Entre ellos se puede citar al autor estadounidense, y pionero en estudios de prácticas restaurativas, Howard Zehr, con sus obras “El pequeño libro de la Justicia restaurativa” o “Cambiando de lente: un nuevo enfoque para el crimen y la justicia”, o la juez Kay Pranis, con su obra “*Pacemaking circles: from crime to community*”, los cuales defienden la participación activa de la comunidad afectada por los actos ilícitos de un individuo con la finalidad de que éste se sienta arropado y animado a la hora de reparar el daño que cometió con su acción.

3.2.2. Definición del concepto

La justicia restaurativa es un concepto que aún está en proceso de definición, principalmente, porque el mismo adopta un significado genuino en el proceso de adaptación a las diferentes legislaciones de los distintos países donde se aplica, puesto que debe ajustarse a la idiosincrasia de la sociedad del lugar, como así refleja el “Manual sobre programas de Justicia restaurativa” de la ONU (2006), el cual cita que “la justicia restaurativa es una forma de responder al comportamiento delictivo balanceando las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de los delincuentes. Es un concepto evolutivo que ha generado diferentes interpretaciones en diferentes países” (pág. 6).

Se puede apreciar como en esta primera definición de justicia restaurativa se identifican a más actores involucrados en el proceso de juzgar la comisión de un delito que produjo un daño a terceros. Ya no solo se habla de cómo el victimario quebrantó las normas establecidas y de cómo debe ser castigado, sino que se intenta encontrar una solución equilibrada al daño provocado. Con respecto al trato de los victimarios en estos procesos restaurativos Paul McCold y Ted Wachtel (2006) dicen que “la justicia restaurativa es una nueva manera de considerar a la justicia penal, la cual se concentra en reparar el daño causado a las personas y a las relaciones más que en castigar a los delincuentes” (pág. 61).

Pero tal y como apunta Lode Walgrave, la justicia restaurativa es un producto no finalizado, puesto que se trata de una práctica de compleja definición y que es tratada de manera diferente por las distintas legislaciones que la abordan, considerándosela desde una medida alternativa para la reinserción social, como es el caso de México, a una mera posibilidad de solución de un conflicto entre personas, tal y como ocurre en Panamá (Barboni Pekmezian & Valls Prieto, 2014). Es por ello que a la hora de definir el concepto se encuentran tantas variantes como autores que estudian el tema, como Arias Madrigal (2006, pág. 17) que nos dice que la justicia restaurativa se define como “todo proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador” (pág. 170). Se observa cómo Arias Madrigal

da protagonismo a las víctimas y al victimario, quedando la comunidad como un actor cuya participación puede ser opcional, aunque deseada.

Dentro de esta corriente también se halla Howard Zehr (2007), el cual hace alusión a la comunidad, aunque no identifica propiamente a los integrantes de la misma dentro de su definición. Esta dice que “la justicia restaurativa es un proceso dirigido a involucrar, dentro de lo posible, a todos los que tengan un interés en una ofensa particular, e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible” (pág. 45).

Virginia Domingo (2008) también realiza una alusión al carácter intrínsecamente comunitario de los procesos restaurativos, aunque no identifica claramente el papel de la comunidad en dichos procesos. Para ella la Justicia restaurativa “es un proceso donde las partes con riesgo en un delito específico, resuelven colectivamente el cómo tratar las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro” (pág. 1).

No obstante, otros autores como Paul McCold y Ted Wachtel (2006) sí que consideran a la comunidad como un actor primario en su definición de justicia restaurativa: “Las tres partes interesadas primarias en la justicia restaurativa son las víctimas, los delincuentes y sus comunidades de apoyo, cuyas necesidades son lograr la reparación del daño, asumir la responsabilidad y llegar a un acuerdo” (pág. 67)

Reforzando esta definición, Ignacio Flores Prada (2015) dice de la justicia restaurativa es un movimiento de renovación y actualización de los sistemas penales de justicia que “propugna la reparación integral del daño causado por el delito como objetivo fundamental y el consenso entre víctima, infractor y sociedad como método para la óptima solución del conflicto penal” (pág. 7).

En ocasiones, como en la definición de Diana Britto Ruiz, no solo menciona a la comunidad como un actor, sino que destaca el hecho de que no se puede entender el término de justicia restaurativa sin entender que su propia esencia está conectada a la actividad comunitaria. Como expresa en su definición sobre la justicia restaurativa “es una justicia de arraigo comunitario, que entiende que el delito y los conflictos suceden

en el contexto social, y que por ende sus consecuencias y claves para la búsqueda de resolución están en la comunidad misma” (Britto Ruíz, 2010, pág. 19).

Finalmente, se conocen autores que consideran otro elemento a parte de la reparación del daño por parte del victimario a la víctima y el apoyo comunitario durante los procesos restaurativos; el perdón al victimario por parte de la víctima y/o la comunidad. Dicho elemento no es esencial para llevar a cabo un proceso restaurativo exitoso, si bien algunos autores como Zehr (2007) lo definen como un invitado que puede aparecer y que su aparición refuerza aún más los efectos positivos de la justicia restaurativa.

Es por ello que el perdón aparece en otras definiciones de justicia restaurativa, aunque se debe destacar que este siempre será un elemento secundario, dependiente del éxito que tenga la reparación del daño a las víctimas por parte del victimario, como así observan De la Rosa Vázquez y Cabello Tijerina (2016): “la víctima tiene que ser reparada, con esta alternativa no se busca como objetivo primordial la obtención de beneficios económicos, son otro tipo de reparaciones como el perdón de la víctima en algunas situaciones” (pág. 59).

Vistas estas definiciones, se puede redactar una definición propia del término que dará pie a la investigación que aquí se presenta. Entendiendo pues a la justicia restaurativa como aquella justicia alternativa, auxiliar de la justicia retributiva tradicional, en la que participan tres actores principales: el victimario o la persona que ha cometido un daño durante la comisión de un delito, la víctima o persona que ha recibido el daño de una manera directa y la comunidad cuya armonía social se ha visto perjudicada indirectamente por la comisión del delito. Sus elementos principales quedan identificados como la reparación del daño por parte del victimario a la víctima, el cual dará pie a una posible otorgación del perdón por parte de la víctima y el apoyo de la comunidad más cercana de los otros dos actores para garantizar una solución concluyente a un daño ocasionado durante comisión de un delito.

3.2.3 Actores de la justicia restaurativa

3.2.3.1 Victimario

El concepto de victimario se genera a través de la necesidad de la victimología, ciencia nacida a mediados del siglo XX tras el Holocausto y que estudia los procesos de victimación (Bodero, 2001), de identificar a aquellas personas que comenten una acción violenta a otro individuo o colectivo.

El origen de su significado se encuentra en el vocablo latino *victimarius*, aquellos auxiliares de los sacerdotes romanos en los sacrificios encargados de encender el fuego sacro, además de atar y sujetar a las víctimas al altar durante el ritual de sacrificio. El significado del término ha variado para poder adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, quedando definido por Karla Villarreal (2000) como “aquel que realiza el daño, el sufrimiento, el padecimiento, agresión, etc.” (pág. 29).

Otra de las definiciones que nos ayudan a identificar a este actor de la justicia restaurativa nos la da Ana Guglielmucci (2017), que dice que “se concibe como victimario a aquella persona que le infringe un daño o perjuicio a otra en un momento determinado. Si bien este término puede ser usado para referirse a cualquier persona responsable de cometer un delito” (pág. 84).

A efectos de esta investigación, también debe apuntarse que los victimarios no solo causan daño a aquellos individuos contra los que han cometido directamente una acción dañina, sino que se convierten en victimarios de todos aquellos sujetos que se han visto afectados de manera indirecta por la comisión del daño.

3.2.3.2 Víctima

Como víctima se identifica al individuo pasivo cuyos derechos han sido violentados como resultado de una acción dañina, culposa o dolosa, por parte de un victimario (Herrera Moreno, 1996). Existen diferentes procesos de victimización mediante los cuales se podría hacer una clasificación del tipo de víctima que se genera a raíz de la comisión de una acción dañina. Así, una victimización primaria, aquella que deriva inmediatamente de la comisión del daño, dará como resultado una víctima directa, mientras que la victimización secundaria y terciaria, aquella que deriva de los daños

colaterales de la comisión del daño, generará víctimas indirectas (Varona, de la Cuesta, Mayordomo, & Pérez, 2015)

Para tener una definición aproximada de estos dos tipos de víctimas reconocidas, se puede acudir a la Ley General de Víctimas de enero de 2013 de México—en adelante LGV—, en su última reforma de enero de 2017 cuyo art. 4 dice que se entienden como “víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general, cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito” (LGV, 2017). El mismo artículo considera como víctimas indirectas a “los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella” (LGV, 2017). En el caso de Panamá, el art. 1 de la Ley 31 de la Protección a las Víctimas del Delito de 1998—en adelante L31PVD—identifica como víctima a aquellas personas que sufrieron el daño de manera directa, el tutor leg, cónyuge y familia de esta, así como asociaciones reconocidas por el estado (L31PVD, 1998).

En lo referente a nuestra investigación, cabría resaltar que dichas leyes no reconocen a las familias de los victimarios como víctimas indirectas de la comisión de un daño, aunque existen evidencias de que el impacto que sufre este colectivo puede llegar a ser mayor que el de la propia víctima directa.

3.2.3.3 Comunidad

Se observa cómo la comunidad queda definida como aquellas personas que conforman el círculo social más cercano del victimario y/o la víctima que entienden la reparación del daño realizado a través de una conducta delictiva como una obligación colectiva (Domingo de la Fuente, 2017). Es decir, la comunidad no solo sirve como apoyo a víctima y victimario para poder realizar un encuentro restaurativo satisfactorio, sino que la misma queda identificada como una víctima secundaria de la comisión de un delito (Zehr, 2007, pág. 23).

Pero como se resaltó en el apartado anterior, las familias de los victimarios, que componen el primer estadio de la comunidad de cualquier individuo, raramente quedan identificadas como víctimas. No obstante, para defender este argumento se

podría volver a la LGV, la cual nos dice en su art. 4: “Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos” (LGV, 2017). Por tanto, como comunidad, en materia de justicia restaurativa, se identificaría a todos aquellos individuos que se han visto afectados de una manera u otra por la comisión de un daño, sin discriminar los lazos sociales que se tienen tanto con el victimario como con la víctima directa, a fin de poder hacer más visible todo lo que conlleva la ruptura del tejido social.

3.2.4 Elementos de la justicia restaurativa

En este apartado se abordarán de manera breve los elementos que el autor considera de la justicia restaurativa a raíz de la revisión documental de los diferentes autores antes citados. Asimismo, dichos elementos serán tratados a profundidad en capítulos posteriores, puesto que los mismos han sido considerados como las variables independientes de esta investigación.

3.2.4.1 Reparación del daño

Se puede entender que la reparación del daño es aquel proceso que inicia con un cambio de conducta del victimario, en el que se acepta la responsabilidad del daño cometido y nace un interés por la víctima de sus acciones delictivas. A ello sigue el establecimiento de un diálogo víctima-victimario que trata de menguar el sufrimiento y la inseguridad generados en la víctima en el momento de la comisión del delito.

3.2.4.2 Apoyo de la comunidad

Se puede entender el apoyo de la comunidad, dentro de un contexto de justicia restaurativa, como el interés mostrado por un colectivo a las necesidades de la víctima y el victimario de una acción delictiva, interpretado como un deber colectivo. Dicho interés debe estar acompañado por una predisposición de ayuda activa en la reparación del daño, la cual se materializa a través de la interacción y la comunicación entre los miembros de la comunidad, que también se identifica como víctima indirecta del daño ocasionado.

3.2.4.3 Perdón

Se podría definir que el perdón es un proceso transformativo de conducta y pensamiento que puede ser otorgado por la víctima de una trasgresión violenta a la persona que cometió dicha trasgresión. Este proceso se caracteriza por una modificación de sentimientos negativos, como el rencor y la evitación, por otros positivos, como la empatía o el altruismo a través de un desarrollo prosocial que busque la solución de un conflicto.

3.2.5 Modelos de justicia restaurativa

La justicia restaurativa puede llevarse a cabo a través de diversas metodologías, que difieren en la forma de proceder y en los individuos que en ellas se ven envueltas, más comparten ciertas características comunes como la utilización de un facilitador y el hecho de que debe existir un encuentro—el cual no tiene que ser físico, puede darse incluso por cartas o por videoconferencia—. No obstante, los académicos de la justicia restaurativa reconocen tres grandes modelos a seguir para el desarrollo de un proceso restaurativo.

3.2.5.1 Encuentros víctima-ofensor

Este método ofrece la posibilidad de reunir tanto a la víctima como al victimario de la de una acción dañina en un ambiente seguro, controlado y con la ayuda de un facilitador que ayudará a que las partes establezcan un diálogo donde compartirán sus emociones y sentimientos al evocar el hecho pasado. Dicho método restaurativo es uno de los primeros en ser abordado de manera institucional y comúnmente usado en el mundo penal y penitenciario para los delitos de carácter leve (Correa García, 2015).

Muchas veces puede confundirse a este encuentro con una mediación penal, sin embargo su objetivo no es llegar a un acuerdo que solucione un posible conflicto, sino el restaurar el daño a la víctima de una acción ya cometida, estando “diseñados para abordar las necesidades de las víctimas del delito, asegurándose de que los delincuentes sean hechos responsables por sus delitos” (Rodríguez Rodríguez, 2016, pág. 203).

3.2.5.2 Círculos restaurativos

Los círculos restaurativos son procesos de comunicación alterna basado en prácticas tradicionales de pueblos indígenas de diferentes lugares del mundo donde predomina un clima de diálogo y sanación, entendida como la exposición de sentimientos y emociones (De la Rosa Vázquez & Cabello Tijerina, 2016). Estos círculos comparten ciertas características independientemente de la cultura de aquellos que participan en ellos, entre los que se pueden destacar la igualdad de las personas que conforman el círculo, la posibilidad de un contacto visual constante entre todos los integrantes o el consenso que se ha de alcanzar para la toma conjunta de decisiones.

Estos círculos pueden ser generados para una gran variedad de fines, aunque el primordial es que los diferentes actores puedan abordar y deliberar de manera conjunta, y con ayuda de dos facilitadores, el tratamiento del daño causado a la víctima por el ofensor, así como la reparación del daño cometido. Estos círculos tienen una gran aceptación dentro del mundo penal y penitenciario, donde ha quedado probada su valía en la experiencia penitenciaria del estado de Minnesota (Pranis, 2009) y en otros ámbitos sociales como en los casos de violencia escolar.

3.2.5.3 Conferencias familiares

Este método restaurativo queda diseñado para “confrontar al delincuente con las consecuencias del delito” (Rodríguez Rodríguez, 2016, pág. 203) y tanto su organización como realización es más compleja que el resto, ya que en ellas el colectivo entendido como comunidad—en este caso, la familia—abarca a más individuos que participan de manera activa en el proceso. Así, las conferencias familiares amplían el número de participantes contando con los familiares de la víctima y del ofensor, con el objetivo de “ayudar a los ofensores a asumir la responsabilidad por sus acciones y a cambiar su comportamiento” (Zehr, 2007, pág. 58). También quedan invitados otros miembros relevantes de la comunidad como podrían ser figuras de autoridad como jueces, abogados, policías, religiosos o cualquier delegado de la justicia penal.

Si bien el primer objetivo es ayudar al victimario a reconocer su responsabilidad y el daño realizado a la víctima, el objetivo final de este método no difiere al del resto, la

reparación integral del daño ocasionado con la acción ilícita cometida, predominando el “deseo de reconciliación entre los victimarios, las víctimas y las familias de ambos. Estos modelos se basan más en restaurar la armonía del grupo que en el aislamiento y castigo del que ha provocado un daño (Merino Ortiz & Romera Antón, 1998).

3.3. La justicia restaurativa en la actualidad. El caso mexicano y panameño.

Generalmente la idea preconcebida que la sociedad tiene conforme a la justicia es la de un poder estatal que se sirve de una serie de organismos y que ejerce un castigo a cierta persona por haber infringido cualesquiera de las leyes dispuestas en un estado de derecho. Esta idea no debe extrañarnos, al contrario, nos resulta familiar, puesto que la gran mayoría de los sistemas judiciales existentes reflejan exactamente esta idea: a la comisión de un delito contra las normas establecidas, suele seguirle una acción punitiva por parte del Estado (Patiño Mariaca & Ruiz Gutiérrez, 2015, págs. 217-219). La naturaleza de esta pena o castigo puede variar, por lo que se encontrarán penas económicas, como son el pago de multas, sanciones administrativas o fianzas (Cordero Quinzacara, 2012, pág. 132), o bien pueden tener una naturaleza privativa, como son la pérdida de libertad del condenado o, en caso más graves, de la propia vida (Pérez Legón, 2007, pág. 142).

No obstante, y si se centra la atención en otras culturas del mundo, se puede ver cómo no siempre la justicia ha sido entendida en su forma retributiva, sino que existen otras vías de abordar la comisión de un delito y de intentar reparar el daño realizado con esta acción. Como ejemplo se podrían citar a los pueblos indígenas de Norteamérica, así como los nativos maoríes de Oceanía que, en su afán de recomponer el tejido social, establecieron la costumbre de abordar los delitos mediante la mediación y la conciliación, en vez de aplicar la neutralización o eliminación del victimario, es decir, la persona que ha cometido el daño. Esta vía judicial es la que se conoce actualmente como Justicia restaurativa, que ya no solo contempla como actores al Estado y al victimario, sino que integra también a la víctima y a toda la comunidad afectada por la comisión del delito (Zehr, 2007, págs. 11-24).

Tanto México como Panamá tienen la característica de albergar en su territorio a diferentes comunidades indígenas a las que se respeta sus antiguas tradiciones en la administración de justicia—siempre y cuando no rompan con los preceptos

establecidos en sus correspondientes legislaciones estatales—dándoles autonomía en la resolución interna de los conflictos que puedan surgir dentro del seno de la comunidad. En ambos casos se hallan ejemplos de pueblos originarios que también contemplan los principios de la justicia restaurativa dentro de sus leyes ancestrales.

En México destaca el ejemplo de las comunidades indígenas del Estado de Chiapas agrupadas en los autodenominados Caracoles Zapatistas. Cada uno de estos Caracoles disponen de las llamadas Juntas de Buen Gobierno, las cuales desarrollan políticas públicas en materia de justicia—además de competencias en asuntos de educación y salud—con el objetivo de “ser incluyente para los pobladores de la región sean o no zapatistas y basarse en formas de justicia reparadora y negociadora” (Sierra, 2007). El ejemplo panameño queda representado por la etnia Kuna Yala—localizada en la costa oriental del Caribe—que tiene por costumbre exiliar al individuo que ha cometido un daño a otro individuo o colectivo de su propia tribu, pudiendo regresar al territorio de la comunidad de origen una vez que “su visión ha cambiado, que advierte en plenitud el mal causado a la víctima y a la comunidad tribal” (Neuman, 1997).

En el panorama de México—y concretamente en el Estado de Nuevo León—los procesos de justicia restaurativa están dando sus primeros pasos, siendo la Procuraduría General del Estado la institución encargada de llevarlos a cabo. Si bien es cierto que los procesos de MASC pueden alcanzar un resultado restaurativo, la LNEP exige que el proceso de justicia restaurativa, en el cual el victimario está cumpliendo una pena privativa de libertad, deba iniciarse por demanda del victimario del delito. Este debe poner en conocimiento de la autoridad que desea iniciar dicho proceso con el victimario, siendo los representantes de la autoridad los que contacten a las autoridades penitenciarias que ofrecerán dicho encuentro restaurativo a la PPL.

En Panamá, la justicia restaurativa se considera más como un producto de la utilización de cualquiera de los MASC que contempla la L63CPP, más que como un proceso en sí mismo. Dichos MASC se aplican a través de los Centros de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos—en adelante MARC—donde la población civil puede acudir para resolver sus pleitos de manera pacífica y sin la necesidad de tener que recurrir ante un juez que decida la solución del conflicto. El país cuenta con un total de 14 centros de MARC distribuidos por las distintas provincias, emplazándose 5 en la

capital. Los usuarios pueden aproximarse a cualquiera de los centros de MARC correspondiente al domicilio de una de las partes o, de haber una persona menor de edad involucrada, prevalece el domicilio de esta.

3.4 Soporte jurídico de los procesos restaurativos en México y Panamá

Para introducir este primer apartado se debe destacar que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, también llamadas Reglas Mandela, recomiendan en el párrafo I de la regla 38 que las autoridades penitenciarias deben tener en cuenta los mecanismos alternativos. Si bien no se hace referencia explícita a la justicia restaurativa, establece los cimientos para que los procesos restaurativos se den en los centros penitenciarios en la Regla 38: “Se alienta a los establecimientos penitenciarios a utilizar, en la medida de lo posible, la prevención de conflictos, la mediación o cualquier otro mecanismo alternativo de solución de controversias para evitar las faltas disciplinarias y resolver conflictos”.

Tabla 3:

Legislación referente al reconocimiento y uso de los métodos y las vías alternas de hacer justicia

	México	Panamá
Constitución	Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (1917) Art. 18	Constitución Política de La República de Panamá (1972) Sin artículos relacionados
Adolescentes	Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (2016) Art. 21 y 195	Ley 40 sobre el Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia (1999) Art. 141 y 127
Leyes de MASC	Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de (2014) Art. 3, 27- 29	Ley 63 que adopta el Código Procesal Penal (2008) Art. 201-220
Leyes Penitenciarias	Ley Nacional de Ejecución Penal (2016) Art. 151, 200- 204	Ley 55 que organiza el Sistema Penitenciario (2003) Sin artículos relacionados
Códigos Penitenciarios	Código Nacional de Procedimientos Penales (2014) Art. 184	Decreto Ejecutivo 393 que reglamenta el Sistema Penitenciario Panameño (2005). Sin artículos relacionados

Fuente: Elaboración propia

3.4.1 México

En el plano de la legislación federal, ya en la introducción se abordó el párrafo IV del art. 17 de la CPEUM, en su última reforma de 2008, marcaba el inicio de los mecanismos alternos de hacer justicia a nivel federal. El germen de la justicia restaurativa se localiza en el párrafo VI del art. 18, donde se hace mención de que las “formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema [integral de justicia], siempre que resulte procedente” (CPEUM, 2018). Si bien cabe resaltar que dicho párrafo queda enfocado exclusivamente a adolescentes que han realizado actos delictivos, el hecho de que sí se recojan las formas alternas de hacer justicia da pie a que el concepto de justicia restaurativa aparezca también en otros textos legislativos a nivel federal.

Un ejemplo de la aplicación de las formas alternativas de justicia en adolescentes es la LNSIIPA en la que se ha de destacar que es una de las leyes que mejor recoge y despliega técnicas de justicia restaurativa. Esta ley tiene en su haber una de las mejores definiciones de justicia restaurativa, como puede observarse en su art. 21 donde se interpreta al concepto como “respuesta a la conducta que la ley señala como delito, que respeta la dignidad de cada persona, que construye comprensión y promueve armonía social a través de la restauración de la víctima u ofendido, la persona adolescente y la comunidad” (LNSIIPA, 2016). El art. 195 de esta misma ley identifica a los actores que pueden participar en un proceso restaurativo, siendo estos “la persona adolescente, la víctima u ofendido y la comunidad afectada que participan en programas individuales, bajo el principio de justicia restaurativa, establecido en este ordenamiento” (LNSIIPA, 2016).

Dejando a un lado a la población adolescente, la justicia restaurativa comienza a hacer presencia en la legislación a través de la LNMASCMP que supone un avance para la aplicación de la justicia restaurativa, puesto que, aunque no se hace una mención explícita al concepto, la fracción IX del párrafo I del art. 3 de esta ley sí que se identifica a la junta restaurativa como uno de los MASC, ya que reconoce como “Mecanismos Alternativos: La mediación, la conciliación y la junta restaurativa” (LNMASCMP, 2014). De hecho, el capítulo IV de la ley queda reservado de manera exclusiva a la junta restaurativa, entendiéndola como el mecanismo utilizado por la víctima, ofensor y

comunidad en el que se buscan y proponen soluciones para una controversia de manera conjunta “con el objeto de lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima u ofendido y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social” (LNMA SCMP, 2014).

El art. 28 de esta ley establece la metodología del desarrollo de las sesiones, donde un facilitador coadyuvará a las partes en la búsqueda de un proceso restaurativo. Por su parte, el art. 29 de este mismo capítulo VI, completa el alcance de la reparación, consistente en una formulación de disculpas y un compromiso de no repetición por parte del victimario y la creación de un plan de restitución a la víctima.

Se observa que los sistemas de justicia restaurativa van haciendo cada vez más presencia en los textos legales referentes al mundo penitenciario, siendo el mejor ejemplo la LNEP que establece las normas que deben observarse durante la estancia de las personas en los centros penitenciarios. Esta ley sí que hace mención de a los procesos de justicia restaurativa, introduciéndola en su art. 151 que dice: “En ningún caso, una persona sentenciada potencialmente beneficiaria de la determinación de preliberación podrá permanecer en prisión por escasez de recursos económicos, para lo cual podrán aplicarse los Mecanismos Alternativos o procedimientos de justicia restaurativa que correspondan” (LNEP, 2016).

Esta misma ley dedica por completo el capítulo I de su Título Sexto donde se aprecia cómo existe la posibilidad de realizar un proceso de justicia restaurativa dentro de la ejecución de una sanción penal “en los que la víctima u ofendido, el sentenciado y en su caso, la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, participan de forma individual o conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito” (LNEP, 2016). El objetivo de estos procesos restaurativos es el de “identificar las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como a coadyuvar en la reintegración de la víctima u ofendido y del sentenciado a la comunidad y la recomposición del tejido social” (LNEP, 2016). El capítulo abarca otros cuatro artículos que hacen mención de cuáles son los principios de estos procesos, en qué casos pueden aplicarse, los beneficios que tienen para las PPL y los pasos a seguir para realizarlos.

Cabe mencionar que otro texto relacionado con el mundo penitenciario, el Código Nacional de Procedimientos Penales del 5 de marzo 2014—en adelante CNPP—, no hace mención explícita de la justicia restaurativa, ya que cede la competencia de aplicar programas de justicia restaurativa para adultos en los Códigos De Procedimientos Penales estatales, como se verá más adelante. Aun así, se debe mencionar que este documento hace referencia a las soluciones alternas recogidas a su vez en el art. 184 de la LNMASCMP, donde se identifica a “El acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso” (CNPP, 2016).

En lo referente a la legislación estatal, al ser México un estado federal, se presentan diferentes interpretaciones por parte de cada una de las entidades federativas que componen la nación y, por tanto, diferentes maneras de enfocar todo lo relacionado con la justicia restaurativa.

Con relación a la Constitución Política de Nuevo León—en adelante CPENL—se puede ver que el párrafo VI del art. 17 de la misma recoge las mismas palabras dispuestas en el párrafo VI del art. 18 de la CPEUM. Por tanto, en la CPENL se refleja la misma disposición de que los sistemas alternativos quedan destinados a adolescentes, aunque este artículo supone también una referencia para la aplicación de los sistemas alternativos en otros ámbitos.

Con respecto a ello, la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes del Estado de Nuevo León de septiembre de 2006—en adelante LSEJANL—no determina ninguna disposición con lo referente a procesos de justicia restaurativa. El art. 6 de dicha ley indica que los casos no previstos de adolescentes donde se podrían aplicar los MASC quedan definidos por “la Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias para el Estado de Nuevo León, el Código Penal para el Estado de Nuevo León y el Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León” (LSEJANL, 2012), siempre y cuando no se opongan a las disposiciones legales del Estado enfocadas en la justicia para menores de edad.

En lo relativo a los mayores de edad, la Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias para el Estado de Nuevo León de enero de 2017 del Estado de Nuevo León—en adelante LMASCNL—establece el inicio del despliegue de los MASC en la entidad estatal, así como la creación de centros especializados donde estos

MASC puedan ser brindados a la población de Nuevo León. En la fracción XV del art. 2 se hace mención de la justicia restaurativa, al contemplarse como una de las posibles vías alternas de hacer justicia, dando una definición precisa de qué representa un encuentro restaurativo, aunque este se contempla más como un resultado de la utilización de un MASC que como un proceso propio (LMASCNL, 2017).

La Ley que regula la Ejecución de las Sanciones Penales del Estado de Nuevo León—en adelante LESPNL—no realiza ninguna mención de procesos de justicia restaurativa ni alternativa. En este caso, los procesos de justicia restaurativa deben apelar a la legislación federal, mas no es el caso de todas las entidades federativas. Como ejemplo se puede citar a la LPPGT que establece en su art. 28 que todos los procesos penales estarán orientados por el principio de justicia restaurativa, apuntando en el art. 404 de la misma ley que las autoridades judiciales brindarán la posibilidad de realizar un encuentro restaurativo. Este documento dedica además un capítulo completo del título séptimo donde se recoge la metodología de implementación del proceso restaurativo (LPPGT, 2016).

El Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León del 28 de marzo de 1990—en adelante CPPNL—, no contempla explícitamente los sistemas de justicia restaurativa, si bien en sus art. 141, 209, 215 y 328 se establece la posibilidad de acudir a una pena alternativa que no suponga la sanción privativa de libertad. Una vez más, se podrían citar textos de otras entidades federativas como el CPPCH que dedica su art. 23 a la justicia restaurativa pero, al igual que en el caso de la Ley de MASC de Nuevo León, identifica a la justicia restaurativa como un resultado de la implementación de otros MASC y no como un proceso propio, donde “El Ministerio Público utilizará como medios para lograr la justicia restaurativa, la negociación, la mediación y la conciliación, entre otras” (CPPCH, 2014).

Entonces se puede concluir con que la justicia restaurativa queda reflejada en la teoría gracias a los textos jurídicos antes citados, augurando un futuro esperanzador para la aplicación de los procesos de justicia restaurativa. Pero la realidad práctica es bien distinta, atestiguando que apenas existen organismos gubernamentales que lleven a buen puerto la aplicación de la justicia restaurativa entre la población civil.

Caben destacar algunas iniciativas como la llevada a cabo por el Gobierno de Nuevo León, con la apertura de los Tribunales de Justicia Familiar Restaurativa para julio del año 2014 (Sauceda & Gorjón Gómez, 2018), siendo la primera entidad federativa en crear un centro dedicado a estos temas. Su implementación fue el resultado de la coordinación de varias instituciones con el objetivo de solucionar el problema de la violencia familiar, protegiendo con un Tribunal especial a aquellas personas víctimas de violencia familiar y sensibilizando a los agresores de las consecuencias de la violencia en el núcleo de la familia.

3.4.2 Panamá

La legislación panameña, al no ser una entidad federativa, permite un análisis mucho menos complejo de aquellos documentos legislativos que recogen en sus textos los principios de justicia restaurativa o de las vías alternas para hacer justicia. Sin embargo, en este análisis se presenta que, al contrario que en el caso mexicano, la legislación panameña no desarrolla de una manera tan amplia el tema en el que del que se hablaba anteriormente.

En primer lugar, en la 4ª Constitución Política de La República de Panamá de 1972—en adelante CPRP—no aparece ninguna mención de los MASC o a las vías alternas de hacer justicia. Tampoco se hacen referencia a estos conceptos en la Ley 40 sobre el Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia de 1999—en adelante L40RERPA—cuyo art. 141 habla sobre las sanciones alternativas que pueden aplicarse a los adolescentes en Panamá, pero el enfoque con que se abordan dichas medidas se aleja del significado que persiguen los MASC, puesto que “en los delitos no mencionados en el artículo anterior el juez de adolescentes impondrá las sanciones socioeducativas, la participación obligatoria en programas de asistencia y orientación, la presentación de servicios sociales y las ordenes de orientación y supervisión” (L40RERPA, 1999, pág. 39).

Existe también un artículo en dicha ley que puede interpretarse como una de las posibles bases para el despliegue de procesos de justicia restaurativa en el Estado panameño. El párrafo II del art. 126 pone de manifiesto la importancia del apoyo de la familia y de la comunidad en el proceso socioeducativo de los adolescentes que hayan cometido actos delictivos, sin hacer referencia explícita de la reparación del daño: “La

sanción que se le imponga al adolescente o a la adolescente, deberá tener objetivos primordialmente educativos y deberá aplicarse, preferentemente, con intervención de la familia y la comunidad, y con la asistencia de especialistas” (L40RERPA, 1999, pág. 35).

Tampoco se encuentran referencias a los MASC o a las vías alternas de hacer justicia dentro de los textos jurídicos relacionados con el sistema penitenciario panameño, o sea, la L55SP y el Decreto Ejecutivo 393 del 2005 que reglamenta el Sistema Penitenciario Panameño—en adelante DE393SP—.

Pero para encontrar los verdaderos cimientos de los MASC y de las vías alternativas de hacer justicia hay que buscar la L63CPP que fijó la utilización de los MASC en el territorio de Panamá en su VI Título, en los artículos que van del 201 al 220. En estos se establecen los métodos que se reconocen como alternos y las situaciones en los que pueden utilizarse, dedicando capítulos completos a la conciliación, la mediación o los acuerdos resultantes de estos procesos.

Con respecto a justicia restaurativa, dicha ley no hace mención explícita a los procesos restaurativos, aunque su art. 122 sí que hace referencia a la acción restaurativa—aunque no desde la óptica de la justicia restaurativa—definiéndola como “el reintegro de la cosa y la indemnización o reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el hecho punible, contra el autor o partícipe o el tercero civilmente responsable, podrá ser ejercida por la víctima del delito” (L63CPP, 2008).

No obstante, e identificando otra característica compartida entre los dos países analizados, Panamá tampoco cuenta con verdaderos organismos, civiles o gubernamentales, que realicen una labor de divulgación de los procesos de justicia restaurativa a la población civil. Como ya se dijo, la justicia restaurativa es considerada en Panamá más como un posible resultado de un proceso de mediación o conciliación que un proceso propiamente dicho.

Si se comparan los artículos citados de ambos textos, pueden observarse una serie de diferencias. En primer lugar, en lo referente a los procesos restaurativos, la CPEUM marca un referente de la panameña, puesto que este texto legislativo sí sienta las bases para poder acudir a procesos restaurativos, mientras que existe una ausencia de

un artículo homólogo dentro de la CPRP. En segundo lugar, las leyes que establecen los MASC y las vías alternas de hacer justicia en ambos casos promulgan la aplicación de los MASC aunque los métodos y la nomenclatura identificados por cada parte no coinciden en su totalidad. Además, aunque ninguno de los dos textos jurídicos mente a la justicia restaurativa, la ley mexicana queda en ventaja a dedicar una parte a un método alternativo, la junta restaurativa, que guarda una importante relación con los procesos restaurativos, mientras que la ley de Panamá solo hace mención de la acción restaurativa surgida de la utilización de un MASC.

Seguidamente, en el campo de justicia para adolescentes México presenta una de las leyes que mejor recoge los procedimientos de justicia restaurativa con menores, mientras que la ley homóloga panameña no hace mención alguna de los procesos de justicia restaurativa, centrándose en exclusiva en maneras alternas de cumplir una condena que no signifiquen el ingreso en un centro de reeducación de menores. Por último, conforme al mundo penitenciario, la Ley Nacional de Procedimientos Penales queda expuesta como uno de los referentes para la aplicación de procesos de justicia restaurativa dentro de la duración de la pena de un PPL, mientras que su homóloga panameña, la Ley 55, la justicia restaurativa brilla por su ausencia. Esta ausencia de artículos dedicados a la justicia restaurativa también se repite en el CNPP y en el Decreto 393 de Panamá.

Capítulo 4.- La reparación del daño

4.1 Introducción

La reparación del daño es un concepto existente tanto en la justicia tradicional como en la justicia restaurativa, si bien la relevancia del mismo varía dependiendo del modelo de justicia desde el que se aborde el concepto. De manera introductoria se aprecia que la reparación del daño es un elemento secundario dentro de un proceso de justicia tradicional—o retributiva—mientras que, para la justicia restaurativa, la reparación del daño es el elemento fundamental y el objetivo primordial a perseguir en un proceso restaurativo.

Desde la óptica jurídica tradicional se puede definir el concepto de daño como “cualquier tipo de consecuencia perjudicial que padece una persona con motivo de una conducta propia, ajena o, incluso, con ocasión de un fenómeno natural, no imputable a sujeto alguno” (Naveira Zarra, 2004, pág. 11). Este concepto queda pues ligado al mundo judicial, puesto que la justicia tradicional de Occidente no solo se centra en que aquella persona que ha trasgredido las leyes establecidas deba responder por esta acción ante la autoridad del Estado, sino que se reconoce el derecho de aquellos que han sufrido el daño a que este se les indemnice o repare.

Pero esta definición se centra casi exclusivamente en la reparación de los daños materiales surgidos a raíz de una acción dañina, dejando a un lado el punto de vista más social que el derecho occidental actual está adaptando paulatinamente, como así demuestran las recientes reformas de los sistemas judiciales de algunos países de Latinoamérica. Desde este enfoque social, existen otras definiciones del daño donde se entiende el concepto como un fenómeno más complejo, teniendo una doble naturaleza que no solo reconoce un perjuicio material, sino también moral. Un ejemplo de ello se basa en la definición dada por Pérez Saucedo y Zaragoza Huerta (2011) que apuntan que el daño tiene ambas naturalezas, siendo el primero “consiste en un menoscabo pecuniario al patrimonio de una persona, mientras que el segundo, es la afectación sufrida en los sentimientos, creencias, reputación, en la vida privada o en la consideración que tienen los demás de dicha persona” (pág. 649).

Se puede observar en esta última definición ese enfoque más humanitario del derecho occidental actual, que no solo se centra en el capital perdido a raíz de la comisión de una acción ilícita, sino que se hunde en la deontología del derecho actual en su búsqueda por una sociedad más justa. No obstante, si bien esta perspectiva del daño es reciente, el concepto del mismo y su reparación son tan antiguos como el mismo derecho. Es decir, dichos conceptos no son una creación genuina de los sistemas de justicia contemporáneos, sino que el origen de los mismos se remonta a sociedades y culturas que existieron hace milenios, y cuyo bagaje influyó en la configuración de lo que se entiende por derecho y justicia.

4.2 Antecedentes históricos de la reparación del daño

4.2.1 Antigüedad

Partiendo de la Edad Antigua, la reparación del daño era una realidad en el antiguo Egipto para tiempos de la IV y V dinastía—período que va desde el siglo XXVII al XXIV a.C.—, donde aquellos súbditos del faraón que incumplían un contrato de compraventa debían responder con una indemnización económica a la otra parte contratante. Cabe destacar que esta solución al conflicto era una medida arbitrada, quedando como una sanción administrativa y evitando así la vía judicial (Alonso y Royano, 1998).

También las leyes de los antiguos hebreos reconocían la figura de la reparación de daño. Sin embargo, las antiguas leyes hebreas se caracterizaban por su dureza y severidad en muchos campos—como la moral, el honor, el daño físico, etc.—por lo que el concepto de reparación del daño estaba reservado para asuntos agropecuarios, además del robo y el allanamiento, tal y como se nos relata en el capítulo 21 del libro del Éxodo o en el capítulo 6 del Levítico (Reina & Valera, 2016).

En la Babilonia del siglo XVIII a.C también se reconocía el derecho de las víctimas a ser compensadas por los daños ocasionados por un tercero, apareciendo esta disposición en el Código de Hammurabi. A diferencia de los casos egipcio y hebreo, el concepto de reparación del daño no podía ser conmutado por una suma de dinero, sino que se aplicaba la ley del talión, donde el victimario recibía el mismo daño que había propiciado anteriormente a la víctima (Macedonio Hernández, 2010).

En la Grecia clásica también se hallaba esta figura dentro del derecho civil heleno, en concreto en relacionado a los contratos y préstamos. Si una de las partes contratantes no tenía la mercancía o el dinero a devolver en el tiempo estipulado, la otra parte estaba en derecho de pedir una compensación económica—denominada *diké*, palabra que significa indemnización o compensación (Arteaga Nava, 2002)—lo que se conocía como *bable*. Este *bable* era la disminución del patrimonio producto del incumplimiento del contrato, considerándolo como un daño producido por la parte no cumplidora (Wolff, 1976).

En Roma, cuna del derecho occidental actual, la reparación del daño también era contemplada dentro del *ius civile*—derecho civil—sobre todo en materia económica y contractual. En un principio esta reparación del daño se entendía como una venganza, donde el ofendido o sus allegados decidían si infligir el mismo daño al ofensor, siendo esta una figura jurídica legal y reconocida por la Ley de las XII tablas. Ya en época imperial, este derecho a ejercer la venganza es perseguido por las autoridades que antes lo permitían, reservándose estas el monopolio de la impartición de justicia, en el que el concepto de reparación del daño fue asociado a compensaciones monetarias. Así aparecen las *actiones poenae persecutoriae*, es decir, las obligaciones de indemnización monetaria por parte del ofensor al ofendido, que podían ser acordadas entre las partes o impuestas por el tribunal que dictaba sentencia (Moranchel Pocaterrea, 2017).

4.2.2 Edad Media

Para finales del dominio romano en Europa occidental—lo que coincide con la entrada en la Edad Media—se hizo cada vez más común la utilización de pueblos de origen germánico para defender las fronteras del imperio contra otras tribus germánicas, cediéndoles grandes extensiones de territorio donde poder asentarse. Así fue la misma Roma la que abrió las puertas para lo que posteriormente se conocerían como las invasiones bárbaras que desencadenaron la caída del imperio occidental para mediados del siglo V. Se identifica entonces un panorama legal en el que se realiza un sincretismo paulatino del derecho romano y el derecho consuetudinario germánico en el que se basaría el derecho civil durante la Edad Media en Europa. El derecho germánico se basaba en una serie de leyes redactadas y de en una autoridad que

impartía justicia como en el caso de Roma, sino que se basaba en un derecho civil donde las garantías legales eran aseguradas por el profundo sentido del honor de las comunidades germánicas, siendo la propia comunidad la autoridad para reconocer los actos de justicia.

En lo referente a la reparación del daño, el derecho consuetudinario germánico diferenciaba dos tipos: la primera quedaba destinada a los asuntos criminales producidos dentro de los integrantes de la comunidad, donde se contemplaba la figura de la *faida*, o venganza, en el que los ofendidos—siempre que fueran hombres libres—podían utilizar la violencia contra los ofensores para poder resarcir el daño cometido por estos últimos. No obstante, este derecho de *faida* tenía una serie de requisitos que cumplir antes de poder llevarse a cabo, entre los cuales estaba la comparecencia de los ofendidos ante un tribunal al que se les mostraba la posibilidad de aceptar o no el *wergeld*. Este *wergeld* era entendido como la posibilidad de los ofensores de poder reparar el daño a los ofendidos a través de una composición económica, no como una pena en sí, sino como “un poderoso medio para convencer a las víctimas de aceptar la mediación de la paz o composición” (Rojas Donat, 2012, pág. 489).

El concepto de reparación de naturaleza económica fue asimilado paulatinamente por el derecho consuetudinario germánico a la vez que las aristocracias germánicas asimilaban aspectos de la cultura romana. Así el término evolucionó dentro del derecho germánico con el tiempo, pudiendo citar los códigos germánicos que conjuntaban el derecho romano y el germánico, como el Código de Eurico o las *Leges Antiquae* visigodas, donde se recoge la posibilidad de la reparación del daño en materia de allanamiento del hogar, pagando el doble o el triple—dependiendo de la gravedad del delito—del daño realizado durante el allanamiento (Pascual López, 2006). Otro ejemplo es la existencia de precedentes donde la figura de la reparación del daño fue usada para evitar abusos por parte de los gobernantes, como nos muestra la constitución inglesa del siglo XIII. En esta Carta Magna de 1215 la nobleza podía embargar castillos, tierras y posesiones de la corona si esta—o alguno de sus representantes—abusaba deliberadamente de su poder (UNAM, 2009).

Durante esta etapa de la historia humana existían dos fuentes de poder legítimos, encontrando por un lado al poder terrenal—al que pertenecen los ejemplos del

derecho romano y el germánico—y, por otro lado, el poder temporal relacionado con los asuntos religiosos. Es decir, para asuntos de religión y moralidad, la Iglesia católica aprovechó su papel como legitimador del poder terrenal para desarrollar el derecho penal canónico, que perseguía la herejía, es decir, las afrentas realizadas en contra de los dictámenes promulgados por los representantes de Dios en la Tierra.

El derecho canónico fue el paso del derecho acusatorio al inquisitivo, lo que significó que la base del procedimiento fueran las pesquisas, las aprehensiones y la confesión como pruebas irrefutables del delito de herejía. Los juicios se realizaban de manera secreta, recurriendo habitualmente al tormento—físico o psicológico—y en los cuales los pesquisadores tenían amplios poderes para emitir sentencias, que posteriormente eran ejecutadas por el poder terrenal. Al concebir el pecado como un delito, el derecho canónico entendía la reparación del daño como la aplicación de una “venganza divina con excesivas formas de expiación y penitencia” (Macedonio Hernández, 2010, pág. 14)

4.2.3 La reparación del daño en las culturas precolombinas

Para completar nuestra labor historiográfica se debe observar que el concepto estudiado también aparecía dentro de culturas que no entraron en contacto con la cultura occidental hasta finales del siglo XV, como las existentes en el continente americano antes de la llegada de los europeos. De hecho, parece ser que la figura de la reparación es intrínseca a los sistemas de justicia del género *homo*, entendiéndose en este continente como una compensación económica a la víctima de un delito.

El derecho maya se caracterizaba por su dureza. Como se abordó en capítulos anteriores, en la idiosincrasia maya relativa a la justicia, se contemplaban castigos severos para aquellos que trasgredían las leyes y pocas veces las condenas podían ser conmutadas por un acto reparatorio. Un ejemplo de reparación lo constituye el delito de robo, donde el ladrón quedaba reducido a la esclavitud y quedaba al servicio de su víctima hasta que se le reparara el daño a la misma—si el victimario no podía reparar el daño, esta obligación era heredada por su familia, así como su condición—. Otro caso de reparación se halla en el delito de adulterio, en el cual la mujer adúltera era ejecutada o repudiada por el marido adulterado, al cual se le podía reparar el daño a

través de un pago en especie, con la entrega de una nueva mujer o a través de la entrega de la propia mujer del adúltero (Salcedo Flores, 2009).

En los pueblos del Valle de México, la reparación del daño no solo era contemplada dentro de sus sistemas de justicia como una figura jurídica, sino que esta estaba relacionada con varios delitos más que el resto de culturas que se abordan en este apartado. Por ejemplo, los gobernantes de la llamada Triple Alianza—compuesta por las ciudades de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan—indemnizaban a los dueños de esclavos que huían para reclamar el derecho de asilo en los palacios de los dirigentes y, por tanto, obtener la libertad. También, en los delitos de lesiones físicas, el victimario debía pagar la reparación del daño—que en casos graves podía traducirse con la esclavitud—a la víctima, el cual se solía traducir por un pago en especie. Otro caso de reparación se presentaba en los delitos donde el victimario era encarcelado hasta que sufragara los daños cometidos a la víctima, acción que podía conmutarse con la esclavitud (Trimborn, 2012).

Un caso especial era el de los incas, puesto que en su derecho la reparación del daño no era una figura jurídica en sí, sino que era contemplada como el pilar básico y el fin último de cualquier acción en la impartición de justicia. Es decir, los incas consideraban que una acción delictiva era una ruptura con el *statu quo* impuesto por la divinidad antes de la interferencia del ser humano y por tanto debía ser reparada a través de un castigo (Castro Barnechea, Lazo Paredes, Linares Ormeño, & Murillo Chávez, 2013). A pesar de ello sí que existía la reparación del daño en especie, puesto que si el victimario sobrevivía al castigo impuesto podía marchar en libertad, pero todas sus pertenencias eran incautadas por la autoridad (Sánchez Zorrilla & Zavaleta Chimbor, 2015).

La cultura chibcha de Panamá y Colombia reservaba la reparación del daño solo para las élites de la sociedad, y en el caso específico de adulterio, pudiendo evitar un castigo mayor a través de una compensación económica. Lo característico de esta cultura es que esta reparación del daño no se enfocaba en la víctima, sino que se pagaba al gobernante en cuestión que había impuesto la condena, por lo que no se puede hablar de una reparación a la víctima del delito (Trimborn, 2012).

4.3. La reparación del daño en la cultura judicial actual de Occidente. El caso de México y Panamá

Durante gran parte de la Edad Moderna, los países europeos continuaron desarrollando el derecho germánico—y el canónico para los países alineados con Roma—a la vez que los monarcas impulsaban la labor de los juristas para poder concentrar cada vez más poder en sus manos, hecho que facilitó la creación del Estado moderno y la paulatina pérdida de poder por parte de la nobleza. A ello se sumaban los movimientos culturales como el Renacimiento o, posteriormente, la Ilustración donde las ideas humanistas acabaron influyendo a los sistemas de derecho europeos. Por supuesto, el concepto de reparación del daño también se vio influido por estas nuevas corrientes de pensamiento, por lo que dicha reparación ya no solo se centraba en el campo de pérdidas económicas, sino también físicas y económicas.

Un buen ejemplo nos lo da el derecho anglosajón—o *common law*—que actualmente sigue vigente en países que configuraban las colonias británicas o que eventualmente pertenecieron a la esfera política de la monarquía británica—tales como Estados Unidos, Canadá, Australia o Irlanda—y cuya premisa base es la anteposición de la jurisprudencia a las leyes. Este sistema de derecho entiende a la reparación del daño—*restitution*—como la necesidad del ofensor de reparar el daño resultante de una ofensa criminal. Aunque generalmente este concepto se asocia a una compensación económica, como daños a la propiedad o robo (Dammer & Weise-Pengelly, 2014), existen precedentes de que el concepto también responde a delitos que causan daños físicos y psicológicos a la víctima. Desde finales del siglo XVIII, el derecho anglosajón establece que no solo se debe reparar los daños económicos, sino que también se debe tener en cuenta el dolor y el sufrimiento de las víctimas, por lo que el daño puede ser reparado por otras vías diferentes a la económica (Mendelson, 2008).

La otra rama claramente diferenciada del derecho occidental, más cercano a nuestro ámbito de estudio, sería el derecho continental o francés, encontrando su origen en la Francia revolucionaria de principios del siglo XIX, el antiguo sistema de derecho del país se vio influenciado por los textos legales romanos. Esta tendencia se expandió por el Viejo continente a través de los ideales liberales y las campañas y conquistas napoleónicas, alcanzando posteriormente los territorios coloniales americanos, aún no

independizados. Para 1804, el Código Civil francés reconocía el derecho de reparación del daño de las víctimas, vinculando este a la gravedad del daño cometido por el victimario y cuantificando la condena y la compensación en función de la magnitud del daño realizado. No obstante, fue a partir del siglo XX fue cuando el derecho continental incidió “considerablemente en la reparación de las víctimas. Dada su presencia, se amplió la categoría de daños reparables, lo que permitió un acercamiento a la reparación integral (Nanclares Márquez & Gómez Gómez, 2017, pág. 63).

Aunque cada uno de estos sistemas de derecho guarda sus peculiaridades, ambos contemplan en la actualidad la figura de la reparación del daño, en la que el victimario debe restaurar y compensar de diversas maneras el daño cometido en detrimento de la víctima. Entre estas destacan tres formas primordiales para la reparación del daño, siendo la primera la reparación específica o *in natura*, consistente en el arreglo o la sustitución de la cosa dañada. La segunda forma es la indemnización por equivalente, es decir, la entrega de una cantidad de dinero que corresponda con el daño recibido por la víctima y, finalmente, la reparación en especie, consistente en la transmisión de bienes que tengan un valor equivalente al daño realizado por el victimario (Rubí Puig, Ramos González, Piñeiro Salguero, & Luna Yerga, 2002).

Como se observa, pareciera que la reparación del daño dentro de los sistemas de derecho occidentales queda asociado a restaurar, a compensar el daño realizado, entendiéndose que el daño sufrido por la víctima puede ser compensado por el victimario a través del pago de una cantidad económica. El siguiente paso sería el identificar cómo se entiende el término y cómo queda reflejado en los documentos legales—relacionados con el sistema penitenciario o con las vías alternas de justicia—de los dos países en las que radican nuestras poblaciones de estudio, con el fin de que el lector pueda realizar una comparación de ambas legislaciones.

4.3.1 La reparación del daño en la legislación federal mexicana

En el caso de México el concepto de reparación del daño aparece ampliamente dentro de las leyes federales del país, siendo el primer ejemplo que se puede citar la propia CPEUM, que en su párrafo III del art. 17 en el que se abordan los MASC, refleja la obligación del Congreso de la Unión a expedir las leyes que “determinarán las materias

de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño” (CPEUM, 2018). En este mismo artículo, en su párrafo IV, se dice que las leyes “asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial” (CPEUM, 2018). También, en el párrafo IV de la sección C del art. 20 de la Constitución, se refleja el derecho de la víctima a que “se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente” (CPEUM, 2018). En esta misma sección, en su párrafo VII, se recoge el derecho de la víctima a “impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño” (CPEUM, 2018).

Otra de las leyes cuya definición de reparación del daño está más acorde con el enfoque de la justicia es la LNMA SCMP que en su art. 29—sobre los alcances de la reparación—establece los elementos de la reparación del daño. En el párrafo I se dice que “el reconocimiento de responsabilidad y la formulación de una disculpa a la víctima u ofendido en un acto público o privado [...], por virtud del cual el imputado acepta que su conducta causó un daño” (LNMA SCMP, 2014). El párrafo II reconoce el “compromiso de no repetición de la conducta originadora de la controversia y el establecimiento de condiciones para darle efectividad, tales como inscribirse y concluir programas o actividades de cualquier naturaleza que contribuyan a la no repetición de la conducta” (LNMA SCMP, 2014). Finalmente, el párrafo III, también recoge la necesidad de establecer un plan de reparación que puede ser económica a través de la reparación o sustitución del bien dañado, pero también a través de “la realización u omisión de una determinada conducta, la prestación de servicios a la comunidad o de cualquier otra forma lícita solicitada por la víctima u ofendido y acordadas entre los Intervinientes en el curso de la sesión” (LNMA SCMP, 2014).

Entrando en el terreno del sistema penitenciario se podría citar a la LNEP, que en su art. 151 establece que una PPL no podrá finalizar su condena si no ha reparado el daño a la víctima. Ante la dificultad socioeconómica que pueda vivir una PPL, este artículo también establece que “en ningún caso, una persona sentenciada potencialmente

beneficiaria de la determinación de preliberación podrá permanecer en prisión por escasez de recursos económicos, para lo cual podrán aplicarse los Mecanismos Alternativos o procedimientos de justicia restaurativa” (LNEP, 2016).

El art. 198 de esta misma ley establece que toda PPL sentenciada “candidata a disfrutar de alguna medida de libertad condicionada o libertad anticipada; sustitución o suspensión temporal de la pena, deberá asegurar el cumplimiento de la reparación del daño antes de que la misma pueda hacerse efectiva” (LNEP, 2016). No obstante, este artículo también hace hincapié en que cualquier PPL que haya cumplido su condena pero que no haya pagado la reparación del daño por problemas de solvencia económica, no podrá ser retenida en un centro penitenciario, sirviéndose de otras vías para resarcir a la víctima del delito.

Con respecto a la parte beneficiaria de la reparación del daño, la LGV también recoge en numerosos artículos la figura de la reparación del daño, siendo un ejemplo de ello el párrafo II y el párrafo X del art. 12, donde se reconocen los derechos de las víctimas. En el primer párrafo se recoge el derecho de la víctima a que se repare el daño “en forma expedita, proporcional y justa en los términos [...] de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación” (LGV, 2017). En el art. 13 de esta ley también se recoge el proceso en el que el victimario debe reparar el daño a la víctima, en cuyo caso la autoridad jurisdiccional competente supervisará “que entregue la suma que garantiza la reparación del daño a la víctima, dejando constancia en el expediente del pago definitivo de la cantidad depositada” (LGV, 2017).

Se reconoce también la utilidad de las vías alternas de hacer justicia para la consecución satisfactoria de la reparación del daño en su art. 17, el cual nos dice que las víctimas tendrán derecho a optar por un MASC “conforme a las reglas de la justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición” (LGV, 2017). El art. 64, correspondiente a la naturaleza de la compensación, se hace un reconocimiento a que los efectos del daño no son solo de carácter pecuniario, sino que también se puede atentar contra lo intangible, definiendo a este daño como daño moral. En el párrafo II de este artículo se define al

término como aquel que “comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria” (LGV, 2017). Con respecto a la obligación de reparar el daño, el art. 142 establece que las autoridades federales deben ejercer un “procedimiento económico coactivo para hacer efectiva la subrogación del monto de la reparación conforme a las disposiciones aplicables, sin perjuicio de que dicho cobro pueda reclamarse por la víctima en la vía civil, para cobrar la reparación del daño” (LGV, 2017).

4.3.2 La reparación del daño en la legislación panameña

En el caso de las leyes homónimas de Panamá, la reparación del daño—concepto denominado en el país centroamericano como resarcimiento o restitución del daño—no se aborda con tanto detenimiento como sí lo hace la legislación mexicana. En primer lugar, el concepto de la reparación del daño—relacionado con la comisión de un delito—no queda recogido dentro de la CPRP. No obstante, la CPRP reconoce en su art. 49 que el Estado debe ser garante de los derechos de toda persona, a través del establecimiento de “los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, su educación y los procedimientos de defensa del consumidor y usuario, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la transgresión de estos derechos” (CPRP, 2004).

Conforme a las leyes relacionadas con los MASC, la L55SP no refleja el derecho de las víctimas a la reparación del daño, lo que no quiere decir que dicha reparación no se contemple dentro de la aplicación de los MASC, sino que hay que buscarla en otros textos legales. Por ejemplo, se observa que el término sí queda reflejado en el art. 17 del Decreto Ejecutivo N°777—en adelante DE777—de 2007, en lo referente a los casos que pueden ser llevados a un proceso de mediación comunitaria (DE777, 2007).

Dentro del mundo penitenciario, la L55SP no hace constancia de la posibilidad de reparar el daño por parte de las PPL. No obstante, el Código Penal de la República de Panamá, adoptado por la Ley 14 de 2007—en adelante L14CPRP—sí se recoge esta opción. Es en su art. 235 se dice que la PPL podrá obtener beneficios siempre y cuando se restituya el objeto de delito “antes de que se dicte resolución de elevación a juicio o en caso de que no pueda hacer la restitución, indemnice plenamente a la víctima”

(L14CPRP, 2007), en cuyo caso la sanción podrá disminuir de una tercera parte a las dos terceras partes.

Debido a que la L55SP no recoge el concepto de la reparación del daño en casos de adultos PPL, se puede citar al texto legal destinado a los adolescentes infractores. De esta manera la L40RERPA, dispone en diversos artículos el concepto de la reparación del daño por parte de los adolescentes que han cometido un delito. En su art. 130, se dice que son sanciones socioeducativas “la amonestación, la participación obligatoria en programas de asistencia, la prestación de servicios a la comunidad y la reparación de daños a la víctima” (L40RERPA, 1999). Esta misma ley, en su art. 134 define a la reparación del daño como “una obligación de hacer, por parte del adolescente, a favor de la persona que haya sufrido perjuicio o disminución en su patrimonio por razón de la conducta infractora” (L40RERPA, 1999). Dicho proceso debe ser demandado explícitamente por la víctima al juez competente, que fijará una cuantía monetaria a satisfacer por parte del victimario.

Para finalizar, la L31PVD sí que recoge el derecho de las víctimas de un daño a que el mismo les sea reparado por el victimario de una acción ilícita. Tal y como se apunta en el párrafo IX del art. 2 de esta ley, la víctima tiene derecho a recibir “patrocinio jurídico gratuito del Estado para coadyuvar con el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal y para obtener la reparación del daño derivado del delito” (L31PVD, 1998). A su vez, en el párrafo III del art. 30 de la L31PVD indica que el Estado otorgará ayudas para asegurar la reparación del daño a la víctima, financiando dichas ayudas a través de diversas fuentes, entre las que se debe destacar el cobro de las sumas que “deban cubrir los reos sentenciados a tal pena por los tribunales de justicia, cuando el particular beneficiado se abstenga de reclamar en tiempo dicha reparación o renuncie a ellas, o cuando se deban al Estado en calidad de perjudicado” (L31PVD, 1998).

4.4 La reparación del daño en la justicia restaurativa

Observando la legislación de los países de estudio, se aprecia como la reparación del daño es un concepto que el derecho tradicional occidental contempla como una compensación exclusivamente económica, incluso si el daño recibido por la víctima fue físico y psicológico. Ello viene a reflejar una problemática crónica de los sistemas de justicia actuales en Latinoamérica—independientemente de si vivieron las reformas

judiciales que permitieron el paso de un sistema inquisitorio a uno acusativo—donde los procesos que pretenden impartir justicia dejan a la víctima virtualmente excluida, pudiendo interpretar el victimario que el daño fue hecho contra las autoridades o el Estado, no contra otra persona.

Este hecho puede desencadenar que el propio fallo judicial no satisfaga a ninguno de los actores del proceso, puesto que el victimario puede no identificar realmente el alcance del daño cometido, sintiendo que es objeto de venganza por parte del Estado. A ello se le suma que la sociedad no percibe el efecto de la impartición de justicia y, lo que es más grave, la víctima puede despertar un sentimiento de abandono por parte de las autoridades, lo cual puede llevar a casos de revictimización. Para reafirmar estos hechos, José Zamora Grant señaló que el “actual sistema de procuración y administración de justicia resulta ineficaz en ciertos casos para las víctimas de un hecho ilícito” (Macedonio Hernández, 2010, pág. 4).

Ante esta problemática, existen autores que señalan que esta reparación económica no tiene como fin exclusivo el reponer el capital perdido por la víctima, sino que también se presenta como una responsabilidad del ofensor para con la sociedad. Esta definición del concepto se asemeja más al propósito de la justicia restaurativa, puesto que tiene como objetivo el “tranquilizar a la sociedad que espera que delincuente pague el daño privado que ocasionó con el delito” (Hernández Pliego, 2014, pág. 350).

Aun así, existen indicios de que esta responsabilidad de garantizar la reparación del daño al conjunto de la sociedad no se cumple plenamente, ya que el concepto se ha burocratizado, limitándose a un trámite administrativo posterior a un fallo judicial, visualizando así las necesidades de la víctima como algo privado y patrimonial. La legislación reconoce a la víctima su derecho a la reparación del daño en ámbitos “material, patrimonial y moral, pero es preocupante que no garantice la no repetición del daño, por lo que este vacío legal deja abierta la posibilidad de que las violaciones continúen sin que las personas responsables sean sancionadas” (Dfensor, 2010, pág. 3).

Todo esto se traduce a que el concepto de reparación del daño, abordado desde el punto de vista del derecho retributivo tradicional de Occidente, queda como otro elemento más que pretende solucionar el conflicto, pero que a la larga no es más que

otro método que da pie a que ese conflicto en específico se repita con otros individuos de la sociedad. En contraposición a esta visión de justicia tradicional, la justicia restaurativa se aleja a las medidas retributivas, bien económicas o bien de privación de libertad, ya que pretende visualizar los conflictos no solo como algo que se debe solucionar, sino como algo inherente al ser humano y que, por tanto, debe ser tratado desde una manera mucho más detallada y en profundidad.

Para Zehr (2007), uno de los autores que más ha proyectado acerca del concepto, la justicia restaurativa es aquella que trata los conflictos enfocándose en las víctimas de la comisión del delito, entre las que no solo se encuentran aquellas que hayan recibido el daño directamente, sino la propia comunidad que es dañada indirectamente por las acciones delictivas de sus integrantes. Es decir, el autor interpreta que la reparación del daño no debe quedar limitada a una acción victimario-víctima, sino que dicha reparación debe abarcar al total de individuos que se vieron afectados por la comisión del daño.

A este enfoque también se le suman otros autores que no reniegan del concepto ya establecido por la justicia tradicional sobre la reparación del daño, sino que abogan por una ampliación del término. Esta ampliación consistiría en reconocer la necesidad tanto de restaurar el daño patrimonial y moral, entendiéndose este último como “la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás” (Vázquez Acevedo, 2010, pág. 21). De esta manera se propone establecer una reparación completa donde también se tenga en cuenta el “sufrimiento ocasionado a la víctima y a su entorno más próximo, la inseguridad social que el mismo ocasionó y la indignación de la comunidad en relación al hecho, en definitiva, todas aquellas cuestiones circundantes al delito” (Barboni Pekmezian & Valls Prieto, 2014, pág. 201).

Para que se pueda llevar a cabo una reparación del daño desde una perspectiva restaurativa, deben cumplirse cuatro premisas básicas. En primer lugar, es necesario que exista una ofensa, mal, degradación o menoscabo provocado a una cosa o bien, a una persona y a su moral. Seguidamente es necesario que el daño realizado haya sido realizado son mediar derecho alguno, es decir, que provenga de una acción ilícita, a lo

que se debe sumar que este daño tiene que haber sido realizado por una acción humana y que, por último, este daño debe ser independiente de la intención del responsable (Pérez Saucedo & Zaragoza Huerta, 2011).

Así, la responsabilidad de reparar el daño, alejándonos del enfoque retributivo, recaerá en el victimario, el cual debe iniciar el proceso de una manera voluntaria para que la víctima perciba una genuina intención de resarcir a la víctima los diferentes traumas sufridos a raíz de la comisión del daño. En el surgimiento de esta voluntad se hace imprescindible un apoyo emocional y práctico al victimario, brindado tanto por las autoridades como por sus redes sociales más cercanas, algo que permite fortalecer los lazos sociales y que, para empezar, reduce considerablemente la probabilidad de una reincidencia delictiva por parte del victimario, al darle una oportunidad de reevaluar su conducta y el alcance de los daños cometidos por el mismo (Maruna, 2001). Los victimarios que realizan esta auto-reevaluación son más propensos a reasignarle un nuevo sentido a su forma de vida, lo que les permite afrontar los hechos cometidos y poder resarcir algún daño realizado con anterioridad.

Este proceso es llamado reorientación cognitiva o acción transformativa y constituye el primer paso para una reparación integral del daño a la víctima (Laub & Sampson, 2001; Bottoms, Shapland, Costello, Holmes, & Muir, 2004). Esta reorientación cognitiva no solo afecta al victimario y a la víctima, sino que los integrantes del círculo social de cada uno pueden verse afectados de manera positiva, disminuyendo los efectos del daño provocado en un pasado, por lo que se hace imprescindible en la reconstrucción del tejido social deteriorado por una acción delictiva (Mills & Codd, 2008).

En el caso de que el victimario quiera reparar el daño a su víctima de manera voluntaria, han de cumplirse tres etapas. La primera de ellas—coincidente con el fenómeno de la reorientación cognitiva—se identifica como un proceso de reconocimiento y disculpa, en el que el victimario reconoce el daño realizado y emite una disculpa, que puede ser aceptada o no por la víctima. En segundo lugar, el victimario debe dar indicios de un cambio de conducta—también relacionado con la reorientación cognitiva—que dé como resultado la no reincidencia delictiva de quien produjo un daño. Por último, se presenta a la restitución como último paso para poder alcanzar una satisfactoria reparación del daño, en el que se realiza un cambio de roles,

puesto que el victimario queda supeditado a la decisión de la víctima de seguir adelante con el proceso.

Por tanto, a efectos de esta investigación, se puede entender que la reparación del daño a la víctima es aquel proceso que inicia con un cambio de conducta del victimario, en el que se acepta la responsabilidad del daño cometido y nace un interés por la víctima de sus acciones delictivas. A ello sigue el establecimiento de un diálogo víctima-victimario que trata de menguar el sufrimiento y la inseguridad generados en la víctima en el momento de la comisión del delito.

Finalmente, es la víctima la que queda como protagonista de esta última fase del proceso de reparación del daño ya que, ante todo, debe haber aceptado la disculpa y la promesa de cambio por parte del victimario, y posteriormente será esta quien decida la manera en la que el daño puede ser restaurado. Esta decisión comprende un amplio espectro, puesto que puede variar desde un encuentro víctima-victimario, una compensación económica, un servicio a la comunidad, etc. (Pérez Saucedo & Zaragoza Huerta, 2011).

Capítulo 5.- El apoyo familiar

5.1. Introducción

Cuando se habla desde la perspectiva de la justicia restaurativa, se tiene por supuesto que la comunidad es un miembro esencial de un proceso restaurativo. El apoyo de la comunidad es un factor clave que debe recibir tanto víctima como victimario, con la finalidad de aumentar las posibilidades de identificar los daños realizados, las necesidades generadas y las obligaciones de cada participante a raíz de la comisión de un delito.

Las diferentes definiciones del término comunidad desde la justicia restaurativa ya vistas ponen de manifiesto que la comunidad tiene un rol activo en dichos procesos, puesto que la misma debe reaccionar ante una acción dañina que ha roto el funcionamiento normal de la comunidad y, por tanto, el tejido social de la misma. Es decir, la comunidad no solo sirve como apoyo a víctima y victimario para poder realizar un encuentro restaurativo satisfactorio sino que la propia comunidad queda identificada como una víctima secundaria de la comisión de un delito (Zehr, 2007).

Pero el problema surge debido a la ambigüedad del término comunidad, suponiendo una complicada tarea el poder identificar y delimitar con precisión qué o quienes componen esta fuente de apoyo social. Para esclarecer este problema Virginia Domingo (2017) identifica a esta fuente de apoyo como las micro-comunidades, es decir, los grupos de apoyo que están “directamente afectadas por el delito pero que suelen ser omitidas por la justicia. Son personas directamente afectadas por estar relacionadas con las víctimas directas o por ser de ámbito geográfico cercano al lugar donde se cometió el delito” (pág. 1).

Por tanto, si la comunidad debe ser un miembro activo de un proceso restaurativo mostrando su apoyo a víctima y victimario, el primer paso para poder desarrollar correctamente un proceso restaurativo sería analizar el término de comunidad a profundidad. De esta manera se facilitaría la tarea de identificar los individuos idóneos para participar en dicho proceso, apoyando de manera positiva a los participantes y al desarrollo general del proceso.

5.2 El apoyo social

Para poder entender el concepto de apoyo de la comunidad en los procesos de la justicia restaurativa, hay que centrarse primero en comprender el concepto de apoyo social, desarrollado en los años 60 del siglo XX. Autores como Barnes o Bowlby pusieron de manifiesto que “las relaciones humanas positivas y las redes sociales sirven a los seres humanos para encontrarse en estados de relativo bienestar y superar acontecimientos vitales estresantes con los que se enfrentan durante su vida” (García-Vita, 2017, pág. 191).

En 1981 Benjamin Gottlieb estratificó a la sociedad en tres niveles para identificar las fuentes de apoyo social y así facilitar las futuras labores de estudios sobre el concepto (Gracia & Herrero, 2006). El primer nivel identificado fue el macro, entendido por la pertenencia e integración del individuo en la sociedad que le rodea, la cual se representa como una comunidad organizada. El meso, por su parte, es el sentimiento de vinculación creado a raíz de las interacciones sociales que tienen lugar en el entorno social más próximo del individuo como el trabajo o el vecindario. Por último, el nivel micro serían las relaciones íntimas, producto de una vinculación estrecha con otros individuos, que generan sentimientos de seguridad, compromiso y responsabilidad del bienestar mutuo (Fuertes Eugenio, Agost Felip, Fuertes Fuertes, & Soto Personat, 2013).

Aunque Gottlieb ya hace referencia la comunidad como una fuente de apoyo social, la clasificación que más puede esclarecer la composición de la comunidad, para fines de este estudio, es la realizada por Nan Lin en 1986. Este autor realizó una estratificación de la sociedad en tres grupos dependiendo del tipo de apoyo que cada uno brindaba y de cómo influenciaban al individuo durante su desarrollo. Estos tres grupos se correspondían a los tres niveles diferentes de las relaciones sociales—identificados anteriormente por Gottlieb—, en el que se manifiestan las relaciones entre el individuo y el entorno social que lo rodea (Arango Cálad, 2003).

Para Lin el apoyo social era el “conjunto de provisiones expresivas o instrumentales—percibidas o recibidas—proporcionadas por la comunidad, las redes sociales y las personas de confianza” (Aranda & Pando, 2013, pág. 235). Cada uno de estos grupos ofrece un sentimiento de asociación dependiendo de la interacción recíproca

establecida con el individuo. De esta manera se localizaría en un estrato más amplio al colectivo de la comunidad, donde se crea un sentimiento de la pertenencia a la sociedad, lo que genera un sentimiento de identidad social compartido con un gran número de personas. La característica fundamental de esta vinculación es su carácter *quasi* voluntario, puesto que, si bien el individuo pertenece a la comunidad, el grado de implicación será, hasta cierto punto, decisión del mismo.

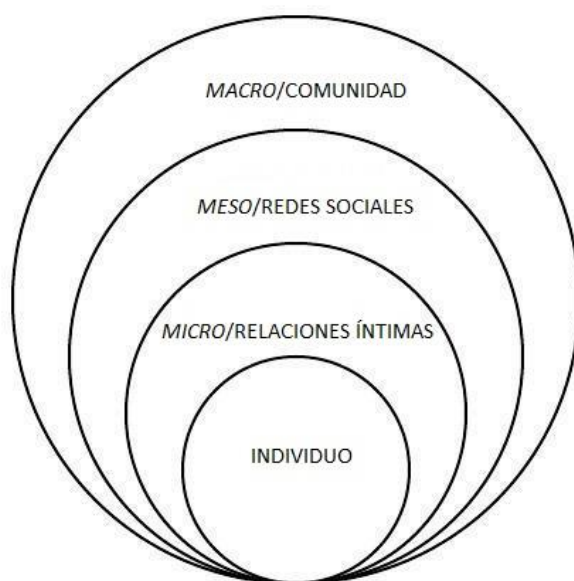


Figura 5. Clasificación del apoyo social según Nan Lin, citado en Aranda, C., & Pando, M. (2013). Conceptualización del apoyo social y las redes de apoyo social. IIPSI-Revista de Investigación en Psicología, XVI(1), 233-245. Fuente: Elaboración propia.

Después, en un estrato intermedio y más cercano al individuo, se identifica a las redes sociales como un grupo relativamente grande de personas con las que el individuo puede interactuar de manera directa, lo que desarrolla un sentimiento de vínculo, más fuerte y complejo que el de pertenencia. Estas interacciones deben mantenerse de una manera periódica y con un nivel de compromiso razonable, y en la mayoría de los casos no son elegidas voluntariamente por el individuo. En este grupo se pueden encontrar las relaciones familiares, vecinales y laborales. El último estrato, y mucho más cercano al individuo, lo compondrían las relaciones íntimas que generalmente se originan dentro de las redes sociales al potenciar voluntariamente las interacciones entre dos individuos. De estas interacciones se genera un sentimiento de compromiso

que conlleva unas reglas de correspondencia y bienestar mutuo (Gracia & Herrero, 2006).

5.2.1 Comunidad

Vista la clasificación de Lin, se puede afinar con más precisión el término de apoyo de la comunidad desde la óptica de la justicia restaurativa, a través de un análisis del término comunidad. Siguiendo la descripción de Domingo (2017), en la cual la comunidad queda identificada como aquellas personas que han sido afectadas de manera directa por la comisión de una acción delictiva y que están relacionadas con la víctima o el victimario a través de relaciones sociales o por proximidad geográfica a donde se cometió dicha acción, parece que el término de comunidad de la justicia restaurativa no corresponde exactamente con la clasificación de Lin.

No puede negarse que el apoyo institucional, enmarcado en el estrato comunitario de Lin, también es un factor importante para la realización de un proceso de justicia restaurativa, puesto que “hay preocupaciones y obligaciones que pertenecen a la sociedad y van más allá de los que tienen interés directo en este acto en particular” (Domingo de la Fuente, 2017, pág. 1). Pero pareciera que cuando se habla de comunidad en justicia restaurativa los autores hacen más referencia a las redes sociales y a las relaciones íntimas como fuentes de apoyo para las partes de un proceso restaurativo. Es decir, el principal apoyo social es brindado por los individuos que comparten vínculos y compromisos con víctima y victimario. Para apoyar esta afirmación, se puede citar a diferentes autores que han desmenuzado el concepto actual de comunidad, con la finalidad de paliar la ambigüedad del concepto.

Según Mercedes Causse Cathcart (2009), para poder hacer una definición de comunidad hay que tener en cuenta dos elementos claves del término; las características estructurales y las funcionales. Las características estructurales hacen referencia a la comunidad como un grupo localizado geográficamente que se rige por una serie de instituciones políticas, sociales y económicas. De esta manera, el tamaño de la comunidad depende de la potencialidad de las estructuras de estas instituciones para ejercer una función de cooperación y coordinación entre los miembros pertenecientes a la comunidad. Es decir, los elementos estructurales hacen referencia al espacio geográfico, a la población que habita dentro de un territorio bien delimitado

y su organización. Pero esta definición estructural deja a un lado las interacciones sociales que realizan los miembros del colectivo, por lo que también existe la necesidad de identificar a los aspectos sociales y psicológicos comunes para el grupo en cuestión. Estos aspectos son las llamadas características funcionales de la comunidad, aquellas que hacen referencia a la existencia de necesidades e intereses comunes. Entonces se puede llegar a interpretar que estas características estructurales responden más al término de sociedad que al de comunidad, puesto que hace más referencia a cómo las personas quedan enmarcadas dentro de una estructura de poder jerárquica, sin tener en consideración los aspectos más humanitarios de la población.

Como indica Ramos Feijoo, estos términos no son similares, al contrario, se contradicen, puesto que comunidad correspondería al espacio donde se realizan las interacciones de manera directa “cara a cara, los afectos, la cercanía, mientras que la sociedad sería lo racional, la modernidad, las relaciones formales. Frente a la sociedad, la comunidad sería el espacio de seguridad en medio de un mundo cada vez más inhóspito” (Eito Mateo & Gómez Quintero, 2013, pág. 11).

Según estas definiciones, la comunidad no quedaría identificada como la fuente de apoyo social primordial que pretende la justicia restaurativa, puesto que la misma busca que los que componen este apoyo se involucren de manera activa y voluntaria en un proceso restaurativo. Apoyando esta afirmación puede señalarse la definición de comunidad dada por Francis Violich, citado en Causse Cathcart (2009), donde la misma es un “grupo de personas que viven en un área geográficamente específica y cuyos miembros comparten actividades e intereses comunes, donde pueden o no cooperar formal e informalmente para la solución de los problemas colectivos” (pág. 13). Esta definición hace referencia a que la participación de la comunidad no es una característica permanente que pueda ser considerado como una fuente constante de apoyo social, por lo que su participación debería ser secundaria en los procesos restaurativos.

5.2.2 Red social

Viendo que el término de comunidad para el enfoque restaurativo hace más referencia a las redes sociales que a la comunidad descrita por Nan Lin, se debe explorar y profundizar en el término para poder observar si se relaciona mejor con la justicia

restaurativa. Gracia y Herrero (2006) entienden las redes sociales como “un número relativamente amplio de otras personas. Estas tienen un grado elevado de especificidad y tienden a construirse a partir de características como las relaciones familiares, el mundo laboral o la amistad. Este tipo de relaciones proporciona sentimientos de vinculación” (pág. 329). Podría también entenderse a las redes sociales como las diferentes relaciones interpersonales que rodean a un individuo, de las que este obtiene ayuda emocional, material, económica e información (Rodríguez-Martínez, y otros, 2010). Las redes sociales son el entramado básico donde se “sostienen todas las interacciones individuales y colectivas de nuestras sociedades, edificadas por los seres humanos, y donde realmente existimos, coexistimos y funcionamos de una manera libre y autónoma” (Gallego Trijueque, 2011, pág. 119).

Para Aranda y Pando (2013) las redes sociales son “los intercambios entre las personas, sean de tipo material, instrumental, emocionales, etc., todos ellos son intercambios que influirán en el grado de satisfacción de las necesidades de las personas” (pág. 240). Madariaga y Molinares (2016) definen a una red social como “la interacción de individuos en una comunidad, capaces de generar, en mutua relación, recursos, o medios para los propios fines o las propias necesidades individuales” (pág. 124). Se puede apreciar la similitud entre los conceptos de comunidad funcional de Causse Cathcart, la comunidad desde el punto de vista de la justicia restaurativa y las redes sociales descritas por Nan Lin. Aunque su nomenclatura es distinta, todos estos autores identifican un mismo colectivo, cuyos individuos componen una fuente de apoyo social a cada uno de sus integrantes.

En contraposición al argumento de que el apoyo social no proviene de la comunidad—entendida en su sentido más amplio—hay autores que reflejan que sí existe una función intrínseca de participación comunitaria, ya que existe un sentido de vinculación que obliga a sus integrantes a interactuar. Tal y como define Elena Socarrás (2004), la comunidad es “algo que va más allá de una localización geográfica, es un conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es, pues, historia común, intereses compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos” (pág. 177).

Es este sentido de vinculación el que lleva a la comunidad a despertar un sentimiento de responsabilidad colectivo que dé pie a la participación en la resolución de los conflictos que puedan surgir en el seno de la comunidad. A esto Marchioni (1999) apunta que “sin participación no hay proceso, no hay cambios reales o, mejor dicho, los cambios siempre serán el producto de las decisiones de otros y nosotros seremos simples receptores de las consecuencias de estas decisiones” (pág. 16).

Ante todas estas definiciones, la definición más precisa nos la vuelve a dar Victoria Domingo (2017), que identifica la fuente de apoyo social en los procesos de justicia restaurativa con el término de microcomunidad. La microcomunidad es un colectivo que quedaría integrado por aquellas personas que conforman el círculo más cercano del victimario y/o la víctima y que entienden la reparación del daño realizado a través de una conducta delictiva como una obligación colectiva. Por todas estas características, se puede afirmar que la comunidad, desde el enfoque de la justicia restaurativa, se asocia de manera clara con las redes sociales de Lin.

5.2.3 El apoyo social de las PPL

No obstante, para términos de esta investigación, la verdadera aclaración que interesa es poder identificar las fuentes de apoyo social de las personas que han sido condenadas a una pena privativa de libertad dentro de un centro penitenciario. Debido a la naturaleza de la condena, la persona es internada en un centro penitenciario en el que se separa al individuo de sus fuentes de apoyo social, a la vez que se reduce la posibilidad de mantenerlas, y se restringe el contacto con los individuos que conformaban su comunidad, sus redes sociales y sus relaciones íntimas. La PPL experimenta un profundo cambio no solo en su cotidianidad, sino que también observa un cambio intenso en sus relaciones sociales, lo que puede suponer una profunda situación estresante para la PPL.

Al aislamiento de sus fuentes de apoyo social se debe sumar el hecho de que la PPL se introduce dentro de una micro-sociedad existente dentro del centro penitenciario. Se encuentra en la tesitura de establecer nuevas interacciones con otras PPL y el personal penitenciario del que recibir apoyo social. Además, existe una fuente externa de apoyo social, conformada por aquellos que componían las redes sociales de la PPL antes de su

ingreso en el centro penitenciario, con los que puede mantener las relaciones a través de visitas o llamadas telefónicas (L55SP, 2003; LNEP, 2016).

A través de la búsqueda de este apoyo social la PPL busca “encontrarse en estados de relativo bienestar para superar acontecimientos estresantes con los que se enfrentan durante su vida. El apoyo de la familia y de los amigos durante el encarcelamiento puede implicar una diferencia enorme en las condiciones de vida” (Galván, y otros, 2006, pág. 69). En teoría la sociedad existente en un centro penitenciario debería ofrecer un apoyo social suficiente para aquellos que han recibido una condena privativa de libertad. A través de los programas de reinserción social, unas instalaciones adecuadas y un clima de respeto a los derechos humanos y el apoyo recibido del exterior, se pretende lograr el objetivo primordial de reinsertar satisfactoriamente a las PPL de nuevo en la sociedad.

Pero mucho que los programas de reinserción social estén bien diseñados y desplegados, aplicar programas de reinserción social sin existir un ambiente de seguridad y de respeto de los derechos humanos dentro del centro penitenciario “puede resultar contraproducente cuando son implementados en prisiones que carecen de legitimidad y en donde sus internos sienten que son tratados de manera injusta” (Córdova Sánchez, 2016, pág. 129).

Se presentan entonces los problemas crónicos de los sistemas penitenciarios en Latinoamérica, tales como la corrupción, la falta de infraestructuras adecuadas, la sobrepoblación o personal penitenciario con escasos recursos y preparación, impiden que los mismos puedan brindar un apoyo social perceptible a la población penitenciaria. La precaria situación que pueden llegar a experimentar en los centros penitenciarios hace que las PPL generen un “resentimiento contra la sociedad y las figuras de autoridad, por lo que algunos de ellos manifiestan rechazo a toda actividad proveniente de la prisión, incluida en ella la participación en los cursos de reinserción” (Córdova Sánchez, 2016, pág. 132). En esta situación, la PPL trata de buscar el apoyo social en aquellas redes sociales y relaciones íntimas que tenía en el exterior, puesto que “el apoyo que reciben de personas significativas es clave para su bienestar, especialmente en esos momentos de elevado estrés que supone la pérdida de su libertad” (Galván, y otros, 2006, pág. 70).

Aquellos que conformarán la fuente de apoyo social de la PPL serán los individuos que componían el círculo social más cercano al mismo, compuesto principalmente por la familia y, en un papel secundario, los amigos más cercanos. Ambos colectivos también han sufrido una situación de estrés intenso a raíz de la separación e internamiento del familiar o amigo, por lo que “no basta entonces, la sola personal preparación del detenido hacia su salida del establecimiento, sino la aceptación cordial, segura y desinteresada por parte de su familia y de sus amigos” (Coca Muñoz, 2007, pág. 182)

Como también apuntan Landeros, Simental y Rodríguez (2015) “la familia constituye la primera red de apoyo social que posee el individuo a través de toda su vida, así que esta instancia ejerce una función protectora ante los problemas que genera la vida” (pág. 558). Es por ello que a efectos de esta investigación se identifica el término de apoyo familiar como la fuente de apoyo primordial de las PPL, a la vez que constituye el apoyo de la comunidad citado por los teóricos de la justicia restaurativa.

5.3 El apoyo familiar en las PPL

Ante el limitado apoyo social ofrecido por el personal penitenciario en Latinoamérica, las PPL buscan potenciar las fuentes de apoyo social existentes antes del ingreso en el centro penitenciario, principalmente en la familia, ya que “constituye la primera red de apoyo social que posee el individuo a través de toda su vida, y por lo tanto se reconoce que esta instancia ejerce función protectora ante las tensiones que genera la vida cotidiana” (Louro Bernal, 2003, pág. 50). Y no solo sirve como un apoyo directo, si no que la familia también puede ser utilizada como un conector con otras redes sociales cercanas de las que es separada la PPL, tales como los amigos o los vecinos.

Se identifica así la doble función que realiza la familia como red social; por un lado está la función privada, donde los individuos que componen la familia procuran la satisfacción de las necesidades de los demás miembros, interactuando entre sí de manera interna. Por otro lado, la familia tiene una función pública en la que interactúa de manera externa con individuos pertenecientes a otras redes sociales, a las que también pertenece el familiar privado de libertad. Sirviendo de conexión entre diferentes redes sociales, la función pública la familia es “de utilidad a la sociedad de la que forma parte, siendo la socialización de sus componentes una función fundamental” (Sánchez Urios, 2006, pág. 67).

Este apoyo familiar es, dentro de un contexto de justicia restaurativa, el interés mostrado por la red social de la familia de la PPL a las necesidades de esta, interpretándolo como un deber colectivo. Dicho interés debe estar acompañado por una predisposición de ayuda activa—en la reparación del daño por parte de la PPL—que se materializa a través de la interacción y la comunicación entre los miembros de la familia, colectivo que también se identifica como víctima indirecta del daño ocasionado y el posterior ingreso de uno de sus miembros en un centro penitenciario.

Relacionados con esta afirmación existen estudios académicos, destacando las obras de autores como Mills, Cobb o Farral, que han probado la relación existente entre unos lazos familiares fuertes durante la estancia en prisión y unos mejores resultados a la hora de la liberación de los internos. La importancia de este apoyo familiar es destacable, al punto de que este—y en general la relación familiar de la PPL—, debería ser foco de la actividad de los equipos técnicos de los centros penitenciarios y parte esencial de los programas de reinserción social de las PPL (Woodward, 2003).

Las relaciones familiares activas durante el encarcelamiento hacen que aquellos que reciben visitas regularmente presentan una tasa de reinserción tres veces mayor que aquellos que no recibieron visitas durante el período de reclusión. Estas visitas pueden funcionar como una demostración de apoyo durante la estancia en el centro penitenciario, lo que refleja una promesa de apoyo continuo proveniente de una red social fuerte. Como dato a tener en cuenta, aquellos que ingresan a un centro penitenciario por primera vez todavía cuentan con una relación activa con los familiares, los cuales asisten y ayudan a las PPL en su proceso de reinserción, mientras que los reincidentes suelen provenir de cuadros familiares desestructurados o desintegrados (Marchiori, 2016).

El recibimiento de un apoyo emocional y práctico permite fortalecer las redes sociales, lo cual disminuye considerablemente las posibilidades de reincidencia delictiva de una PPL, ya que la familia puede alentar a evitar circunstancias que lleven a la reincidencia delictiva, o disuadir de tener contacto con conocidos que puedan envolverlos en actividades delictivas.

Al desarrollar un sentimiento de vínculo con otros individuos, las PPL aumenta la capacidad de reevaluar su propia identidad y de asumirse a sí mismos como capaces

de desistir de cometer nuevos actos delictivos (Maruna, 2001). El mismo autor observó que las personas que se asumen capaces de desistir al crimen son más propensas a mirar hacia el futuro y de reasignarle un nuevo valor y sentido a su vida que permitan ayudar a otros o resarcir algún daño como respuesta, como muestra de reciprocidad al apoyo que han recibido de ellos. Este fenómeno ha sido conceptualizado, como se vio, como reorientación cognitiva (Bottoms, Shapland, Costello, Holmes, & Muir, 2004) o acción transformativa (Laub & Sampson, 2001).

Alice Mills y Helen Codd (2008) explican que esta reorientación cognitiva, no solo permite reevaluar la identidad de los sujetos y sus planes de futuro, sino que también les permite darle un nuevo sentido a su vida a partir de la adopción de un rol familiar activo diferente al desempeñado anteriormente. Ello permite no solo la acción transformadora en el comportamiento de los sujetos, sino el fortalecimiento de las relaciones familiares, las cuales suponen el estrato base del resto de relaciones sociales y comunitarias. Para ello existen dos acciones que deben considerarse a largo plazo para una efectiva reinserción social: el renovar y el reestructurar las relaciones del interno y su entorno familiar. Este último punto se sustenta en que, además del daño causado a las relaciones familiares por el encarcelamiento, suele haber un deterioro previo a dichas relaciones a causa del abuso de alcohol, drogas o del estilo de vida de la PPL antes de entrar en el centro penitenciario (Woodward, 2003).

Sin embargo, este apoyo familiar se ve limitado en ocasiones por razones multicausales, como podrían ser los costos económicos que suponen el desplazamiento de la familia a los centros penitenciarios, a lo que hay que sumar problemas de agenda de las visitas o las medidas de seguridad que se establecen para las mismas a la hora de ingresar en un centro penitenciario (Mills & Codd, 2008). Es por ello que el apoyo que cada familia pueda aportar no solo dependerá de su capital social, sino que deben contemplarse otras variables, como podrían ser la situación económica por la que atraviesa la familia, la distancia geográfica entre el hogar familiar y el centro penitenciario o la colaboración mostrada por el personal de este último en asuntos de visitas e interacciones interno-familiar. En cualquier caso, la función del apoyo familiar no solo es efectiva una vez que la PPL finaliza su condena, sino que la relación con los familiares en el tiempo que dura la misma debería ser facilitada con el

objetivo de que estos puedan ayudar de una manera efectiva en el proceso de reinserción social (Niven & Stewart, 2005).

5.4 El rol de la familia en los procesos penitenciarios

La importancia del apoyo familiar ha sido entendida por los académicos y por los organismos internacionales—como por ejemplo la ONU—como uno de los factores clave en la mejora de los sistemas penitenciarios para el siglo XXI. No obstante, aunque las teorías de los lazos sociales y del capital social sugieren que las relaciones familiares pueden ayudar a la reinserción social de las PPL, existen pocos estudios longitudinales al respecto (Markson, Lösel, Souza, & Lanskey, 2015), lo que se refleja en las legislaciones penitenciarias de este estudio.

5.4.1 La familia en la legislación penitenciaria.

Si se observan la LNEP y la L55SP se puede señalar que el contacto de las PPL con los familiares está permitido a través de diferentes medios—visitas, llamadas, cartas, etc.—, pero en ningún momento se tiene en cuenta el potencial de la relación familiar en la mayoría del tiempo que dura la pena privativa de libertad de un individuo. En la siguiente tabla se enumeran los artículos de cada ley que mencionan a la familia de las PPL y el papel que tiene durante una etapa determinada del cumplimiento de una pena.

Tabla 4:

Legislación referente a la función de la familia en los procesos de reinserción social

	Ley Nacional de Procedimientos Penales	Ley 55 que reorganiza el sistema penitenciario
Reinserción social	Art. 207	Art. 18 y 25
Gestión de los expedientes de los reclusos	Art. 27 y 29	
Servicios médicos	Art. 79, 174 y 177	Art. 68/2
Restricciones, disciplina y sanciones	Art. 36 y 37	Art. 81
Información y derecho de queja de los reclusos	Art. 108	
Contacto con el mundo exterior	Art. 59 y 60	Art. 35, 47, 59, 67, 68 y 69
Trabajo y educación	Art. 93	Art. 13, 18, 56 y 57
Relaciones sociales y ayuda pos penitenciaria	Art. 207	Art. 25 y 125

Fuente: Elaboración propia.

El primero de los grupos establecidos para la comparación de las legislaciones son los artículos sobre los que se hace mención de la familia en los procesos de reinserción

social, objetivo principal de los sistemas penitenciarios. En el caso de México, es el art. 208 de la LNEP el que recoge que el proceso de reinserción social deberá ser auxiliado por la autoridad competente, que ayudará tanto a la PPL como a su familia en este proceso. Cabe destacar que se hace mención de redes de Apoyo Postpenal, aunque no se hace mención de que en esas redes de apoyo se integrará a la familia o si la familia queda identificada como beneficiaria de estas redes. En Panamá, la ley establece en su art. 18 de la L55SP que el vínculo de la PPL y su familia debe mantenerse para poder establecer una reinserción social satisfactoria. Sin embargo, tampoco se hace mención de que la familia deba o pueda participar de estos procesos. El art. 25 de dicha ley, en su VI párrafo, dice que se debe brindar ayuda a la PPL para entrar de nuevo al círculo familiar, pero sin hacer referencia explícita a los familiares en este proceso. Ambas leyes interpretan que la familia es un factor clave para que haya un éxito en la reinserción social de las PPL. Sin embargo, en ambos casos la familia queda como un agente externo que no participa de las acciones ni de los programas de reinserción social promulgadas por las leyes.

En lo referente a la gestión de los expedientes de los reclusos, la normativa internacional—tomando como base las Reglas Mandela de la ONU—requiere que, en el momento de ingresar una persona en un centro penitenciario, debe realizarse un registro personal donde no solo aparezca información personal de la PPL, sino que se necesita información adicional de la familia, como las edades de los integrantes y su lugar de residencia. Además, se contempla que en dicho registro se tengan datos de contacto para casos de emergencias. En el caso de México, el art. 27 de la LNEP establece la creación de esta base de datos personales y establece explícitamente que, en su III párrafo, también debe registrarse a la familia de la PPL, y no solo la familia directa, sino también los dependientes económicos. Posteriormente, en el art. 29, en su III párrafo, se hace referencia a que estos datos familiares son necesarios para que exista un registro censitario. En Panamá dicho registro no tiene en cuenta a la familia, centrándose exclusivamente este en la PPL, como queda reflejado en el art. 17 de la L55SP.

Con respecto a los servicios sanitarios, el art. 79 de la LNEP hace mención de que la familia debe otorgar el consentimiento para el inicio de un procedimiento clínico,

siempre y cuando la PPL no se encuentre en disposición de dar dicho consentimiento. Los art. 174 y 177 de esta misma ley dicen de la familia que esta debe formar parte, cuando proceda, del propio tratamiento clínico que precise la PPL, sin realizar especificaciones. En Panamá, la familia solo interfiere en el proceso clínico cuando el mismo requiera que la PPL sea sometido a una dieta sanitaria en especial, momento en que los familiares podrán proporcionar los alimentos a la PPL, tal y como se refleja en el párrafo II del art. 68 de la L55SP.

En materia de restricciones, disciplina y sanciones la normativa internacional dice explícitamente que el contacto de las PPL con sus familias no puede ser prohibido por las autoridades, excepto en los casos que lo demande la seguridad. En referencia a ello, los art. 36 y 37 de la LNEP reflejan esta prohibición, pero sí admiten las restricciones de las visitas y contacto familiar siempre que lo demande la seguridad. El mismo caso ocurre en el caso panameño, donde entre las restricciones especiales de seguridad pueden ser usados el cese del contacto y de las visitas familiares de las PPL.

Conforme a la información y derecho de queja de las PPL, la LNEP reconoce también el derecho a la familia de la PPL a presentar una queja a la dirección del centro penitenciario. Por su parte, Panamá solo reconoce el derecho legítimo de las PPL a presentar quejas o sugerencias a la autoridad competente en su art. 49, pero en ningún momento se hace referencia de que la familia de los mismos pueda presentar una queja ante las autoridades penitenciarias. Esta característica del sistema penitenciario panameño deja indefensos a aquellos que no cuenten ni con los medios ni con los recursos para poder extender las quejas ante la autoridad competente a través de un actor externo, familia o defensor.

En lo relativo al contacto con el mundo exterior, el art. 59 de la LNEP establece el protocolo de visitas y el art. 60 reconoce el derecho de las PPL a mantener una comunicación con sus familiares en el exterior. Por parte de la ley panameña se recoge de una manera más detallada el proceso de las visitas, siendo ejemplos de ello los art. 35, 47 y 59 donde se recogen las obligaciones de las autoridades penitenciarias que garantizan a las PPL el mantener el contacto con la familia, el art. 67 que regula las salidas especiales para eventos familiares y los art. 68 y 69 que establecen los derechos de comunicación y visita familiar de las PPL.

Conforme al trabajo y la educación recibidos por las PPL la normativa internacional establece que las PPL tienen el derecho de reservar un porcentaje de sus ganancias para enviárselos a su familia. Esta misma premisa queda recogida en el art. 93 de la LNEP y en los art. 56 y 57 de la L55SP. La única diferencia que guardan ambas legislaciones es que en el caso mexicano ese porcentaje de las ganancias laborales de las PPL queda determinado por las autoridades penitenciarias, mientras que en el caso panameño sí que se establecen por ley los porcentajes a entregar a los familiares.

Por último, se ha de destacar uno de los puntos, puesto que es el tema en el que gira nuestra investigación: la relación PPL con su familia mientras el primero está cumpliendo una pena privativa de libertad. Si bien la comunidad internacional dice que esta relación debe ser tenida en cuenta mientras dura la condena, con el objetivo de que la familia sea una herramienta más de la reinserción social, las legislaciones estudiadas reservan este papel para los tramos finales.

En el caso mexicano, el art. 207 de la LNEP refleja que la familia será tenida en cuenta en los servicios post-penales, es decir, aquellos destinados a la reinserción social de la PPL cuando este está a punto de cumplir su pena. Lo mismo ocurre en Panamá, donde la familia sí está representada en estos servicios post-penales que pretenden canalizar a la PPL cuando este esté a punto de cumplir su pena, en los art. 25 y 125 de la L55SP.

Vistos estos artículos se puede señalar que en las legislaciones penitenciarias de México y Panamá no se reconoce el verdadero potencial que estas relaciones podrían tener si son intervenidas o facilitadas por los profesionales a cargo de este proceso de reinserción social. Entre las causas para que este potencial no sea abordado se puede citar el propio diseño de los programas de reinserción social que consideran a la PPL como el único individuo en el que deben centrarse las diferentes actividades programadas o la falta de más estudios académicos longitudinales que demuestren que la relación familiar es uno de los pilares básicos a tener en cuenta en un proceso de reinserción social. No obstante, no se puede negar que ambas legislaciones sí tienen en cuenta a los familiares de las PPL en los procesos de reinserción social de las mismas, lo que marca un punto de partida para futuras investigaciones que desarrollen y profundicen en la naturaleza de las relaciones familiares dentro del ámbito penitenciario.

Capítulo 6.- El perdón

6.1 Introducción

El concepto de perdón es uno de los más controvertidos de esta investigación. Si bien los teóricos de la justicia restaurativa consideran que no es un elemento principal de la misma—sino que representa un elemento secundario deseable, pero no necesario—en este capítulo se destaca su carácter inherente al ser humano y su importancia dentro de los procesos restaurativos.

No se puede negar que el concepto cultural del perdón está ligado al ser humano desde hace milenios y no solo a la civilización occidental, ya que es un fenómeno generalizado, que trasciende en el tiempo, en las culturas y en las especies animales (Fehr, Gelfand, & Nag, 2010). La idea de perdonar—de poder olvidar una ofensa, o más importante, de abandonar los deseos de venganza—ha sido compartida por diferentes civilizaciones a lo largo de la historia, lo que dio pie a que cada una de ellas interpretase el término dependiendo de las coyunturas en las que se desarrollaron.

Se presenta un término cuya ambigüedad queda explicada por el bagaje cultural del ser humano, creándose diferentes interpretaciones que aun hoy se mantienen en los diferentes idearios colectivos. Se podrían diferenciar así tres tipos de perdón; el relacionado a la religión, la espiritualidad y la moralidad, el perdón terrenal—entendido como una figura jurídica—y el perdón abordado como un campo de estudio científico.

6.2 El perdón espiritual y moral

6.2.1 Periferia de Occidente

El origen del concepto de perdón no se encuentra asociado a trasgresiones de leyes terrenales, ni a la comisión de una acción dañina contra otro individuo, sino que el concepto primigenio nace ante la idea cultural de que nuestras acciones deben ser consecuentes a la voluntad divina. Se debe partir de la base de que el concepto de perdón siempre ha estado relacionado con la literatura religiosa, encontrando aquí una de las posibles causas que explican este retraso en el abordaje científico del perdón. Ya cuando se habló de las fuentes de inspiración de la justicia restaurativa, se pudo señalar que las comunidades religiosas menonitas manejan los conceptos de

perdón y reparación del daño, ya que así se recoge en las escrituras del cristianismo (Gorjón Gómez & Rodríguez Rodríguez, 2016). Es decir, el origen del perdón se encuentra ligado a lo espiritual y, en especial, en la concepción de la idea del pecado.

Esta idea de pecado para las culturas más antiguas, como el ejemplo de los diferentes pueblos que habitaron Mesopotamia, no siempre tenía un impacto importante ni en lo cotidiano ni en la conciencia común. No obstante, estos tenían por costumbre el invocar a sus dioses a través de un sinfín de cualidades, que no solo consistían en adular y engrandecer a la divinidad a la que se rezaba, sino que se ponía “por delante un sentimiento de culpabilidad, de pecado y falta, no menos que una conciencia del castigo de esas malas acciones, y una petición de absolución y perdón” (Bottéro, 2001). Este perdón no se pedía por acciones dañinas realizadas contra otros individuos en sí, sino que surgía ante el temor de ser castigados por una divinidad a la que se había faltado al respeto mediante conductas impropias, las cuales esperaban remediarse a través de un arrepentimiento directo entre la divinidad y el que la invocaba.

Esta idea de que el perdón provenía de lo divino y no de lo terrenal es compartida por otras civilizaciones muy distantes en la geografía y en el tiempo. De esta manera se identifica en el Valle de México a la diosa azteca Tlazoltéotl, una deidad de gran importancia relacionada con temas importantes como la vida, la destrucción, la tierra, la agricultura, la fertilidad o el parto. Sin embargo la imagen que ha llegado a la actualidad, reflejada por los religiosos católicos del siglo XVI, la muestran como la deidad de la suciedad y la lujuria, a cuyos sacerdotes eran confesados—en los momentos previos a la muerte del que confesaba, a modo de una extremaunción—los pecados de índole sexual como el adulterio, castigados por las autoridades con la pena capital (Giasson, 2001).

Pero existen otros precedentes de religiones que, aunque creían en la idea del pecado, no concebían una acción de perdonar. De esta manera los antiguos egipcios creían que los pecados serían evaluados en el juicio posterior a la muerte del individuo, el cual debía defender su pureza ante el dios Osiris, que indagaría en la existencia de algún pecado. Por tanto, al no existir la posibilidad del perdón espiritual, el “egipcio se hallaba esencialmente autosatisfecho, no tenía la confesión para el pecado o el error,

ni pensaba en el perdón” (Flinders Petrie, 1998). También para el budismo el perdón es un concepto existente, pero es una figura realmente complicada de alcanzar para los creyentes, puesto que la doctrina recalca “la importancia de la responsabilidad individual y la ley de la justicia universal que no es sino el resultado del principio de la interdependencia de todas las cosas y de la impermanencia y caducidad absoluta de todo en el universo” (Ulloa Rübke, 2011, pág. 69).

Como se ve, estos enfoques asocian la figura del perdón como un don especial reservado a las divinidades, mientras que la idea del perdón entre individuos—tal y como se entiende a fecha de esta investigación—era entendida como el abandono de los deseos de venganza por parte del ofendido. Este último tipo de perdón también existía en las religiones ya citadas, siendo valorado de manera más o menos positiva por cada una de ellas. Por ejemplo, el desistir de la venganza era una idea poco popular—lo que no quiere decir inexistente—en la cosmovisión de las civilizaciones maya y azteca, cuyas deidades exigían como tributo el sacrificio y sangre de seres humanos (Robleto García, 2008), mientras que el perdón solo podía ser otorgado por la divinidad. En el polo opuesto a esta concepción se puede citar de nuevo a la religión budista, la cual no cree que su divinidad—en este caso, el universo—pueda otorgar perdón. Es decir, la religión budista cree que el perdón no es un hecho puntual, sino un modo de vida, una forma de hacer el camino, donde “el perdonar enriquece a quien perdona e inspira a quien recibe el perdón” (Ulloa Rübke, 2011, pág. 80).

6.2.2 En la cultura occidental

El perdón también es un concepto central para el judaísmo, que también reconoce la naturaleza dual del concepto, marcando una diferencia clara entre la fuente que otorga el perdón. Por un lado, es una acción reconciliadora realizada por Dios para con el pueblo de Israel—que previamente ha recibido un castigo divino traducido en epidemias, plagas o hambrunas—el cual muestra arrepentimiento por los pecados cometidos y demanda el perdón divino a través de la realización de sacrificios, la oración y el ayuno. Tan importante es este perdón divino que incluso cuenta con un día propio—el *Yom Kipur*—donde los judíos renuevan sus votos de fidelidad a Dios y se arrepienten por las ofensas cometidas a lo largo del año contra Él. Por otro lado el judaísmo también contempla el perdón entre personas ante la comisión de una acción

dañina, a los que se les exige que “haya una reflexión por parte de los dos implicados, una conversación en la que ambas partes justifiquen sus actos y un arrepentimiento expresado verbalmente” (Goldsmith, Pinilla Imam, & Zapata Feliciano, 2007, pág. 70).

El perdón y el pecado eran conceptos que no tenían cabida en la religión greco-romana ya que, al igual que otras religiones indoeuropeas, eran asociados a una ofensa cometida contra alguna de las numerosas deidades del panteón greco-romano. En una cosmovisión en la cual los dioses tenían personalidad humana, el sacrificio de víctimas era la vía para poder expiar ofensas a una determinada divinidad, ganar su favor, aplacar su furia o, simplemente, captar su atención (Santos, 2007). El perdón era más entendido como la *clementia*, es decir, una cualidad moral entendida como el comportamiento bondadoso para con los enemigos vencidos.

Esta cualidad era utilizada por los gobernantes romanos que necesitaban hacer propaganda de su persona para legitimar su poder, siendo un caso a destacar fue el de Julio César en su obra de propaganda política *De bello civile*. A través de su relato de la guerra contra Pompeyo, César se jactaba de aplicar la *clementia* a todo aquél que deponía las armas y se pasaba a su bando, perdonándole la vida y todas las ofensas cometidas contra él. Pero en este caso, el uso constante de la *clementia* en la propaganda no era tanto para afianzar su poder terrenal, sino su poder temporal o divino. Tras su asesinato, Julio César no solo fue elevado a la categoría de ser divino, sino que la acción de ser benévolo con los vencidos se encarnó en la figura de una diosa, la *Clementia Caesaris*, a mediados del siglo I a.C. (Novillo López, 2013).

Por último, se encuentran dos ejemplos de religiones que no solo reconocen a la divinidad como fuente de perdón, sino que la misma divinidad desea que los seres humanos realicen la acción de perdonar entre ellos mismos, relacionándose así con la concepción budista del perdón. El cristianismo diferencia claramente al Antiguo Testamento como la parte de sus escrituras donde el perdón es otorgado mayoritariamente por Dios tras un castigo y posterior arrepentimiento de su pueblo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento y, concretamente, en los evangelios donde queda narrada la obra de Jesús de Nazaret, el perdón entre las personas es una herramienta de Dios para evitar el derramamiento de sangre y las acciones de venganza, lo que se vuelve en un requisito para sus creyentes. El mundo islámico

comparte esta visión de que cualquier perdón proviene de Dios, el cual no solo realiza por sí mismo la acción, sino que se sirve de la bondad de cada ser humano como herramienta. El perdón en el islam—independientemente de que su naturaleza sea humana o divina—siempre se interpreta como la voluntad de Dios, que impera por encima de las leyes terrenales, por lo que “aunque un juez condene al responsable a la pena capital, este hombre no puede ser ejecutado si la víctima lo perdona” (Goldsmith, Pinilla Imam, & Zapata Feliciano, 2007, pág. 77).

6.3 El perdón como figura jurídica occidental

6.3.1 De Roma a la creación del Estado Moderno

Como se ha visto, el perdón no era reconocido como figura jurídica propiamente dicha en el derecho de la antigua Roma—origen del actual derecho occidental—sino que era entendido como una cualidad loable en un buen gobernante romano. De hecho, la legislación romana se caracterizaba por su dureza para con los que incumplían las leyes, tomando como ejemplo la Ley de las XII Tablas (Bartol, 2006). A la caída de Roma, Europa occidental comienza un largo período de tiempo en el que el conocimiento y la producción de este quedaron concentrados en las manos de religiosos católicos, por lo que durante la Edad Media el concepto de perdón seguirá ligado a la religión.

La mentalidad de los gobernantes medievales giraba en torno a la búsqueda de la gloria en el combate, siendo la victoria y la venganza dos imperativos sociales de la época. En un mundo donde los monarcas medievales luchaban constantemente por mantener su poder contra otros soberanos y contra la concentración del poder por parte de la nobleza, el ideario social del perdón se reflejaba no tanto en perdonar la acción dañina, “sino más bien la cólera, que puede provocar la sospecha de la falta. Es innegable la fuerza del amor, pero, al mismo tiempo, es la época de las venganzas; no se perdona fácilmente” (Nieves Loja, 2015).

Debido a ello, el perdón siguió siendo un concepto de uso casi exclusivo de los teólogos cristianos, quedando ligado a la idea de pecado. En una época donde el pecado era sinónimos de acción ilícita, el perdón solo podía ser otorgado por Dios—en el caso cristiano, a través de sus representantes en la Tierra—tras un periodo de

penitencia por parte del pecador, entendiendo el perdón entre personas como compasión y caridad, más acordes a las enseñanzas de Cristo. Todo cambia con el pensamiento introducido por Tomás de Aquino, que queda más centrado dentro del mensaje de los evangelios, teniendo como máxima que la omnipotencia de Dios se representa ante los seres humanos como la capacidad que tienen estos para perdonar las ofensas cometidas entre sí, abnegando de la violencia y la venganza. No obstante, para Tomás de Aquino, esta acción de perdonar solo era legítimamente aceptable entre miembros de la Cristiandad, atacando virulentamente a movimientos cristianos heréticos y a los infieles (Nieves Loja, 2015).

En el terreno de los gobernantes seculares durante este período no varió mucho la idea de que los soberanos debían actuar de manera paternalista para con todos sus súbditos, manteniendo la idea de la *clementia* romana. Sin embargo, la inestabilidad política de la época hacía realmente difícil a los soberanos comportarse de manera magnánima, sobre todo si se quería mantener el respeto de la alta nobleza ante la institución de la monarquía. Todo cambia con la creación de los primeros Estados modernos, donde los reyes consiguen acaparar paulatinamente el poder político en su persona—gracias a la acción de sus funcionarios y representantes—y con ello, aparece la figura legal del perdón. Un ejemplo lo da la Monarquía hispánica de principios del siglo XVII, cuya legislación entendía diferentes tipos de perdón, entre los que se encontraban el perdón de bienes, en el caso de robos o destrucción, y el perdón de cuernos para el caso del adulterio (Marchant Rivera, 2003).

6.3.2 El perdón en la legislación actual. El caso de México y Panamá

La legislación de los primeros Estados modernos fue evolucionando conjunto a los movimientos culturales y a los acontecimientos históricos importantes, como la Ilustración o la Revolución francesa, al mismo tiempo que también evolucionaba el concepto jurídico de perdón. De esta manera se resalta que en los sistemas de derecho continental el perdón deja de ser un concepto religioso y moral para ser una figura reconocida por la ley, con relevancia jurídica e interpretada por la misma como “el comportamiento de quién, conociendo una ofensa grave y que está tipificada por la ley, inferida a su persona y en algún caso a sus bienes y allegados, no ejercita las acciones conducentes a sancionar al ofensor” (Ragel Sánchez, 1998, pág. 176),

diferenciándose así de otras figuras jurídicas como la condonación, la rehabilitación y la reconciliación. Este reconocimiento del perdón como figura jurídica queda reflejado en diferentes textos pertenecientes a la legislación de los países de estudio de esta investigación, cuyos orígenes se encuentran en este derecho continental o francés.

En el caso de México, el perdón queda recogido en el Código Civil Federal—en adelante CCF—como un elemento aplicable en temas de divorcio en el art. 279 y 281, de herencia, art. 1318, de legado, art. 1454, y de remisión de deuda, en el art. 2211 (CCF, 2019). Por otro lado, el perdón también se recoge en el Código Penal Federal—en adelante CPF—en su art. 93 donde se dice que el “perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo sólo podrá otorgarse cuando se hayan reparado la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, éste extingue la acción penal respecto de los delitos que se persiguen” (CPF, 2019).

También la figura aparece en el art. 338—en el capítulo VII sobre el abandono de personas—como un elemento que puede ser concedido por el cónyuge abandonado por su pareja legal, con la finalidad de que esta última pueda finalizar una condena privativa de libertad, siempre y cuando haya pagado “todas las cantidades que hubiere dejado de ministrar por concepto de alimentos y dar fianza a otra caución de que en lo sucesivo pagará la cantidad que le corresponda” (CPF, 2019). Por último, la LNEP establece en su art. 146—sobre la solicitud de preliberación—que la autoridad penitenciaria puede presentar al Poder Judicial de la Federación o al Tribunal Superior de Justicia una solicitud de conmutación de la pena o de preliberación a aquellos cuyos “de cuyo bien jurídico sea titular la federación o la entidad federativa, o aquellos en que corresponda extender el perdón a estos” (LNEP, 2016).

El uso de la figura del perdón es más limitado en la legislación panameña, como nos demuestra la Ley Nº 2 por la cual se aprueba el Código Civil de la República—en adelante L2CCR—que en su art. 813 centra su uso para temas de herencia entre cónyuges y para la extinción de deudas a través del perdón en sus art. 829 y 831 (L2CCR, 1916). Otro de los documentos jurídicos que recogen el uso del perdón es la L14CPRP, donde la figura del perdón, otorgado por la víctima, aparece como una de las causas de la extinción de la pena en sus art. 114 y 116. En el art. 164 de este mismo

texto, el perdón se identifica como motivo de archivo de la causa en casos de delitos contra la Inviolabilidad del Secreto y el Derecho a la Intimidad (L14CPRP, 2007).

6.4 El perdón como campo de estudio científico

No se puede negar que el abordaje del perdón desde la justicia restaurativa puede estar influenciado, en parte, por las concepciones religiosas y jurídicas, pero son los estudios científicos realizados desde década de 1980 por académicos de diferentes ciencias los que tienen relevancia en esta investigación. Si bien los estudios académicos del perdón son pocos comparados con otros temas de estudio, ya que “el perdón no ha sido considerado un objeto de estudio interesante hasta hace pocos años” (Prieto-Ursúa & Echegoyen, 2015, pág. 230), estos son los que nos dan una verdadera idea del impacto que puede llegar a tener el perdón en un proceso restaurativo. Así, no solo el derecho y la teología han realizado estudios científicos sobre el perdón, sino que es un tema de interés para ciencias como la politología, la filosofía, la psicología o la antropología.

Aunque el estudio del perdón es multidisciplinar, desde que comenzara su abordaje de manera científica, la psicología ha sido la ciencia que más ha profundizado en el tema y en sus efectos a lo largo de la vida de los seres humanos, surgiendo estudios de diferentes ramas de esta ciencia, como por ejemplo la psicología positiva, que “enfatisa la percepción de las fortalezas y aspectos positivos del ser humano y de la realidad, y entre ellos aparece como fortaleza la capacidad de perdonar y la de pedir perdón” (Pertejo Rivas, 2014). Otro ejemplo podrían ser las ramas de psicología clínica, que han explorado el impacto del perdón en el bienestar de las personas, o de psicología del desarrollo, donde se han abordado los cambios en la capacidad de perdonar a lo largo de la vida (Fehr, Gelfand, & Nag, 2010).

6.4.1 Desarrollo científico-conceptual

Se encuentran las primeras definiciones del perdón abordado desde una aproximación científica, como la dada por Enright y Coyle que lo describen como la “voluntad subjetiva de abandonar el resentimiento, los juicios negativos y la indiferencia hacia quien nos ha injuriado o lastimado y poder desarrollar sentimientos de compasión y generosidad” (Casullo, 2005, pág. 42). En esta misma línea se encuentra Losu

Cabodevilla que entiende el perdón como una acción cargada de espiritualidad consistente en “lograr ver al otro como un ser humano susceptible de errores y de entender las posibles causas que lo llevaron a la conducta de ofensa” (Pertejo Rivas, 2014, pág. 14).

Otras definiciones profundizan aún más en el concepto, como por ejemplo la dada por McCullough, Rachal y Worthington (1997), donde el perdón es un concepto laico asociado al fenómeno de transformación que viven las personas cuando disminuyen sus deseos de venganza y aumenta la motivación para realizar una acción conciliadora. Es decir, el perdón no es una acción en sí, sino un proceso completo que puede alargarse más o menos en el tiempo, dependiendo de la gravedad del delito y de si el ofensor se disculpa por su comportamiento. Para Hargrave y Selles este proceso tiene como meta el “lograr que la víctima pueda percibir a su ofensor en términos no amenazantes y poder analizar en forma conjunta la experiencia vivida y el daño provocado” (Pertejo Rivas, 2014, pág. 14). Esta última definición es apoyada por Rocha, Amaris y López-López (2017), que visualizan el proceso como una estrategia de afrontamiento que tiene la víctima para neutralizar el trauma sufrido ante la agresión, con la finalidad de “manejar las demandas estresantes de la falta de perdón frente a una ofensa en un proceso de cambio de las respuestas negativas frente a una ofensa para disminuirlas y/o cambiarlas por respuestas positivas a nivel emocional, cognitivo y comportamental” (pág. 274).

Pero no se habrían realizado estos avances en el estudio del perdón sin que los mismos hubiesen estado acompañados por el desarrollo de instrumentos y herramientas de medición. Estos instrumentos han permitido a los profesionales de la psicología obtener datos más precisos y resultados más detallados (McCullough, Rachal, & Worthington, 1997) conforme han cambiado a lo largo de los años, dependiendo de la definición de perdón a la que respondían (Pertejo Rivas, 2014), o de como enfatizaban diferentes aspectos del perdón (Worthington, y otros, 2014). Para facilitar el análisis del proceso, los estudios académicos han identificado una serie de elementos que están dentro de la composición del perdón.

Uno de los elementos principales del perdón es la empatía, o la capacidad de adoptar la perspectiva cognitiva de otra persona—en este caso el ofensor—con el fin de

comprender las causas y motivos que la llevaron a actuar de una manera determinada. Aunque a la empatía se la identifica como una condición facilitadora a la hora de otorgar el perdón, el desarrollo de la misma en la víctima será directamente proporcional a su percepción de gravedad del daño cometido por el victimario (McCullough, Rachal, & Worthington, 1997). Los otros dos elementos principales del proceso de perdón son dos repuestas del comportamiento humano ante la comisión de un daño. Por un lado, la víctima de un daño elude a su victimario, e incluso los lugares frecuentados por el mismo, para no dar pie a que vuelva a suceder otra acción dañina. La otra reacción es experimentar un deseo de venganza, en el intento de la víctima en tomar represalias contra su victimario (Beltrán-Morillas, Valor-Segura, & Expósito, 2015). Si bien un proceso de perdón efectivo requiere que aumente el sentimiento de empatía, también requiere un eventual acercamiento con el victimario y la disminución de los deseos de venganza.

6.4.2 Tipos de perdón

No faltan los estudios de la tipología del perdón que diferencian diferentes modalidades de perdón dependiendo, principalmente, del número de personas que participan en un proceso de perdón. Un ejemplo de esta tipología fue la presentada por Enright en 1996, identificada como la triada del perdón, que comprendía el perdón a otros, a uno mismo y a las situaciones (Prieto-Ursúa & Echegoyen, 2015), de los cuales, y a efectos de esta investigación, se abordarán solo dos tipos de procesos.

6.3.2.1 El perdón intrapersonal

El perdón no es solo un proceso que exige la existencia de dos o más sujetos, sino que también puede ser un proceso personal que es llevado a cabo por el victimario, ante la condición de que exista un reconocimiento de la responsabilidad de las acciones dañinas cometidas y una actitud de cambio de hábitos y conducta. Este autoproceso, conocido como perdón intrapersonal, es tanto “una conducta específica, dirigida a transgresiones específicas en las que el sujeto ha dañado a otros o a sí mismo, o como un rasgo de personalidad, una tendencia a perdonarse en distintas situaciones y a lo largo del tiempo” (Rocha, Amarís, & López-López, 2017, pág. 276).

Existen grandes diferencias entre los sujetos que experimentan un proceso de perdón intrapersonal y los que no. El malestar de aquellas personas que no se perdonan a sí misma es mucho más severo que en los casos en que el perdón es otorgado por otro sujeto, ya que el ofensor tiene contacto continuo consigo mismo y con su conducta, por lo que le es imposible evadir la situación y el sentimiento de culpabilidad (Enright, 1996). La falta de un proceso de perdón intrapersonal “conduce a respuestas que involucran componentes atencionales, fisiológicos y comportamentales que causan ansiedad, depresión, hostilidad y hasta enfermedades cardíacas” (Rocha, Amarís, & López-López, 2017, pág. 276).

Por otro lado, la obra de ciertos autores evidencian que el perdón, tanto el acto de recibir como otorgar, está directamente relacionado con el bienestar mental de los seres humanos (Karremans, Van Lange, Kluwer, & Ouwerkerk, 2003), una alta autoestima, el aumento de las conductas prosociales y de amabilidad, así como de la propia capacidad de perdonar a terceros (Prieto-Ursúa & Echegoyen, 2015). En lo que nos compete, el perdón intrapersonal es un proceso indispensable para que un victimario pueda llegar a querer iniciar un proceso de justicia restaurativa. Sin embargo, este tipo de perdón no formaría parte del proceso restaurativo en sí, ya que debe ser un paso a realizar antes del inicio de los encuentros.

6.3.2.2 El perdón interpersonal

En los casos en que el proceso de perdón es llevado a cabo por dos sujetos o más—como es el caso de esta investigación—se está hablando de perdón interpersonal, entendido como el conjunto de cambios motivacionales mediante los cuales una persona se encuentra motivada por la conciliación y la buena voluntad con el victimario, a pesar de las acciones dañinas que se pudieron producir (McCullough, Rachal, & Worthington, 1997). Existen dos grandes diferencias del perdón interpersonal con el intrapersonal.

La primera de ellas es que el perdón interpersonal puede ser incondicional, sin necesidad de que el victimario interactúe con la víctima, por lo que se le considera como una estrategia que tiene como objetivo aliviar el malestar propio de la víctima ante el daño recibido (Prieto-Ursúa & Echegoyen, 2015). La segunda diferencia es que el perdón interpersonal puede dar pie a la reconciliación entre la víctima y el

victimario, aunque ello no siempre es deseable ya que “puede poner al ofendido en una situación de riesgo de ser revictimizado si se trata de una relación abusiva y maltratadora” (Rocha, Amarís, & López-López, 2017, pág. 276).

Pero no siempre la naturaleza de este perdón interpersonal es incondicional, cabiendo la posibilidad de que la víctima necesite percibir una serie de elementos que le demuestre que la responsabilidad y la promesa de cambio por parte del victimario son verdaderas. El perdón interpersonal puede necesitar de elementos como la empatía por parte de la víctima, para poder así comprender las motivaciones personales del victimario (Casullo, 2005), o el nivel de compromiso en la relación existente entre ellos (Karremans, Van Lange, Kluwer, & Ouwerkerk, 2003). Este nivel de compromiso estará afectado a su vez por una serie de determinantes como la cercanía social entre ambos, si hay relaciones de parentesco, la autoestima, el nivel de ingresos económicos o la percepción propia del mundo (Rocha, Amarís, & López-López, 2017).

6.4.3 El proceso del perdón interpersonal

Aunque pueda parecer un proceso rápido y sencillo debido a las pocas etapas que lo componen, cada una de estas etapas del proceso de otorgamiento del perdón interpersonal constituye un proceso en sí mismo. El proceso del perdón interpersonal es un proceso bilateral que requiere la voluntad y una gran preparación tanto de víctima como victimario (Armour & Umbreit, 2004).

La primera etapa depende de la predisposición del victimario ante la acción dañina realizada, existiendo a su vez tres posibles reacciones del mismo: la primera de ellas es evitar la responsabilidad, externalizándola y culpando a factores externos—lo que se conoce como falso perdón—, la segunda consiste en culpabilizarse en exceso, algo que conlleva a tendencias depresiva, pero que no suele ir acompañada de una responsabilidad. Por último, se presenta la tesitura de que el victimario afronte el daño causado—realizando a la vez un proceso de perdón intrapersonal—y pretenda llevar a cabo algún tipo de acción compensatoria para su víctima. Esta última reacción comprende “dos dimensiones: una dimensión externa, interpersonal, relacionada con la comunidad, la situación ofensiva y la víctima; y otra interna, intrapersonal, relacionada con la autoestima y el autoconcepto” (Prieto-Ursúa & Echevoyen, 2015, pág. 234).

La segunda etapa del proceso del perdón sería la emisión de una disculpa por parte del victimario, acción que da a entender a la víctima que el victimario ha realizado una autoevaluación de una acción dañina de la que se siente responsable y un proceso de cambio de actitud o conducta. La visualización de esta responsabilidad facilita el establecimiento de una empatía por parte de la víctima (McCullough, Rachal, & Worthington, 1997), que a partir de ese momento será quien decida si el proceso de perdón continua.

Finalmente se encuentra la tercera etapa en la que se puede o no otorgar el perdón, algo que no solo significa para la víctima experimentar una empatía con el victimario, sino que conlleva un proceso propio donde se ha de aceptar el daño recibido y las causas que motivaron esa acción dañina, además de sustituir los posibles sentimientos negativos como la evitación, el miedo o los deseos de venganza. Tras esta última etapa “la víctima tiene dos opciones, o pasar página y romper la relación para siempre, o entrar en la segunda etapa, que supone la reconstrucción de la relación con el victimario” (Pertejo Rivas, 2014, pág. 17).

Estos procesos, en conjunto, pueden sintetizarse para obtener una definición concisa y propia del concepto de perdón interpersonal—el tipo de perdón identificado a efectos de esta investigación—, entendiéndolo como un proceso transformativo de conducta y pensamiento que puede ser otorgado por la víctima de una trasgresión violenta a la persona que cometió dicha trasgresión. Este proceso se caracteriza por una modificación de sentimientos negativos, como el rencor y la evitación, por otros positivos, como la empatía o el altruismo a través de un desarrollo prosocial que busque la solución pacífica a un conflicto.

6.5 El perdón en la justicia restaurativa

Son varios los trabajos de diferentes académicos e investigadores de la justicia restaurativa que rechazan la idea de que el perdón debe ser considerado como un elemento base de la justicia restaurativa. Uno de ellos, Howard Zehr (2007), reconoce que el perdón es un elemento asociado en un proceso restaurativo, pero no primordial, ya que “ni el perdón ni la reconciliación figuran como principios principales o ejes centrales de la justicia restaurativa” (pág. 12). A ello se suma la posibilidad de que cuanto más se use el término perdón de manera explícita dentro de un proceso

restaurativo, las víctimas pueden llegar a sentirse predicadas—ya que relacionan la figura del perdón con la religión—, incluso ofendidas (Armour & Umbreit, 2004).

Tanto es así que el perdón ha sido casi desterrado de los estudios académicos de la justicia restaurativa en Australia, aun cuando las pruebas empíricas muestran que la probabilidad de que se estableciese un proceso de perdón interpersonal era el doble que en los casos llevados ante la justicia retributiva (Braithwaite, 2016). Estos datos han propiciado que algunos autores que no reconocían al perdón como un elemento de la justicia restaurativa alberguen dudas, ya que la misma “proporciona un espacio en el cual pueden tener lugar estos procesos. De hecho, en ese espacio se alcanza un cierto grado de perdón, o aún de reconciliación, con más frecuencia que dentro del contexto confrontacional del sistema de justicia penal” (Zehr, 2007, pág. 12).

Ante las posiciones dudosas o escépticas acerca de la concepción del perdón como un elemento base de la de justicia restaurativa se presentan otros estudios que reconocen el perdón en la justicia restaurativa, como los que identifican el perdón como un proceso que se realiza a la par del proceso de reparación del daño en el que “no se busca como objetivo primordial la obtención de beneficios económicos, son otro tipo de reparaciones como el perdón” (De la Rosa Vázquez & Cabello Tijerina, 2016, pág. 59). Algunos relacionan al perdón con el apoyo de la comunidad, ya que identifican que la “calidad de las relaciones interpersonales e intergrupales está determinada en gran medida por la capacidad que se tiene para perdonar y para pedir perdón” (López López, Andrade Páez, & Correa-Chica, 2016, pág. 187). Otros relacionan al perdón con el objetivo final de la justicia restaurativa, el cual no se debería centrar exclusivamente en la reparación del daño a la víctima, sino también podría brindar la reincorporación del victimario a la comunidad a través del perdón (Armour & Umbreit, 2004).

Esta relación nos indica que, si bien debe ser tratado como un elemento implícito y evitar su abordaje directo durante un proceso—dado que su uso explícito puede resultar contraproducente—de justicia restaurativa, el perdón es un elemento inherente de la justicia restaurativa en el que se debe profundizar. Los resultados de estudios clínicos que relacionan una buena salud con la existencia de un perdón entre los protagonistas de una acción dañina (Karremans, Van Lange, Kluwer, & Ouwerkerk, 2003), dan pie a pensar que los procesos de justicia restaurativa tendrían mejores

resultados, y podrían aplicarse en más campos de la sociedad, si los facilitadores considerase al perdón como un elemento base a evaluar (Braithwaite, 2016).

Es por esta razón por la que todavía es necesario el realizar más estudios sobre cómo es la experiencia vivida de víctimas y victimarios en lo relacionado al otorgamiento del perdón dentro de un proceso restaurativo (Ezeihuoma, 2018). Además, los actuales sistemas de justicia retributiva solo consideran al perdón como una figura jurídica, por lo que no se puede esperar que los mecanismos de justicia tradicionales desarrollen una cultura de perdón. Por ello la justicia restaurativa puede ser presenta no solo como una manera alterna de que la justicia llegue y sea percibida por la población, sino una vía para poder reivindicar una sociedad en la que impere una cultura de paz (Braithwaite, 2016).

Capítulo 7.- La resiliencia familiar

7.1 Introducción

Para poder abordar este capítulo hace falta que se analicen dos términos por separado para poder hacer una simbiosis, por tanto primero, se verá qué es la resiliencia y después se hará una introducción al concepto de familia para poder elaborar un concepto propio de la resiliencia familiar. Finalmente se describirá a la resiliencia familiar en el contexto de las PPL.

El concepto de resiliencia no es exclusivo de ninguna ciencia o disciplina. Su etimología proviene del latín *resilio* y su significado es saltar hacia atrás, rebotar, volver a saltar (Juárez Rodríguez, 2012). Ejemplo de ello es que, aunque el abordaje del concepto de resiliencia en este trabajo de investigación se realice desde la óptica de las ciencias sociales, el origen del concepto se encuentra en ciencias como la física o la medicina. En el primer caso, la mecánica entiende a la resiliencia como la capacidad de un material, o de un sistema, de recuperar su forma inicial después de haber estado sometido a largos periodos de presión (Cortés Cely, 2015), la ingeniería hace referencia a la resiliencia como la capacidad de los materiales de acumular energía elástica antes de volverse fluidos (López Sánchez & Ubals Álvarez, 2012), mientras que la medicina identifica la resiliencia como “la capacidad de alguien para resistir una enfermedad, una infección, una intervención, por sus propios medios o con la ayuda de medicinas” (de Andrade Seidl & da Cruz Benetti, 2011, pág. 45).

7.2 Origen del concepto

Posteriormente el término fue apropiado para las ciencias sociales con autores como Borys Cyrulnik, Norman Garmezy o Viktor Frankl, siendo abordado desde entonces por la psicología como un factor más a estudiar dentro de la salud mental de las personas. La psicología positiva ha sido la que más ha desarrollado el concepto de resiliencia dentro de los estudios destinados a conocer la evolución de la psicopatología—o el estudio científico de enfermedades y desórdenes mentales—y etiología—o el estudio científico de las causas de un fenómeno—de las enfermedades mentales (Becoña, 2006).

Se diferencian tres etapas en el estudio de la resiliencia desde que se comenzara a usar el término en el campo de la psicología encontrando, en primer lugar, los estudios realizados desde la década de los setenta del siglo XX. Estos se centraban en analizar los factores de riesgo y de resiliencia en el desarrollo humano, considerando a la resiliencia como un rasgo personal, siendo ejemplo de ello la investigación longitudinal realizada por Werner y Smith con niños en barrios marginales de Hawaii (Juárez Rodríguez, 2012). Es a partir de la década de los noventa del mismo siglo cuando la concepción del término se amplía, agregando el estudio de factores familiares y sociales, por lo que la resiliencia pasa a considerarse un proceso en el que influyen diferentes factores, no solo los rasgos personales de cada individuo (Fernandes de Araújo, Teva, & Bermúdez, 2015).

Por último, y relacionado con esta tesis de investigación, los estudios de las dos primeras décadas del siglo XXI han resaltado que este proceso de resiliencia no solo tiene un carácter individual, sino que es un proceso que puede ser realizado a una escala social mayor. Ante ello se presentan los estudios realizados en países que han vivido un conflicto civil armado con alto grado de virulencia y duración, como puede ser el caso de Colombia (Latorre Iglesias, 2010; Torres Castrillón, 2012), donde se muestran los procesos de reforzamiento provocados por el enfrentamiento a las situaciones adversas vividas por una familia, un grupo o una comunidad (Gómez & Kotliarenko, 2010).

7.3 Definición

El hecho de que la resiliencia sea un objeto de estudio multidisciplinar provoca que su definición varíe dependiendo de la ciencia desde la que se aborde el concepto, lo que ha originado algunas críticas que giran en torno a la utilización de teorías y metodologías con poco reconocimiento de los factores que conforman la resiliencia (Fernandes de Araújo, Teva, & Bermúdez, 2015). Sin embargo, sí existen ciertos factores identificados en consenso por la comunidad científica.

Una de las definiciones más aceptadas del término resiliencia la proporciona Garmezy en 1991, identificándola como “la capacidad para recuperarse y mantener una conducta adaptativa después del abandono o la incapacidad inicial al iniciarse un evento estresante” (Becoña, 2006, pág. 127). Waugh, Thompson y Gotlib (2011)

relacionan la resiliencia con personalidades equilibradas y saludables psicológicamente, describiéndola como la capacidad y el proceso de adaptación que vence la tensión y adversidad mientras el individuo mantiene un funcionamiento psicológico y físico normal. *Grosso modo*, la resiliencia es la capacidad de resistir, recuperarse y adaptarse en caso de una alteración del estado normal percibido (TNO, 2014).

Esta alteración de este estado normal percibido es comparada por Boris Cyrulnik como una situación eventual traumática. Es decir, este autor es uno de los primeros en describir a la resiliencia no como un hecho puntual, sino como un proceso dilatado en el tiempo en el que se termina por superar un trauma, entendido como “una pérdida de nosotros mismos, necesitamos sobrevivir a esa situación, incluso lo asemeja con la muerte, la persona está rota, desmembrada, no se sabe qué hacer, se vive atrapado en el pasado (Juárez Rodríguez, 2012, pág. 14).

Apoyando la idea de la resiliencia como un proceso, se puede citar el trabajo de Forés Miravalles y Grané Ortega (2008) que reconocen que la resiliencia “está vinculada al desarrollo y crecimiento humano dado que evoluciona a través de las fases que configuran el ciclo vital, y que no constituye un estado definitivo porque nunca es absoluta o total” (pág. 38). En relación con este argumento, la resiliencia es entendida como “un concepto interactivo que se refiere a la combinación de eventos adversos y un resultado psicológico positivo frente a estas experiencias” (Fernandes de Araújo, Teva, & Bermúdez, 2015, pág. 258) del que se espera que los individuos obtengan “un nivel de desarrollo normal en todas las dimensiones que componen al ser humano, vale decir en lo físico, cognitivo, emocional y social” (García Flórez, 2010, pág. 2).

Sin embargo, cada caso presenta diferentes características, por lo que se debe esperar que no todos los individuos que afrontan una situación traumática a lo largo de sus vidas respondan de igual manera. Las diferentes respuestas ante el trauma pueden ser clasificadas en disfuncional—cuando los individuos desarrollan acciones autodestructivas como consecuencia de la experiencia—, con pérdida—cuando se produce una lenta vuelta a la normalidad pero sin una curación integral de las heridas—y homeostática—cuando los individuos no le dan importancia al trauma y tratan de evitarlo y olvidarlo— (Juárez Rodríguez, 2012, pág. 15).

7.4 Factores del proceso de resiliencia y resultados del proceso

Existen dentro del proceso una serie de factores que se relacionan de manera interactiva y que condicionarán el desarrollo y resultado del mismo (de Andrade Seidl & da Cruz Benetti, 2011), pudiéndose agrupar en dos grandes grupos debido a su naturaleza externa o interna con respecto a los individuos que realizan el proceso.

7.4.1 Factores de riesgo o vulnerabilidad

Por un lado, se identifican los factores de riesgo y vulnerabilidad que, según define Rutter (2012), son las variables que pueden disminuir la probabilidad de que una persona o grupo afronte con resiliencia un evento traumático. Entre estos se pueden destacar la exposición frecuente a condiciones sociales adversas—como la pobreza, la falta de oportunidades laborales y educativas o la discriminación racial o económica—y a eventos traumáticos—ya sean continuos, como los abusos sexuales o eventuales, como conflictos armados o desastres naturales—que, de presentarse, aumentan el impacto del daño experimentado, “pudiendo tornarse crónico de no mediar nuevos procesos de recuperación y fortalecimiento” (Gómez & Kotliarenco, 2010, pág. 109), lo que impediría el correcto desarrollo de un proceso de resiliencia.

7.4.2 Factores de protección o psicosociales

Por otro lado, se deben tener en cuenta los factores de protección, o aquellos recursos psicosociales propios de cada individuo o grupo que pueden ser fortalecidos con la intención de despertar una actitud resiliente ante los traumas que puedan presentarse (Juárez Rodríguez, 2012). Entre estos factores se hallan el optimismo, el humor, el ejercicio físico (Reche García, Tutte Vallarino, & Ortín Montero, 2014), la capacidad de relacionarse en sociedad, la iniciativa para afrontar el trauma y creatividad a la hora de abordarlo (García Flórez, 2010). Aquí es donde destaca la primera referencia espiritual a la hora de abordar una situación traumática desde un punto de vista metafísico, puesto que existen autores que identifican que si “la persona muestra capacidad para descubrir un sentido y una coherencia en la vida” (Aguiar Andrade & Acle-Tomasini, 2012, pág. 54) puede ayudar en el desarrollo de un proceso resiliente, y por tanto, “es factor importantísimo en la búsqueda de la felicidad y en la conquista de la resiliencia” (García Flórez, 2010, págs. 17-18).

7.4.3 Cambios tras un proceso resiliente

Si los factores de riesgo y vulnerabilidad se menguan, mientras que se positivizan los psicosociales, las personas que atraviesan un proceso de resiliencia pueden experimentar una serie de cambios en su conducta que les valdrán para afrontar nuevas situaciones traumáticas que se presenten posteriormente. El primero de estos cambios se refleja a nivel individual, sobre todo en lo referente a la confianza y determinación de afrontar nuevos sucesos traumáticos. Seguidamente se encuentran los cambios en las relaciones interpersonales, puesto que el hecho de experimentar conjuntamente una situación traumática puede dar como resultado un establecimiento de unos lazos personales que no existían, o bien el reforzamiento de aquellas relaciones que se deterioraron a raíz del suceso traumático. A su vez, estos cambios interpersonales también pueden facilitar el surgimiento de un sentimiento de empatía y deseos de ayudar con terceras personas que están viviendo una situación traumática parecida. Por último, se identifican los cambios en lo espiritual y en la percepción de la vida, debido a que una experiencia traumática puede cambiar los valores predeterminados del individuo o el grupo, haciendo valorar cosas que antes se tenían por supuestas (Vera Poseck, Carbelo Baquero, & Vecina Jiménez, 2006).

7.5 La familia como grupo resiliente

Como se apuntó, la resiliencia no es un proceso exclusivamente individual, sino que también puede darse entre grupos sociales, desde familias a comunidades y sociedades, lo que implica un manejo efectivo de la voluntad y el empleo de competencias afectivas, sociales y de comunicación, que permiten reconocer, enfrentar y modificar la circunstancia ante una adversidad colectiva (Aguiar Andrade & Acle-Tomasini, 2012). Por tanto, se puede identificar a los grupos resilientes como aquellos que “pueden hacer frente a las amenazas y disturbios resultantes de los cambios sociales, económicos y físicos” (TNO, 2014, pág. 4). Pero ello no quiere decir que en los estudios sobre grupos la resiliencia sea identificada como una cualidad, sino que estos grupos presentarán momentos y episodios de mayor debilidad y susceptibilidad, en tanto en otros momentos su resistencia, adaptación y superación de los obstáculos, aparecerá nítidamente en su actuar” (García Flórez, 2010, pág. 2).

Para efectos de esta investigación, es de especial interés y relevancia conocer cómo un evento traumático es afrontado por un grupo social en concreto, en este caso la familia, cuando uno de sus integrantes recibe una condena de privación de libertad. En otras palabras, el objetivo que se presenta es poder definir el significado de la resiliencia familiar de las PPL. Si bien ya se abordó el concepto de resiliencia, para crear una definición propia es necesario también tener una leve concepción del significado del término familia.

7.5.1 Origen del concepto

Cuando se habla del concepto de familia se nos presentan ciertas dificultades para poder elaborar una imagen clara que represente a dicho concepto, puesto que el mismo puede ser abordado por un gran abanico de ciencias, como son la antropología, la sociología, la medicina, la economía o el derecho, a lo que se han de sumar todas las interpretaciones subjetivas de cada individuo, fruto de sus experiencias de vida particulares dentro del seno de esta institución social.

La familia, abordada desde la perspectiva de las ciencias sociales, ha sido una de las estructuras básicas de la sociedad desde tiempos remotos de la historia de la humanidad, tanto las organizaciones familiares se presentan en todos los rincones de la ecúmene, existiendo una “presencia universal de grupos familiares de variada índole, a tal punto que ha surgido un lugar común: aquel que considera a la familia como la célula básica de la sociedad” (Meler, 2008, pág. 161). La naturaleza de las relaciones establecidas entre los individuos que componen dicha estructura cambia dependiendo del lugar y del tiempo en el que se estudie, es decir, la familia también queda sujeta a los cambios culturales que experimenta el género homo a lo largo del tiempo. Es por ello que “la antropología social y la demografía principalmente, centran su interés en visualizar cómo, por qué y cuáles son las causas de que las familias modifiquen su estructura partiendo del concepto de familia” (Gutiérrez Capulín, Díaz Otero, & Román Reyes, 2016, pág. 222)

Para ejemplificar estos cambios hay que atenerse a la comparación entre la familia actual en Occidente y la estructura familiar de la aristocracia romana, en la cual una serie de personas, no necesariamente ligadas por lazos biológicos, quedaban ligadas a los designios y decisiones del *pater familias* (Amunátegui Perelló, 2007). Este *pater*

familias quedaba representado por un varón adulto, sujeto de derecho, que velaba por la prosperidad del colectivo que de él dependía, hasta el punto de que, entre sus competencias, también conocidas como *patria potestas*, se encontraba la de ordenar la muerte de los integrantes de la familia, si así se consideraba necesario.

Durante el largo período de tiempo que supuso la Edad Media, la concepción que los romanos tenían de familia quedó influenciada por las culturas foráneas traídas por los denominados pueblos bárbaros en las invasiones de los siglos IV y V de la era cristiana. Además, la desaparición de la esclavitud en Occidente a comienzos de esta edad y la difusión de la economía agropecuaria hicieron que las unidades familiares se expandiesen y multiplicasen, por lo que se entiende que la familia medieval era la base de toda organización social, no solo una organización exclusiva de las élites. Otra de las características surgidas en este período era la normalización de los lazos afectivos de los integrantes de la familia, la cual ya no era simplemente vista como una estructura cuya única función era la reproducción y perpetuación del grupo familiar (López, 1998).

La importancia de la familia como entidad socio-política comenzó a ser objeto de estudio en la Europa de la Ilustración, donde se encuentran a autores como Jean Jacques Rousseau que, en su libro “El contrato social” de 1762, fue uno de los primeros en señalar la importancia del papel que la familia ha desempeñado como ente político a través de la historia. En el segundo capítulo del primer libro de dicha obra, se puede ver como la familia vive un proceso de atomización, alejándose cada vez más de las extensas familias con fines económico-reproductivos. El autor destaca que la unión natural de este grupo social termina cuando los hijos no tienen necesidad de la protección de los progenitores, por lo que si el grupo continúa unido “no es ya forzosa y naturalmente, sino voluntariamente; y la familia misma no subsiste más que por convención” (Rousseau, 2012, pág. 5).

Posteriormente, la familia fue tratada por otros autores como Friedrich Engels con su obra “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado” de 1884. En ella entiende a la familia como la célula social base, reflejo de los mecanismos de producción de cada sociedad y sujeta a los cambios que en esta pudieran producirse, quedando condicionada por el “orden social en que viven los hombres en una época o

en un país dados, está condicionado por esas dos especies de producción: por el grado de desarrollo del trabajo, de una parte, y de la familia, de la otra” (Engels, 2011, pág. 11). Cabe destacar que Engels, dentro de una ideología marxista, entiende que la extinción de la institución familiar sería uno de los pasos necesarios para acabar finalmente con los Estados, puesto que esta “construcción se relaciona con arreglos destinados a brindar legitimidad a las relaciones de poder cristalizadas” (Meler, 2008, pág. 162).

Claude Levi-Strauss, pionero en la antropología estructuralista—que entiende que la familia es un grupo abstracto y que, por tanto, su configuración es diversa (Meler, 2008)—, enfocó varios de sus estudios a la familia, al considerarla una de las estructuras básicas de la sociedad. Para este autor la familia queda identificada como un grupo que guarda su origen en el matrimonio de un hombre y una mujer, al que se le suma la descendencia tenida por la pareja y otros posibles parientes agregados. Los individuos que componen el grupo familiar se unen por “lazos legales, derechos y obligaciones económicas, religiosas y de otro tipo. Además, existen una red precisa de derechos y prohibiciones sexuales, más una cantidad variable y diversificada de sentimientos psicológicos tales como amor, afecto, respeto, temor, etc.” (Lévi-Strauss, 1956, pág. 19).

7.5.2 El concepto de familia en la actualidad

Para la década de los años 70 del siglo XX, Goldstein percibió que la sociología no solo debía estudiar a los individuos como entes independientes, sino como un grupo que comparte ciertos valores que marcarán el comportamiento grupal, ya que la familia es “transmisora de tradición, y, por ende, de las distintas formas de memoria familiar, donde se dará la aceptación de ciertas actitudes y el rechazo de otras” (Gutiérrez Capulín, Díaz Otero, & Román Reyes, 2016, pág. 222). Es configuración del comportamiento a través de la enseñanza de valores y creencias es reflejada por Oliva Gómez y Villa Guardiola (2014) que destacan que la familia “ha sido considerada el espacio que permite en forma integral, a cada individuo, el convivir, crecer y compartir con otras personas, los valores, normas, creencias, tradiciones, comportamientos, conocimientos, experiencias y afectos que resultan indispensables para su pleno desarrollo en la sociedad” (pág. 13).

Se puede citar también la definición, mucho más funcional, propuesta por Inés Alberdi, la cual describe a la familia como un grupo originado por la unión de “dos o más personas unidas por el afecto del matrimonio o la filiación, que viven juntas, ponen sus recursos económicos y consumen conjuntamente una serie de bienes de la vida cotidiana” (Sánchez Urios, 2006, pág. 66).

Otra definición, acorde con la conceptualización de la familia como un grupo diverso, es dada por la ONU, que identifica a la familia “como una unidad en los estudios demográficos que representa todo un hogar o una parte de éste; una familia estadística o una familia censal generalmente se compone de todos los miembros de un hogar emparentados por consanguinidad, adopción o matrimonio” (Barahona, 2012, pág. 59). Por su parte, el INEGI (2013) define a la familia como “el ámbito donde los individuos nacen y se desarrollan, así como el contexto en el que se construye la identidad de las personas por medio de la transmisión y actualización de los patrones de socialización”. Es decir, no solo los integrantes del grupo definen exclusivamente a la familia, sino que existe un abanico de variables externas que pueden influir a la hora de buscar una definición del concepto de familia.

Se resalta que cuando se habla de familia se crea la imagen de un grupo de personas que establecen una relación social basada en la consanguineidad y la cotidianeidad y que tiene como fin la reproducción y supervivencia de sus integrantes y del grupo en sí, a través de la transmisión de actitudes, conocimientos y valores. No obstante, esta relación no es exclusivamente biológica, puesto que existe la posibilidad de que dentro de ese seno familiar tengan cabida personas que no comparten lazos biológicos con el resto y que han sido aceptadas por razones multicausales. Por esta razón se encuentra una diversa tipología de los grupos familiares, dependiendo de los diferentes factores que afectan a la configuración y normal desarrollo de los integrantes del grupo.

7.5.3 Tipos de familia

La diversidad es una de las cualidades que caracterizan a los grupos familiares actuales, por lo que se nos presenta una amplia gama en la que clasificar a estos grupos dependiendo de sus características, rompiendo así con la concepción tradicional de la familia que tiene como punto de partida el matrimonio entre dos personas de distinto sexo. De esta manera se encuentra que existen “diversas formas de familiarización,

tales como los hogares monoparentales, las familias ampliadas, las familias nucleares con dos progenitores, los hogares unipersonales, las familias producto de la reproducción asistida, las familias creadas por adopción de los niños y las familias homoparentales” (Meler, 2008, pág. 159). Este proceso de diversificación se produjo— si bien a fechas de esta investigación todavía era tema de debate—en Latinoamérica en las dos primeras décadas del siglo XXI de manera independiente al nivel de desarrollo económico y demográfico de cada país, registrándose el proceso en la mayoría de los estratos y cayendo los porcentajes de familias con una configuración tradicional (Ullmann, Maldonado Valera, & Nieves Rico, 2014).

Gracias a la clasificación realizada por Valdivia Sánchez (2008), se puede tener una concepción detallada de la posible diversidad en la composición de los grupos familiares, quedando representada en la siguiente tabla:

Tabla 5:

Tipos de familia según integrantes y características

Tipo de familia	Características
Nuclear reducida	Se conforma de los padres y su descendencia. Ambos padres suelen trabajar fuera de casa, por lo que los hijos desde edades muy tempranas pasan el día en centros infantiles y se acude constantemente a los abuelos para atender a los nietos facilitando el trabajo de los padres. El trabajo obliga a un mayor reparto de las actividades en el hogar incluyendo el cuidado de los hijos
Hogares monoparentales	Es aquel en el que solamente está presente o el padre o la madre. La familia monoparental reviste hoy muchas modalidades definidas por características como: la persona que encabeza; la causa de la monoparentalidad; el origen de la monoparentalidad y/o la madurez de la madre
Uniones de hecho	La forman las parejas que viven en común, unidos por vínculos afectivos y sexuales, incluyendo la posibilidad de tener hijos, pero sin mediar el matrimonio. Mantienen mayor flexibilidad en su organización
Las parejas homosexuales	Es la familia conformada por una pareja homosexual que puede o no tener hijos. Es un tipo de familia que aún se encuentra en conflicto en las sociedades latinoamericanas, ya que grupos conservadores niegan la posibilidad de una familia no basada en un matrimonio con la finalidad de procreación
Las familias reconstituidas, polinucleares o mosaico	Son aquellas en las que al menos uno de los cónyuges proviene de alguna unión familiar anterior. La estructura se complica de ser los cónyuges solos los que reconstruyen la familia, a tener uno o los dos la tutela de hijos, y más si completan la familia con hijos propios.
Nuevos modelos de familia	Junto a este contexto de familias nuevas, comienzan a aparecer otras que tienen su origen en la inseminación artificial y manipulación genética, los cuales siguen sujetos a preceptos éticos y no cuentan con mucha regulación.

Fuente: Elaboración propia con base en Valdivia Sánchez, C. (2008). La familia: concepto, cambios y nuevos modelos. *La Revue du REDIF*, 15-22.

Sin embargo, no es el tipo ni la configuración de una familia lo que relaciona el tema con esta investigación, sino la manera en cómo los individuos que configuran cada familia afrontan las adversidades y actúan ante ella de manera conjunta. Siguiendo este criterio, se presentan dos clases de familias; la familia funcional es aquella que logra superar el estrés causado por una adversidad que afecta al conjunto familiar a través de la adaptación de la estructura familiar, manteniendo una actitud resiliente. En el lado opuesto se situaría a la familia disfuncional, aquel grupo que no logra resolver por sus propios medios los problemas que puedan presentarse, y que corre el riesgo de sufrir una desestructuración o desintegración en los casos “con altos grados de patología en sus elementos o del grupo en conjunto que pueden presentar altos índices de sociopatías o de orden orgánico y no aceptan establecer medidas de apoyo terapéutico” (Juárez Montoya, Ponce Rosas, & Rodríguez López, 2016, pág. 66).

Entre las causas de estas familias disfuncionales destaca cuando uno de los progenitores tiene un comportamiento inmaduro o inadecuado, lo que impide el crecimiento individual de los miembros de la familia y su capacidad para relacionarse de manera positiva entre sí. Otra causa se presenta cuando uno o varios de los miembros del grupo familiar presentan enfermedades físicas o mentales, lo que igualmente merma la capacidad del resto de integrantes para desarrollarse (Pérez Lo Presti & Reinoza Dugarte, 2011). Pero de entre todas las causas la que más interesa para esta investigación es cuando un grupo familiar afronta el aislamiento de uno de sus miembros por una pena privativa de libertad, lo que genera “un riesgo de pérdida de equilibrio funcional previo, o incremento de la disfunción anterior al inicio de la crisis” (Juárez Montoya, Ponce Rosas, & Rodríguez López, 2016, pág. 74).

7.6 El impacto de la pena privativa de libertad en el conjunto familiar

Los sistemas penitenciarios y los programas de reinserción social centran su labor exclusivamente en el individuo que ha cometido una transgresión a la ley, sin tener en cuenta los daños colaterales y las víctimas secundarias surgidas del ingreso en un centro penitenciario. Y es que cuando una persona cumple una pena privativa de libertad pareciera que “esta persona es quien vive aisladamente esta experiencia de la pérdida de su libertad, pero la realidad es que estos efectos los sufre igualmente su familia, para la cual implica la pérdida de su presencia cotidiana” (Vite-Coronel & Reyes-Mero, 2016,

pág. 263). Cuando un grupo familiar afronta la ausencia de uno de sus miembros porque el mismo está cumpliendo una pena privativa de libertad se presentan dos adversidades cuyo impacto pondrá a prueba la funcionalidad de la familia, si es que esta era funcional cuando se produjo el ingreso en un centro penitenciario.

En primer lugar, el ingreso en un centro penitenciario de uno de los integrantes de la familia—no necesariamente los progenitores—significa una adversidad inmediata de índole económica, encontrando casos en los que las familias enfrentan carencias alimentarias y en servicios de salud al poco tiempo de producirse la separación. Si dicho ingreso es protagonizado por el principal proveedor económico de la familia, no solo se ve comprometida su estabilidad económica, sino que también se ve afectada su capacidad organizativa al tener que modificar los roles que desempeña cada uno de los integrantes de la familia.

Para apoyar esta información, se puede citar el Índice de Paz de México—realizado por el *Institute for Economics and Peace*—en el que se reflejaba que para 2017 el 64% de la población penitenciaria de México tenían al menos un hijo que era económicamente dependiente de la PPL (IMP, 2019). Sin embargo, este estudio deja fuera el hecho de que pueden existir otros integrantes que dependan económicamente de la PPL, como por ejemplo adultos mayores o parientes con una enfermedad crónica, a lo que debe sumarse que el individuo internado en el centro penitenciario pasa a ser una carga económica para la familia.

La segunda adversidad que afronta este grupo familiar está directamente relacionada con las dificultades estructurales—aunque también puede interpretarse como una consecuencia—por las que atraviesa el grupo. La tarea de reconfigurar la estructura familiar ante la ausencia de sus integrantes también genera una serie de conflictos internos en términos de unidad, comunicación y capacidad de respuesta a las problemáticas causadas por el ingreso en prisión.

Dichos conflictos son multicausales, pudiendo ser ejemplos las estigmatizaciones y los señalamientos por parte de la sociedad, las tensiones internas a raíz de los nuevos roles económicos de los integrantes de la familia, la angustia por la ausencia de un ser querido, el miedo causado por el desconocimiento del estado de salud del familiar internado o de las condiciones de seguridad en las que se encuentra el mismo (Cerde

Pérez, 2015). La familia se habitúa a las circunstancias de tener un miembro encerrado y sigue desarrollándose con esa ausencia, con lo que a la salida del interno son frecuentes los conflictos tanto con la pareja como con los hijos (García Bores, 2003).

7.6.1 La familia de las PPL en los procesos de reinserción social

El ingreso en un centro penitenciario de un integrante de la familia constituye un hecho que afecta a la integridad familiar, por lo que las legislaciones deben contemplar este impacto y reconocer el derecho de las familias a participar en los procesos que garanticen el bienestar tanto del integrante internado en un centro penitenciario como del propio grupo familiar (Vite-Coronel & Reyes-Mero, 2016). Como se comentó previamente en el capítulo dedicado al apoyo familiar, la familia es una de las variables para tener en cuenta en los procesos de reinserción social de las PPL, como así señalan las legislaciones penitenciarias de México y Panamá. A ello se suma la existencia de estudios académicos que señalan a las familias de las PPL como uno de los apoyos principales durante la realización de un satisfactorio proceso de reinserción social, si bien la legislación de ambos países reconoce esta importancia solo en los servicios post-penales (L55SP, 2003; LNEP, 2016).

La familia de alguien que cumplió una pena privativa de libertad juega un papel fundamental a la hora de recibir al individuo en sus primeros momentos de libertad, algo que condicionará su posible reincidencia delictiva. Por ello, la familia constituye “el marco fundamental del retorno y su comprensión y apoyo resultan por lo mismo indispensables, pues en la mayoría de los casos el detenido ha sido causa de disgustos, vergüenza y discusiones desagradables por parte de los suyos” (Coca Muñoz, 2007, pág. 182), por lo que un recibimiento afectuoso y desinteresado del grupo familiar puede ser un factor clave para que el individuo no vuelva a delinquir, ya que este interpreta que “el verdadero ser y sentido de la familia son las exigencias de solidaridad radical y comunidad amorosa” (Bel, 2000, pág. 260).

Llegados a este punto, es necesario destacar que también existe la posibilidad de que la familia no afronte de manera funcional la adversidad que supone el aislamiento de un ser querido o que, directamente, su estructura ya fuese disfuncional antes del ingreso de uno de sus miembros en un centro penitenciario, por lo que no es posible negar que gran parte de los motivadores de la conducta criminal se encuentran dentro

de la propia familia y, concretamente, en la complejidad de los procesos que en ella se producen (Marchiori, 2016). Ello puede ser explicado a través de la teoría del control social elaborada por Travis Hirschi, en la cual se comenta que las actitudes delincuentes no se basan en la existencia de una serie de valores y comportamientos delictivos, sino precisamente en la ausencia de valores y conductas—debido a la disfuncionalidad familiar—que prohíban o rechacen los comportamientos y las actividades delictivas (Hirschi, 2003).

Independientemente de que la persona liberada pertenezca a una familia funcional o no, la misma debe afrontar los obstáculos que pueden surgir tras su puesta en libertad, tales como los problemas surgidos a la hora de encontrar un empleo teniendo antecedentes penales o el riesgo de exclusión social a raíz de la estancia en prisión. Es en esa coyuntura cuando la familia juega su papel principal, puesto que sirve de apoyo y refugio ante una sociedad que puede mostrar rechazo a través de “procesos de estigmatización social que se generan con la puesta en libertad, produciéndose un rechazo al ex-presidiario tanto social como laboralmente” (García Bores, 2003, pág. 422).

Sin embargo, el surgimiento de una adversidad originada por el ingreso en prisión no rompe en ocasiones con el sentido de familia, sino que los miembros se adaptan y son capaces de manejar el estrés provocado, convirtiéndose entonces en actores esenciales y deseados en un proceso de reinserción social previsto para una PPL. Como muestra de ello, un estudio realizado en los centros penitenciarios de Nuevo León refleja que 8 de cada 10 familias de PPL que fueron entrevistadas expresaron un deseo de participar y ayudar en dicho proceso con el objetivo de mejorar la calidad de vida de su familiar (Cerdeza Pérez, 2015).

Vistos estos argumentos, el realizar un diagnóstico familiar que comprenda el estudio de la familia, de la historia del núcleo de la familia, de las relaciones interno-familia, de la reacción ante el delito y de la ayuda brindada por la familia al interno durante su estancia en el centro penitenciario, podría ayudar a concienciar a las propias familias del papel tan importante que desarrollan a la hora de cumplir el objetivo de la reinserción social de su familiar (Marchiori, 2016), lo que indudablemente facilita la resiliencia de los integrantes de la familia a nivel individual y grupal.

7.7 La resiliencia familiar de las PPL

Los distintos temas abordados en este capítulo tienen como objetivo poder tener un sustento teórico suficiente para poder establecer una definición particular del concepto de resiliencia familiar. Pero antes de poder realizar una interpretación propia se debe tener en cuenta las definiciones de resiliencia familiar en los estudios realizados con anterioridad. Laurie McCubbin, a inicios del siglo XXI, fue una de las primeras autoras en relacionar trabajos sobre resiliencia y el manejo de estrés familiar ante las diferentes crisis que podían romper el normal funcionamiento del conjunto familiar. Como resultado se desarrollaron conceptos para poder evaluar las características funcionales de la familia ante un evento traumático, destacando aquellos destinados a afrontar dicho evento de manera positiva (de Andrade Seidl & da Cruz Benetti, 2011). A ello, Froma Walsh (2005) apunta que la “resiliencia familiar supone algo más que manejar condiciones estresantes, sostener una pesada carga o sobrevivir a una dura prueba. Implica la potencialidad para la transformación y el crecimiento personal y relacional que se puede lograr a partir de la adversidad” (pág. 78).

Esta transformación y crecimiento del que habla Walsh da a entender que la resiliencia familiar es, al igual que la resiliencia individual, un proceso mediante el cual una familia afronta un evento traumático de manera continua durante un tiempo indeterminado. Es decir, la resiliencia familiar no es un hecho eventual, sino una transformación más o menos dilatada en el tiempo y cuyo desarrollo depende de las características individuales de los integrantes, el tipo de crisis que se les presenta y las circunstancias en las que se dio la misma (Markson, Lösel, Souza, & Lanskey, 2015). Este proceso de resiliencia familiar inicia una vez que los miembros de la familia aceptan y cambian la percepción que tienen de la crisis—en este caso, la ausencia de uno de sus miembros que está cumpliendo una pena privativa de libertad en un centro penitenciario—identificando comportamientos y actitudes alternativas en la estructura interna del grupo para poder hacer frente a dicha crisis.

Este cambio de percepción es a su vez un proceso de aprendizaje en el que los miembros de la familia—no necesariamente en su totalidad—consideran y experimentan los pros y los contras de los posibles comportamientos y actitudes hasta

encontrar el que más se ajusta a su situación y composición (Puerta de Klinkert, 2007). Por tanto, si se debiera destacar una característica principal de una familia resiliente en un contexto en el que un miembro está privado de libertad, debería señalarse la “capacidad para tener un funcionamiento flexible y de contención de los problemas, lo que no deja que otros dominios del funcionamiento familiar interfieran en el funcionamiento de sus miembros (de Andrade Seidl & da Cruz Benetti, 2011, págs. 48-49).

Esta flexibilidad no solo afecta a la aceptación, la adaptación y el aprendizaje del conjunto familiar ante la crisis, sino que permite al grupo familiar el construir o reforzar—en el caso de las familias que no sufrieron una disfuncionalidad ante la crisis—los sistemas de creencias religiosas y valores morales que influirán en el comportamiento tanto de los individuos como del grupo (Gómez & Kotliarenko, 2010), pudiendo encaminar una situación de familia disfuncional a una funcional. Por lo tanto, la resiliencia familiar de las PPL queda definida como un proceso positivo de adaptación y aprendizaje de un conjunto de individuos que viven una ruptura de su cotidianidad por una crisis, originada por la ausencia de uno de sus integrantes PPL, del que la familia logra crear, reforzar o renovar sus creencias y valores compartidos con la finalidad de superar dicho trauma.

Capítulo 8.- Estudio cualitativo

8.1 Introducción

Si bien se realizó una exhaustiva revisión documental de las distintas variables identificadas para esta investigación, la teoría, por sí misma, no logra responder totalmente a los diferentes objetivos de esta investigación. Para poder probar que los elementos de la justicia restaurativa se presentan en la resiliencia familiar de las PPL es necesario establecer un primer estudio cualitativo de carácter exploratorio, ya que dichos estudios se realizan cuando el objeto de estudio ha sido poco abordado o el investigador pretende familiarizarse con la naturaleza del mismo (Cortés Cortés & Iglesias León, 2004). A efectos de esta investigación, se pretende que el estudio cualitativo exploratorio responda al objetivo general de la tesis—probar que los elementos derivados de la justicia restaurativa son inherentes a la resiliencia familiar de las PPL—así como a los objetivos específicos 1 y 2—identificar los elementos y actores de la justicia restaurativa que favorezcan al proceso de resiliencia familiar y analizar los elementos de la justicia restaurativa que faciliten la resiliencia familiar de las PPL—.

8.2 Creación y pilotaje del instrumento cualitativo

8.2.1 Instrumento

Con la finalidad de establecer un diálogo para conocer a profundidad y con detalle la opinión subjetiva que las ppl tienen respecto de los elementos de la justicia restaurativa y la resiliencia familiar, se optó por la utilización de una entrevista semiestructurada, por ser una “herramienta técnica muy ventajosa en los estudios descriptivos y en las fases de exploración” (Díaz Bravo, Torruco García, Martínez Hernández, & Varela Ruíz, 2013, pág. 163), y por ser una herramienta que genera “la empatía que posibilita una interacción de auténtica comunicación interpersonal entre entrevistador y entrevistado” (Canales Cerón, 2006, pág. 241).

La entrevista consiste, por tanto, en el establecimiento de la interacción entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado en un proceso que recoge la opinión subjetiva y personal sobre un tema en concreto. Para poder utilizar los datos

resultantes del proceso de interacción, el entrevistador se encarga no solo de acumular la información que facilite el entrevistado, sino de ordenarla e interpretarla.

Finalmente cabe destacar que se tomó la decisión de realizar una entrevista semiestructurada por su potencial para recabar información útil para el diseño de otro instrumento de recolección de datos (Díaz Bravo, Torruco García, Martínez Hernández, & Varela Ruíz, 2013).

8.2.2 Población y muestra

Para marzo de 2018 habían 3097 PPL varones en el CEPRERESO Topo chico. De ellos, 746 asistían a las terapias de reinserción social ofrecida por las áreas de psicología y criminología, agrupadas en la sección de reinserción técnica de dicho CEPRERESO. De estos 746 PPL, 350 accedieron a realizar una encuesta preliminar, anexada al final de esta tesis, para seleccionar aquellos sujetos que corresponden con el perfil de la investigación. Entre las distintas preguntas, se hizo un especial hincapié en aquellas PPL que para esa fecha mantenían contacto con sus familiares en el exterior, independientemente de la vía de comunicación que utilizarasen, con el objetivo de poder medir el impacto de los elementos de la justicia restaurativa que inciden en la resiliencia familiar de estos sujetos. Finalmente, la cifra de PPL varones que se consideraron aptos para el estudio quedó fijada en 294 sujetos.

Es por ello que se ha considerado la cantidad de 15 entrevistas semi-estructuradas a PPL del centro penitenciario de Topo Chico, Nuevo León, que estén realizando procesos de acercamiento a la familia o bien los hayan conseguido. La elección del penal de Topo Chico viene dada por el apoyo brindado desde la administración de dicho penal para que la academia pueda realizar ingresos en el recinto, a fin de mejorar el conocimiento y aplicación de los métodos alternativos de justicia, además de la colaboración de la asociación religiosa “Sembradores de esperanza” de la ciudad de Monterrey. Para la realización del instrumento cualitativo a las PPL, se contó con la participación de una serie de expertos en materia de justicia restaurativa y de trabajo social, los cuales ofrecieron su punto de vista sobre los elementos restaurativos que benefician a la resiliencia familiar de las personas internadas en los centros de privación de libertad desde una perspectiva multidisciplinar.

8.2.3 Estudio Piloto

En las semanas anteriores a la realización del pilotaje de la entrevista semi-estructurada a PPL en el CEPRERESO Topo Chico, se realizaron dos entrevistas a expertos. El fin de dichas entrevistas era reafirmar las variables de estudio identificadas a través de la previa investigación documental, gracias a la opinión y experiencia de profesionales que están relacionados de con el mundo penitenciario. Por un lado, se realizó una visita al Centro de Orientación y Denuncia—en adelante CODE—de Monterrey donde se entrevistó a una trabajadora del centro, licenciada en derecho y con especialidad en justicia alternativa. Dicha entrevista ocurrió el día 7 de octubre de 2017 y registró una duración de 53 minutos. Para la segunda entrevista se contactó de manera particular con una licenciada en trabajo social y se concretó que la cita sería el día 8 de octubre de 2017. Dicha entrevista se llevó a cabo de manera satisfactoria y la duración de la misma fue de 40 minutos.

8.2.3.1 Proceso de categorización

El pilotaje de la entrevista semi-estructurada a PPL fue realizado los días 3 y 10 de noviembre de 2017 a dos PPL, aprovechando la impartición de un curso de justicia restaurativa en el interior del CEPRERESO Topo Chico por parte del tutor de tesis y el tutorando. Ambas entrevistas resultaron satisfactorias, con una duración aproximada de 45 minutos cada una. Una vez verificada la información obtenida, se procedió a elaborar la disposición de la entrevista semi-estructurada, iniciando por la identificación de las distintas categorías que componen las variables de estudio. Las siguientes tablas demuestran el proceso realizado:

Tabla 6:

Categorización de la reparación del daño

Variable Independiente	Concepto de variable	Forma en la que afecta a la resiliencia familiar	Categoría	Pregunta	Palabras asociadas
Reparación del Daño	La reparación del daño es aquel proceso que inicia con un cambio de conducta del victimario, en el que este acepta la responsabilidad del daño cometido y nace un interés por la víctima de sus acciones delictivas. A ello sigue el establecimiento de un diálogo víctima-victimario que trata de menguar el sufrimiento y la inseguridad generados en la víctima en el momento de la comisión del delito.	1. El victimario debe abandonar su conducta delictiva 2. El victimario debe aceptar la responsabilidad del daño cometido 3. El victimario debe identificar a su víctima y mostrar un interés en los sentimientos de la misma 4. El victimario debe intentar establecer un diálogo para conocer el daño causado a su víctima y las consecuencias de sus actos.	1. Cambio de conducta	¿La experiencia vivida por tu familia hizo que te replanteases las cosas? ¿De cambiar de actitud? ¿De no repetir las acciones que te llevaron a ingresar en el CEPRERESO?	Variación, transformación, modificación Comportamiento, hábito,
			2. Responsabilidad	¿Sentiste responsabilidad en los cambios que vivió tu familia?	Obligación, deber, compromiso, madurez, promesa
			3. Interés en la víctima	¿Cómo afectó tu ingreso en el CEPRERESO a tu familia? ¿Hubo cambios en el día a día de tu familia?	Apego, cariño, afecto, atención, dedicación, preocupación
			4. Diálogo	a) ¿Alguna vez habéis hablado de lo que hizo que ingresaras en este CEPRERESO? b) ¿Sentiste la necesidad de explicarles con detalle lo que ocurrió?	Plática, careo, conversación, hablar,

Fuente. Elaboración propia

Tabla 7:

Categorización del apoyo familiar

Variable Independiente	Concepto de variable	Forma en la que afecta a la resiliencia familiar	Categoría	Pregunta	Palabras asociadas
Apoyo Familiar	El apoyo de la familia, dentro de un contexto de justicia restaurativa, es el interés mostrado por un núcleo familiar a las necesidades de la víctima y el victimario de una acción delictiva, interpretado como un deber colectivo. Dicho interés debe estar acompañado por una predisposición de ayuda activa en la reparación del daño, la cual se materializa a través de la interacción y la comunicación entre los miembros de la familia, que también se identifica como víctima indirecta del daño ocasionado	1. La familia (víctima) debe brindar apoyo emocional al victimario 2. La familia puede ayudar de manera económica o material al victimario 3. Debe existir un proceso de comunicación y contacto con el victimario 4. La familia tiene que mostrar un interés acerca de la situación del victimario.	1. Apoyo emocional	¿Has podido tener comunicación con tu familia, como visitas o llamadas telefónicas, dentro del CEPRESO? ¿Sobre qué temas hablan? ¿Qué sentimientos te transmiten?	Soporte, refuerzo, aliento, base, dar fuerza, ánimo
			2. Ayuda material	¿Qué te aportan las personas con las que mantienes esa comunicación? ¿Te ayudan de manera material?	Asistencia, traer, regalar, dar, llevar, colaborar
			3. Comunicación y contacto	¿Perdiste el contacto con tus familiares cuando ingresaste en el CEPRESO?	Llamada, visita, relación, saludar, transmitir mensaje
			4. Interés en el ofensor	a) ¿Tus familiares se preocupan por ti? b) ¿Hablan abiertamente sobre la situación en la que vivís?	Llamada, visita, preguntar, cariño, afecto, atención, dedicación

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8:

Categorización del perdón intrapersonal

Variable Independiente	Concepto de variable	Forma en la que afecta a la resiliencia familiar	Categoría	Pregunta	Palabras asociadas
Perdón	El perdón es un proceso transformativo de conducta y pensamiento que puede ser otorgado por la víctima de una trasgresión violenta a la persona que cometió dicha trasgresión. Este proceso se caracteriza por una modificación de sentimientos negativos, como el rencor y la evitación, por otros positivos, como la empatía o el altruismo a través de un desarrollo pro-social que busque la solución de un conflicto.	1. La familia del victimario debe entender las circunstancias que llevaron al familiar a cometer el daño	1. Empatía	¿Han aceptado las razones que te llevaron a ingresar al CEPRERESO? ¿Crees que se ponen en tus zapatos?	Identificar, comprender, entender, situación, dificultad, altruismo
		2. La familia del victimario debe tratar de modificar el rechazo generado por la comisión del daño y mostrar un acercamiento.	2. Evitación	¿Sientes que tus familiares te evitan?	No venir, no visitar, eludir, no hablar, mentir
		3. La familia del victimario debe dejar a un lado el rencor surgido hacia el familiar cuando este cometió el daño	3. Rencor	¿Crees que tu familia quiere hacerte pagar por la experiencia que experimentaron con tu ingreso?	Ocultar, venganza, odio, resentimiento, rechazo

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9:

Categorización de la variable resiliencia familiar

Variable Dependiente	Concepto de variable	Categoría	Pregunta	Palabras asociadas
Resiliencia Familiar	Proceso positivo de adaptación y aprendizaje de un conjunto de individuos que viven una ruptura de su cotidianeidad por una crisis, originada por la ausencia de uno de sus integrantes PPL, del que la familia logra crear, reforzar o renovar sus creencias y valores compartidos con la finalidad de superar dicho trauma.	Adaptación	¿Tus familiares han podido habituarse a tu ausencia?	Habituarse, acomodo, transformar
		Aprendizaje	¿Has aprendido algo de tu relación con tu familia estando interno?	Lección, experiencia, asimilar
		Cambio de roles	¿Algunas personas de tu familia te han sustituido en tus funciones familiares, como el de aportar dinero o cuidar de alguien, etc.?	Sustituir, reemplazar, cambiar, hacer por alguien, cuidar
		Rehacer la relación	¿Rehiciste tu relación con algún miembro de tu familia estando dentro del ceprereso?	Reconstruir, volver a hablar, renovar, arreglar, restaurar

Fuente: Elaboración propia

8.1.3.2 Resultado del pilotaje

Si bien las entrevistas fueron comprensibles por parte de las PPL, se debe apuntar que se realizaron pequeñas variaciones en la estructura de la entrevista para mejorar los resultados de la misma. Además, se modificaron ciertos conceptos y se adaptaron a un lenguaje más coloquial, utilizando términos de la variante mexicana del español—concretamente al de la zona norte del país—, así como considerando el argot usado dentro de los centros penitenciarios.

8.3 Discusión de resultados cualitativos

8.3.1 Procedimiento de las entrevistas

Tras la realización del pilotaje del instrumento cualitativo se procedió a realizar entrevistas a PPL que cumplían condena en el CEPRERESO Topo Chico de Monterrey, estableciéndose el número de 15 entrevistas por la saturación del discurso de los entrevistados. Dichas entrevistas fueron realizadas en los turnos matinales de los días 6, 7 y 8 de mayo de 2018, con una media de 16 minutos de duración y con una edad media de los entrevistados de 31 años.

Tabla 10:

Duración de las entrevistas semi-estructuradas

Nº de entrevista	Edad	Estado Civil	Sexo	Duración (minutos)
E1	24	Soltero	H	12:56
E2	24	Soltero	H	15:16
E3	30	U. Libre	H	30:06
E4	30	Casado	H	27:57
E5	60	Casado	H	32:16
E6	52	Soltero	H	17:48
E7	36	Soltero	H	15:46
E8	33	Separado	H	14:08
E9	27	U. Libre	H	10:01
E10	33	U. Libre	H	17:31
E11	34	U. Libre	H	16:46

E12	25	Soltero	H	14:38
E13	20	Soltero	H	10:46
E14	42	Soltero	H	14:49
E15	36	U. Libre	H	14:32

Fuente: Elaboración propia

Seguidamente se procedió a realizar la categorización del discurso de las PPL y el posterior análisis de la información recogida a través de las entrevistas, utilizando el software Atlas.ti 7 para poder obtener tablas de co-ocurrencias entre las variables, las distintas frecuencias de impacto de las categorías en sus respectivas variables y la interpretación propia que tienen las PPL de las variables abordadas, con la finalidad de contrastar esta interpretación con el análisis documental de las variables.

8.3.2 Análisis de resultados

Antes de entrar de lleno en el análisis de los resultados arrojados por el software, cabe aclarar que, para efectos de esta investigación, el análisis del discurso de los entrevistados se basó en la descomposición del mismo en unidades léxicas llamadas nodos y referencias.

Como nodo se entiende las diferentes divisiones del discurso en el que se identificaron evidencias de una o múltiples variables de estudio. A su vez, estos nodos quedan sujetos a otras subdivisiones, las referencias, que se entienden como las distintas alusiones a las categorías que componen cada una de las variables.

En un nodo asociado a una de las variables aparecerán predominantemente las referencias de las categorías de la variable en cuestión, pero ello no quiere decir que no puedan aparecer otras referencias a categorías pertenecientes a otras variables. Gracias a este fenómeno se pueden identificar los puntos de intersección, conexión o unión de varias categorías que confluyen dentro de un mismo nodo. Cuando dicho fenómeno se repita en múltiples ocasiones, se puede suponer que las referencias, y por ende los nodos en los que aparecen, son mutuamente dependientes entre sí puesto que su utilización conjunta es muy común, lo que nos permitirá establecer una coocurrencia entre nodos.

8.3.2.1 Composición de las variables de estudio

Esta primera fase del análisis cualitativo está enfocada en diferenciar el nivel importancia que tienen cada una de las categorías que componen las variables de estudio, para lo que se utilizó el número total de referencias de las categorías—agrupadas por variable—identificadas dentro de los nodos. Esta fase pretende responder al segundo objetivo específico de analizar los elementos de la justicia restaurativa que facilitan la resiliencia familiar de las PPL a través del análisis del discurso de la muestra y poder contrastar los resultados con la previa investigación documental.

8.3.2.1.1 La reparación del daño

En primer lugar, se comprobó que las categorías de cambio de conducta, diálogo, interés en la víctima y responsabilidad se encontraban dentro del discurso vinculado con la reparación del daño por parte de las PPL, contabilizando un total de 312 referencias de las categorías que componen la variable, distribuyéndose las mismas de la siguiente manera:

Tabla 11:

Referencias de las categorías de la variable reparación del daño

Categoría	Referencias
Cambio de conducta	70
Diálogo	51
Interés en la víctima	102
Responsabilidad	89
Total	312

Fuente: Elaboración propia

Analizando estos datos se puede interpretar que el interés en la víctima es la categoría que más importancia tiene, puesto que compone un 33% del total de referencias agrupadas dentro de la variable. La responsabilidad conforma el 29% del total, seguida del cambio de conducta, con un 22%, y el diálogo entre las partes con un 16%. Estos porcentajes quedan reflejados en la siguiente figura:

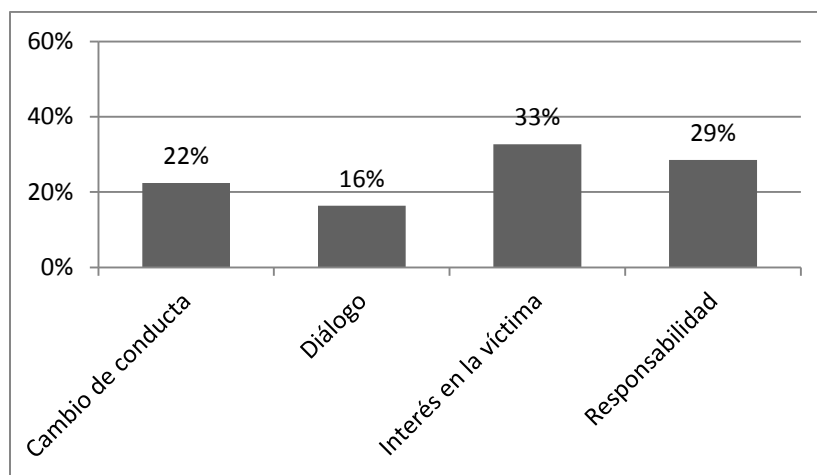


Figura 6. Porcentajes de composición de la variable independiente reparación del daño. Fuente: Datos alcanzados en el estudio

Todo esto se traduce en que para que se produzca una reparación del daño es necesario que la PPL realice una reflexión e identifique a su propia familia como víctima tras la comisión del delito y su posterior ingreso en el centro penitenciario, despertando un interés por la situación que los mismos viven ante su ausencia. Algunas referencias textuales que ejemplifican lo anterior son:

“Pues sí, sí hubo dificultades al principio. Mi madre tuvo que dejar un poco el trabajo para estar viniendo a verme y pues estar al tanto y cómo estaba. Mis hermanos también, yo digo que en lo emocional ¿verdad? Que no me tienen a su lado. Se sentían solo preocupados, pero de poco a poco fuimos saliendo adelante con eso.” (E1).

“Reaccionaron... fue algo que no se esperaban, porque yo ya tenía una vida muy separada a la de mi familia, porque yo me fui a vivir a la casa de mis suegros. Se sorprendieron bastante porque dijeron “¿Cómo? no pude ser, esto y lo otro”. Sí fue algo difícil para ellos, porque ellos siempre me inculcaron valores, siempre me inculcaron la religión, Dios y todo eso y no estaba muy apegado a Dios, pero si trataba de llevar mis responsabilidades. Pero sí fue algo duro para ellos el que a mí me detuvieran” (E4).

Este interés puede reflejarse en preguntas directas en las que la PPL muestra una preocupación, de manera directa o indirecta, por la situación económica, de salud, trabajo

o educación de uno o varios de sus familiares. Como referencia textual podemos citar los siguientes segmentos de los diferentes discursos de las PPL:

“Y de hecho ahorita pues ya “¿qué onda?, ¿cómo está como se siente?, ¿qué ha hecho?, ¿qué hizo en la casa?, ¿cómo está mi hermano? Tengo un hermano menor también que es quien me preocupa. Ella y mi hermano y mis hijos y siempre les pregunto por ellos, siempre.” (E2) “Platico de cómo van los niños en la escuela. Qué problemas empiezan a tener, tratar de darle una solución. “Bueno a ver, platica esto con ellos y ya que lo platiques entro yo a ser el papel” “a ver *mijos*, ¿cómo están? Échenle ganas. La vida es bonita, todos tienen su tiempo” (E4)

Otro factor clave identificado para favorecer la reparación del daño es la necesidad de que la PPL acepte la responsabilidad de sus actos, o al menos, de que su familia vive una situación compleja debido a su condena. Esta acción da a entender a sus familiares que es posible que la PPL realmente identifica y siente el daño provocado, lo que puede desencadenar que estos piensen que renunciará a cometer actividades ilícitas que perjudiquen a su círculo cercano en un futuro. Como ejemplo se puede citar las siguientes fracciones del discurso de las PPL entrevistadas:

“Porque lo que andaba haciendo... Hazte cuenta que a lo último a la familia le lleva. Ellos son los últimos que llevan los problemas de uno, como familia. Uno se lleva la culpa, pero ellos son los que pagan.” (E12) “Por unos robos y jamás dije que no, acepté mi culpabilidad y fui sentenciado a 12 años y lo acepté.” (E10)

Este proceso de reflexión generalmente viene acompañado por un cambio de conducta de la PPL, motivado en la mayoría de las ocasiones por el intento de generar una buena impresión para con su familia o bien aliviar de alguna manera la situación que estos viven, aportándoles una seguridad de que abandonará sus conductas delictivas. Ejemplos de ello son las siguientes citas textuales:

“...en el caso de ser culpable, pues intentar corregir eso, cambiar eso y ya que estás aquí haber aprendido a cambiar esa forma de pensar o esa estructura que tenía yo.” (E1) “Sí. Ya me cambió toda la mentalidad, ahora sí ya (ríe). No, ya, ya por nada del mundo.” (E2)

“Sabes que cayendo aquí pierdes todo, pierdes lo poco que hiciste, pierdes la familia, te das cuenta de que, como te podría decir.... Que aquí cambian un chingo las cosas. Las personas que no abre bien los ojos estando aquí, no le sirve de nada. Sales, cambia tu vida y se una mejor persona. Trabaja, cuida de tu familia, etc.” (E3)

Finalmente, otro elemento que propicia la reparación del daño—aunque no siempre está presente—es el establecimiento de un diálogo entre la PPL y sus familiares, en el que la PPL pueda explicar con detalle los actos que cometió y las razones que lo llevaron a realizar dicho acto delictivo. En este diálogo también pueden expresarse de manera directa los elementos antes citados, facilitando la celeridad del proceso de reparación del daño para con sus familiares. Como ejemplo se puede citar las siguientes citas textuales de los diferentes discursos:

“Sí, se los he contado. Ellos... yo les comenté que hacía cosas indebidas... vengo por robo. Por unos robos y jamás dije que no, acepté mi culpabilidad y fui sentenciado a 12 años y lo acepté. Todo ese proceso lo hablé con mi familia” (E10) “Porque se preocupan por mí y tienen derecho de saber lo que pasó y por eso le comenté a ellos cómo estuvo el problema, no tratar de justificar lo que hice, lo que pasó... sino darles una explicación para que no haiga malos entendidos o para que sepan que en realidad yo reconozco mi error y habrá que pagar unas consecuencias.” (E6) “Yo les comenté todo. Yo soy una persona que todo lo que pasa, o sea todo, lo comento verdad, lo bueno, lo malo, todo lo comento a mi familia.” (E8)

8.3.2.1.2 El apoyo familiar

En segundo lugar, se constató que las categorías de cambio de apoyo emocional, ayuda material, comunicación y contacto e interés en el ofensor se presentaban dentro del discurso relacionado con el apoyo familiar, contándose un total de 336 referencias de las categorías que componen dicha variable, asignándose las mismas de la siguiente manera:

Tabla 12:

Referencias de las categorías de la variable apoyo familiar

Variable Apoyo familiar	Referencias
Apoyo emocional	102
Ayuda material	29
Comunicación y contacto	123
Interés en el ofensor	82
Total	336

Fuente: Elaboración propia

Si se observan estos datos, se observa que la comunicación y contacto es la categoría más citada por las PPL dentro de la variable del apoyo familiar, con un total de 123 referencias, lo que supone un 37% del total de estas. Casi igual de importante es el impacto del apoyo emocional, con 102 referencias, que representan un 30% de todas las referencias de la variable. A esta categoría le siguen el interés en el ofensor con 82 referencias, que representan un 24% del total, mientras que la ayuda material presenta el impacto más bajo con 29 referencias, lo que supone solo el 9% del total de referencias identificadas dentro de esta variable. Estos porcentajes quedan reflejados en la siguiente figura:

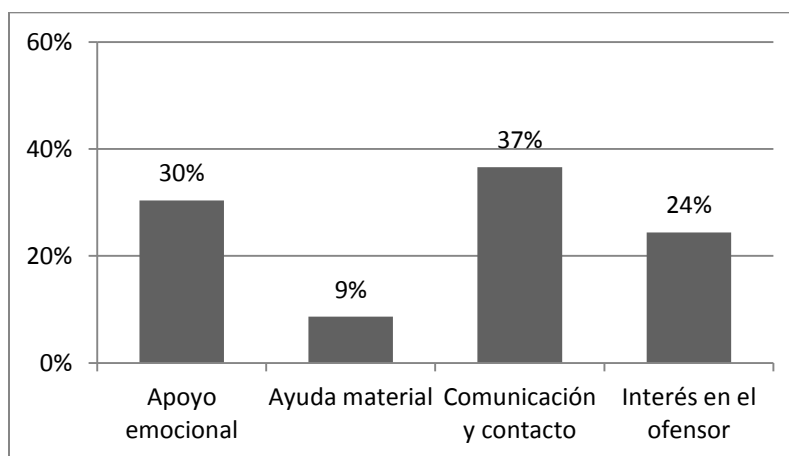


Figura 7. Porcentajes de composición de la variable independiente apoyo familiar. Fuente: Datos alcanzados en el estudio

Estos porcentajes nos ayudan a vislumbrar el rango de importancia que estos elementos tienen a la hora de generar un sentimiento de apoyo por parte de la familia de las PPL mientras estos cumplen condena en un centro penitenciario. Lo que más valoran las PPL es poder tener contacto y comunicación constante y periódica con sus familiares, tanto en

visitas de los mismos a la PPL en el centro penitenciario en los horarios establecidos o bien a través de llamadas o correo postal. Cabe destacar que, en este contacto, lo más valorado por las PPL es la información sobre el estado de sus familiares, como así reflejan las siguientes citas textuales:

“Y como quiera ellos nunca han dejado de apoyarme, siempre están aquí, siempre vienen a visitarme. Ya tengo 9 años aquí preso y ellos me han estado apoyando las veces que he ocupado”. (E6). “Sí. Vienen. No vienen seguido, pero vienen cada vez que pueden. Como mi mamá está enferma y tengo otro hermano que está aquí recluido. Acaba de caer aquí 11 meses. Los otros dos que tengo fuera ya tienen su vida afuera, a parte, casados, con hijos. Y no pueden venir seguido porque no hay dinero.” (E7). “Si, vienen a lo lejos cada mes, pero sí si vienen.” (E9).

Esta comunicación y contacto propiciará que la PPL se sienta apoyado de manera emocional, apoyo que se traduce la mayoría de las veces como un soporte anímico. Es decir, una transmisión de sentimientos y emociones positivos que ayuden a la PPL a aprovechar el tiempo que deberá pasar dentro del centro penitenciario, animándole a participar en los programas de reinserción social y la seguridad de que no estará solo una vez egrese del centro penitenciario. Como referencia se pueden citar las siguientes secciones de los discursos:

“Siempre me veía yo peleando con mi hermano, trompos y eso. Y ahora, pues nada “échale ganas carnal”. Cuando salga, mi hermano quiere poner un puesto de pollos y me dice “usted lo va a atender, para que usted esté ahí”. Me da ánimos, me apoya” (E2). “Y cuando vienen pues yo les comento: “estuve trabajando aquí, estoy haciendo esto y esto, estoy yendo a clases de criminología y psicología, pero quiero entrar a la preparatoria...”, Mi hermano me va a traer la papelería para entrar a preparatoria, y me dijo “ah, qué bien”, y yo “ya estudie refrigeración” y “ahora que salgas ¿en qué vas a trabajar?” digo “pues en lo que... yo soy electricista y plomero” y digo “pues mi trabajo siempre me ha gustado la electricidad” y dice “a pues bien” y dice “¿quieres abrir un negocio?” (E6). “Sí. Hablamos de que me extrañan, de que ellos quieren estar conmigo, yo quiero estar con ellos. De que “te quiero, te extraño, quiero que me ayudes a arreglar la casa...”. “Mi

esposa quiere casarse conmigo, mis hijastros, no hombre, me quieren, vienen por barandilla, me abrazan, me besan. Ellos quieren estar conmigo y yo con ellos. Cada vez que les hablo, cada vez que vienen me la paso muy bien con ellos.” (E10).

Otro de los elementos que impactan en que la PPL sienta el apoyo de su familia es el interés que los miembros de esta muestran con respecto a la salud, tanto física como mental, de la PPL, así como a las actividades que realiza y las emociones y sentimientos que experimenta dentro del centro penitenciario, algo que queda reflejado en el discurso de algunas de las PPL:

“Ahorita que estoy aquí ya sí, ya se enfocan más en mí, de que qué me falta, qué ocupo” (E3). “Te manda saludar este señor, los amigos ahí de la colonia” y “preguntó esa persona por ti”, “pues salúdamelos también”, o sea así también comentarios de los vecinos o de su trabajo o a veces me preguntan a mí “¿qué haces?” Me investigan (ríe). Me dicen “¿qué haces tú aquí? ¿A qué te estas dedicando?, no te hagas flojo”... me dan ánimos. “Aquí estuve estudiando un taller de electricidad y después de refrigeración, psicología, criminología”, ya les platico yo, “hago deporte también, estoy trabajando y también agarré un curso de computadora (E6)”. “Si por qué si no se preocuparan les valiera gorro no sé no vinieran ni a verme ni nada. Pero si vienen porque como le digo ellos me dicen yo te apoyo” (E15).

Por último, el elemento que menos impacta en la generación de un sentimiento de apoyo por parte de la familia de las PPL es la ayuda material que la familia pueda aportar. Las PPL son conscientes de que la falta de este tipo de ayuda no viene motivada por mezquindad o avaricia de la familia, sino por la difícil situación económica de los familiares, que se agravó además con su ingreso en prisión. Aun así, el tipo de productos más valorados son productos de aseo personal, vestimenta, calzado y alimentos, quedando el apoyo monetario relegado al final de la lista. Como referencia se muestran los siguientes fragmentos del discurso de las PPL:

“Les pido más lo que es... algún antojo que tenga una semana. O sea, la comida aquí yo la puedo comer, la puedo pedir un día”, “quiero que me traigas esto o esto de comer y me

falta que el rollo, jabón para lavar la ropa, que champú, que pasta de dientes, que un cepillo nuevo” (E3). “Apoyo moral, también económico porque cuando vienen de repente me dejan moneda o me dejan lo indispensable que se ocupa aquí, el rollo o pasta... sí, si me ayudan” (E7). “Y de repente me dice mi mamá ¿qué te falta, café galletas o ya te acabaste lo que te llevé? Y luego ya me dice qué es lo que me hace falta. Y me dice bueno voy a ir el martes o el jueves” (E15).

8.3.2.1.3 El perdón

En tercer lugar, se corroboró que las categorías de cambio de empatía, evitación y rencor se manifestaban dentro del discurso ligado al perdón, enumerando un total de 213 referencias de las categorías que componen la variable, divididas de la siguiente manera:

Tabla 13:

Referencias de las categorías de la variable del perdón

Variable Perdón	Referencias
Empatía	77
Evitación	67
Rencor	69
Total	213

Fuente: Elaboración propia

Estas cifras indican que los elementos que componen esta variable son los más equilibrados, teniendo una importancia casi similar en el otorgamiento de un perdón por parte de la familia de la PPL. No obstante, el establecimiento de una empatía entre las partes tenía más importancia que el resto de los elementos, apreciándose 77 referencias a la misma, lo que suponía un porcentaje del 36% del total de las referencias.

Un caso especial se produce con el impacto de los otros dos elementos, por lo que se debe ser más preciso en lo referente a sus porcentajes para aclarar la inferencia de los mismos. El rencor—o más concretamente, la ausencia de este—con una suma de 69 referencias, constituye un 32’39% del total de las referencias, mientras que la evitación—o específicamente, la no evitación—, con un total de 67 referencias representaba el 31’45% del total de estas. Aunque sí se puede decir que el rencor tendría una importancia mayor que la evitación en la composición de esta variable, la diferencia es tan escasa que se

podría redondear los porcentajes y argumentar que ambos elementos tienen el mismo impacto en el otorgamiento del perdón. Estos porcentajes quedan reflejados en la siguiente figura:

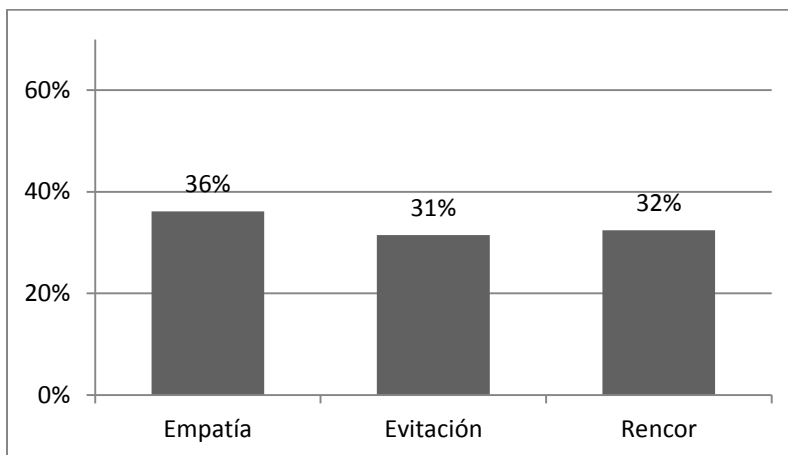


Figura 8. Porcentajes de composición de la variable independiente apoyo familiar. Fuente: Datos alcanzados en el estudio

Estos datos nos muestran como el establecimiento de una empatía por parte de la familia de la PPL es el proceso clave para que a la PPL se le otorgue el perdón por parte de sus familiares. Que la familia pueda llegar a entender las causas que llevaron a cometer la acción ilícita, la situación vivida dentro del centro penitenciario, los sentimientos experimentados por la PPL durante la condena y el cambio de actitud es factor clave para que exista un perdón sincero. El proceso del establecimiento de una empatía se facilita si la PPL ha intentado previamente establecer un diálogo con sus familiares. Algunas referencias textuales que ejemplifican este hecho son:

“Que yo estuviera involucrado en ese problema y ya les comenté y ya ellos me entendieron un poco. No más se callaron y estuvieron conmigo, no me hicieron tantas preguntas” (E6). “Pues cuando yo llego aquí, antes de llegar aquí estando en el centro de detención, hablo con ellos, del supuesto hecho. Lo platico, me escuchan y pues lógicamente me entiende, porque el delito que yo traigo es fuerte, es un delito muy fuerte” (E11).

Con respecto al rencor se puede decir que es un elemento del cual es necesaria su ausencia para que la PPL sienta que sus familiares le han otorgado el perdón, como igualmente ocurre con la evitación, puesto que su ausencia es necesaria para despertar el sentimiento de que la familia perdonó a la PPL. Ejemplo de ello se observa en el discurso de las PPL:

“Por algo pasan las cosas, ahorita veo las cosas y quiero pedirte una disculpa” “no, ahorita no pasa nada” “es que sí, a lo mejor ahorita no está pasando, pero sí pasó y siento la necesidad de expresar que quiero que me perdones y para que no guardes algún rencor” (E4). “No, porque si no, no vienen a verme. Todos me hablan bien y lo que yo tengo siempre... nunca he tenido problemas con mis hermanos, o sea, discusiones pequeñas, pero yo siempre he sido comunicativo y si cometí un error les pido disculpas y he estado en paz con ellos, no he estado en pleitos.” (E6). “Siempre me contestan su teléfono, si no pues no te contestan o no vienen.” (E8).

Estos dos elementos pueden producirse eventualmente o de manera paulatina, puesto que el perdón es la variable de estudio que más tarda en aparecer, puesto que es necesaria una preparación y asimilación de la situación por ambas partes. La ausencia de ambos elementos puede constatarse no tanto por la expresión explícita de que no existen, sino a través de la existencia de otros elementos como la comunicación y el contacto y el apoyo emocional.

8.3.2.1.4 La resiliencia familiar

Por último, se certificó que las categorías de adaptación, aprendizaje, cambio de roles y el rehacer la relación se encontraban dentro del discurso asociado a la resiliencia familiar, registrándose un total de 166 referencias de las categorías que forman la variable, repartidas de la siguiente forma:

Tabla 14:

Referencias de las categorías de la variable resiliencia familiar

Variable Resiliencia familiar	Referencias
Adaptación	42
Aprendizaje	60

Cambio de roles	28
Rehacer la relación	36
Total	166

Fuente: Elaboración propia

Si se analiza estos datos, se observa que el aprendizaje es la categoría que más citas registra en el discurso de las PPL dentro de la variable de la resiliencia familiar, con un total de 60 referencias, lo que se traduce en un 36% del total de referencias. La adaptación sería el segundo elemento que más impacta en la resiliencia familiar de las PPL, con 42 referencias, las cuales suponen un 25% de todas las referencias de la variable. Le siguen el rehacer la relación con 36 referencias, las mismas que representan el 22% del total, a la vez que el cambio de roles constituye el impacto más bajo con 28 referencias, lo que se interpreta como el 17% del total de referencias identificadas dentro de esta variable. Estos porcentajes quedan reflejados en la siguiente figura:

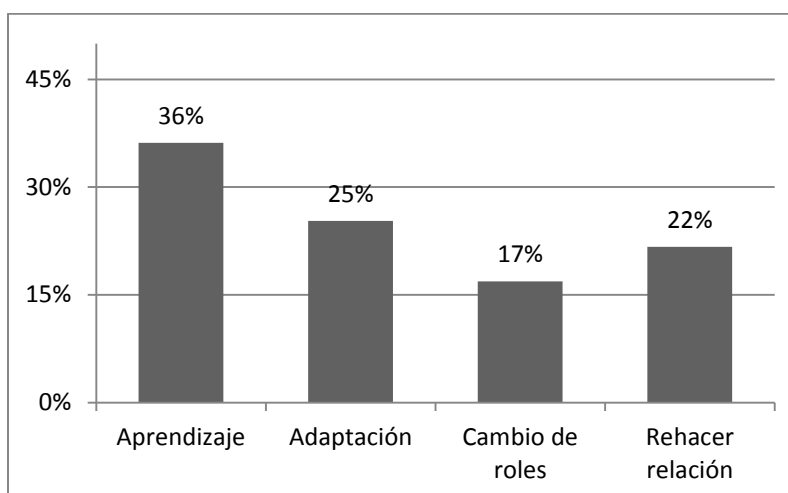


Figura 9. Porcentajes de composición de la variable independiente apoyo familiar. Fuente: Datos alcanzados en el estudio

El elemento que más se aprecia a través del estudio del discurso de las PPL es el aprendizaje, elemento que se produce casi independientemente del resto de elementos que componen la variable. Este aprendizaje por parte de todo el núcleo familiar supone la obtención de una serie de conocimientos, principalmente de valores morales, que conforman la parte positiva del aislamiento físico de uno de sus integrantes al cumplir

condena en un centro penitenciario. Como referencia se pueden citar los siguientes fragmentos del discurso de las PPL:

“Solo que ellos se unieron más con mi madre en ese aspecto. Como ya no estoy yo para ayudar en esa forma, pues ellos se acoplaron más y gracias a Dios están bien. O sea, no hay tanta mi ausencia, gracias a Dios” (E1). “Yo creo que sí, pero a la vez lo que me dice mi mamá... pues que ella siente un hueco, dice “entro a tu cuarto, tu cuarto todo solo y ya estaba acostumbrada a verte” y acá le digo “no, pues usted no se preocupe, todo pasa y todo sale bien porque mediante Dios” (E2) “...toda mi familia, mis abuelos, mis tíos... han hablado con mi mamá y me dicen que saliendo yo van a hablar conmigo para que no vuelva a hacer las cosas que andaba haciendo. Que en vez de... no dicen “no, aquel no porque acaba de salir del penal”. Que en vez de distanciarme que me van a acercar más a la familia. Que van a hablar conmigo, que... hasta negocio me han ofrecido ya, hacer trabajo en la familia para estar unidos a ellos y no tratar de hacer lo que estaba haciendo antes” (E7).

La adaptación se entiende como la asimilación de la realidad en la que un integrante está ausente, con todos los impactos económicos, psíquicos y de salud que ello conlleva. Es un proceso por el cual todo el grupo familiar identifica el trauma que se ha presentado a raíz de la ausencia de uno de los individuos y se habitúa al mismo. Aunque está relacionado con el elemento anterior, la no adaptación no imposibilita que el resto de los elementos de la variable pueda llevarse a cabo. Referencia de ello son las siguientes declaraciones de las PPL:

“Sí, han podido sobrellevar los costos. Ahí con dos, tres trabas, pero poco a poco se fueron organizando para recuperar la normalidad. Ahora mi abuelita es la que a veces le ayuda a cuidar a mi hermanita y a mi hermano más chiquito para que mi mama pueda hacer movimientos” (E1). “Siempre en cualquier reunión que tenga, siempre salgo a relucir yo. Siempre en las reuniones siempre sale a relucir por bien o por mal diciéndolo en broma “ya no más falta que estés aquí...” “nombre si es cierto, pero ya mero”. Como quiera comprenden que hay que seguir adelante, aunque esté aquí” (E4). “Pues yo, me

dice mi mamá que no verdad, que está triste a ver por la ventana y ver que no entro ni nada, está triste, pero se están acostumbrando un poco” (E9)

El rehacer la relación también es un elemento a tener en cuenta entre el discurso de las PPL, si bien no se presenta en la mayoría de ellos. Este elemento se puede entender de dos maneras; la primera de ellas sería el recomponer lazos afectivos que se deterioraron a raíz de la comisión del delito, producto del resentimiento de uno o varios integrantes del núcleo familiar. La segunda de ellas es el reforzar los lazos afectivos con familiares con los que antes se tenía poco o ningún contacto o, directamente, el restablecer lazos afectivos que se habían perdido hacía largo tiempo. Este fenómeno se identifica más con familiares lejanos, como tíos, primos o sobrinos, mientras que el primer caso es más común con familiares directos, como madres, hermanas o hijas, como así se refleja en las siguientes citas textuales:

“Sí, ahí afuera cuando yo estaba sí había distancia, no había mucha comunión y yo creo que después de esta experiencia pues ellos vieron, se sintieron angustiados por lo que estaba pasando y hubo más comunión. Más que nada con mi mamá, pues a través de ella ellos me mandan saludos “échale ganas, *mijo*, aquí andamos” y de vez en cuando mandan algo, una comida o algo. Lo que creo es que hay más comunión ahora, se ve el apoyo de ellos.” (E1) “Llego y le digo a la celadora “señorita, quien es la persona que me busca” “Aquel” Dígame joven, en que le puedo servir. Y se queda así (impresionado). Dígame joven” Reconocí a mi hijo cuando me dijo “papá soy tu hijo” después de tantos años que no lo veía, pues conocí a mi hijo. Me abrazó, me dio un beso. Le dije: “¿sabes qué?, perdóname por todo el daño que te he hecho” (E5). “Siento que con un tío. Ese tío estuvo en un centro penitenciario también y con él no solía tener ningún tipo de comunicación o contacto. En el momento de ingresar aquí él ya llevaba tres años afuera. Él es el que me estuvo apoyando desde que ingresé yo aquí y hasta ahorita” (E7).

Finalmente, el cambio de roles dentro de la familia para suplir las diferentes carencias producidas por el ingreso en prisión de un integrante de la familia. Generalmente, este cambio de roles es de tipo económico y/o afectivo, puesto que, al ser compuesta la muestra de estudio en su totalidad por varones, es muy común que hayan de suplirse los

roles de proveedor económico y de cabeza de familia. Cuando no existe otro varón dentro de la familia—hermanos y cuñados por lo general—que pueda suplir a la PPL en el cumplimiento de estas funciones, las mismas suelen recaer en la esposa de la PPL o—si se trata de un matrimonio joven—en la madre de la PPL. Como prueba de esta afirmación se encuentran los siguientes fragmentos del discurso de las PPL:

“Ahorita lo que es de mi hermano. Sí mis hermanos apoyan a mi mamá. Ellos ya tienen su familia, Y yo también tenía familia, pero vivía en casa de mi mamá. Y date cuenta que yo trabajaba y les daba dinero a mi esposa, a mi hijo y a mi mamá y ahorita son mis hermanos los que también van y “sobres mamá, ahí va esto para que pague esto y esto...” (E2). “De que ellos... mi suegro me está tendiendo las manos, tanto mi suegro como mi cuñado. De hecho, mi suegro ya me hizo una carta donde él me está contratando para trabajar en su taller, es un taller de torno. Es, como quiera, una profesión, ser tornero y es algo bien pagado. Y él me dice: “no, *mijo*, tú no te preocupes, yo hago el papel de cierta manera, yo estoy haciendo el papel aquí en la casa, pero cuando salgas están las puertas abiertas para ti y tienes trabajo” (E4) “Sí. La mamá de mis hijos ha salido a delante, con lo poquito que ella gana, con lo poquito que yo le mandaba, porque ya no le mando” (E5)

8.3.2.2 Nuevas categorías encontradas

Es necesario destacar que en el análisis del discurso de las PPL se distinguió una categoría que no había sido contemplada en el estudio documental realizado previamente a la redacción del instrumento cualitativo. Las diferentes referencias que algunos de las PPL hacían en relación a su fe, las creencias religiosas y valores que comparten con sus familiares también daban paso a que, en concreto, se propiciara una resiliencia familiar. Algunas referencias textuales del discurso de las PPL que ejemplifican lo anterior son:

“Solo que ella (madre) fue entendiendo de poco en poco, que a lo mejor esto, viéndolo por el lado espiritual yo lo necesitaba. ¿Para qué? Pues para fortalecerme más en Dios, porque a lo mejor afuera pues lo conocía, pero no lo tenía mucho en cuenta. No lo vivía. Sin embargo aquí, pues realmente es mi necesidad de él porque yo creo que sin él estaría angustiado, preocupado y pues él me da esa tranquilidad esa paz con mi familia” (E1). “Sí,

claro. Con mi esposa yo platíco de Dios con ella, porque de poco a poco, como quiera, nos ha abierto caminos, tanto aquí y afuera nos ha ayudado bastante” (E4). “Aquí he sentido cosas espirituales, mentales..., todo” (E10)

Por tanto, para el posterior estudio cuantitativo se tendrá en cuenta una nueva categoría, agrupada dentro de la variable dependiente resiliencia familiar, a la que se denominará creencias y valores.

8.3.2.3 Relación de las variables de estudio

Este apartado gira en torno al primer objetivo específico de la investigación, el poder identificar los elementos y actores de la justicia restaurativa que favorezcan al proceso de resiliencia familiar. Para hacer entendibles estos datos primero se debe aclarar los conceptos de nodo y referencia, puesto que componen las unidades básicas del análisis del discurso realizado para el estudio de las entrevistas.

Tabla 15:

Número de nodos identificados por variable

Variable	Nº de nodos
Reparación del daño	169
Apoyo familiar	162
Perdón	132
Resiliencia familiar	134
Total	597

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a los elementos de la justicia restaurativa que impactan en la resiliencia familiar de las PPL, se puede identificar que el discurso de los entrevistados concuerda con la hipótesis establecida para la investigación. Es decir, la reparación del daño, la ayuda familiar y el perdón intrapersonal son elementos que efectivamente aparecen dentro de la resiliencia familiar de las PPL, si bien los resultados cualitativos muestran que no todas las variables tuvieron el mismo protagonismo en los relatos de los entrevistados, como se muestra a continuación:

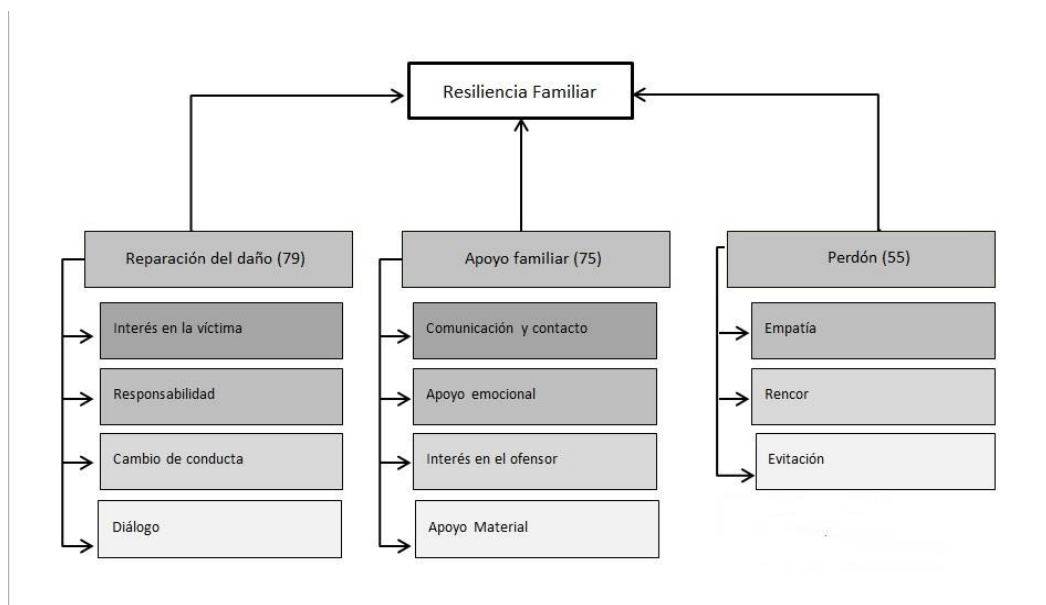


Figura 10. Coocurrencias de las variables independientes con la variable dependiente. Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la variable independiente de la reparación del daño, la misma cuenta con un total de 169 nodos clasificados en el discurso, de los cuales 79 presentan coocurrencia con los 134 nodos de la resiliencia familiar, lo que quiere decir que el 47% de los nodos de esta variable independiente están directamente relacionados con la resiliencia familiar. Estos 79 nodos también reflejan que un total del 59%, del discurso de la resiliencia familiar está relacionado con la reparación del daño.

En lo referente a la variable independiente del apoyo familiar, 75 de los nodos de esta variable, con un total de 162 nodos clasificados, presentan coocurrencia con los nodos de la variable dependiente, lo que muestra que el 46% de los nodos de esta variable dependiente están directamente relacionados con la resiliencia familiar. Ello también se traduce a que el 56% de los nodos vinculados con la variable dependiente de la resiliencia familiar están directamente relacionados con los nodos asociados al apoyo familiar.

Por último, 55 de los nodos de la variable independiente del perdón, de un total de 132 nodos identificados, presentan coocurrencia con los nodos de la variable dependiente del estudio, lo que se traduce en que un 42% de los nodos están relacionados con la variable

dependiente de resiliencia familiar. Por su parte, estos 55 nodos suponen que el 41% del discurso asociado a la resiliencia familiar está enlazado con el discurso del perdón.

Vistos estos resultados, se puede afirmar que tanto la reparación del daño, el apoyo familiar y el perdón no solo existen en la resiliencia familiar, sino que tienen un impacto directo en el establecimiento de una resiliencia familiar de aquellas familias que viven la situación de que uno de sus miembros cumple condena en un centro penitenciario. Sin embargo, el nivel de impacto es diferente dependiendo de la variable en la que se enfoque el estudio, pudiendo identificar una jerarquía entre las mismas.

Esta jerarquización da pie a que es posible establecer también un orden entre el total de las categorías que forman todas las variantes dependientes de estudio, lo que ayudará al cumplimiento del tercer objetivo específico de la investigación: el jerarquizar las variables y categorías independientes que, según su importancia e impacto, ayuden a la resiliencia familiar de las PPL.

8.3.2.4 Hipótesis nula

Durante la realización de las entrevistas uno de los sujetos entrevistados, el discurso del entrevistado 14 (E14) se diferenciaba en gran medida de los demás, ya que en el mismo no se encontraron indicios de resiliencia en el núcleo familiar a raíz de su ingreso en el CEPRERESO, por lo que se debe analizar este discurso con detalle:

Con respecto a la reparación del daño, el entrevistado demostró un interés en el estado de su madre al comentar que el contacto con la familia estaba motivado “más por mi mamá, que esté bien ella.” Sin embargo, el estado del resto de los integrantes de la familia no despertaba en él inquietudes, aunque sí tenía conciencia de que vivieron un impacto negativo pues “se sintieron mal. Porque no vinieron luego a verme. Vinieron ya pasado mucho tiempo. Meses. Y no puedo decir cómo les afectó porque yo no lo vi ni nada”.

Sí mostró indicios de responsabilidad con respecto a la acción dañina cometida, pero sin embargo no existían indicios de cambio de conducta del entrevistado, puesto que era la segunda vez que el mismo cumplía condena en el CEPRERESO Topo Chico, tal y como él mismo relató: “En verdad sí, porque bueno... pues una porque volví otra vez aquí, y otra

pues porque claro, tienen que sentir. Enojar. Pues yo volví otra vez aquí.” Cuando se le preguntaba si él había tenido establecido un diálogo para explicar los hechos que lo llevaron a ser condenado, el entrevistado respondió que “sí, pero... casi no. No lo toman en cuenta. Toman en cuenta más por la caída que tuve otra vez. Pero sí les comenté”.

En lo relativo al apoyo familiar, el entrevistado expresó que perdió el contacto y la comunicación con sus familiares al momento de entrar en el CEPRETESO “Durante meses. Ahí tuve que seguir adelante yo aquí, con mi trabajo, para comer bien y todo. Trabajar y sacar para mis cosas personales. Luego si vinieron”. Además, solo la madre del entrevistado sentía interés por el ofensor, pero su estado de salud le impedía visitarlo, tal y como relató: “Ahorita como mi madre no puede venir, ella tiene que estar pensando que sí que vienen a verme. Ella yo creo piensa o le dicen, “sí ya fui” porque ella se acuerda de preguntar. “¿Ya fuiste a ver a tu hermano?” “Sí...” Cosa que no es cierto porque ya lo han hecho, ya lo han hecho varias veces. Tengo rencor hacía ellos por eso y por dejarme solo”.

El dinero para poder marcar a casa es la única ayuda material que la familia le presta al entrevistado “ahorita estoy esperando a ver si nos pusieron saldo porque no tengo saldo yo para llamar a mi mamá y felicitarla. Y que me dé fuerzas para el día en que yo salga”. Se observa que este contacto con la madre es el único apoyo emocional que se le brinda al entrevistado, ya que las conversaciones con los hermanos son escuetas “Pues ahorita, pues si les hablo a veces, que me contestan, pues hablo y hasta ahí. Y no es de seguido. Hablamos de “¿cómo estás?”. De lo mismo, “estoy bien, gracias a Dios”. Y más por mi mamá, que esté bien ella.”

En lo relacionado al perdón, los hermanos del entrevistado demuestran que no habían establecido un proceso de empatía porque “ellos no sienten nada. Porque si sintieran algo en realidad, aquí estuvieran”. Cuando el entrevistado respondió a la pregunta de si su familia le guardaba rencor, este lo desconocía, puesto que respondió: “Yo no sé cómo lo tomen. Está bien, están ocupados con mamá, pero no tienen una hora de venida. Hay que darse la vuelta para verme. Yo aquí vivo, no muy lejos, yo aquí vivo a unos 10-15 minutos”. Se observa cómo esta actitud sí despertaba un rencor por parte del entrevistado hacia sus familiares “Pero yo si guardo un rencor hacia ellos por dejarme así tanto tiempo. Me hace

sentir un poco de rencor hacia ellos”. Y cuando se le preguntó al entrevistado por si su familia le evitaba respondió: “Sí, siento que sí. ¿Pues qué más?”

En las preguntas relacionadas con la resiliencia de la familia del entrevistado, éste dio indicios de que su familia se había adaptado a su ausencia, aunque la falta de comunicación hizo que la respuesta fuera una suposición: “Pues yo digo que sí.” Por otro lado, cuando se le preguntó si había rehecho la relación con alguno de sus familiares mientras cumplía condena, la respuesta fue “No. Nada” y a la pregunta de si había habido algún cambio de roles entre los integrantes, es decir, si alguien había sustituido su papel dentro de la familia respondió que “No”.

Este caso es un ejemplo es un indicio del posible rechazo de la hipótesis nula de esta investigación (H_0): La reparación del daño por parte del familiar PPL, del apoyo familiar y del perdón por parte de la familia de la PPL, no existen dentro de un proceso de resiliencia familiar.

8.3.2.5 Nubes de palabras

Las nubes de palabras son el resultado del conteo de las palabras más repetidas dentro del discurso de las PPL. El objetivo del análisis de las mismas fue el poder identificar acciones o actores que quedaron asociados a las diferentes variables a través del análisis del discurso de las PPL y, por otro lado, poder hacer una comparación entre las palabras aparecidas en cada una de las variables para poder resaltar los elementos comunes entre las mismas.



Figura 11. Nube de palabras de la variable independiente reparación del daño. Fuente: Datos alcanzados en el estudio

En lo referente a la variable dependiente de la reparación del daño, los entrevistados identificaron a ciertos individuos de la familia que tienen mayor peso dentro de este proceso. Las madres de las PPL quedan como los miembros familiares más importantes, seguidos de las hijas y las esposas. Se puede interpretar entonces como, a parte del conjunto familiar, los integrantes del mismo que las PPL identifican como víctimas son las personas de sexo femenino o, al menos, las personas que fueron más afectadas por la comisión del delito y que muestran un mayor interés en el ofensor.

Se observa cómo las palabras hice, andaba, error y momento están asociadas a la responsabilidad de la PPL con respecto al daño cometido. Otras como bueno, pasó y quiero, pueden ser enmarcadas dentro del cambio de conducta de la PPL, puesto que sugieren que el daño ya fue cometido, pero pretenden enmendar el mismo. El diálogo quedaría representado con palabras como “problema, digo, hablo y verdad” puesto que presuponen que la PPL mantuvo una o varias pláticas donde se explicaba a los familiares la acción dañina cometida.



Figura 12. Nube de palabras de la variable independiente apoyo familiar. Fuente: Datos alcanzados en el estudio

Con respecto al apoyo familiar, los sujetos identificados coinciden con la nube anterior, volviendo a repetir a los individuos femeninos como las madres, hijas y esposas como las principales fuentes de apoyo, solo que esta vez los hermanos de las PPL también tienen un papel importante en el interés en el ofensor.

Palabras como “hablo, vienen, verme, falta, verdad y digo” representan una comunicación y contacto con los familiares durante el tiempo que dura la condena, quedando las palabras “vida, quiero, familia, dinero y apoyo” encuadradas dentro de los referentes del apoyo emocional y a la ayuda material.



Figura 13. Nube de palabras de la variable independiente perdón. Fuente: Datos alcanzados en el estudio.

En lo relativo al perdón, se observa como nuevamente la madre queda identificada como el individuo principal a la hora de pedir perdón por parte de las PPL, seguida de los hijos, las esposas y los hermanos de las PPL quienes también tienen una destacada importancia a la hora del otorgamiento del perdón.

Como se enfatizó anteriormente, no hay vocablos que nieguen directamente una evitación o un rencor, sino que más bien estas categorías quedan representadas por palabras positivas que evidencian que tanto el rencor como la empatía están ausentes. De esta manera se interpreta a las palabras “vienen, verme, apoyan, conmigo” como muestras de que no existe una evitación por parte de los familiares, mientras que palabras como “error, empatía, hablo, dinero” quedan asociadas a la empatía. Conforme al rencor, las palabras asociadas fueron “verdad y quiero”, que nos muestran que las PPL asocian la inexistencia de un rencor por parte de la familia cuando estos le expresan su afecto, a lo que ellos les corresponden contándoles la verdad de su situación.



Figura 14. Nube de palabras de la variable dependiente resiliencia familiar. Fuente: Datos alcanzados en el estudio

Los integrantes que más peso tienen en la resiliencia familiar, especialmente en la adaptación y en el cambio de roles a raíz del ingreso en prisión de uno de los miembros de la familia, son las madres de las PPL, seguidas de los hijos, los hermanos y las esposas.

Las palabras “tengo, viene, quiero, y dinero” quedarían asociadas a las categorías de adaptación, mientras que “error, afuera y verdad” estarían asociadas al aprendizaje del núcleo familiar. Un caso especial, que se comentó anteriormente, serían las palabras “gracias y Dios”. La primera puede tener el significado de agradecimiento para con los familiares, pero generalmente estaban asociadas a un agradecimiento más espiritual, relacionado con la religión profesada. Estos indicios de costumbres de fe y moralidad ayudaron a fijar la categoría de creencias y valores para el posterior estudio cuantitativo.

Capítulo 9.- Estudio cuantitativo

9.1 Introducción

Si bien los resultados cualitativos evidenciaron la existencia de los elementos de la justicia restaurativa identificados para efectos de esta investigación dentro de una resiliencia familiar de 14 PPL de un total de 15 entrevistadas en el CEPRERESO Topo Chico de Monterrey. No obstante, para poder consolidar los resultados de este primer estudio cualitativo exploratorio es necesario recurrir a la realización de un estudio cuantitativo explicativo (Müggenburg Rodríguez & Pérez Cabrera, 2007) para saber cuáles de estos elementos tiene mayor importancia en la generación de una resiliencia familiar, siempre desde la perspectiva de las PPL. Uno de los fines del mismo sería el cumplir con el tercer objetivo específico de esta investigación, el poder jerarquizar los elementos de la justicia restaurativa que, según su importancia e impacto, ayuden a la resiliencia familiar de las PPL.

El carácter del estudio cuantitativo se presenta como comparativo, con la idea de poder conocer si la existencia de elementos de la justicia restaurativa en la resiliencia familiar de las PPL es un fenómeno que también puede darse en otros contextos penitenciarios—así como la importancia de los distintos elementos dentro del fenómeno— o solo se presenta en la muestra mexicana. Panamá se presenta como un potencial candidato para la comparación, ya que se identifican ciertas similitudes entre ambos países en lo concerniente al sistema de justicia; en primer lugar ambos países vivieron una reforma del sistema penal en 2008, donde se cambiaba el anterior sistema de corte inquisitivo a uno de carácter acusatorio; en segundo lugar los dos países cuentan con legislaciones que permiten la aplicación de los métodos y vías alternativas de hacer justicia y prácticas restaurativas.

9.2 Creación y pilotaje del instrumento cuantitativo

9.2.1 Instrumento

Para el estudio cuantitativo, se vio necesario utilizar la encuesta tipo escala de Likert, instrumento psicométrico donde la persona encuestada indica si está de acuerdo o en

desacuerdo con una afirmación, reactivo o ítem. Dicha indicación se realiza a través de una escala ordenada, siendo cada afirmación acompañada de una escala de valoración ordinal, generalmente entre los números 1 y 5 (Matas, 2018). De acuerdo con el diseño del estudio cuantitativo, las variables de análisis son las siguientes

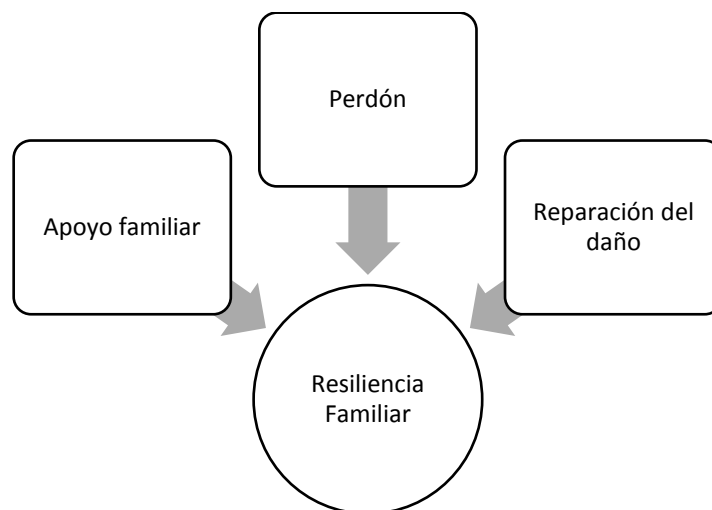


Figura 15. Variables del estudio cuantitativo. Fuente: elaboración propia

El instrumento utilizado para conocer en qué medida las variables de la justicia restaurativa; apoyo familiar, perdón y reparación del daño, impactan en la resiliencia familiar de las personas de libertad, se diseñó a partir de una profunda revisión documental así como de los resultados del estudio cualitativo, dando como resultado un instrumento en escala tipo Likert con tres escalas ordenadas de manera ascendente en cinco opciones para definir el nivel de aprobación de los encuestados con respecto a cada ítem.

Las principales referencias para la construcción del instrumento son: la Escala de Apoyo Social (EAS) de Palomar, Matus y Victorio (2013); la escala de *Transgression-Related Interpersonal Motivations Scale* (TRIM-18) de McCullough, Fincham y Tsang (2003); la escala de evaluación de la Capacidad de Perdonar (CAPER) de Casullo y Fernández-Liporance (Maganto & Garaigordobil, 2010); y la Escala de Estadios de Cambio o *Stages of Change Scale* (SOCS) de Prochaska y DiClemente (Redondo Illescas & Martínez Catena, 2011).

9.2.2 Población y muestra

Los inicios de los sistemas alternativos de justicia llegaron a México tras la última reforma constitucional acontecida en 2008, por lo que se puede decir que dichos sistemas están dando sus primeros pasos dentro de los centros penitenciarios del Estado de Nuevo León. Por lo reciente de su aceptación, los sistemas alternos de justicia apenas reciben los apoyos necesarios para poder aplicar dichos sistemas alternativos, por lo que su difusión dista mucho de la ideal. No obstante, es loable la actividad de aquellos que se comprometieron con dichos sistemas buscando una verdadera reinserción social y que paulatinamente están mostrando resultados positivos en su aplicación.

Para marzo de 2018 habían 3097 PPL varones en el CEPRERESO Topo chico. De ellos, 746 asisten a las terapias de reinserción social ofrecida por las áreas de psicología y criminología, agrupadas en la sección de reinserción técnica de dicho CEPRERESO. De estos 746 PPL, 350 accedieron a realizar una encuesta preliminar, para seleccionar aquellos sujetos que corresponden con el perfil de la investigación. Entre las distintas preguntas, se hizo un especial hincapié en aquellas PPL que para esa fecha mantenían contacto con sus familiares en el exterior, independientemente de la vía de comunicación que utilizaran, con el objetivo de poder aplicar los distintos instrumentos de recolección de datos y así medir el impacto de los elementos de la justicia restaurativa que inciden en la resiliencia familiar de estos sujetos. Finalmente, la cifra de PPL varones que se consideraron aptos para el estudio quedó fijada en 294 sujetos.

Es por ello que se consideró la cantidad de 167 encuestas de tipo escala de Likert a PPL del CEPRERESO de Topo Chico, Nuevo León, que estén realizando procesos de acercamiento a la familia o que estén dispuestos a iniciarlos. La elección del penal de Topo Chico viene dada por el apoyo brindado desde la administración de dicho penal para que la academia pueda realizar ingresos en el recinto, a fin de mejorar la metodología de los métodos alternativos de justicia, además de la colaboración de la asociación religiosa “Sembradores de esperanza” de la ciudad de Monterrey.

Para ampliar y contrastar la información obtenida mediante estas encuestas en una localización distinta a nuestra base de estudio, buscando un lugar donde las técnicas de aplicación de los sistemas alternativos estén también en proceso de desarrollo, enfocadas en el estudio que nos atañe. El destino seleccionado para este estudio comparativo fue Panamá y, concretamente, el Centro Penitenciario de Santiago, en la provincia de Veraguas. De los 475 PPL de este centro, 359 fueron condenados y, de estos, 205 realizaban tareas en materia de reinserción social, por lo que la población quedó fijada en esta cifra. Por tanto, la muestra quedó fijada en 134 personas.

9.2.3 Confiabilidad de la muestra

Si bien, se estableció una muestra para el CEPRERESO de Topo Chico, Nuevo León de 167 personas y para el centro penitenciario de Santiago de Veraguas de 134 personas, fue posible recabar una mayor cantidad de datos en ambos centros penitenciarios. Por lo tanto, para comprobar la confiabilidad de la nueva muestra, se utilizó el método de muestreo aleatorio simple -MAS-, obtenido a través de la fórmula:

$$(n = \frac{Z^2 * P * Q}{E^2})$$

Dónde n es igual al tamaño de la muestra, Z es igual al porcentaje de confiabilidad, P es igual a la probabilidad de favorecimiento de la resiliencia familiar en las PPL—.77 para el caso mexicano y .83 para el caso panameño—, Q es igual a la probabilidad de no favorecimiento de la resiliencia familiar en las PPL—.23 para el caso mexicano y .17 para el caso panameño—y E es igual al error de estimación.

De acuerdo con el método de Muestreo Aleatorio Simple—MAS—el estudio para cada grupo muestral cuenta con la siguiente confiabilidad y error de estimación:

Tabla 16:

Estadísticas de confiabilidad de la muestra

CEPRERESO Topo Chico			Centro Penitenciario Santiago de Veraguas		
Confiabilidad	Error de estimación	n	Confiabilidad	Error de estimación	n
95%	4.70%	214	95%	3.80%	208

Nota: El método utilizado es el Muestreo Aleatorio Simple

Fuente: *Elaboración propia*

Por lo tanto, es posible afirmar que el estudio tiene una confiabilidad del 95% para los dos grupos muestrales y un error de estimación menor al 5%.

9.2.4 Estudio Piloto

El instrumento fue validado a través de un pilotaje que se aplicó entre el 7 y el 8 de mayo del 2018 a 49 varones PPL en el CEREPRESO Topo Chico, Monterrey. Una vez aplicadas y sistematizadas las encuestas se realizó el análisis de Alpha de Crombach, con el objetivo de conocer la fiabilidad y consistencia interna del instrumento, utilizando el software Startical Product and Service Solutions -en adelante SPSS-, para lo cual se obtuvieron los siguientes resultados satisfactorios.

Tabla 17:

Fiabilidad del instrumento en el pilotaje

Estadísticas de fiabilidad		
Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	N de elementos
0.829	0.841	48

Fuente: *Datos alcanzados en el estudio*

La fiabilidad se define como “el grado en el que un instrumento de varios ítems mide consistentemente una muestra de la población” (Oviedo & Campo-Arias, 2005). El alfa de Crombach mide la fiabilidad del instrumento en términos de la correlación de los ítems que lo componen. En otras palabras, es el promedio de las correlaciones entre los ítems. El alfa de Cronbach se expresa con un valor numérico entre el 0 y el 1, dónde los valores más cercanos al 1 representan mayor fiabilidad. En este sentido, se considera que un instrumento es bueno cuándo el resultado del alfa de Crombach es mayor a 0.70

(Hernández & Pascual Barrera, 2018), por lo que, para efectos de esta investigación, el resultado del pilotaje—0.829—indica que el instrumento es lo suficientemente consistente y útil para analizar la relación entre las variables definidas.

Cabe destacar que el instrumento utilizado en el pilotaje utiliza frases y conceptos utilizados comúnmente en México, por lo que, para la implementación del instrumento en Panamá, se procedió a una adaptación del lenguaje, guiada por el director general del sistema penitenciario del país, el Licenciado Armando Medina.

9.2.5 Proceso de redacción de ítems.

El resultado final del proceso de diseño es un instrumento que se compone de 48 ítems los cuales se organizan en las cuatro variables de análisis: apoyo familiar, perdón, reparación del daño y resiliencia familiar de la siguiente forma:

Tabla 18:

Ítems del instrumento cuantitativo ordenados por variable de análisis

Variable	Ítem	Código	Escala
ID	Estado civil	EC	ID1
	Nivel de estudios	NE	ID2
	Años interno	AI	ID3
Apoyo familiar	Mi familia es cariñosa conmigo	AE1	1
	Mis familiares me transmiten cariño	AE2	1
	Mi familia me da ánimos para enfrentar cada día	AE3	1
	Mi familia reconoce cuando hago algo bien	AE4	1
	Mi familia me trae comida	AM1	1
	Mi familia me trae cosas de higiene (rollo de papel, jabón...)	AM2	1
	Mi familia me apoya con dinero	AM3	1
	Mis familiares vienen a verme	CC1	1
	Recibo visitas de mi familia	CC2	1
	Mi familia me ayuda a tomar decisiones	CC3	1
	Puedo hablar de mis problemas con mi familia	CC4	1
	Mi familia realmente intenta ayudarme	IO1	2
	Mi familia me apoya y me ayuda cuando lo necesito	IO2	2
Perdón	Algún miembro de mi familia me guarda rencor por estar internado	RE1	2
	He perdido la confianza de mi familia	RE2	2
	Mi familia confía en mí	RE3	2
	Mi familia quiere que yo pague por mis errores	RE4	2
	Mi familia entiende mis errores	EM1	2
	Mis familiares comprenden las razones que me hicieron cometer la acción por la que estoy aquí	EM2	3

	Volví a hablar con familiares con los que no hablaba cuando entré aquí	EM3	2
	Estando interno reparé mi relación con algún familiar con el que dejé de hablar hace tiempo	EM4	3
	Mis familiares se interesan por mí	EV1	2
	Mis familiares contestan cuando les marco	EV2	1
	Mis familiares responden a mis llamadas	EV3	1
	Mis familiares han cortado toda comunicación conmigo	EV4	2
	Mis familiares dicen que van a venir y luego no aparecen	EV5	1
Reparación del daño	Empecé a pensar en los actos que cometí cuando ingresé aquí	BC1	2
	Estando internado comencé a pensar sobre las cosas que hice para estar aquí	BC2	2
	He estado pensando que tal vez quiera cambiar algo de mí mismo	BC3	2
	Me esfuerzo por cambiar mis hábitos	BC4	2
	He hablado del error que cometí con mis familiares para saber cómo se sentían	DI1	3
	Platiqué con mis familiares para saber cómo se sentían ellos de que yo esté aquí	DI2	2
	Escuché atentamente a mis familiares cuando me contaron cómo se sintieron de que yo esté aquí	DI3	2
	Mi familia me cuenta la verdad de lo que pasa fuera de aquí	DI4	1
	Para que mis familiares no se preocuparan por mí sentí la necesidad de contarles lo que pasó	IV1	2
	Sentí la necesidad de explicarles a mis familiares lo que pasó para que no se preocuparan por mí	IV2	3
	Fui sincero con mi familia cuando les expliqué lo que pasó	IV3	3
	Pregunto a mis familiares cómo les van las cosas fuera	IV4	1
	Intento no molestar demasiado a mi familia para no preocuparla	IV5	3
	Me siento culpable por la situación que vive mi familia al estar yo aquí internado	RA1	2
	Pedí perdón a mis familiares por el daño que les causé al ingresar aquí	RA2	2
	El daño que causé a mis familiares cuando me internaron aquí hizo que les pidiera disculpas	RA3	3
	He aceptado los errores que cometí y que causaron que esté aquí	RA4	3
Resiliencia familiar	El que yo ingresara aquí hizo que mis familiares se unieran más	RF1	2
	Mi familia y yo ahora tenemos una mejor relación que cuando estaba afuera	RF2	3
	Mi familia y yo tenemos las mismas costumbres religiosas	CV1	2
	Comparto las mismas creencias religiosas que mis familiares	CV2	2
	Comparto los mismos valores que mis familiares	CV3	2

Fuente: elaboración propia

Para los ítems se utilizaron tres escalas ordinales con cinco opciones, dónde en un extremo—1—se encuentra la opción menos favorable y en el otro—5—la opción más favorable, mientras que para los reactivos de identificación las opciones no fueron ordinales. Las posibles respuestas para cada tipo de escala fueron las siguientes:

Tabla 19:

Escalas utilizadas en el instrumento cuantitativo

Escala de valoración	Valor				
	1	2	3	4	5
ID1	soltero	casado	divorciado	unión libre	viudo
ID2	sin estudios	primaria	secundaria	preparatoria	Universidad
ID3	1 o menos	2	3	4	5 o más
1	nunca	poco	a veces	mucho	Siempre
2	nada	poco	algo	bastante	mucho
3	totalmente en desacuerdo	en desacuerdo	ni de acuerdo ni en desacuerdo	de acuerdo	totalmente de acuerdo

Fuente: Elaboración propia

9.2.6 Resultados del pilotaje cuantitativo

Los resultados del pilotaje cuantitativo fueron positivos, sin la necesidad de retocar ninguno de los ítems redactados, puesto que estos resultaron comprensibles para la totalidad de los integrantes de la muestra del pilotaje.

Cabe destacar que, para la aplicación de este instrumento en el Centro Penitenciario de Santiago de Veraguas, algunas palabras y conceptos fueron modificados a la variante panameña del español para poder facilitar la comprensión de dicho instrumento a la muestra panameña de estudio.

9.3 Discusión de resultados cuantitativos

9.3.1 Proceso de aplicación y sistematización del instrumento

El instrumento se aplicó de manera aleatoria a hombres PPL que participaban activamente en programas de reinserción social en los centros penitenciarios seleccionados en Monterrey, México, y en Santiago de Veraguas, Panamá. En ambos casos, las encuestas fueron aplicadas por el investigador con apoyo del personal técnico de psicología y criminología de los centros penitenciarios.

Para la sistematización de los resultados se utilizó el programa Excel de Office, dónde se codificaron las respuestas de acuerdo con la valoración establecida para cada escala, utilizando los números del uno al cinco. Una vez sistematizadas todas las encuestas se

invertieron los valores de aquellos reactivos planteados de forma negativa, de manera que todas las respuestas llevaran la misma lógica, siendo el número cinco el que representa la situación más favorable y el uno la situación menos favorable.

Los reactivos a los cuales se les invirtieron los valores fueron los siguientes:

Tabla 20:

Reactivos negativos con valores invertidos

Variable	Ítem	Código	Escala
Perdón	Algún miembro de mi familia me guarda rencor por estar internado	27RE1	2
	He perdido la confianza de mi familia	38RE2	2
	Mi familia quiere que yo pague por mis errores	30RE4	2
	Mis familiares han cortado toda comunicación conmigo	33EV4	2
	Mis familiares dicen que van a venir y luego no aparecen	14EV5	1

Fuente: Elaboración propia

9.3.2 Método de análisis de datos

Para la realización del estudio se utilizaron los siguientes métodos de análisis de datos:

Tabla 21:

Métodos de análisis de datos

Método	Objetivo	Criterio de interpretación
Alfa de Cronbach	Conocer la fiabilidad del instrumento en términos de correlación de los ítems que lo componen	El coeficiente de Alfa de Cronbach debe estar dentro de un rango de 0.7 y 0.8 para considerarse aceptable y de 0.8 y 0.9 para considerarse bueno (Hernández & Pascual Barrera, 2018).
ANOVA	Comprobar la independencia de las variables independientes entre sí	El p-valor o Sig. Debe ser igual o menor que 0.05 para rechazar la hipótesis nula (Bakieva, 2012).
Estadística Descriptiva	Conocer las características de la población de acuerdo con las preguntas de identificación del instrumento.	El análisis es un comparativo de las medias de las categorías de cada pregunta de identificación en el CEPRERESO Topo Chico y el centro penitenciario de Santiago de Veraguas
Regresión Logística Binaria Múltiple	Conocer la probabilidad de impacto de las variables independientes sobre la variable dependiente	El coeficiente Sig. Debe ser menor a 0.05 para considerar que la variable independiente es significativa (López-Roldán & Fachelli, 2016). A mayor valor del coeficiente de Exp (B), mayor impacto de la variable independiente sobre la dependiente (De la Fuente Fernández, 2013).

Fuente: Elaboración propia

9.3.3 Análisis de resultados

9.3.3.1 Alfa de Cronbach

Para efectos de esta investigación, se utilizó el alfa de Cronbach como método para conocer la fiabilidad en términos de correlación de los ítems que componen el instrumento. Se entiende por fiabilidad el grado en el que un instrumento es capaz de medir consistentemente una muestra de la población (Oviedo & Campo-Arias, 2005).

El alfa de Cronbach se aplicó al conjunto de datos recuperados en ambos escenarios, Monterrey y Santiago de Veraguas Panamá, con el objetivo de conocer si las adaptaciones al lenguaje tuvieron algún impacto significativo en la validez del instrumento.

El proceso consistió en la creación de las dos bases de datos con los ítems y las respuestas de las PPL encuestados correspondientes, posteriormente se eliminaron las preguntas de control con la finalidad de evitar la duplicidad, dando como resultado un instrumento de 38 ítems, y finalmente se realizó el análisis a través del programa estadístico SPSS.

Para la interpretación se tomaron en cuenta diversas referencias documentales de las cuales se rescata el siguiente criterio general: coeficiente alfa mayor a 0.9 es excelente, entre 0.8 y 0.9 es bueno, entre 0.7 y 0.8 es aceptable, entre 0.6 y 0.7 es cuestionable, entre 0.5 y 0.6 es pobre y menor de 0.5 es inaceptable (Hernández & Pascual Barrera, 2018, pág. 160):

No obstante, cabe destacar que no existe un consenso sobre la interpretación de los coeficientes mayores a 0.9, ya que otros autores como Oviedo & Campo Arias (2005) consideran que los coeficientes mayores a 0.9 reflejan redundancia o duplicación, es decir que varios ítems miden exactamente lo mismo y por lo tanto deben eliminarse las duplicidades.

Conforme a la fiabilidad del instrumento, los resultados de la prueba para los dos grupos muestrales son los siguientes:

Tabla 22:

Estadísticas de fiabilidad: resultados del Alfa de Cronbach

CEPRERESO Topo Chico			Centro Penitenciario Santiago de Veraguas		
Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	N de elementos	Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	N de elementos
0.885	0.903	38	0.931	0.931	38

Fuente: Datos alcanzados en el estudio

Los coeficientes de Alfa de Cronbach para los dos grupos muestrales son indicativos de una excelente consistencia interna del instrumento al estar siempre dentro del rango de fiabilidad entre 0.85 y 0.95, tal como se detalla en la tabla anterior.

9.3.3.2 ANOVA

El análisis de varianza ANOVA es un método estadístico que permite, entre otras cosas, determinar si las variables independientes muestran independencia entre sí, es decir, si efectivamente están midiendo cosas distintas. En el análisis de varianza se entiende como factor, a la variable o variables independientes cuya influencia e independencia se quiere corroborar (De la Fuente Fernández, 2013).

Para determinar la independencia entre los factores, el análisis arroja las medias de las valoraciones de las variables independientes de manera comparada, por lo que se requiere la formulación de una hipótesis nula (H_0) y una hipótesis alternativa (H_1) para constatar si el criterio de independencia efectivamente se cumple. Para efectos de esta investigación las hipótesis nula y alternativa planteadas son las siguientes:

H_0 : Las medias de las valoraciones del apoyo familiar, perdón y reparación del daño son iguales. H_1 : Las medias de las valoraciones del apoyo familiar, perdón y reparación del daño no son iguales.

Para la interpretación de los resultados del ANOVA se utilizó el siguiente criterio (Bakieva, 2012, pág. 4): si el nivel crítico (sig.) es menor o igual que 0.05, se rechaza la hipótesis nula, ya que existen diferencias significativas entre los factores. Si el nivel crítico (sig.) es

mayor que 0.05, se rechaza la hipótesis alternativa, ya que no existen diferencias significativas entre los factores.

Al igual que en el caso del análisis de alfa de Cronbach, el ANOVA se realizó para los dos escenarios posibles: la población del CERPERESO Topo Chico de Monterrey y la población del centro penitenciario de Santiago de Veraguas, Panamá. Para ello se diseñaron las dos bases de datos y se realizó el análisis a través del programa estadístico SPSS.

Para corroborar la independencia entre las variables independientes, es decir, para comprobar que las variables independientes; apoyo familiar, perdón y reparación del daño no están midiendo lo mismo, se recurrió al análisis de varianzas ANOVA para las dos muestras poblacionales, dando como resultado los siguientes Sig.:

Tabla 23:

Estadísticas de independencia: resultados del ANOVA

	CEPRERESO Topo Chico			Centro Penitenciario Santiago de Veraguas		
	Entre grupos	Dentro de grupos	total	Entre grupos	Dentro de grupos	total
Suma de cuadrados	10.929	363.198	374.127	22.922	470.966	493.888
gl	2	639	641	2	621	623
Media cuadrática	5.465	.568		11.461	.758	
F	9.614			15.112		
Sig.	.000			.000		

Fuente: Datos alcanzados en el estudio

En los dos escenarios, el nivel crítico Sig., también conocido como p-valor, está por debajo de 0.05 (sig.=0.000), por lo cual se concluye muy significativamente que las medias de las valoraciones del apoyo familiar, perdón y reparación del daño no son iguales y, por lo tanto, existen elementos para rechazar la hipótesis nula.

Tabla 24:

Estadísticas descriptivas de las variables independientes

	CEPRERESO Topo Chico			Centro Penitenciario Santiago de Veraguas		
	N	Media	Desviación estándar	N	Media	Desviación estándar
Apoyo Familiar	214	4.1844	.77854	208	3.7155	1.13139
Perdón	214	3.8766	.66242	208	3.6385	.63949
Reparación del daño	214	3.9558	.81255	208	4.0780	.76564

Total	642	4.0056	.76398	624	3.8107	.89037
-------	-----	--------	--------	-----	--------	--------

Fuente: Datos alcanzados en el estudio

De acuerdo con la Tabla 24, la principal diferencia entre los grupos muestrales es que para el caso del CEPRERESO Topo Chico el apoyo familiar es la variable con mayor valoración, mientras que en el centro penitenciario Santiago de Veraguas fue la variable de reparación del daño la que obtuvo las valoraciones más altas.

9.3.3.3 Descripción de las características de la muestra a partir de las preguntas de identificación

Con el objetivo de conocer las características de la población de los centros penitenciarios dónde se llevó a cabo el estudio, se calcularon los promedios de las respuestas para cada una de las categorías que presentaba el instrumento para cada pregunta de identificación. La finalidad fue conocer las principales similitudes y diferencias entre ambas poblaciones.

Las preguntas de identificación del instrumento se diseñaron con la finalidad de conocer algunas de las características de la muestra poblacional. A continuación, se presentan los resultados en términos de distribución de los porcentajes para cada categoría prevista en el instrumento en los ítems; Estado Civil, Educación y Años Interno:

Conforme al estado civil, al observar la distribución de las categorías en los grupos muestrales de los dos centros penitenciarios dónde se llevó a cabo el estudio de manera independiente, encontramos algunas diferencias significativas. Por un lado, en el caso del CEREPRESO Topo Chico de Monterrey (Figura 17) más de la mitad de las personas encuestadas—54%—manifestaron estar en una relación; 28% de ellos en unión libre y 26% de ellos casados. Mientras que el 17% manifestó estar separado y el 2% viudo. Lo que nos indica que casi el 20% de ellos estuvieron en una relación en el pasado, la cual terminó solo en el caso del 2% por muerte de la pareja. Solo el 27% se manifestaron solteros.

Por su parte, en el centro penitenciario de Santiago de Veraguas, Panamá (Figura 18), más de la mitad de los encuestados—56%—se manifestaron solteros y solo el 36% manifestó encontrarse en algún tipo de relación, 10% casados y 22% en unión libre. Por su parte, solo el 10% manifestaron estar separados y, al igual que en el caso de El Topo Chico, solo el 2% manifestó ser viudos.

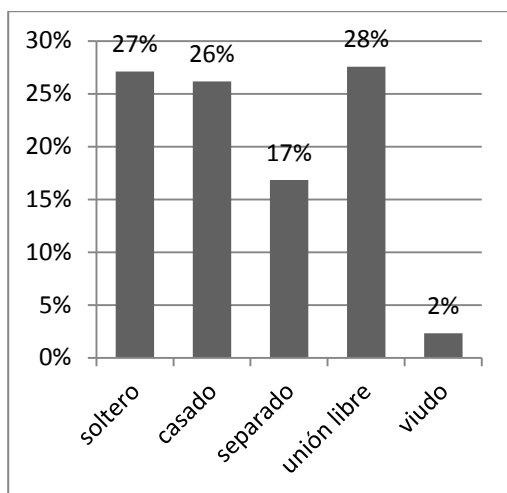


Figura 16. Estado Civil de la muestra del CEREPRESO Topo Chico, Monterrey. Fuente: Datos alcanzados en el estudio

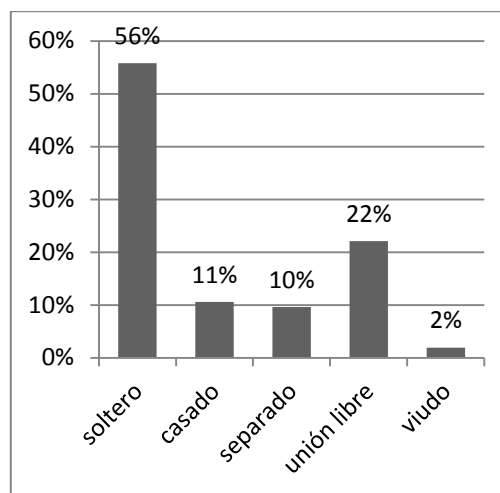


Figura 17. Estado Civil de la muestra del Centro Penitenciario de Santiago de Veraguas. Fuente: Datos alcanzados en el estudio

En el caso del CEREPRESO Topo Chico, Monterrey (Figura 19) el 68% de los encuestados cuenta con educación secundaria o menor, mientras que el 27% de los encuestados cuenta con educación preparatoria y 5% con educación universitaria. Por su parte, el caso del centro penitenciario de Santiago de Veraguas, Panamá (Figura 20), el 80% de los encuestados manifestó contar con educación secundaria o menor. Mientras que solo el 10% manifestó contar con educación preparatoria, y otro 10% con educación universitaria.

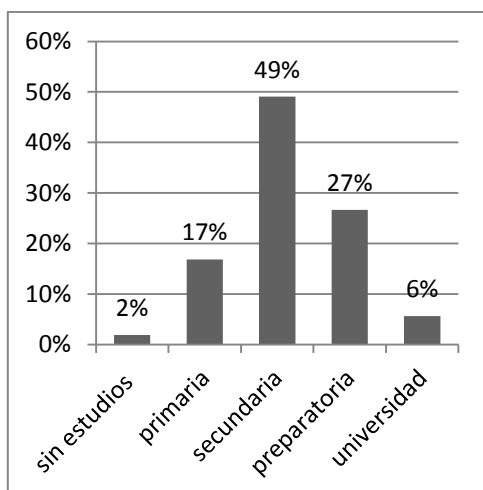


Figura 18. Nivel Educativo de la muestra del CEREPRESO Topo Chico, Monterrey. Fuente: Datos alcanzados en el estudio

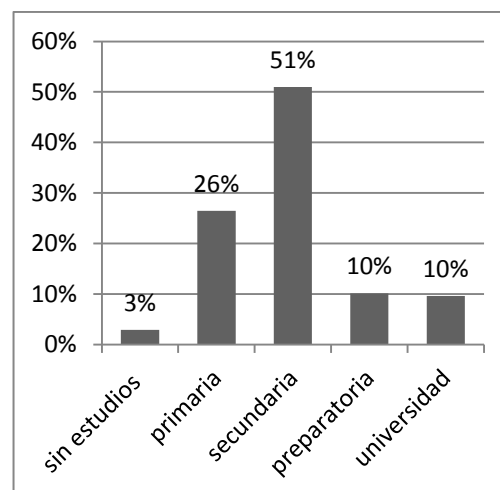


Figura 19. Nivel Educativo de la muestra del Centro Penitenciario de Santiago de Veraguas. Fuente: Datos alcanzados en el estudio

En cuanto a los años internos, se observa que ambos escenarios presentan una distribución bastante equilibrada. No obstante, cabe destacar una diferencia significativa: en el caso del CEREPRESO Topo Chico, Monterrey (Figura 21), el 32% de los encuestados manifestó llevar más de cinco años interno a diferencia del centro penitenciario de Santiago de Veraguas, Panamá (Figura 22), dónde solo el 17% eligió la misma opción.

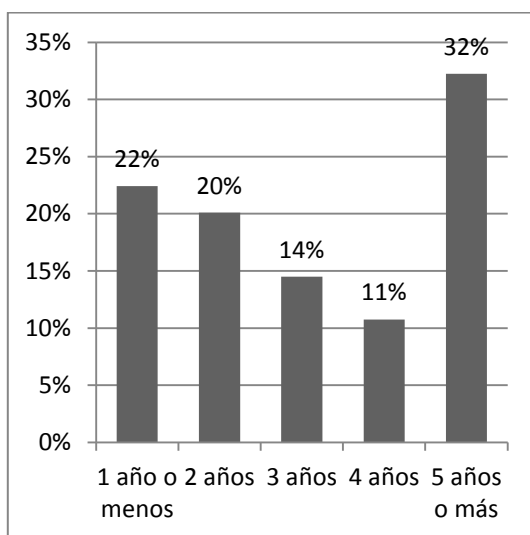


Figura 20. Años Interno de la muestra del CEREPRESO Topo Chico, Monterrey. Fuente: Datos alcanzados en el estudio

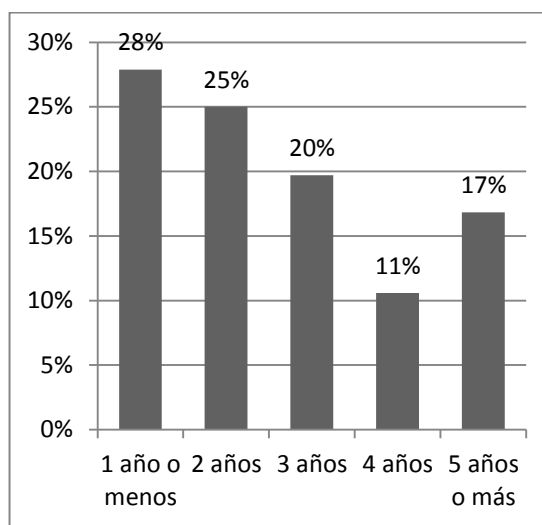


Figura 21. Años Interno de la muestra del Centro Penitenciario de Santiago de Veraguas. Fuente: Datos alcanzados en el estudio

9.3.3.4 Regresión Logística Binaria Múltiple

Para conocer en qué medida las variables independientes influyen en que la variable dependiente suceda o no, se utilizó el método de regresión logística binaria múltiple, por ser una técnica estadística multivariante que permite efectuar predicciones del comportamiento, o estimar probabilidades de un suceso definido por la variable dependiente en función de un conjunto de variables independientes. El objetivo de la regresión logística es “explicar o pronosticar la pertenencia a un grupo, a partir de una variable dependiente categórica o cualitativa, en función de una o más variables independientes que pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas” (López-Roldán & Fachelli, 2016, pág. 5). La modalidad de regresión logística binaria permite explicar una característica o suceso dicotómico, en este caso si existe resiliencia familiar o no. Para ello es necesario que la variable dependiente, en este caso la resiliencia familiar, se exprese en términos de probabilidad de que el suceso ocurra. Para ello, se asignan valores de 0 y 1, dónde si la probabilidad de que suceda es P , la probabilidad de que no suceda es igual a 1 menos la probabilidad, tal como se expresa en la siguiente fórmula:

$$Pr(y = 1) = P$$

$$Pr(Y = 0) = 1 - P$$

En este caso, para transformar la variable dependiente *resiliencia familiar* en una variable dicotómica, se sumaron las respuestas de los cuatro ítems que componen la variable (RF1, RF2, CV1, CV3) y se estableció un punto de corte a partir de la suma del valor mínimo posible -4- y el máximo posible -20- dividido entre dos, tal como se expresa en la siguiente fórmula:

$$Punto\ de\ corte = \frac{4 + 20}{2} = 12$$

Por lo tanto, los modelos de regresión logística clasifican como PPL que no tienen favorecimiento de la resiliencia familiar a aquellos cuyo resultado de la suma de los cinco ítems que componen la variable sea menor a 12, y como PPL con resiliencia familiar a aquellos cuya suma sea igual o mayor a 12.

La categorización de los grupos se realizó para las muestras de cada centro penitenciario de estudio de manera independiente, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 25:

Composición de los grupos de acuerdo con la variable de Resiliencia Familiar en el CEPRERESO Topo Chico y en el Centro Penitenciario de Santiago de Veraguas

	CEPRERESO Topo Chico		Centro Penitenciario Santiago de Veraguas	
	n	%	n	%
Con favorecimiento de la resiliencia familiar	164	76.6%	172	82.7%
Sin favorecimiento de la resiliencia familiar	50	23.4%	36	17.3%
Total	214	100%	208	100%

Fuente: Datos alcanzados en el estudio

La tabla anterior es ilustrativa de un patrón en la composición de los grupos que definen la variable dependiente *resiliencia familia*, a favor del grupo con favorecimiento de resiliencia familiar, siendo que en los dos escenarios muestrales el grupo se compone de aproximadamente tres cuartas partes de las poblaciones totales respectivas.

El proceso de análisis siguió los pasos de selección de las variables del modelo, clasificación de los casos y estimación de los coeficientes de las variables independientes. El análisis se aplicó a los grupos muestrales de los dos centros penitenciarios dónde se realizó el estudio de manera independiente, con la finalidad de conocer diferencias y puntos en común entre los grupos muestrales. Para ello, se proponen los siguientes cuatro modelos alternativos de regresión logística binaria

Tabla 26:

Modelos alternativos de regresión logística binaria

Modelo alternativo	Muestra	Variable dependiente	Variables independientes
1	Muestra del centro penitenciario de Monterrey	Variable dicotómica de resiliencia familiar	Las medias de los ítems que componen las variables: apoyo familiar, perdón y reparación del daño
2	Muestra del centro penitenciario de Santiago de Veraguas	Variable dicotómica de resiliencia familiar	Las medias de los ítems que componen las variables: apoyo familiar, perdón y reparación del daño

3	Muestra del centro penitenciario de Monterrey	Variable dicotómica de resiliencia familiar	Todos los ítems del instrumento
4	Muestra del centro penitenciario de Santiago de Veraguas	Variable dicotómica de resiliencia familiar	Todos los ítems del instrumento

Fuente: Elaboración propia

A partir de los resultados de los coeficientes de la ecuación de regresión logística, es posible clasificar a los individuos según la variable dependiente, es decir, es posible observar quienes y cuantos individuos pertenecen al grupo que si tiene resiliencia familiar y quienes y cuantos pertenecen al grupo que no tiene resiliencia familiar. Para ello se toman en cuenta dos clasificaciones; una inicial establecida por el punto de corte de la variable dependiente dicotómica, y la pronosticada en función del modelo de regresión logística. El cruce de ambas nos permitirá conocer qué porcentaje de los casos están correctamente clasificados (Oviedo & Campo-Arias, 2005).

La estimación de los coeficientes de la ecuación de regresión logística permite conocer la relevancia de cada variable independiente en la explicación de la variable dependiente. Para identificar aquellas variables independientes que mejor explican la variable dependiente, es importante tomar en cuenta los siguientes coeficientes que arroja la regresión logística:

B: es una medida estadística que permite observar la probabilidad de que el suceso de la variable dependiente ocurra si aumenta en una unidad la variable independiente. Lo más relevante de este coeficiente es el signo, ya que un signo positivo indica que a medida que aumenta la variable independiente, aumenta la probabilidad de que exista la resiliencia familiar. Por su parte, el signo negativo indica que a medida que disminuye la variable independiente, aumenta la probabilidad de que exista la resiliencia familiar (López-Roldán & Fachelli, 2016).

Sig.: es una medida estadística conocida como el p-valor, que permite conocer que tan significativa es una variable en la explicación de la variable dependiente. Por regla general el criterio para considerar que una variable es significativa es que tenga un valor menor a 0,05 (López Hernández, 2016)

Exp (B): es una medida estadística que cuantifica el riesgo que representa poseer el factor correspondiente o no poseerlo, suponiendo que el resto de las variables del

modelo permanecen constantes. Por lo tanto, un coeficiente Exp (B) cercano a cero, indicará que, si se modificase esa variable, no tendría efecto alguno sobre la variable dependiente. Por lo tanto, las variables más relevantes serán aquellas con valores más altos (De la Fuente Fernández, 2011)

E.T: el coeficiente de error estándar solo es relevante cuando alguna variable presenta un valor mayor a 1. En ese caso, la variable no puede entrar en el modelo, así sea significativa (De la Fuente Fernández, 2011).

Las estimaciones de los coeficientes de las variables independientes se realizaron para cada uno de los modelos alternativos propuestos.

9.3.3.4.1 Modelo alternativo 1

Para el modelo alternativo 1, se consideran como variables independientes las medias de los ítems que componen cada una de las variables de la justicia restaurativa; apoyo familiar, perdón y reparación del daño, y como variable dependiente a la variable dicotómica de resiliencia familiar para la muestra del CEREPRESO Topo Chico de Monterrey.

A través del punto de corte de la variable de resiliencia familiar se clasificaron a 164 personas en el grupo con favorecimiento de la resiliencia familiar y a 50 en el grupo de no favorecimiento de la resiliencia familiar. Sin embargo, el modelo alternativo que considera a las variables de la justicia restaurativa como variables independientes de la resiliencia familiar, clasificó a 173 personas en el grupo de favorecimiento de la resiliencia familiar; 153 de las cuales coinciden con la clasificación del punto de corte y 20 corresponden a personas que el punto de corte había clasificado en el grupo contrario. Lo que quiere decir que el modelo clasificó correctamente al 93.3% de las personas con favorecimiento de la resiliencia familiar.

Por otro lado, el modelo clasifica a 41 personas en el grupo de no favorecimiento de la resiliencia familiar, de las cuales solo 30 coinciden con la clasificación del punto de corte. Por lo tanto, el modelo clasificó correctamente al 60% de las personas sin favorecimiento de la resiliencia familiar.

Esto quiere decir que, en términos globales, el modelo clasificó correctamente al 85.5% de los casos.

Tabla 27

Clasificación del modelo alternativo 1

Observado			Pronóstico		Corrección de porcentaje
			Corte		
			No Resiliencia Familiar	Si Resiliencia Familiar	
Paso 1	Corte	No Resiliencia Familiar	30	20	60.0
		Si Resiliencia Familiar	11	153	93.3
	Porcentaje global				85.5

Nota: El valor de corte es .50

Fuente: Datos alcanzados en el estudio

Por su parte, las variables más significativas en la resiliencia familiar son aquellas cuyo p-valor (Sig.) estén más cercanos al 0.000 o su exp(B), son los más altos (Tabla 28), por lo tanto, el modelo alternativo 1 indica que la variable independiente que más impacta en la resiliencia familiar es la reparación del daño, ya que es 7.4 veces más probable que un individuo forme parte del grupo de favorecimiento de resiliencia familiar si eligió las opciones con la máxima valoración en los ítems que componen a la variable de reparación del daño.

Tabla 28:

Variables de la ecuación del modelo alternativo 1

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 1 ^a	Reparación del daño	2.011	.307	42.875	1	.000	7.474
	Perdón	.993	.486	4.176	1	.041	2.699
	Apoyo Familiar	-.345	.282	1.501	1	.221	.708
	Constante	-8.494	1.748	23.605	1	.000	.000

Fuente: Datos alcanzados en el estudio

Para conocer la probabilidad de impacto de cada en la resiliencia familiar, se utiliza la siguiente fórmula:

$$Pr\{\text{sí R.F}\} = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

Dónde el valor de z se calcula a partir de la multiplicación de los coeficientes de B por la máxima valoración posible—5—, y la resta del coeficiente B de la contante:

$$Z = (B \text{ variable} * 5) - B \text{ constante}$$

Al sustituir el valor de Z en la fórmula para conocer la probabilidad de que exista la resiliencia familiar si se otorga la valoración máxima posible—5—a cada una de las variables se obtienen los siguientes resultados:

Tabla 29:

Probabilidad de impacto de las variables independientes sobre la resiliencia familiar del modelo alternativo 2

Variable	Pr {Sí R.F.}
Reparación del Daño	82.64%
Perdón	2.84%
Apoyo Familiar	0%

Fuente: Datos alcanzados en el estudio

Por lo tanto, de acuerdo con el modelo alternativo 1, es 82.64% probable que los internos del CEPRERESO Topo Chico que manifiestan que han reparado el daño causado por su ingreso en prisión a sus familiares tengan mayor éxito en su resiliencia familiar, siendo la reparación del daño la variable más significativa. Por su parte, el negativo coeficiente B de la variable Apoyo Familiar es indicativo de que a medida que aumenta el apoyo familiar disminuye la probabilidad de resiliencia familiar.

9.3.3.4.2 Modelo alternativo 2

Para el modelo alternativo 2, se consideran como variables independientes las medias de los ítems que componen cada una de las variables de la justicia restaurativa; apoyo familiar, perdón y reparación del daño, y como variable dependiente a la variable dicotómica de *resiliencia familiar* para la muestra del centro penitenciario de Santiago de Veraguas Panamá.

El modelo alternativo 2 clasifica correctamente al 97.7% de las personas con favorecimiento de resiliencia familiar y a un 55% de las personas sin favorecimiento de la resiliencia familiar, por lo que, en un porcentaje global, el modelo clasificó correctamente al 90.4% de las personas de acuerdo con la clasificación determinada por el punto de corte con valor de .50 (Tabla 30)

Tabla 30:

Clasificación del modelo alternativo 2

		Observado	Pronóstico		Corrección de porcentaje
			Corte		
			No Resiliencia Familiar	Si Resiliencia Familiar	
Paso 1	Corte	No Resiliencia Familiar	20	16	55.6
		Si Resiliencia Familiar	4	168	97.7
			Porcentaje global		

Nota: el valor de corte es .50

Fuente: Datos alcanzados en el estudio

Por su parte, las variables más significativas en la resiliencia familiar son aquellas cuyo p-valor (Sig.) estén más cercanos al 0.000 o su exp(B), son los más altos (Tabla 31). El modelo alternativo 2, indica que la variable independiente que más impacta en la resiliencia familiar es la reparación del daño, ya que es 5.33 veces más probable que un individuo forme parte del grupo de favorecimiento de resiliencia familiar si eligió las opciones con la máxima valoración en los ítems que componen a la variable de reparación del daño.

Tabla 31:

Variables de la ecuación del modelo alternativo 2

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 1 ^a	Reparación del daño	1.674	.382	19.171	1	.000	5.335
	Perdón	.092	.514	.032	1	.859	1.096
	Apoyo Familiar	.510	.271	3.540	1	.060	1.665
	Constante	-6.782	1.567	18.740	1	.000	.001

Fuente: Datos alcanzados en el estudio

Para conocer la probabilidad de impacto de cada en la resiliencia familiar, se utiliza la siguiente fórmula:

$$Pr\{\text{sí R.F}\} = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

Dónde el valor de z se calcula a partir de la multiplicación de los coeficientes de B por la máxima valoración posible -5-, y la resta del coeficiente B de la contante:

$$Z = (B \text{ variable} * 5) - B \text{ constante}$$

Al sustituir el valor de Z en la fórmula para conocer la probabilidad de que exista la resiliencia familiar se obtienen los siguientes resultados:

Tabla 32:

Probabilidad de impacto de las variables independientes sobre la Resiliencia Familiar del modelo alternativo 2

Variable	Pr {Sí R.F.}
Reparación del Daño	82.89%
Perdón	0.17%
Apoyo Familiar	1.43%

Fuente: Datos alcanzados en el estudio

Por lo tanto, de acuerdo con el modelo alternativo 2, es 82.89% probable que los internos del centro penitenciario de Santiago de Veraguas que se manifiesten dispuestos a reparar el daño causado por su ingreso en prisión a sus familiares tengan mayor éxito en su resiliencia familiar, siendo la reparación del daño la variable más significativa.

9.3.3.4.3 Modelo alternativo 3

Para el modelo alternativo 3, se consideran como variables independientes todos los ítems del instrumento que componen las variables de la justicia restaurativa de manera autónoma, y como variable dependiente a la variable dicotómica de la resiliencia familiar para la muestra del CEREPRESO Topo Chico de Monterrey.

El modelo alternativo 3 clasifica correctamente al 95.7% de las personas con favorecimiento de resiliencia familiar y a un 82% de las personas sin favorecimiento de la resiliencia familiar, por lo que, en un porcentaje global, el modelo clasificó correctamente al 92.5% de las personas de acuerdo con la clasificación determinada por el punto de corte con valor de .50.

Tabla 33:

Clasificación del modelo alternativo 3

Observado		Pronóstico		Corrección de porcentaje	
		Corte			
		No Resiliencia Familiar	Si Resiliencia Familiar		
Paso 1	Corte	No Resiliencia Familiar	41	9	82.0
		Si Resiliencia Familiar	7	157	95.7
	Porcentaje global				92.5

Nota: el valor de corte es .50

Fuente: Datos alcanzados en el estudio

Los ítems más significativos en la resiliencia familiar son aquellos cuyo p-valor (Sig.) estén más cercanos al 0.000 o su exp(B), son los más altos. Por lo tanto, para el modelo alternativo 3, los seis ítems más relevantes son:

Tabla 34

Ítems más significativos del modelo alternativo 3

Variable	Ítem	Sig.	Exp(B)
Reparación del daño	IV1: Para que mis familiares no se preocuparan por mi sentí la necesidad de contarles lo que pasó	0.001	10.277
Reparación del daño	RA3: El daño que causé a mis familiares cuando me internaron aquí hizo que les pidiera disculpas	0.004	7.757
Reparación del daño	IV4: Pregunto a mis familiares cómo van las cosas fuera	0.007	5.371
Apoyo Familiar	CC2: Recibo visitas de mi familia	0.039	4.126
Apoyo Familiar	AE3: Mi familia me da ánimos para enfrentar cada día	0.035	3.955
Reparación del daño	DI4: Mi familia me cuenta la verdad de lo que pasa fuera de aquí	0.027	2.509

Fuente: Datos alcanzados en el estudio

Tabla 35:

Variables de la ecuación del modelo alternativo 3

	Ítem	B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
	AE1	-1.000	.617	2.626	1	.105	.368
	AE3	1.375	.651	4.456	1	.035	3.955
	AE4	.197	.465	.179	1	.672	1.217
	AM1	-1.241	.670	3.431	1	.064	.289
	AM2	-.657	.527	1.555	1	.212	.519
	AM3	.532	.364	2.142	1	.143	1.702
	CC1	-.502	.496	1.023	1	.312	.606
	CC2	1.417	.687	4.251	1	.039	4.126
	CC4	-1.004	.706	2.022	1	.155	.366
	IO1	-2.279	.905	6.344	1	.012	.102
	IO2	-1.769	.803	4.853	1	.028	.171
Paso 1 ^a	EM1	.708	.467	2.300	1	.129	2.029
	EM2	.202	.304	.442	1	.506	1.224
	EM3	1.292	.462	7.805	1	.005	3.640
	EV1	3.669	1.210	9.190	1	.002	39.208
	EV2	.870	.615	2.000	1	.157	2.388
	EV4	.857	.494	3.015	1	.082	2.356
	EV5	-.107	.348	.094	1	.759	.899
	RE1	-.252	.344	.539	1	.463	.777
	RE2	.509	.405	1.586	1	.208	1.664
	RE4	.077	.354	.047	1	.829	1.080
	BC1	.338	.310	1.191	1	.275	1.403
	BC3	-1.479	.625	5.606	1	.018	.228

BC4	-.668	.551	1.467	1	.226	.513
DI1	-.422	.414	1.038	1	.308	.656
DI3	-.127	.314	.164	1	.686	.881
DI4	.920	.417	4.870	1	.027	2.509
IV1	2.330	.732	10.137	1	.001	10.277
IV3	-.591	.413	2.044	1	.153	.554
IV4	1.681	.624	7.259	1	.007	5.371
IV5	.666	.408	2.661	1	.103	1.946
RA1	-.850	.478	3.158	1	.076	.427
RA3	2.049	.721	8.083	1	.004	7.757
RA4	-.801	.405	3.909	1	.048	.449
Constante	-17.733	6.180	8.233	1	.004	.000

Fuente: Datos alcanzados en el estudio

A pesar de que el ítem EV1: Mis familiares se interesan por mí pareciera que impacta de manera muy significativa en la resiliencia familiar—Sig. 0.002—, al tener un error estándar mayor a 1—1.210—es imposible considerarlo dentro del modelo. Por lo tanto, los ítems más significativos por orden de importancia son IV1: Para que mis familiares no se preocuparan por mi sentí la necesidad de contarles lo que pasó, RA3: El daño que causé a mis familiares cuando me internaron aquí hizo que les pidiera disculpas, IV4: Pregunto a mis familiares cómo van las cosas fuera, CC2: Recibo visitas de mi familia, AE3: Mi familia me da ánimos para enfrentar cada día , DI4: Mi familia me cuenta la verdad de lo que pasa fuera de aquí.

Cabe destacar la relevancia de los ítems de la variable de la justicia restaurativa de reparación del daño ya que a ella pertenecen cuatro de los seis ítems más significativos. Los otros dos ítems más significativos pertenecen a la variable de la justicia restaurativa de apoyo familiar.

Para conocer la probabilidad de impacto de los cinco ítems anteriores en la resiliencia familiar, se utiliza la siguiente fórmula:

$$Pr\{\text{sí R.F}\} = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

Dónde el valor de z es igual a la combinación lineal de los ítems más significativos la cual se obtiene de la multiplicación de los coeficientes de B de cada uno de ellos por la máxima valoración posible -5-, y restándole el coeficiente B de la constante:

$$Z = IV1(2.330*5) + RA3(2.049*5) + IV4(1.685*5) + CC2(1.417*5) + AE3(1.375*5) + DI4(.920*5) - 17.733$$

$$Z = 31.147$$

Al sustituir el valor de Z en la fórmula para conocer la probabilidad de que exista la resiliencia familiar si se otorga la valoración máxima posible—5—a los cuatro ítems más significativos, se obtiene el siguiente resultado:

$$Pr\{\text{sí R.F.}\} = \frac{1}{1+e^{-19.672}}$$

$$Pr\{\text{Sí R.F.}\} = 0.999$$

Esto quiere decir, que es aproximadamente 99% probable que aquellas personas que eligieron la máxima valoración posible en los ítems: IV1: Para que mis familiares no se preocuparan por mi sentí la necesidad de contarles lo que pasó, RA3: El daño que causé a mis familiares cuando me internaron aquí hizo que les pidiera disculpas, IV4: Pregunto a mis familiares cómo van las cosas fuera, CC2: Recibo visitas de mi familia y DI4: Mi familia me cuenta la verdad de lo que pasa fuera de aquí, sean clasificados en el grupo de favorecimiento de la resiliencia familiar.

9.3.3.4.4 Modelo alternativo 4

Para el modelo alternativo 4, se consideran como variables independientes todos los ítems del instrumento que componen las variables de la justicia restaurativa de manera autónoma, y como variable dependiente a la variable dicotómica de la resiliencia familiar para la muestra del centro penitenciario de Santiago de Veraguas.

El modelo alternativo 4 clasifica correctamente al 99.3 % de las personas con favorecimiento de resiliencia familiar y a un 77.8% de las personas sin favorecimiento de la resiliencia familiar, por lo que, en un porcentaje global, el modelo clasificó correctamente al 94.7% de las personas de acuerdo con la clasificación determinada por el punto de corte con valor de .50.

Tabla 36:

Clasificación del modelo alternativo 4

Observado		Pronóstico		Corrección de porcentaje	
		Corte			
		No Resiliencia Familiar	Si Resiliencia Familiar		
Paso 1	Corte	No Resiliencia Familiar	28	8	77.8
		Si Resiliencia Familiar	3	169	98.3
	Porcentaje global				94.7

Nota: El valor de corte es .50

Fuente: Datos alcanzados en el estudio

Los ítems más significativos en la resiliencia familiar son aquellos cuyo p-valor (Sig.) estén más cercanos al 0.000 o su exp(B), son los más altos. Por lo tanto, para el modelo alternativo 4, los ítems más relevantes son:

Tabla 37:

Ítems más significativos del modelo alternativo 4

Variable	Ítem	Sig.	Exp(B)
Apoyo Familiar	IO2: Mi Familia me apoya y me ayuda cuando lo necesito	0.023	7.573
Reparación del daño	DI1: He hablado del error que cometí con mis familiares para saber cómo se sentían	0.032	4.679
Reparación del daño	IV3: Fui sincero con mi familia cuando les expliqué lo que pasó	0.012	4.648
Reparación del daño	BC3: He estado pensando que tal vez quiera cambiar algo de mí mismo	0.059	3.360
Apoyo familiar	CC4: Puedo hablar de mis problemas con mi familia	0.053	3.289
Perdón	RE2: He perdido la confianza de mi familia	0.092	2.442

Fuente: Datos alcanzados en el estudio

Tabla 38:

Variables de la ecuación del modelo alternativo 4

	Ítem	B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 1 ^a	AE1	.945	.579	2.671	1	.102	2.574
	AE3	-.441	.797	.306	1	.580	.643
	AE4	-.869	.755	1.326	1	.249	.419
	AM1	.018	.550	.001	1	.974	1.018
	AM2	-.955	.776	1.515	1	.218	.385
	AM3	-.393	.568	.480	1	.488	.675
	CC1	.224	.845	.070	1	.791	1.251
	CC2	.441	.763	.335	1	.563	1.555
	CC4	1.191	.616	3.740	1	.053	3.289
	IO1	-.217	.731	.088	1	.766	.805
	IO2	2.025	.890	5.173	1	.023	7.573
	EM1	.898	.706	1.617	1	.204	2.454
	EM2	.746	.585	1.624	1	.202	2.107

EM3	-.544	.459	1.407	1	.235	.580
EV1	.495	.685	.522	1	.470	1.640
EV2	-1.029	.663	2.409	1	.121	.357
EV4	-1.254	.590	4.511	1	.034	.285
EV5	-.062	.501	.015	1	.902	.940
RE1	-1.112	.575	3.742	1	.053	.329
RE2	.893	.530	2.835	1	.092	2.442
RE4	-.459	.410	1.258	1	.262	.632
BC1	.420	.447	.882	1	.348	1.522
BC3	1.212	.643	3.555	1	.059	3.360
BC4	-.239	.664	.130	1	.719	.787
DI1	1.543	.719	4.609	1	.032	4.679
DI3	.748	.482	2.405	1	.121	2.112
DI4	-1.148	.618	3.444	1	.063	.317
IV1	.721	.527	1.868	1	.172	2.056
IV3	1.536	.609	6.375	1	.012	4.648
IV4	.413	.585	.498	1	.480	1.511
IV5	-.081	.521	.024	1	.877	.923
RA1	.175	.536	.107	1	.744	1.191
RA3	-1.679	.869	3.738	1	.053	.187
RA4	-.181	.545	.110	1	.740	.834
Constante	-11.048	4.983	4.915	1	.027	.000

Fuente: Datos alcanzados en el estudio

Los ítems más significativos por orden de importancia son IO2: Mi Familia me apoya y me ayuda cuando lo necesito, DI1: He hablado del error que cometí con mis familiares para saber cómo se sentían, IV3: Fui sincero con mi familia cuando les expliqué lo que pasó, BC3: He estado pensando que tal vez quiera cambiar algo de mí mismo, CC4: Puedo hablar de mis problemas con mi familia y RE2: He perdido la confianza de mi familia.

De los seis ítems más relevantes, tres pertenecen a la variable de la justicia restaurativa de reparación del daño, dos a la variable de apoyo familiar y uno a la variable del perdón.

Para conocer la probabilidad de impacto de los cinco ítems anteriores en la resiliencia familiar, se utiliza la siguiente fórmula:

$$Pr\{\text{sí R.F}\} = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

Dónde el valor de z es igual a la combinación lineal de los ítems más significativos la cual se obtiene de la multiplicación de los coeficientes de B de cada uno de ellos por la máxima valoración posible -5-, y restándole el coeficiente B de la contante:

$$Z = IO2(2.025*5) + DI1(1.543*5) + IV3(1.536*5) + BC3(1.212*5) + CC4(1.191*5) + RE2(0.893) - 11.048$$

$$Z = 30.592$$

Al sustituir el valor de Z en la fórmula para conocer la probabilidad de que exista la resiliencia familiar si se otorga la valoración máxima posible -5- a los cuatro ítems más significativos, se obtiene el siguiente resultado:

$$Pr\{\text{sí R.F}\} = \frac{1}{1 + e^{-19.672}}$$

$$Pr\{\text{Sí R.F.}\} = 0.999$$

Esto quiere decir, que es aproximadamente 99% probable que aquellas personas que eligieron la máxima valoración posible a los ítems: IO2: Mi Familia me apoya y me ayuda cuando lo necesito, DI1: He hablado del error que cometí con mis familiares para saber cómo se sentían, IV3: Fui sincero con mi familia cuando les expliqué lo que pasó, BC3: He estado pensando que tal vez quiera cambiar algo de mí mismo, CC4: Puedo hablar de mis problemas con mi familia y RE2: He perdido la confianza de mi familia, sean clasificados en el grupo de favorecimiento de la resiliencia familiar.

9.4 Discusión de resultados

Ya que se trata de un estudio comparado, la finalidad del mismo gira en torno a la identificación de patrones y diferencias sustanciales entre los escenarios en los que se llevó a cabo el estudio. Para ello primero se analiza de manera comparada a los modelos alternativos 1 y 2, ya que ambos utilizan como variables independientes a las medias de los ítems que componen cada una de las variables de la justicia restaurativa y, por otro lado, se analiza de manera comparada a los modelos alternativos 3 y 4 los cuales utilizan como variables independientes a todos los ítems del instrumento.

9.4.1 Impacto de las variables de la justicia restaurativa en la resiliencia familiar de las PPL en el CEPRERESO Topo Chico y en el centro penitenciario de Santiago de Veraguas

Como es posible observar en la siguiente tabla, a pesar de que existen pequeñas diferencias entre los escenarios de investigación, existe un patrón en el que en ambos modelos se clasificaron correctamente más del 93% de los casos con favorecimiento de la resiliencia familiar y entre el 50 y 60% de los casos sin favorecimiento de la resiliencia familiar.

Tabla 39:

Comparativa de clasificación entre los modelos alternativos 1 y 2

CEPRERESO Topo Chico				
Observado	Pronóstico			
	Corte		Corrección de	%
	No R.F.	Si R.F.		
Corte	No R.F.	30	20	60.0
	Si R.F.	11	153	93.3
Porcentaje global				85.5

Centro penitenciario Santiago de Veraguas				
Observado	Pronóstico			
	Corte		Corrección de	%
	No R.F.	Si R.F.		
Corte	No R.F.	20	16	55.6
	Si R.F.	4	168	97.7
Porcentaje global				90.4

Nota: El valor de corte es.50

Nota: R.F. es igual a Resiliencia Familiar

Fuente: Datos alcanzados en el estudio

De este patrón se interpreta que las variables de la justicia restaurativa favorecen significativamente la resiliencia familiar de las PPL, sin importar el contexto en el que se encuentren.

Por otro lado, es posible observar a través de los coeficientes de cada una de las variables independientes (Tabla 40) que la reparación del daño es la variable que más aporta probabilidad de favorecimiento de la resiliencia familiar de las PPL en ambos escenarios de análisis, ya que, para ambos casos, la variable presenta un p-valor o Sig. de .000 y valores de Exp(B) muy superiores a las otras dos variables de análisis -7.474 para el escenario mexicano y 5.335 para el escenario panameño.

No obstante, a pesar de que el perdón y el apoyo familiar resultan no tan significativas, se observan diferencias en ambos escenarios de estudio, ya que en el CEPRERESO Topo Chico la variable con menor significancia es el apoyo familiar y en el centro penitenciario de Santiago de Veraguas es la variable del perdón la que menos aporta a la probabilidad de favorecimiento de la resiliencia familiar.

Cabe destacar que, en el caso mexicano, la variable de apoyo familiar no sólo es la menos significativa, sino que presenta un coeficiente B negativo, lo cual significa que a medida que aumenta el apoyo familiar, disminuye la probabilidad de la resiliencia familiar.

Tabla 40:

Comparativa de las variables de la Justicia restaurativa en la ecuación

	CEPRERESO Topo Chico			Centro penitenciario Santiago de Veraguas		
	B	Sig.	Exp(B)	B	Sig.	Exp(B)
Reparación del daño	2.011	.000	7.474	1.674	.000	5.335
Perdón	.993	.041	2.699	.092	.859	1.096
Apoyo Familiar	-.345	.221	.708	.510	.060	1.665
Constante	-8.494	.000	.000	-6.782	.000	.001

Fuente: Datos alcanzados en el estudio

Finalmente, las probabilidades de impacto de cada una de las variables de la justicia restaurativa sobre la resiliencia familiar confirman el patrón de que la reparación del daño es significativamente más importante que las otras dos variables en ambos escenarios de estudio, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 41:

Comparativa de la probabilidad de impacto de las variables de la Justicia restaurativa en la Resiliencia Familiar

CEPRERESO Topo Chico		Centro penitenciario Santiago de Veraguas	
Variable	Pr {Sí R.F.}	Variable	Pr {Sí R.F.}
Reparación del Daño	82.64%	Reparación del Daño	82.89%
Perdón	2.84%	Perdón	0.17%
Apoyo Familiar	0%	Apoyo Familiar	1.43%

Fuente: Datos alcanzados en el estudio

9.4.2 Impacto de los ítems del instrumento en la resiliencia familiar de las PPL en el CEPRERESO Topo Chico y en el centro penitenciario de Santiago de Veraguas

Con la finalidad de hacer un análisis comparativo más detallado se utilizan los resultados de los modelos 3 y 4 que consideran como variables independientes a todos los ítems que componen el instrumento de manera autónoma.

Resulta interesante que ambos modelos logran clasificar correctamente a más del 90% de los casos en el grupo correspondiente determinado por el punto de corte de la resiliencia familiar. En el caso del CEPRERESO Topo Chico de Monterrey, el modelo clasifica correctamente al 82% de los casos con favorecimiento de la resiliencia familiar

y a un 95.7% de los casos sin favorecimiento de la resiliencia familiar, mientras que, en el caso del centro penitenciario de Santiago de Veraguas, el modelo clasifica correctamente al 77.8% de los casos sin favorecimiento de la resiliencia familiar y a un 98.3% de los casos con favorecimiento de la resiliencia familiar.

Tabla 42:

Comparativa de clasificación entre los modelos alternativos 3 y 4

CEPRERESO Topo Chico				
Observado	Pronóstico			
	Corte		Corrección de %	
	No	Si		
	R.F.	R.F.		
Corte	No R.F.	41	9	82.0
	Si R.F.	7	157	95.7
Porcentaje global				92.5

Centro penitenciario Santiago de Veraguas				
Observado	Pronóstico			
	Corte		Corrección de %	
	No	Si		
	R.F.	R.F.		
Corte	No R.F.	28	8	77.8
	Si R.F.	3	169	98.3
Porcentaje global				94.7

Nota: El valor de corte es .50
Fuente: Datos alcanzados en el estudio

Estos resultados confirman que los ítems que componen las variables de la justicia restaurativa tienen un impacto relevante en la resiliencia familiar de las PPL sin importar el contexto en el que se encuentren.

Por otro lado, al analizar de manera comparativa los seis ítems más significativos en la resiliencia familiar de las PPL en ambos escenarios de estudio (Tabla 43), resulta interesante que los ítems correspondientes a la variable de la reparación del daño son los que tienen más presencia tanto en el escenario mexicano —4—como en el panameño—3—.

Las diferencias entre el ítem más significativo en un caso y en otro no son menores, ya que en el escenario mexicano el ítem con mayor significancia hace referencia a una acción por parte del interno, mientras que en el caso panameño el ítem más significativo hace referencia a una acción por parte de la familia. Tan es así que en el caso mexicano es 10.277 veces más probable que una persona que sintió la necesidad de contar a sus familiares lo sucedido tenga resiliencia familiar, mientras que en el caso panameño es 7.573 veces más probable que una persona que recibe apoyo de su familia cuando la necesita tenga resiliencia familiar.

Tabla 43:

Comparativa de los Ítems más significativos en la Resiliencia Familiar en los modelos alternativos 3 y 4

CEPRERESO Topo Chico				Centro penitenciario Santiago de Veraguas			
Variable	Ítem	Sig.	Exp(B)	Variable	Ítem	Sig.	Exp(B)
Reparación del daño	IV1: Para que mis familiares no se preocuparan por mi sentí la necesidad de contarles lo que pasó	0.001	10.277	Apoyo Familiar	IO2: Mi Familia me apoya y me ayuda cuando lo necesito	0.023	7.573
Reparación del daño	RA3: El daño que causé a mis familiares cuando me internaron aquí hizo que les pidiera disculpas	0.004	7.757	Reparación del daño	DI1: He hablado del error que cometí con mis familiares para saber cómo se sentían	0.032	4.679
Reparación del daño	IV4: Pregunto a mis familiares cómo van las cosas fuera	0.007	5.371	Reparación del daño	IV3: Fui sincero con mi familia cuando les expliqué lo que pasó	0.012	4.648
Apoyo Familiar	CC2: Recibo visitas de mi familia	0.039	4.126	Reparación del daño	BC3: He estado pensando que tal vez quiera cambiar algo de mí mismo	0.059	3.360
Apoyo Familiar	AE3: Mi familia me da ánimos para enfrentar cada día	0.035	3.955	Apoyo familiar	CC4: Puedo hablar de mis problemas con mi familia	0.053	3.289
Reparación del daño	DI4: Mi familia me cuenta la verdad de lo que pasa fuera de aquí	0.027	2.509	Perdón	RE2: He perdido la confianza de mi familia	0.092	2.442

Fuente: Datos alcanzados en el estudio

No obstante, se observa que la sinceridad es la principal característica compartida por ambas poblaciones ya que en ambos casos tres de los seis ítems más significativos hacen referencia a la necesidad de los internos de sincerarse con su familia o a la necesidad de que la familia sea sincera con ellos —ítem IV1, IV4 y DI4 en el CEPRERESO Topo Chico e ítems DI1, IV3, CC4 en el centro penitenciario de Santiago de Veraguas—.

Capítulo 10.- Triangulación de datos, conclusiones y propuestas

En este capítulo se presenta la triangulación de los datos cualitativos y cuantitativos resultantes de esta investigación. Entendiendo la triangulación de datos como la estrategia de investigación que permite poner en diálogo a los distintos métodos utilizados en la misma (Aguilar Gavira & Barroso Osuna, 2015), con la finalidad de ampliar la comprensión de la realidad estudiada (Betrián Villas, García Merino, Jové Monclús, & Macarulla Garcia, 2013).

Dicha triangulación se realiza con dos fines: el primero de ellos es validar los datos obtenidos en distintas fuentes y el segundo complementar descriptivamente la información obtenida a través de las técnicas de investigación utilizadas. Los datos con los que se realiza la triangulación provienen de diversas fuentes y de los tres métodos de investigación utilizados; la investigación documental, las entrevistas semi estructuradas y la encuesta.

De esta manera, en primer lugar, se pretende responder a los objetivos específicos a través de la triangulación, lo que posteriormente permitirá evaluar el cumplimiento del objetivo general, aceptar o rechazar la hipótesis de investigación, generar conclusiones, y redactar una serie de recomendaciones que ayuden a responder a la problemática de la investigación.

10.1 Triangulación de datos

10.1.1 Identificar los elementos y actores de la justicia restaurativa que favorezcan al proceso de resiliencia familiar de las PPL

La investigación documental permitió establecer una primera identificación de los elementos y los actores de la justicia restaurativa que favorecen a la resiliencia familiar de las PPL. Los elementos quedaron identificados como la reparación del daño (Laub & Sampson, 2001; Zehr, 2007; Vázquez Acevedo, 2010), el apoyo familiar (Gracia & Herrero, 2006; Cerda Pérez, 2015; Domingo de la Fuente, 2017) y el perdón (McCullough, Rachal, & Worthington, 1997; McCullough, Fincham, & Tsang, 2003; Pertejo Rivas, 2014; De la Rosa Vázquez & Cabello Tijerina, 2016).

Por su parte, el análisis de los datos cualitativos recolectados a través de los testimonios de las PPL entrevistadas confirmó la existencia de las tres variables independientes identificadas para este estudio. Es decir, aquellos que afirmaron que

su círculo familiar—del que ellos se consideraban parte—había vivido un proceso de adaptación y aprendizaje a raíz del trauma originado por la separación de uno de los miembros de la familia, manifestaron que en algún momento se había producido una reparación del daño por parte de la PPL en el que se mantenía un diálogo con los familiares a los que se explicaban las causas por las que se llevó a cabo las conductas por las que se cumplía una pena privativa de libertad.

Además, la mayoría de los entrevistados percibía que durante el cumplimiento de la pena su familia prestaba algún tipo de ayuda, aunque los mismos valoraban más el apoyo de tipo psicológico y emocional recibido, puesto que generaban sentimientos positivos y de esperanza durante el cumplimiento de la pena. Se confirmó la existencia del perdón por parte de la familia a la PPL en la resiliencia familiar, aunque el mismo no fue considerado como un elemento principal por los entrevistados, puesto que era considerado como una reacción normal por parte de los familiares ante la iniciativa de la PPL de reparar el daño causado. Por otro lado, el análisis de los resultados cuantitativos también corroboró que estos elementos de la justicia restaurativa aparecían dentro de la percepción de resiliencia familiar de las PPL, si bien tenían diferente importancia y peso en el desarrollo del proceso.

En lo referente a los actores que facilitan una resiliencia familiar, a través de la investigación documental no se identificó de manera individual aquellos miembros que más aportan o desempeñan un papel importante en el proceso, hablando siempre de la familia como un conjunto (García Bores, 2003; Coca Muñoz, 2007; Aguiar Andrade & Acle-Tomasini, 2012; Cerda Pérez, 2015; Vite-Coronel & Reyes-Mero, 2016). Pero gracias al análisis de los datos cualitativos se identificó a ciertos integrantes que desempeñaron un papel fundamental en la resiliencia familiar, en el que destacan los integrantes femeninos de la familia.

Por orden de importancia sobresale el papel realizado por las madres de las PPL, puesto que son los miembros de la familia más predispuestos a brindar un apoyo incondicional a sus familiares privados de libertad, destacando su papel incluso en los casos en los que no se identificó resiliencia familiar. En este aspecto, las madres de las PPL no solo son consideradas como un agente facilitador de resiliencia, sino que sufren de manera directa las diferentes reconfiguraciones que puedan darse en la estructura

familiar, sobre todo aquellas que tienen que ver con el mantenimiento económico y la salud de aquellos familiares dependientes del miembro familiar que está cumpliendo una pena privativa de libertad. En segundo lugar, las esposas o parejas de hecho de las PPL también ocupan un lugar importante en la reconfiguración de la estructura familiar y el mantenimiento de los miembros dependientes, aunque cabe destacar que, en ocasiones, el hecho de que la pareja cumpla una pena privativa de libertad es causa del cese de la relación matrimonial o de concubinato (García Bores, 2003). Después de las esposas, las hijas desempeñaban una especial importancia en lo concerniente al apoyo moral percibido por las PPL así como a los sentimientos de esperanza de estos.

Por último, y siendo los únicos miembros masculinos destacados por los entrevistados, los hermanos varones de las PPL también tenían una repercusión en la resiliencia familiar puesto que se identifican como miembros que tienen una especial relación y confianza, que les permite tratar el trauma de la separación con optimismo e, incluso, con humor. También cabe destacar los casos en los que otros individuos que no eran consanguíneos de los entrevistados participaban en la resiliencia familiar de las PPL. Es el caso de los parientes políticos, es decir, familiares de la pareja de las PPL—principalmente suegros y cuñados—que ofrecían un apoyo moral y que sustituían a la PPL en las funciones económicas y de mantenimiento de los miembros de la familia dependientes de la PPL.

10.1.2 Analizar los elementos de la justicia restaurativa que faciliten la resiliencia familiar de las PPL

El trabajo de investigación documental permitió hacer un análisis detallado de cada uno de los elementos de la justicia restaurativa—identificados como variables independientes en esta investigación—con la intención de conocer la composición interna de las mismas. Para este fin se realizó una síntesis de la información de la investigación documental y los datos recolectados a través del instrumento cualitativo.

En primer lugar, los componentes—también identificados en este estudio como categorías—de la reparación del daño fueron identificados como diálogo (Maruna, 2001), interés en la víctima (Barboni Pekmezian & Valls Prieto, 2014), cambio de conducta (Bottoms, Shapland, Costello, Holmes, & Muir, 2004) y responsabilidad

(Vázquez Acevedo, 2010). El estudio cualitativo confirmó la existencia de dichos componentes, reflejando también el diferente peso que cada uno de estos tuvo en el discurso de las PPL. En este sentido, se mostró que el interés en la víctima compone un 33% del total de referencias agrupadas dentro de la variable reparación del daño, seguida de la responsabilidad, que conforma el 29% del total, el cambio de conducta, con un 22%, y el diálogo entre la PPL y sus familiares con un 16%.

Por su parte, el estudio cuantitativo reflejó que estos componentes no solo forman parte de la reparación del daño, sino que tienen un impacto directo y significativo en la consecución de la resiliencia familiar. Por orden de importancia, los componentes que más impactaron en la resiliencia familiar en el CEPRERESO Topo Chico fueron el interés por la víctima, seguido de la responsabilidad y el diálogo. En el caso del Centro Penitenciario de Santiago de Veraguas se identificaron los componentes de interés por la víctima, el diálogo y el cambio de conducta como los más significativos. Gracias al análisis de los componentes se pudo definir que la reparación del daño es un proceso que inicia con un cambio de conducta del victimario, en el que se acepta la responsabilidad del daño cometido y nace un interés por la víctima de sus acciones delictivas. A ello sigue el establecimiento de un diálogo víctima-victimario que trata de menguar el sufrimiento y la inseguridad generados en la víctima en el momento de la comisión del delito.

Para la variable independiente del apoyo familiar destacaron los componentes de la comunicación y contacto (Mills & Codd, 2008), el apoyo emocional y material (Rodríguez-Martínez, y otros, 2010) y el interés por el ofensor (Coca Muñoz, 2007). El estudio cualitativo corroboró la inherencia de dichos componentes en la variable, mostrando los diferentes pesos que cada uno de estos tuvo en el discurso de las PPL. Se señaló que la comunicación y contacto es la categoría más citada por las PPL dentro de esta variable, con un 37% del total de las referencias citadas. Igual de importante se consideró al apoyo emocional, con un 30% de todas las referencias de la variable. A esta categoría le siguen el interés en el ofensor que representan un 24% del total, mientras que la ayuda material presenta el impacto más bajo con solo el 9% del total de referencias identificadas dentro de esta variable.

El estudio cuantitativo también demostró que existen relaciones directas entre algunos componentes de esta variable y la variable dependiente; en el caso de México se destacó la importancia de la comunicación y contacto y al apoyo emocional, mientras que, en el caso de Panamá, los componentes más destacados fueron el interés en el ofensor y la comunicación y contacto. Tras la síntesis de la información, se entendió el apoyo familiar como el interés mostrado por la familia de la PPL a las necesidades de esta, interpretándolo como un deber colectivo. Dicho interés debe estar acompañado por una predisposición de ayuda activa—en la reparación del daño por parte de la PPL—que se materializa a través de la interacción y la comunicación entre los miembros de la familia.

Para la variable del perdón se reconocieron los componentes del rencor (Beltrán-Morillas, Valor-Segura, & Expósito, 2015), la evitación (McCullough, Rachal, & Worthington, 1997) y la empatía (Casullo, 2005). Estos componentes también fueron identificados en el discurso de los entrevistados, en el que también se evidencia la importancia de cada uno de ellos. La empatía supuso el 36% del total de las referencias de esta variable, mientras que el rencor y la evitación le seguían de cerca, significando un 32'39% y un 31'45% respectivamente. Se puede observar pues que el rencor tiene una importancia mayor en la composición de esta variable, aunque la diferencia es tan escasa que se podría redondear los porcentajes y argumentar que ambos elementos tienen el mismo impacto en el otorgamiento del perdón.

A través del análisis de los datos cuantitativos también se identificó a uno de los componentes de la variable del perdón. Si bien la muestra mexicana no resaltó la importancia de ninguno de los componentes en la consecución de una resiliencia familiar, en el caso de Santiago de Veraguas, la muestra panameña identificó al rencor—o, en este caso, la ausencia del mismo—como uno de los componentes que impactan en la variable dependiente de estudio. Gracias a estos datos se pudo definir a la variable del perdón como un proceso transformativo de conducta y pensamiento que puede ser otorgado por la víctima de una trasgresión violenta a la persona que cometió dicha trasgresión. Este proceso es caracterizado por una modificación de sentimientos negativos, como el rencor y la evitación, por otros positivos, como la

empatía o el altruismo a través de un desarrollo prosocial que busque la solución de un conflicto.

Finalmente, y aunque no era parte de este objetivo específico, tanto la investigación documental como los datos cualitativos permitieron el análisis de la variable dependiente de esta investigación, la reparación del daño, lo que facilitó la posterior creación del instrumento cuantitativo. Los componentes de la variable de la resiliencia familiar de acuerdo con la revisión documental son la adaptación (Juárez Montoya, Ponce Rosas, & Rodríguez López, 2016), el aprendizaje (Puerta de Klinkert, 2007), el cambio de roles (Cerda Pérez, 2015; IMP, 2019) y rehacer la relación (Vera Poseck, Carbelo Baquero, & Vecina Jiménez, 2006). Gracias al análisis de los datos mostrados en el discurso de las PPL, pudo identificar el peso de cada componente dentro de la variable dependiente. De esta manera se muestra que el aprendizaje compone el 36% del total de referencias del perdón, seguido de la adaptación con un 25% de todas las referencias de la variable, el rehacer la relación con el 22% del total y el cambio de roles que constituye el 17% del total de referencias.

El estudio cualitativo permitió además sumar un componente más a esta variable, puesto que a través del discurso de los entrevistados se pudo comprobar que aquellos que mostraban resiliencia familiar compartían una serie de valores morales y creencias religiosas con sus familiares. Este dato no fue considerado a la hora de crear el instrumento cualitativo, por lo que se recurrió a una nueva lectura de las fuentes documentales relacionadas con la resiliencia familiar. Que las creencias religiosas y los valores morales compartidos son facilitadores de una resiliencia familiar pudo ser contrastado a través de obras de autores como Gómez y Kotliarenco (2010) o Marchori (2016), por lo que se entendió por resiliencia familiar al proceso positivo de adaptación y aprendizaje de un conjunto de individuos que viven una ruptura de su cotidianidad por una crisis, originada por la ausencia de uno de sus integrantes privados de libertad, del que la familia logra crear, reforzar o renovar sus creencias y valores compartidos con la finalidad de superar dicho trauma.

10.1.3 Jerarquizar los elementos de la justicia restaurativa que, según su importancia e impacto, ayuden a la resiliencia familiar de las PPL

Si bien en la investigación documental no se encontraron evidencias explícitas de que los elementos de la justicia restaurativa—variables independientes—tienen impacto en la resiliencia familiar de las PPL—variable dependiente—, se observan resultados importantes tanto en el estudio cualitativo como en el estudio cuantitativo que no solo comprueban una relación entre los elementos de la justicia restaurativa y la resiliencia familiar, sino que evidencian la existencia de una jerarquía de acuerdo con el impacto que tiene cada uno de ellos en la variable dependiente.

En el caso del estudio cualitativo se observa que las tres variables de la justicia restaurativa: reparación del daño, apoyo familiar y perdón efectivamente están relacionadas con la resiliencia familiar, obteniendo un porcentaje de coocurrencias con el discurso de la resiliencia familiar muy similar, siendo la reparación la variable como más coocurrencias, seguido por la variable de apoyo familiar y finalmente la variable del perdón interpersonal tal como se observa en la siguiente figura:

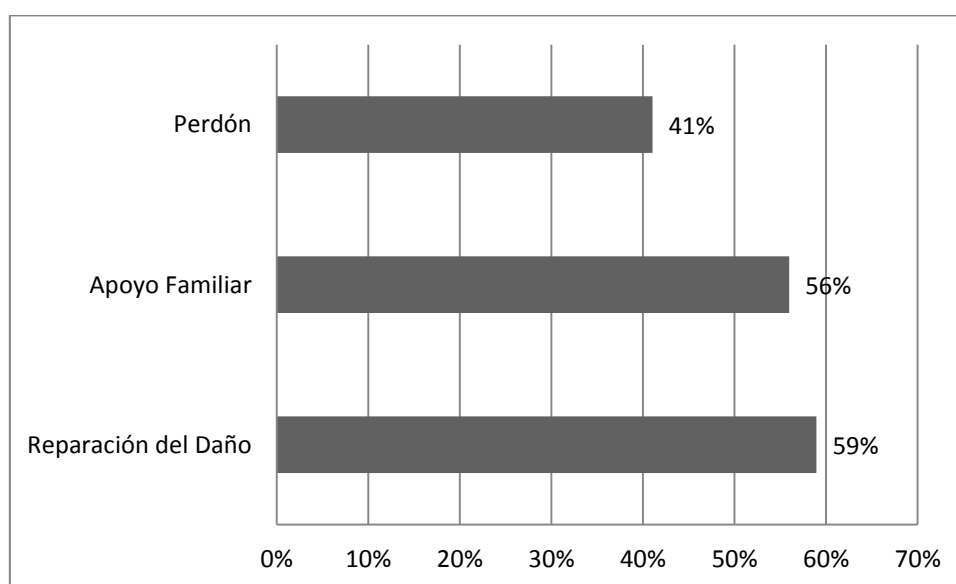


Figura 22. Coocurrencias de las variables independientes con la variable dependiente. Fuente: Datos alcanzados en el estudio cualitativo

Por su parte, el análisis cuantitativo, en sus modelos 1 y 2 de regresión logística binaria, comprueban que la variable que aporta mayor probabilidad de favorecimiento de la resiliencia familiar de las PPL es, en ambos escenarios de análisis, la reparación

del daño. Cabe destacar que, en ambos casos, el riesgo de que no se produzca una reparación del daño significa una probabilidad de más del 80% de que no exista resiliencia familiar, por lo que el impacto es muy significativo.

Por tanto, es posible afirmar que aún en contextos penitenciarios y en países distintos, la reparación del daño impacta considerablemente, y muy por encima de las otras variables, en la resiliencia familiar de las PPL. Esta afirmación también puede apreciarse en el estudio de las coocurrencias en la parte cualitativa de la investigación, puesto que la reparación del daño es la variable independiente que más relación guarda con la resiliencia familiar en el discurso de las PPL entrevistados, y con el discurso de diferentes autores que identifican a la reparación del daño como elemento esencial de cualquier proceso de justicia restaurativa (Zehr, 2007; Domingo de la Fuente, 2008; Pranis, 2009).

Por otro lado, cabe destacar que la principal diferencia entre ambos escenarios es la relativa a la variable del apoyo familiar, ya que, para el caso panameño, la variable del apoyo familiar también presenta un impacto bajo, sin embargo, es la segunda en la jerarquía ya que presenta un valor de $\text{Exp}(B)$ ligeramente más alto que la variable del perdón—1.665—, además de presentar un coeficiente B positivo. En el caso mexicano la variable presenta un impacto sumamente bajo— $\text{Exp}(B) = -.708$ —y un signo negativo del coeficiente B , lo cual significa que a medida que aumenta el apoyo familiar, disminuye la probabilidad de lograr la resiliencia familiar.

Esta última afirmación contradice los resultados obtenidos en el estudio cualitativo, donde se identificaba a la variable del apoyo familiar como un elemento importante dentro de la resiliencia familiar de las PPL. Sin embargo, esta posibilidad fue abordada por autores que señalan que parte de los motivantes de conductas y actos delictivos se pueden encontrar dentro del propio grupo familiar de la PPL y en las diversas situaciones en las que sus integrantes se desenvuelven (Marchiori, 2016) o por la falta de valores y conductas que prohíban o rechacen las acciones delictivas (Hirschi, 2003).

10.2 Conclusiones

Realizada la triangulación y habiendo comprobado el cumplimiento de los objetivos específicos de esta investigación, se presentan una serie de conclusiones relacionadas

directamente con el objetivo general de la investigación, la hipótesis, la pregunta de investigación y las variables seleccionadas para esta investigación.

En primer lugar, se puede afirmar que el objetivo general, consistente en probar que los elementos de la justicia restaurativa son inherentes a la resiliencia familiar de las PPL, se cumple.

En segundo lugar, la triangulación de los datos obtenidos a través de la investigación documental y empírica, probó que los elementos de la justicia restaurativa, identificados como la reparación del daño producido a la familia, el apoyo familiar a la PPL y el perdón por parte de la familia de la PPL, existen dentro de la resiliencia familiar, lo que permite aceptar la hipótesis planteada al comienzo de esta investigación.

Cumplido el objetivo general y aceptada la hipótesis de estudio, se considera necesario señalar otras conclusiones surgidas a raíz de los diferentes estudios realizados en esta tesis doctoral.

La reparación del daño es el elemento de la justicia restaurativa más importante dentro de la resiliencia familiar de las PPL varones del CEPRERESO Topo Chico y del Centro Penitenciario de Santiago de Veraguas. Si bien todos los elementos de la justicia restaurativa existen dentro de la resiliencia familiar de la muestra de estudio, es innegable que el elemento más importante y que más impacto tiene es la reparación del daño a la familia por parte de la PPL.

Puesto que en ambos escenarios de estudio la reparación del daño es el elemento que más contribuye a la resiliencia familiar, se interpreta que, a pesar de las diferencias contextuales de las PPL, existe un patrón que podría repetirse en otros centros penitenciarios. Por lo que se prevé que estrategias que promuevan la resiliencia familiar de las PPL que consideren como elemento central la preparación del daño podrían ser replicadas en otros centros penitenciarios con éxito.

El apoyo familiar es un elemento de la justicia restaurativa cuya existencia fue probada en la resiliencia familiar de la muestra. Aun así, merece especial atención puesto que también se comprobó que no solo tiene poco impacto en la resiliencia familiar, sino que también puede ser contraproducente al proceso. Esto abre el camino para el

planteamiento de nuevas preguntas e interrogantes que deberán ser resueltas en posteriores investigaciones.

El perdón también es otro de los elementos de la justicia restaurativa que se presentan dentro de la resiliencia familiar de las PPL que componen la muestra de estudio, aunque se demostró que su impacto no puede ser considerado como relevante en el fenómeno.

Las creencias y valores compartidos por la familia con las PPL, independientemente de si se crearon debido al trauma vivido por la separación o solo se reforzaron a raíz de esta, son parte indispensable de la resiliencia familiar y por lo tanto no pueden ser obviadas en las estrategias de reinserción social, aunque las instituciones tengan un corte laico o aconfesional.

En el caso de las PPL varones, las madres son el miembro de la familia que juega un papel más importante dentro de la generación de una resiliencia familiar, puesto que la mayoría de las ocasiones son ellas las que cumplen con la doble función de sustituir a la PPL en asuntos económicos y de cuidados de otros integrantes de la familia, seguidas de las esposas y las hijas.

Se concluye también que los centros penitenciarios donde radicaba la población objeto de estudio no cuentan con la capacidad institucional para implementar estrategias basadas en los elementos de la justicia restaurativa que favorecen la resiliencia familiar de las PPL, debido a la falta de capital financiero y humano destinado a los centros penitenciarios.

10.3 Recomendaciones

A fin de que los resultados obtenidos en este trabajo de investigación de tesis doctoral pudieran repercutir en la problemática de estudio, se ve necesario plantear las siguientes recomendaciones:

En lo relacionado a la legislación, se recomienda la realización de una serie de reformas legales por parte de los dos países objeto de estudio. La primera reforma debería estar relacionada a la legislación referente a los sistemas penitenciarios—la LNEP en el caso de México y la L55SP para Panamá—donde se considere a los familiares de las PPL como actores esenciales del proceso de reinserción social y, por

tanto, establezcan las disposiciones necesarias para que participen y tomen protagonismo durante el proceso.

Ambos países también deben realizar sendas reformas en las leyes relacionadas con la protección de las víctimas del delito—la LGV en México y la L31PVD en Panamá—en la que también se reconozcan a los familiares de las PPL como víctimas indirectas de la comisión de un delito y el posterior ingreso en prisión.

Con respecto a los sistemas penitenciarios, también se propone una reforma integral en ambos países cuyo objetivo sea la resolución de los problemas crónicos identificados en esta investigación, así como la impunidad con la que son tratados, con el objetivo de garantizar el respeto de los Derechos Humanos de las PPL y el cumplimiento de las normativas mínimas establecidas en las Reglas Mandela para el trato de las PPL.

También se aconseja que los sistemas penitenciarios objeto de estudio deben ser reestructurados de manera que se establezca una labor triangular recíproca entre el personal penitenciario, la sociedad civil y las familias de las PPL con el objetivo de maximizar las posibilidades de conseguir una reinserción social satisfactoria.

Para que dicha labor triangular tuviera éxito, se recomienda realizar programas de capacitación a los distintos profesionales que componen el personal penitenciario para que este adquiera los conocimientos necesarios con los que poder desplegar programas de justicia restaurativa y los efectos de esta en la resiliencia familiar de las PPL. Para facilitar estas capacitaciones se recomienda la realización de campañas de concienciación a cerca de la situación vivida en los centros penitenciarios y de divulgación de las nuevas estrategias alternas para la consecución de la reinserción social.

En lo referente a los programas de reinserción social, se recomienda realizar programas que enfoquen los trabajos realizados en los talleres de psicología, trabajo social y sociología en la facilitación del proceso de reparación del daño por parte de las PPL a sus familias, para así facilitar la resiliencia del conjunto y contar con un factor de apoyo más en los procesos de reinserción social.

Por último, estos programas también deberían dedicar una parte a la evaluación de las relaciones familiares, así como al ambiente familiar de las PPL, con la finalidad de identificar si la relación familiar constituye un factor de apoyo en la reinserción social o, por el contrario, tiene un efecto contraproducente.

Capítulo 11.- Bibliografía

- Aguayo Sarco, G., & Cedeño Astudillo, L. (2018). La justicia restaurativa ¿Una herramienta eficaz para prevenir la delincuencia juvenil? *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, 1-17.
- Aguiar Andrade, E., & Acle-Tomasini, G. (2012). REsiliencia, factores de riesgo y protección en adolescentes mayas de Yucatán: elementos para favorecer la adaptación escolar. *Acta colombiana de psicología*, XV(2), 53-64.
- Aguilar Gavira, S., & Barroso Osuna, J. (2015). La triangulación de datos como estrategia de investigación educativa. *Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 73-88.
- Alonso y Royano, F. (1998). El derecho en el Egipto faraónico. *Espacio, Tiempo y Forma*, II(11), 19-62.
- Alvarado Sánchez, R. (2012). *Perspectiva histórica y problemas actuales de la institución penitenciaria en España. las mujeres encarceladas toman la palabra*. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- Amunátegui Perelló, C. F. (2007). El origen de los poderes del "paterfamilias", II: el "paterfamilias" y las "manus". *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*(29), 51-163.
- Aranda, C., & Pando, M. (2013). Conceptualización del apoyo social y las redes de apoyo social. *IIPSI-Revista de Investigación en Psicología*, XVI(1), 233-245.
- Arango Calad, C. A. (2003). Los vínculos afectivos y la estructura social. Una reflexión sobre la convivencia desde la red de promoción del buen trato. *Investigación y desarrollo*, XI(1), 70-103.
- Arce Martínez, J. (2003). Cárcel y torturas en Roma. En S. Torallas Tovar, & I. Pérez Martín, *Castigo y reclusión en el mundo antiguo* (págs. 55-72). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Arias Madrigal, M. D. (2006). Reflexiones teóricas y prácticas sobre la reparación del daño y la justicia restaurativa. *Justicia Restaurativa en Costa Rica: acercamientos teóricos y prácticos* (págs. 164-185). San José: CONAMAJ.

- Armour, M., & Umbreit, M. (2004). The Paradox of Forgiveness in Restorative Justice. En E. Worthington,, *Handbook of Forgiveness*. Minnesota: University of Minnesota.
- Arteaga Nava, E. (2002). El derecho griego. Algunos tópicos y términos. *Alegatos*(50), 145-160.
- Bakieva, M. G. (2012). SPSS: ANOVA de un factor. Valencia: Universitat de Valencia.
- Barahona, M. (2012). *Familias, hogares, dinámica demográfica, vulnerabilidad y pobreza en Nicaragua*. Santiago de Chile: CELADE.
- Barboni Pekmezian, L., & Valls Prieto, J. (2014). La reparación del daño en la justicia penal. *Ciencias psicológicas*, VIII(2), 199-207.
- Bartol, F. (2006). La "Lex XII tabularum ex Cicerone". *Revista de Derecho UNED*(1), 383-422.
- Becoña, E. (2006). Resiliencia: definición, características y utilidad del concepto. *Revista de Psicología y Psicología Clínica*, XI(3), 125-146.
- Bel, B. (2000). Un horizonte para la familia. En B. Bel, *La familia en la historia: propuestas para su estudio desde la "nueva" historia cultural* (págs. 249-270). Ediciones Encuentro S.A.
- Beltrán-Morillas, A., Valor-Segura, I., & Expósito, F. (2015). El perdón ante transgresiones en las relaciones interpersonales. *Psychosocial Intervention* 24, 71-78.
- Betrián Villas, E., García Merino, N., Jové Monclús, G., & Macarulla Garcia, M. (2013). La triangulación múltiple como estrategia metodológica. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 5-24.
- Bodero, R. (2001). Orígenes y fundamentos principales de la Victimología. *Iuris Dictio. Revista de Derecho*, II(3), 72-80.
- Bottéro, J. (2001). *La religión más antigua: Mesopotamia*. Madrid: Trotta.

- Bottoms, A., Shapland, J., Costello, A., Holmes, D., & Muir, G. (2004). Towards Desistance: Theoretical Underpinnings for an Empirical Study. *Howard Journal*, XLIII(4), 368-89.
- Braithwaite, J. (2016). Redeeming the "F" Word in Restorative Justice. *Oxford Journal of Law and Religion*(5), 79-93.
- Britto Ruíz, D. (2010). *Justicia Restaurativa. Reflexiones sobre la experiencia de Colombia*. Loja, Ecuador: Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja.
- Calderón Concha, P. (2009). Teoría de los conflictos de Johan Galtung. *Revista de Paz y Conflictos*(2), 60-81.
- Cámara, J. V., & Cruz, E. P. (5 de Marzo de 2014). *La participación familiar en el proceso de readaptación social del interno sentenciado en el CERESO de Acayucan, Veracruz*. Obtenido de La participación familiar en el proceso de readaptación social del interno sentenciado en el CERESO de Acayucan, Veracruz: <http://promep.sep.gob.mx/archivospdf/MEMORIAS/Producto1773938.PDF>
- Campoy Aranda, T., & Gomes Araújo, E. (2015). Técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de datos. En A. Pantoja Vallejo, *Manual básico para la realización de tesis, tesis y trabajos de investigación* (págs. 273-300). Madrid: EOS.
- Canales Cerón, M. (2006). *Metodologías de la investigación social*. Santiago: LOM Ediciones.
- Castro Barnechea, C. L., Lazo Paredes, M., Linares Ormeño, G. M., & Murillo Chávez, J. A. (2013). Pease García Yrigoyen, Franklin—"Concepto de derecho entre los Incas" (1965). Tesis para obtener el Grado de Bachiller. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Derecho. *Foro jurídico*(12), 498-506.
- Casullo, M. M. (2005). La capacidad de perdonar desde una perspectiva psicológica. *Revista de Psicología*, XXIII(1), 39-63.
- Causse Cathcart, M. (2009). El concepto de comunidad desde el punto de vista socio-histórico-cultural y lingüístico. *Ciencia en su PC*(3), 12-21.
- CCF. (3 de Junio de 2019). Código Civil Federal. México D.F., México.

- Cerda Pérez, P. L. (2015). *Prisión y familia. Retos para la cohesión social y el desarrollo del siglo XXI*. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León.
- CNDH. (2017). *Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria*. Ciudad de México: CNDH México.
- CNPP. (17 de Junio de 2016). Código Nacional de Procedimientos Penales. México D.F., México.
- Coca Muñoz, J. L. (2007). El sistema penitenciario mexicano: a un paso del colapso. *IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.*(19), 168-187.
- Cordero Quinzacara, E. (2012). El Derecho administrativo sancionador y su relación con el Derecho penal. *Revista de Derecho*, XXV(2), 131-157.
- Córdoba Guzmán, J., & Ponce, A. F. (2017). Los tipos de corrupción y la satisfacción con los servicios públicos. Evidencia del caso mexicano. *Región y Sociedad*(70), 231-262.
- Córdova Sánchez, C. A. (2016). Política de reinserción social en México:. *Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública*(9), 105-141.
- Correa García, S. (2015). Justicia Restaurativa. En S. García Ramírez, & O. González Mariscal, *El código nacional de procedimientos penales. Estudios* (págs. 387-410). México D.F: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.
- Cortés Cely, Ó. (2015). Propiedades que definen los materiales resilientes en arquitectura. *Revista de Tecnología*, XIV(1), 117-126.
- Cortés Cortés, M. E., & Iglesias León, M. (2004). *Generalidades sobre Metodología de la Investigación*. Ciudad del Carmen: Universidad Autónoma del Carmen.
- CPEUM. (27 de Agosto de 2018). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México D.F., México.
- CPF. (12 de Abril de 2019). Código Penal Federal. México D.F, México.
- CPPCH. (19 de Noviembre de 2014). Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua, México.

- CPRP. (15 de Noviembre de 2004). Constitución Política de la República de Panamá. Panamá, Panamá: Ministerio de la Presidencia.
- Dammer, H. R., & Weise-Pengelly, C. A. (15 de Octubre de 2014). *Diversion. Encyclopaedia Britannica*. Recuperado el 6 de Marzo de 2018, de Encyclopaedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/diversion#ref1226161>
- de Andrade Seidl, M. L., & da Cruz Benetti, S. P. (2011). Resiliencia familiar: nuevas perspectivas en la promoción y prevención en salud. *Diversitas: Perspectivas en Psicología*, VII(1), 43-55.
- De la Fuente Fernández, S. (2011). *Regresión Logística*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
- De la Fuente Fernández, S. (2013). Análisis de Varianza. Madrid, España: Universidad Autónoma de Madrid.
- De la Rosa Vázquez, C. S., & Cabello Tijerina, P. A. (2016). El desarme emocional en los círculos de paz. En G. d. Gorjón Gómez, *Tratado de justicia restaurativa. Un enfoque integrador* (págs. 57-77). Ciudad de México: Tirant lo Blanch.
- DE777. (21 de Diciembre de 2007). Decreto Ejecutivo Nº 777. Panamá, Panamá, Panamá: Ministerio de Gobierno y Justicia.
- Dfensor. (2010). Reparación del daño: obligación de justicia. *Dfensor. Revista de derechos humanos*, VIII(12), 3.
- DGSP. (2015). *Informe de Gestión*. Panamá: Ministerio de Gobierno.
- DGSP. (1 de Octubre de 2018). Dirección General del Sistema Penitenciario. *Centros penitenciarios*. Panamá, Panamá.
- DGSP. (Octubre de 2018). Dirección General del Sistema Penitenciario. *Población penitenciaria*. Panamá, Panamá.
- Díaz Bravo, L., Torruco García, U., Martínez Hernández, M., & Varela Ruíz, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. *Investigación en Educación Médica*, II(7), 162-167.

- Domingo de la Fuente, V. (2008). Justicia restaurativa y mediación penal. *Revista de Derecho Penal*(23), 33-68.
- Domingo de la Fuente, V. (2012). Contexto teórico-práctico de la justicia restaurativa en Europa con especial atención a España. *Criminología y Justicia*(4), 70-83.
- Domingo de la Fuente, V. (31 de Marzo de 2017). *¿Quién es la comunidad para la Justicia Restaurativa?* Obtenido de Justicia Restaurativa por Virginia Domingo: <http://blogdelajusticiarestaurativa.blogspot.com/2017/03/quien-es-la-comunidad-para-la-justicia.html>
- DPP. (Febrero de 2011). Defensoría del Pueblo de Panamá. *Una mirada al sistema penitenciario panameño. Análisis y propuestas*. Panamá, Panamá: Defensoría del Pueblo de Panamá.
- Eito Mateo, A., & Gómez Quintero, J. D. (2013). El concepto de comunidad y trabajo social. *Revista Espacios Transnacionales*(1), 10-16.
- Engels, F. (2011). *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*. México D.F.: Colofón S.A.
- ENPOL. (2017). *Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad*. Aguascalientes: INEGI.
- Enright, R. D. (1996). Counseling Within the Forgiveness Triad: On Forgiving, Receiving Forgiveness and Self-Forgiveness. *Counseling and Values*, 107-126.
- Ezeihuoma, O. (2018). The Therapeutic Role of Forgiveness in Restorative Justice. *Journal of Law and Criminal Justice*, 47-54.
- Fehr, R., Gelfand, M. J., & Nag, M. (2010). The Road to Forgiveness: A Meta-Analytic Synthesis of Its Situation and Dispositional Correlates. *Psychological Bulletin*, CXXXVI(5), 894-914.
- Fernandes de Araújo, L., Teva, I., & Bermúdez, M. d. (2015). Resiliencia en adultos: una revisión teórica. *Terapia Psicológica*, XXXIII(3), 257-276.
- Flinders Petrie, W. M. (1998). *La religión de los antiguos egipcios*. Barcelona: Ediciones Abraxas.

- Flores Prada, I. (2015). Algunas reflexiones sobre la justicia restaurativa en el sistema español de justicia penal. *Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje*(2), 1-45.
- Forés Miravalles, A., & Grané Ortega, J. (2008). *La resiliencia. Crecer desde la adversidad*. Barcelona: Plataforma.
- Fuertes Eugenio, A. M., Agost Felip, M. R., Fuertes Fuertes, I., & Soto Personat, G. (2013). Las aportaciones del apoyo social al capital social: propuesta de un modelo integrado y convergente. *CIRIEC-España. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*(77), 155-188.
- Gallego Trijueque, S. (2011). Redes sociales y desarrollo humano. *Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*(12), 113-121.
- Galtung, J. (1990). Cultural violence. *Journal of Peace Research*, XXVII(3), 291-305.
- Galván, J., Romero, M., Rodríguez, E. M., Durand, A., Colmenares, E., & Saldivar, G. (2006). La importancia del apoyo social para el bienestar físico y mental de las mujeres reclusas. *Salud Mental*, XXIX(3), 68-74.
- García Bores, J. M. (2003). El impacto carcelario. En R. Bergalli, *Sistema penal y problemas sociales* (págs. 396-423). Valencia: Tirant lo Blanch.
- García Flórez, M. Y. (2010). actores de resiliencia en la educación de los niños y niñas entre 8 y 9 años, en la unidad educativa Emaús de Fe y Alegría de Quito. *Tesis Doctoral*. Quito, Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana.
- García-Molina Riquelme, A. (1994). El auto de fe de México de 1659: el saludador loco, López de Aponte. *Revista de la Inquisición*(3), 183-204.
- García-Vita, M. d. (2017). Análisis de los apoyos y conflictos sociofamiliares de las mujeres en prisiones españolas. *Revista de Paz y Conflictos*, X(1), 189-211.
- Gavrielides, T. (2007). *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*. Helsinki: Hakapaino Oy.
- Geografía, I. N. (2013). *Estadística a propósito del 14 de febrero, matrimonio y divorcio en México*. México D.F: INEGI.

- Giasson, P. (2001). Tlazolteotl, deidad del abono, una propuesta. *Estudios de cultura Náhuatl*(32), 135-157.
- Goldsmith, A., Pinilla Imam, G., & Zapata Feliciano, J. A. (2007). La práctica del perdón en el judaísmo, el cristianismo y el islam. En A. Chaparro, *Cultura política y perdón* (págs. 69-80). Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.
- Gómez Aranda, M. (2003). La cárcel en el Antiguo Testamento. En S. Torallas Tovar, & I. Pérez Martín, *Castigo y reclusión en el mundo antiguo* (págs. 41-54). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas .
- Gómez Grillo, E. (2005). Evolución histórica de la cárcel. *Congreso Internacional de Derecho Penal y Criminología doctor "Alejandro Angulo Fontiveros"* (págs. 136-146). Caracas: Tribunal Supremo de Justicia.
- Gómez, E., & Kotliarenko, M. A. (2010). Resiliencia familiar: un enfoque de investigación e intervención con familias multiproblemáticas. *Revista de psicología*, XIX(2), 103-132.
- Gorjón Gómez, F. J. (2015). Teoría de la impetración de la Justicia. Por la necesaria ciudadanización de la justicia y la paz. *Comunitania. Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales*(10), 113-131.
- Gorjón Gómez, F. J., & Rodríguez Rodríguez, M. E. (2016). La justicia restaurativa como vía de pacificación social. En G. d. Gorjón Gómez, *Tratado de justicia restaurativa. Un enfoque integrador* (págs. 42-56). Ciudad de México: Tirant lo Blanch.
- Gracia, E., & Herrero, J. (2006). La comunidad como fuente de apoyo social: evaluación e implicaciones en los ámbitos individual y comunitario. *Revista Latinoamericana de Psicología*, XXXVIII(2), 327-342.
- Gudín Rodríguez-Magariños, F. (24 de Diciembre de 2008). *Historia de las prisiones*. Obtenido de UNED: <http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/derecho-constitucional/derechos-de-los-reclusos/pdf/ESTUDIO0.pdf>

- Guglielmucci, A. (2017). El concepto de víctima en el campo de los derechos humanos: una reflexión crítica a partir de su aplicación en Argentina y Colombia. *Revista de Estudios Sociales*(59), 83-97.
- Gutiérrez Capulín, R., Díaz Otero, K. Y., & Román Reyes, R. P. (2016). El concepto de familia en México: una revisión desde la mirada antropológica y demográfica. *CIENCIA ergo-sum*(3), 219-228.
- Hernández Arteaga, I., Luna Hernández, J. A., & Cadena Chala, M. C. (2017). Cultura de paz: una construcción desde la educación. *Historia de la Educación Latinoamericana*, XIX(28), 149-172.
- Hernández Pliego, J. A. (2014). La reparación del daño en el CNPP. En S. García Ramírez, & O. González Mariscal, *El código nacional de procedimientos penales. Estudios* (págs. 341-355). México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Hernández, H., & Pascual Barrera, A. (2018). Validación de un instrumento de investigación para una metodología de gestión ambiental. *RIAA*, 157-163.
- Herrera Moreno, M. (1996). *La hora de la víctima*. Madrid: Editorial de Derecho Reunidas S.A.
- Hirschi, T. (2001). *Causes of delinquency*. Abingdon: Routledge.
- Hirschi, T. (2003). Una teoría del control de la delincuencia. *Capítulo Criminológico*, XXXI(4), 5-31.
- IMP. (2019). *Índice de Paz México*. Ciudad de México: Institute for Economics and Peace.
- INEC. (Octubre de 2018). Instituto Nacional de Estadística y Censo. *Situación demográfica, Proyecciones de la Población por País, Boletín 14*. Panamá, Panamá: Ministerio de Gobierno.
- INEGI. (2017). *Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales*. Aguascalientes: INEGI.
- INEGI. (2017). *En números. Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatalen México*. Aguascalientes: INEGI.

- Jacobo-Marín, D. (2010). Derecho azteca: causas civiles y criminales en los tribunales del Valle de México. *Tlatemoani. Revista Académica de Investigación*(3), 54-68.
- Juárez Montoya, C., Ponce Rosas, R., & Rodríguez López, J. (2016). Clasificación clínica de la familia en estudios funcionales: propuesta de un instrumento para su estudio. *Archivos en Medicina Familiar, XVIII*(3), 65-75.
- Juárez Rodríguez, A. (2012). Construir desde las fortalezas: trabajo social y resiliencia. *Miscelánea Comillas, LXX*(136), 5-36.
- Karremans, J. C., Van Lange, P. A., Kluwer, E. S., & Ouwerkerk, J. W. (2003). When Forgiving Enhances Psychological Well-Being: The Role of Interpersonal Commitment. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1011-1026.
- Kropotkin, P. (1887). *Las prisiones*. Londres: Ward and Downey.
- L14CPRP. (2007). Ley 14 que adopta el Código Penal de la República de Panamá. Panamá, Panamá, República de Panamá: Gaceta Oficial de la República.
- L2CCR. (22 de Agosto de 1916). Ley Nº 2 Por la cual se aprueba el Código Civil de la República. Panamá, República de Panamá.
- L31PVD. (28 de Mayo de 1998). Ley Nº31 De la Protección a las Víctimas del Delito. Panamá, Panamá, Panamá: Gaceta Oficial de la República.
- L40RERPA. (26 de Agosto de 1999). Ley 40 sobre el Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia. Panamá, Panamá.
- L55SP. (1 de Agosto de 2003). Ley 55 que reorganiza el Sistema Penitenciario. Panamá, Panamá: Ministerio de la Presidencia.
- L63CPP. (29 de Agosto de 2008). Ley 63 que adopta el Código Procesal Penal. Panamá, Panamá.
- Landeros-Herrera, J. E., Simental-Mendía, L., & Rodríguez-Durán, J. L. (2015). Perfil psicosocial y percepción del apoyo familiar en adultos. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, LIII*(5), 558-563.

- Latorre Iglesias, E. L. (2010). Memoria y resiliencia. Estudio de la memoria de las víctimas del conflicto armado en el. *Prolegómenos. Derechos y Valores*, XIII(25), 95-109.
- Laub, J., & Sampson, R. (2001). Understanding Desistance from Crime. *Crime and Justice: a Review of the Research*, XXVIII, 1-70.
- LENMRSS. (23 de Enero de 2009). Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. México D.F., México.
- Lévi-Strauss, C. (24 de Marzo de 1956). La familia. En C. Lévi-Strauss, M. Spiro, & K. Gough, *Polémica sobre el Origen y la Universalidad de la Familia* (págs. 7-49). Barcelona: Anagrama. Obtenido de https://seminariolecturasfeministas.files.wordpress.com/2012/01/la-familia-_claude-l__vi-strauss_.pdf
- LGV. (3 de Enero de 2017). Ley General de Víctimas. México D.F., México.
- LMASCNL. (28 de Junio de 2017). Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias para el Estado de Nuevo León de enero de 2017 del Estado de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León, México.
- LNPE. (16 de Junio de 2016). Ley Nacional de Ejecución Penal. México D.F., México.
- LNMACMP. (29 de Diciembre de 2014). Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. México D.F, México.
- LNSIJA. (16 de Junio de 2016). Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. México D.F., México.
- López Hernández, F. A. (24 de 10 de 2016). *Regresión Logística, interpretación de coeficientes*. Obtenido de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-_Md0GRUGOs
- López López, W., Andrade Páez, A. F., & Correa-Chica, A. (2016). El proceso de pedir perdón como condición necesaria para la construcción de paz en medio del conflicto armado en Colombia. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*, XXV(2), 187-194.

- López Melero, M. (2012). Evolución de los sistemas penitenciarios y de la ejecución penal. *Anuario Facultad de Derecho*(5), 401-448.
- López Sánchez, I., & Ubals Álvarez, J. M. (2012). La resiliencia: un acercamiento viable desde la práctica educativa. *EduSol, XII*(41), 43-51.
- López, A. I. (1998). Mujeres y familia en la Edad Media. *Historia crítica*(16), 99-115.
- López-Roldán, P., & Fachelli, S. (2016). Análisis: regresión logística. En P. López-Roldán, & S. Fachelli, *Metodología de la investigación cuantitativa* (págs. 5-54). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Louro Bernal, I. (2003). La familia en la determinación de la salud. *Revista Cubana de Salud Pública, XXIX*(1), 48-51.
- LPPGT. (1 de Julio de 2016). Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato. Guanajuato, Guanajuato, México.
- LSEJANL. (28 de Diciembre de 2012). Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes del Estado de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León, México.
- Macedonio Hernández, C. A. (1 de Marzo de 2010). *Breve análisis del origen y evolución de la víctima en el derecho penal*. Recuperado el 9 de Febrero de 2018, de <http://www.derecho.uady.mx/tohil/rev25/origenyevolucion.pdf>
- Madariaga Orozco, C., & Molinares Brito, C. (2016). Redes sociales y capital social: indicadores de vida en la población desmovilizada. *Clivatge. Estudis i testimonis sobre el conflicte i el canvi socials*(4), 116-136.
- Maganto, C., & Garaigordobil, M. (2010). Evaluación del perdón: Diferencias generacionales y diferencias de sexo. *Revista Latinoamericana de Psicología, XLII*(3), 931-403.
- Marchant Rivera, A. (2003). Apuntes de diplomática notarial: la "carta de perdón de cuernos" en los protocolos notariales malagueños del siglo XVI. *Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia*(25), 455-467.
- Marchioni, M. (1999). *Comunidad, participación y desarrollo. Teoría y metodología de la intervención comunitaria*. Madrid: Editorial Popular.

- Marchiori, H. (2016). *El estudio del delincuente. Tratamiento penitenciario*. Ciudad de México: Porrúa.
- Markson, L., Lösel, F., Souza, K., & Lanskey, C. (2015). Male prisoner's family relationships and resilience in resettlement. *Criminology & Criminal Justice*, XV(4), 423-441.
- Maruna, S. (2001). *Making Good: How Ex-convicts Reform and Rebuild Their Lives*. Whashington D.C: American Pshycological Association.
- Matas, A. (2018). Diseño del formato de escalas tipo Likert: un estado de la cuestión. *Redie. Revista Informática de Investigación Educativa*, XX(1), 38-47.
- McCold, P., & Wachtel, T. (2006). En busca de un paradigma: una teoría sobre Justicia Restaurativa. En F. Bernal Acevedo, C. Vargas, & Sara (Ed.), *Justicia Restaurativa en Costa Rica: acercamientos teóricos y prácticos* (págs. 61-69). San José: CONAMAJ.
- McCullough, M. E., Fincham, F. D., & Tsang, J.-A. (2003). Forgiveness, Forbearance, and Time: The Temporal Unfolding of Transgression-Related Interpersonal Motivations. *Journal of Personality and Social Psychology*, LXXXIV(3), 540-537.
- McCullough, M. E., Rachal, K. C., & Worthington, E. L. (1997). Interpersonal Forgiving in Close Relatipnships. *Journal of Personality and Social Psychology*, 321-336.
- Medina, A. (2018). Reforma del Sistema Penitenciario. *Curso Internacional Ejecución de la Pena, Retos para Panamá en el Sistema Penal Acusatorio*. Panamá: ISJUP.
- Meler, I. (2008). Las Familias. *Subjetividad y Procesos Cognitivos*, 158-188.
- Mendelson, D. (2008). Damages for pain and suffering in tort law. *Journal of law and medicine*, XV(5), 669-689.
- Merino Ortiz, C., & Romera Antón, C. (1998). Conferencias de grupos familiares y sentencias circulares: dos formas ancestrales de resolución de conflictos dentro del paradigma restaurativo. *Eguzkilore*(12), 285-303.
- Mills, A., & Codd, H. (2008). Prisoner's families and offender management: Mobilizing social capital. *Probation Journal: The Journal of Community and Criminal Justice*, LV(1), 9-24.

- Ministerio de Gobierno. (2015). *Por una segunda oportunidad*. Panamá: MINGOB.
- Moranchel Pocaterra, M. (2017). *Compendio de derecho romano*. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Müggenburg Rodríguez, M. C., & Pérez Cabrera, Í. (2007). Tipos de estudio en el enfoque de investigación cuantitativa. *Enfermería Universitaria*, IV(1), 35-38.
- Naciones Unidas. (2006). *Manual sobre programas de Justicia Restaurativa*. Viena: Naciones Unidas.
- Nanclares Márquez, J., & Gómez Gómez, A. H. (2017). La reparación: una aproximación a su historia, presente y prospectivas. *Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas*, XVII(33), 59-79.
- Naveira Zarra, M. M. (2004). *El resarcimiento del daño en la responsabilidad civil extracontractual*. A Coruña: Universidad Da Coruña.
- Neuman, E. (1997). *Mediación y conciliación penal*. Buenos Aires: Depalma.
- Nieves Loja, G. M. (2015). De la crisis del perdón en la Edad Media, al perdón incondicional y gratuito. *Scintilla. Revista de Filosofía e Mística Medieval*, XII(2), 31-58.
- Niven, S., & Stewart, D. (2005). *Resettlement Outcomes on Release from Prison in 2003*. Londres: Home Office.
- Novillo López, M. Á. (2013). La Clementia Caesaris. Virtud propia del buen gobernante. *Debita Verba*, I, 739-748.
- OADPRS. (9 de Noviembre de 2012). *Manual de Organización General*. Ciudad de México, Ciudad de México, México.
- Oliva Gómez, E., & Villa Guardiola, V. J. (2014). Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la globalización. *Justicia Juris*, X(1), 11-20.
- Oviedo, H., & Campo-Arias, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. *Revista colombiana de psiquiatría*, 572-580.
- Palomar Lever, J., Matus García, G. L., & Victorio Estrada, A. (2013). Elaboración de una Escala de Apoyo Social. *Universitas Psychologica*, XII(1), 129-137.

- Pascual López, S. (2006). El derecho germánico y la paz de la casa. *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura*(24), 225-231.
- Patiño Mariaca, D. M., & Ruiz Gutiérrez, A. M. (2015). La justicia restaurativa: un modelo comunitarista de resolución de conflictos. *Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*(122), 213-255.
- Pavón Torrejón, P. (2003). Las cárceles civiles en el Imperio romano. En S. Torallas Tovar, & I. Pérez Martín, *Castigo y reclusión en el mundo antiguo* (págs. 101-114). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Pensamiento penal. (1 de Marzo de 2008). *Las siete partidas de Alfonso X el Sabio*.
Obtenido de Pensamientopenal.com.ar:
<http://ficus.pntic.mec.es/jals0026/documentos/textos/7partidas.pdf>
- Pérez Legón, D. (2007). Las teorías sobre la pena (pena de muerte y privación de libertad). *IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla*.(19), 135-146.
- Pérez Lo Presti, A., & Reinoza Dugarte, M. (2011). El educador y la familia disfuncional. *Educere*, XV(52), 629-634.
- Pérez Martín, I. (2003). Cárcel y reclusión en Bizancio. En S. Torallas Tovar, & I. Pérez Martín, *Castigo y reclusión en el mundo antiguo* (págs. 225-244). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas .
- Pérez Saucedo, J. B., & Zaragoza Huerta, J. (2011). Justicia restaurativa: del castigo a la reparación. En F. G. Campos Domínguez, D. Cienfuegos Salgado, L. G. Rodríguez Lozano, & J. Zaragoza Huerta, *Entre libertad y el castigo: dilemas de estado contemporáneo. Estudios en Homenaje a la maestra Emma Mendoza Bremauntz* (págs. 639-654). México D.F.: Facultad de Derecho. UNAM-Centro de Investigación de Tecnología-Jurídica y Criminológica de la UANL-El Colegio de Guerrero-Criminogenesis-Instituto de Estudios Parlamentarios "Eduardo Neri" .
- Pertejo Rivas, B. (2014). *Introducción a procesos de perdón y reconciliación familiar a través de una obra de teatro sobre el tema y un taller reflexivo y participativo posterior*. México: UNED.

- Platón. (1999). *Diálogos IX: Leyes*. Madrid: Gredos.
- Pranis, K. (2009). *Manual para facilitadores de círculos*. San José: CONAMAJ.
- Prieto-Ursúa, M., & Echegoyen, I. (2015). ¿Perdón a uno mismo, autoaceptación o restauración intrapersonal? Cuestiones abiertas en psicología del perdón. *Papeles del Psicólogo*, 230-237.
- Puerta de Klinkert, M. P. (2007). Resiliencia familiar. *Revista Universidad Pontificia Bolivariana*, L(150), 97-105.
- Ragel Sánchez, L. F. (1998). El perdón de conductas ofensivas en la donación y en la sucesión mortis causa. *Anuario de la Facultad de Derecho. UEX*(16), 173-190.
- Reche García, C., Tutte Vallarino, V., & Ortín Montero, F. J. (2014). Resiliencia, optimismo y burnout en judokas de competición uruguayos. *Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte*, IX(2).
- Redondo Illescas, S., & Martínez Catena, A. (2011). Tratamiento y cambio terapéutico en agresores sexuales. *Reic. Revista Española de Investigación Criminológica*(9).
- Reina, C., & Valera, C. (2016). *La Santa Biblia*. Salt Lake City: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
- Riaño Rupilancha, D. (2003). Cárcel y encarcelamiento en la Grecia clásica. En S. Torallas Tovar, & I. Pérez Martín, *Castigo y reclusión en el mundo antiguo* (págs. 73-94). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas .
- Robleto García, J. (2008). Aproximación a la normativa penal de las culturas maya y azteca. *Revista de la Facultad de Derecho de México*, LVIII(249), 239-251.
- Rocha, A., Amarís, M., & López-López, W. (2017). El perdón como estrategia de afrontamiento. Una mirada desde el modelo de la complejidad del afrontamiento. *Terapia Psicológica*, 271-281.
- Rodríguez Rodríguez, E. (2016). La justicia restaurativa en el marco de los procesos restaurativos: encuentros víctima ofensor. En G. d. Gorjón Gómez, *Tratado de justicia restaurativa. Un enfoque integrador* (págs. 109-216). Ciudad de México: Tirant lo Blanch.

- Rodríguez Yagüe, C. (2018). Un análisis de las estrategias contra la sobrepoblación penitenciaria en España a la luz de los estándares europeos. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*(20), 1-68.
- Rodríguez-Martínez, A., Ruíz-Rodríguez, F., Antón-Basanta, J., Herrera-Jáimez, J., Máiquez-Pérez, A., & Ottaviano-Castillo, A. (2010). ¿Tienen apoyo social los reclusos drogodependientes? Estudio en una prisión andaluza. *Revista Española de Sanidad Penitenciaria*, XII(1), 13-20.
- Rojas Donat, L. (2012). El sistema probatorio medieval de los germanos visto por historiadores alemanes del derecho del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*(34), 483-507.
- Rousseau, J. J. (2012). *Del contrato social*. Madrid: Alianza.
- Rubí Puig, A., Ramos González, S., Piñeiro Salguero, J., & Luna Yerga, Á. (2002). Reparación in natura y por equivalente. Opciones de la víctima en el derecho español. *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*(2).
- Rutter, M. (2012). Resilience as a dynamic concept. *Development and Psychopathology*(24), 335-344.
- Sáenz López, K. A., Gorjón Gómez, F. J., & Gonzalo Quiroga, M. (2013). Métodos cualitativos aplicados al derecho. En K. A. Sáenz López, F. J. Gorjón Gómez, M. Gonzalo Quiroga, & C. M. Díaz Barrado, *Metodología para investigaciones de alto impacto en las ciencias sociales* (págs. 95-120). Madrid: Dykinson.
- Salcedo Flores, A. (2009). El derecho maya prehispánico, un acercamiento a su fundamentación socio-política. *Alegatos*(71), 155-178.
- Sánchez Aliseda, C. (25 de Enero de 2018). *Catholic.net*. Obtenido de La historia del martirio del apóstol San Juan: <http://es.catholic.net/op/articulos/57457/cat/937/la-historia-del-martirio-del-apostol-san-juan-.html#modal>
- Sánchez Urios, A. (2006). *Trabajo social microsocioal: intervención con individuos y familias*. Murcia: Diego Marín.

- Sánchez Zorrilla, M., & Zavaleta Chimbor, D. (2015). El proceso penal en la época incaica: diferencias entre cumplimiento de penas y juicios divinos. *Revista Mexicana de Historia del Derecho*, XXXI, 1-31.
- Santos, M. J. (2007). El sacrificio en el Occidente de la Hispania romana: para un nuevo análisis de los ritos de tradición indoeuropea. *Palaeohispanica*(7), 175-217.
- Sauceda, B., & Gorjón Gómez, G. d. (2018). Justicia restaurativa, una herramienta de paz en la resolución de conflictos comunitarios. *Política criminal*, XIII(25), 548-571.
- Sierra, M. T. (28 de Marzo de 2007). *La renovación de la justicia indígena en tiempos de derechos: etnicidad, género y diversidad*. Obtenido de Utxas: <http://www.lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/vrp/sierra.pdf>
- SIP. (Octubre de 2018). Sistema de Información Penitenciaria. *Estadísticas de los delitos de los privados de libertad*. Santiago, Veraguas, Panamá: Ministerio de gobierno.
- Socarrás, E. (2004). Participación, cultura y comunidad. En C. Linares Fleites, P. E. Moras Puig, & B. Rivero Baxter, *Diálogo y debate en el contexto cubano* (págs. 173-180). La Habana: Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello.
- TNO. (2014). *Measuring resilience. Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek*. La Haya: Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek.
- Torres Castrillón, C. A. (2012). La resiliencia y su influencia en los policías víctimas del conflicto armado en Colombia. *Revista Logos, Ciencia & Tecnología*, IV(1), 137-141.
- Trimborn, H. (2012). *El Derecho Penal en las Altas Culturas de la América Precolombina*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
- Ullmann, H., Maldonado Valera, C., & Nieves Rico, M. (2014). *La evolución de las estructuras familiares en América Latina, 1990-2010*. Santiago de Chile: CEPAL.

- Ulloa Rübke, G. (2011). Reflexiones sobre la naturaleza y la práctica del perdón en el contexto doctrinal no-teísta del budismo. *Cuadernos Judaicos*(28), 68-85.
- UNAM. (6 de Agosto de 2009). *Magna Carta de 1215*. Recuperado el 6 de Mayo de 2019, de Instituto de Investigación Jurídicas UNAM: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/17.pdf>
- Valdivia Sánchez, C. (2008). La familia: concepto, cambios y nuevos modelos. *La Revue du REDIF*, 15-22.
- Varona, G., de la Cuesta, J. L., Mayordomo, V., & Pérez, A. I. (1 de Diciembre de 2015). *Victimología: un acercamiento a sus conceptos fundamentales*. Obtenido de ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/303232859_Victimologia_un_acercamiento_a_sus_conceptos_fundamentales
- Vázquez Acevedo, E. J. (2010). La víctima y la reparación del daño. *Dfensor. Revista de Derechos Humanos*, VIII(12), 20-26.
- Vera Poseck, B., Carbelo Baquero, B., & Vecina Jiménez, M. L. (2006). La experiencia traumática desde la psicología positiva: resiliencia y crecimiento pstraumático. *Papeles del Psicólogo*, XXVII(1), 40-49.
- Villarreal Sotelo, K. (2000). *Principios de victimología*. México D.F.: Oxford University Press.
- Vite-Coronel, E. I., & Reyes-Mero, N. L. (2016). La afectación familiar por la privación de libertad. *Dominio de las Ciencias*, II, 257-268.
- Walsh, F. (2005). Resiliencia familiar: un marco de trabajo para la práctica clínica. *Sistemas familiares*, XII(1-2), 76-97.
- Waugh, C. E., Thompson, R. J., & Gotlib, I. H. (2011). Flexible emotional responsiveness in trait resilience. *Emotion*, XI(5), 1059-1067.
- Wilde, O. (1 de Mayo de 1898). *Balada de la cárcel de Reading*. Londres: Leonard Smithers. Obtenido de <http://biblio3.url.edu.gt/Libros/wilde/balada.pdf>
- Wolff, H. J. (1976). La historia del derecho griego: su función y posibilidades. *Revista de estudios histórico-jurídicos*(1), 136-148.

- Woodward, R. (2003). *Families of prisoners: Literature review on issues and difficulties*. Canberra: Australian Government Department of Family and Community Services.
- Worthington, E. L., Lavelock, C. v., Rye, M. S., Tsang, Jo-Ann, & Toussaint, L. (2014). Measures of Forgiveness: Self-Report, Physiological, Chemical and Behavioral Indicators. En G. J. Boyle, D. H. Saklofske, & G. Matthews, *Measures of Personality and Social Psychological Constructs* (págs. 474-502). Oxford: Academic Press.
- Zehr, H. (2007). *El pequeño libro de la Justicia Restaurativa*. Brattleboro, VT: Good Books.

Capítulo 12.- Anexos

12.1. Instrumento cualitativo a PPL

Buenos días

Mi nombre es Rafael Cantizani Maíllo, estudiante de doctorado en la UANL de Monterrey. Estoy aquí con la intención de realizarle una serie de preguntas con el objetivo de conocer la relación que usted ha mantenido con su familia desde que usted ingresó a este centro penitenciario. Por supuesto, sus respuestas son voluntarias, por lo que le pido que si en algún momento se siente incómodo con una de las preguntas me lo comunique o si simplemente le apetece retirarse, está en su derecho de hacerlo. Toda la información que aquí se recoja será confidencial. Así mismo, la información que me proporcione será anónima y confidencial, utilizándose los datos arrojados para fines meramente académicos.

I. ¿Cuál es su edad?

II. ¿Cuál es su estado civil?

1. ¿Cómo afectó tu ingreso en el CEPRERESO a tu familia? ¿Hubo cambios en el día a día de tu familia cuando ingresaste en el CEPRERESO?

2. ¿Sentiste responsabilidad en los cambios que vivió tu familia?

3. ¿La experiencia vivida por tu familia hizo que te replanteases las cosas? ¿De cambiar de actitud? ¿De no repetir las acciones que te llevaron a ingresar en el CEPRERESO?

4. ¿Alguna vez habéis hablado de lo que hizo que ingresaras en este CEPRERESO?

5. ¿Sentiste la necesidad de explicarles con detalle lo que ocurrió y cómo es tu situación en el CEPRERESO?

6. ¿Perdiste el contacto con tus familiares cuando ingresaste en el CEPRERESO?

7. ¿Tus familiares se preocupan por ti?

8. ¿Has podido tener comunicación con tu familia, como visitas o llamadas telefónicas, dentro del CEPRERESO? ¿Sobre qué temas hablan? ¿Qué sentimientos te transmiten?

9. ¿Qué te aportan las personas con las que mantienes esa comunicación? ¿Te ayudan de manera material?

10. ¿Crees que tu familia quiere hacerte pagar el trauma que experimentaron con tu ingreso?
11. ¿Sientes que tus familiares te evitan?
12. ¿Han aceptado las razones que te llevaron a ingresar al CEPRERESO? ¿Crees que se ponen en tus zapatos?
13. ¿Rehiciste tu relación con algún miembro de tu familia estando dentro del CEPRERESO?
14. ¿Algunas personas de tu familia te han sustituido en tus funciones familiares, como el de aportar dinero o cuidar de alguien, etc.?
15. ¿Tus familiares han podido habituarse a tu ausencia?
16. ¿Has aprendido algo de tu relación con tu familia estando interno?
17. ¿Hablan abiertamente sobre la situación en la que vivís?

12.2. Instrumento cuantitativo a PPL

Estimado colaborador

Este cuestionario forma parte de un trabajo de investigación con fines académicos sobre las relaciones familiares de las PPL. Por favor, siga las instrucciones en cada apartado y conteste de forma sincera. Su colaboración es muy valiosa para el estudio, por lo que sus respuestas serán anónimas y la información aquí recogida será tratada de manera confidencial.

Por favor marque con una equis (X) la opción que más se ajuste a su situación personal:

	Soltero	Casado	Separado	Unión libre	Viudo
Estado Civil					
	Sin estudio	Primaria	Secundaria	Preparatoria	Universidad
Nivel de estudios					
	Menos de 1	2	3	4	5 o más
Años interno					

Por favor, marque con una equis (X) la respuesta que mejor le represente en cada uno de los siguientes apartados. Indique con qué frecuencia estas afirmaciones le resultan verdaderas, sabiendo que: (N) Nunca; (P) Poco; (AV) A veces; (M) Mucho, (S) Siempre.

		N	P	AV	M	S
CC2	Recibo visitas de mi familia	1	2	3	4	5
AE2	Mis familiares me transmiten cariño	1	2	3	4	5
AE3	Mi familia me da ánimos para enfrentar cada día	1	2	3	4	5
AE4	Mi familia reconoce cuando hago algo bien	1	2	3	4	5
AM1	Mi familia me trae comida	1	2	3	4	5
EV3	Mis familiares responden a mis llamadas	1	2	3	4	5
AM3	Mi familia me apoya con dinero	1	2	3	4	5

CC4	Puedo hablar de mis problemas con mi familia	1	2	3	4	5
CC1	Mis familiares vienen a verme	1	2	3	4	5
AE1	Mi familia es cariñosa conmigo	1	2	3	4	5
CC3	Mi familia me ayuda a tomar decisiones	1	2	3	4	5
EV2	Mis familiares contestan cuando les marco	1	2	3	4	5
AM2	Mi familia me trae cosas de higiene (rollo de papel, jabón...)	1	2	3	4	5
EV5	Mis familiares dicen que van a venir y luego no aparecen	1	2	3	4	5
DI4	Mi familia me cuenta la verdad de lo que pasa fuera de aquí	1	2	3	4	5
IV4	Pregunto a mis familiares cómo les van las cosas fuera	1	2	3	4	5

A continuación, marque con una equis (X) la respuesta que mejor le represente en cada uno de los siguientes apartados, sabiendo que: (N) Nada; (P) Poco; (A) Algo; (B) Bastante; (M) Mucho.

		N	P	A	B	M
BC4	Me esfuerzo por cambiar mis hábitos	1	2	3	4	5
IO2	Mi familia me apoya y me ayuda cuando lo necesito	1	2	3	4	5
EM1	Mi familia entiende mis errores	1	2	3	4	5
EV1	Mis familiares se interesan por mí	1	2	3	4	5
BC3	He estado pensando que tal vez quiera cambiar algo de mí mismo	1	2	3	4	5
IO1	Mi familia realmente intenta ayudarme	1	2	3	4	5
RA1	Me siento culpable por la situación que vive mi familia al estar yo aquí internado	1	2	3	4	5

Finalmente, marque con una equis (X) si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones, sabiendo que: (TD) Totalmente en desacuerdo; (D) En

desacuerdo; (N) Ni de acuerdo ni en desacuerdo; (A) De acuerdo; (TA) Totalmente de acuerdo.

		TD	D	N	A	TA
BC2	Estando internado comencé a pensar sobre las cosas que hice para estar aquí	1	2	3	4	5
CV2	Comparto las mismas creencias religiosas que mis familiares	1	2	3	4	5
RA2	Pedí perdón a mis familiares por el daño que les causé al ingresar aquí	1	2	3	4	5
RE1	Algún miembro de mi familia me guarda rencor por estar internado	1	2	3	4	5
DI3	Escuché atentamente a mis familiares cuando me contaron cómo se sintieron de que yo esté aquí	1	2	3	4	5
RE3	Mi familia confía en mí	1	2	3	4	5
RE4	Mi familia quiere que yo pague por mis errores	1	2	3	4	5
EM3	Volví a hablar con familiares con los que no hablaba cuando entré aquí	1	2	3	4	5
RF1	El que yo ingresara aquí hizo que mis familiares se unieran más	1	2	3	4	5
EV4	Mis familiares han cortado toda comunicación conmigo	1	2	3	4	5
BC1	Empecé a pensar en los actos que cometí cuando ingresé aquí	1	2	3	4	5
CV1	Mi familia y yo tenemos las mismas costumbres religiosas	1	2	3	4	5
IV1	Para que mis familiares no se preocuparan por mí sentí la necesidad de contarles lo que pasó	1	2	3	4	5
DI2	Platiqué con mis familiares para saber cómo se sentían ellos de que yo esté aquí	1	2	3	4	5
RE2	He perdido la confianza de mi familia	1	2	3	4	5
CV3	Comparto los mismos valores que mis familiares	1	2	3	4	5

		TD	D	N	A	TA
DI1	He hablado del error que cometí con mis familiares para saber cómo se sentían	1	2	3	4	5
RA3	El daño que causé a mis familiares cuando me internaron aquí hizo que les pidiera disculpas	1	2	3	4	5
IV5	Intento no molestar demasiado a mi familia para no preocuparla	1	2	3	4	5
RA4	He aceptado los errores que cometí y que causaron que esté aquí	1	2	3	4	5
IV3	Fui sincero con mi familia cuando les expliqué lo que pasó	1	2	3	4	5
EM4	Estando interno reparé mi relación con algún familiar con el que dejé de hablar hace tiempo	1	2	3	4	5
RF2	Mi familia y yo ahora tenemos una mejor relación que cuando estaba afuera	1	2	3	4	5
EM2	Mis familiares comprenden las razones que me hicieron cometer la acción por la que estoy aquí	1	2	3	4	5
IV2	Sentí la necesidad de explicarles a mis familiares lo que pasó para que no se preocuparan por mí	1	2	3	4	5

Muchas gracias por su tiempo y por su ayuda para contestar esta encuesta